

Al margen de la ley : sociedades transnacionales y derechos humanos	Título
Teitelbaum, Alejandro - Autor/a;	Autor(es)
En: . ( ) . :	En:
Bogotá	Lugar
ILSA	Editorial/Editor
2007	Fecha
En clave de sur	Colección
Derechos humanos; Legislación; Estado; Organizaciones Internacionales; Responsabilidad legal; División internacional del trabajo; Empresas transnacionales; Derechos socioeconómicos; Derechos políticos; Medio ambiente;	Temas
Libro	Tipo de documento
"http://biblioteca.clacso.org.ar/Colombia/ilsa/20130823053659/ecivs12-04.pdf"	URL
Reconocimiento CC BY http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

**Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO**  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

**Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)**  
**Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)**  
**Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)**  
[www.clacso.edu.ar](http://www.clacso.edu.ar)



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais  
Latin American Council of Social Sciences



## PRESENTACIÓN<sup>1</sup>

La naturaleza y el papel de las sociedades transnacionales son temas que vienen ocupando la atención de los analistas de diferentes disciplinas desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Es un hecho evidente que desde el fin de la segunda guerra mundial la forma principal de dominación de las grandes potencias capitalistas, encabezadas por Estados Unidos, se caracteriza por el peso decisivo de las sociedades transnacionales en los mercados mundiales, y en las orientaciones y políticas de los gobiernos de los países a los cuales están adscritas, en los organismos internacionales rectores de la economía mundial, y con mayor fuerza sobre los Estados de los países dependientes en los cuales desarrollan sus actividades.

Lo que ya era en su momento una influencia considerable en la economía y la política mundiales, con el fin de la guerra fría y con la llamada globalización<sup>2</sup>, se volvió virtual hegemonía y dominio total de estas nuevas formas del capitalismo real en sus etapas más desarrolladas.

Dentro de los estudios críticos realizados sobre estos aspectos ha adquirido la categoría de clásico el libro del profesor Alejandro Teitelbaum, *El papel de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo*, que ahora se presenta en edición actualizada con el título *Al margen de la ley. Sociedades transnacionales y derechos humanos*.

Este trabajo nos brinda claves para comprender la forma actual de operación, dominio y explotación de las sociedades transnacionales sobre

---

<sup>1</sup> Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos.

<sup>2</sup> Nombre aceptado convencionalmente pero cuestionado por el autor por considerar que "globalización" da idea de globo, de algo igualmente repartido, nadie arriba ni nadie abajo. Pero si hubiera que buscar una imagen geométrica de lo que está sucediendo en el mundo sería una pirámide, no una esfera. Una pirámide donde hay unos poquitos arriba y abajo está la gran mayoría". La mundialización injusta, revista Fusión, 2001. Disponible en [www.revistafusion.com/2001/noviembre/entrev98.htm](http://www.revistafusion.com/2001/noviembre/entrev98.htm)

los pueblos y sobre el medioambiente, así como su clásica participación en el más tenebroso de los mercados, el de armas, y su rol en el atizamiento de conflictos bélicos, de los cuales extraen inmensos beneficios.

Así mismo, nos muestra la operatividad de los Tratados de Libre Comercio y los mecanismos por medio de los cuales han puesto a su servicio a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y cómo han desvirtuado la misión de la Organización de las Naciones Unidas que, no obstante el papel de oficinas como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos o la de la Alta Comisionada para los Refugiados (Acnur), en su principal órgano político, el Consejo de Seguridad, ha pasado de ser un ente concebido como promotor de la paz mundial y del desarrollo equilibrado de los pueblos, a ser un dinamizador de las lógicas neoliberales depredadoras del medioambiente, y un cómplice de modalidades neocoloniales de control hegemónico.

Los mayores aportes de este trabajo pueden ubicarse en sus propuestas sobre responsabilidad jurídica internacional de las sociedades transnacionales y de los Estados por las actividades que éstas realizan, especialmente en su invocación al uso de las normas limitadoras del poder de las transnacionales. Tal normativa constituiría un instrumento importante para develar responsabilidades, beneficiarios y cómplices de las múltiples violaciones de los derechos humanos que contribuyen a la persistencia de sistemas sociales injustos, y que se pretenden inamovibles e inmodificables.

Para decirlo en las palabras de Teitelbaum, el presente texto se pone a disposición de los sectores sociales, académicos y políticos con el objetivo

de que la gente conozca lo mejor posible en todos sus aspectos el sistema de poder vigente y su intrínseca injusticia, inhumanidad e irracionalidad, y de que cada individuo tome conciencia del lugar que ocupa en el mismo, lugar que para la inmensa mayoría de los seres humanos es el de víctima, aunque forme parte de las clases alienadas del consumismo. Y que comprenda que la solución no es individual, defendiendo su "estatus" de consumidor o tratando de alcanzarlo (el espejismo de la "movilidad social") sino que es colectiva y que consiste en transformar radicalmente el sistema.

## LA IMPORTANCIA DE LA OBRA PARA COLOMBIA

Como es sabido, Colombia fue objeto del despliegue de las transnacionales estadounidenses y europeas que rápidamente la tomaron, al igual que toda América Latina, como mercado natural y patio trasero de sus economías expansivas.

La inversión extranjera en el país se ha incrementado notablemente en los últimos años<sup>3</sup>. El Estado colombiano ha ofrecido al capital foráneo ventajosas condiciones de inversión difícilmente superadas por otros Estados, a la vez que existen empresas nacionales que, deseosas de entrar a los microcircuitos financieros internacionales, apuestan a la desnacionalización de sus capitales<sup>4</sup>. Algunas empresas estatales, por su parte, han sido llevadas a la quiebra y, aprovechando esta situación, conducidas a la privatización, jugando un papel importante la corrupción. Así mismo, muchas de las empresas estatales privatizadas, previamente han sido enfrentadas a inverosímiles condiciones de competencia y, como consecuencia de ello, señaladas como inviables permitiendo su absorción por los capitales internacionales<sup>5</sup>.

Esta incidencia se refleja también en la imposición de acuerdos, pactos y tratados llamados de "cooperación" y comercio, y en la implementación de políticas públicas reflejadas en legislaciones lesivas que permiten la expropiación de recursos nacionales, la limitación de la soberanía, el empobrecimiento de las regiones, el deterioro de la salud de los pobladores y del medioambiente, violaciones de los derechos sindicales y de asociación, responsabilidad y participación en la guerra sucia, como lo reflejan procesos de expansión masiva de agrocombustibles en vastas zonas del Pacífico colombiano en donde persisten comunidades afrodescendientes afrontando el grave impacto de la implementación de estos megaproyectos que afectan

<sup>3</sup> Según las cifras suministradas por el departamento técnico del Banco de la República, la inversión extranjera directa (IED) para 2006 alcanzó en Colombia una cifra de US \$ 6.295 millones, lo que representa al país superar la meta que para el año anterior se había estimado en US \$ 6.000 millones. Véase [www.proexport.com.co](http://www.proexport.com.co)

<sup>4</sup> Casos recientes así lo indican. En julio de 2005 el grupo Santodomingo divulgó la noticia de la venta de Bavaria, la primera empresa privada del país, a SAB-Miller del grupo Altria, por un monto cercano a los 8 mil millones de dólares, el negocio más cuantioso en la historia del país. La venta de esta empresa hace parte del proceso de internacionalización de la economía colombiana, desencadenado desde inicios de la década de los noventa. A esta compra se agrega la venta de Avianca, la emblemática empresa aeronáutica colombiana, al grupo Sinergy, por cerca de 64 millones de dólares; la venta del Banco Ganadero al BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria); Coltabaco a la Philip Morris, también del grupo Altria, y una larga lista de entidades públicas y privadas que han sido adquiridas por el capital transnacional. Estos hechos, celebrados por algunos círculos de opinión como la inserción de Colombia en la economía internacional, dejan al descubierto un factor estructural que cambia la lógica del poder en nuestro país: todos los sectores económicos entran en una nueva dinámica, diferente a la del mercado interno, en la que se tienen que someter a las reglas del libre mercado internacional de mercancías y capitales, con las consecuencias que ha tenido y tendrá en todas las esferas de la vida de los colombianos. Así pues, la defensa de los derechos humanos se empieza a hacer más ardua con la consolidación de una nueva lógica global de la producción, el flujo de capitales y la acumulación de esas ganancias, en la que no existe ninguna institucionalidad multilateral que abogue por el cumplimiento de los derechos humanos en su integralidad. Tomado del libro *Más allá del embrujo: transnacionales y derechos humanos*, artículo escrito por el Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá, 2005, pp. 51 y ss.

<sup>5</sup> Como las de servicios públicos domiciliarios, la salud, las entidades financieras, etc.



tanto sus derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales; igualmente, casos en boga como el de las transnacionales Drummond, Chiquita Brands y Dyncorp, evidencian que éstas son características que acompañan el tránsito de varias empresas transnacionales en el país.

## DRUMMOND

Uno de los ejemplos de las arbitrariedades que históricamente se incrustan en legislaciones nacionales es el Código Minero, en el cual se identifican, entre otros, tratos inequitativos y criminalización de los pequeños mineros, la posibilidad de explorar en lugares definidos como de especial interés arqueológico, histórico o cultural, y la reducción de regalías al 0,4% para los propietarios privados del subsuelo.

Mención especial merecen las observaciones de las comunidades indígenas cuando afirman que:

El Código Minero es otro de los ataques frontales en contra de nuestros derechos. Nuestros territorios son desvertebrados jurídicamente perdiendo el carácter integral: nos impide ejercer nuestro derecho de oposición a la explotación de recursos naturales de nuestros territorios, pues aunque exista la posibilidad de constituir zonas mineras indígenas, éstas están pensadas para la extracción de nuestros recursos de tal modo que si queremos protegerlos, es una causal para realizar concesiones a terceros<sup>6</sup>.

Según las cifras de la misma empresa<sup>7</sup>, en el 2006 fueron explotadas, sólo por esta multinacional, 23,8 millones de toneladas de carbón térmico, el cual es utilizado como combustible para producir energía eléctrica. Esto no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que según el censo de 2005, el 11% de la población (96.790 personas<sup>8</sup>) del departamento del Cesar, donde opera la empresa, no tiene electricidad<sup>9</sup>.

Por otra parte, uno de los informes de la Contraloría General de la Nación considera que el daño al patrimonio de la nación causado por esta multinacional asciende aproximadamente a 70 millones de dólares, al no pagar al Estado las regalías con base en el precio fijado en los contratos<sup>10</sup>, cifra que el sindicato de la empresa estima en un monto mucho mayor debido

<sup>6</sup> No al Estatuto de Desarrollo Rural y otras Leyes, comunicación de junio 1 de 2007 dirigida a los Congresistas de la República de Colombia por comisionados indígenas de la Comisión Nacional de Territorios.

<sup>7</sup> Véase [www.drummondco.com/drummond/opsCoalSteam.asp](http://www.drummondco.com/drummond/opsCoalSteam.asp)

<sup>8</sup> Según el censo del DANE 2005, la población del Cesar asciende a las 879.914 personas.

<sup>9</sup> DANE, Censo 2005.

<sup>10</sup> Archivo de prensa Ministerio de Minas, en [www.upme.gov.co/GroupWare/Portals/0/Sigp\\_06062007.pdf](http://www.upme.gov.co/GroupWare/Portals/0/Sigp_06062007.pdf)

a que la empresa “no está pagando el impuesto de regalía sobre el precio internacional, como lo hacen otras empresas del sector, sino sobre el precio de venta, lo que ha causado un detrimento patrimonial a la nación de más de 300 millones de dólares en los últimos años”<sup>11</sup>.

Este es un elemento más de prueba sobre el actuar por encima de la ley de las transnacionales, ya que ni siquiera a los Estados que les brindan todas las oportunidades y facilidades de inversión les cumplen con elementales obligaciones tributarias y contractuales.

A esto se suman las denuncias de la población por afectación a la salud y al medioambiente<sup>12</sup>, así como sobre repetidas amenazas de muerte y hostigamientos a los dirigentes sindicales y populares, hechos que se atribuyen a la alianza entre los responsables de seguridad de la empresa multinacional, los grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Qué tan creíbles y serias son estas amenazas, son preguntas que se responden con los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya en el 2001<sup>13</sup>, y el posterior asesinato de Gustavo Soler Mora, crímenes cometidos obedeciendo a relaciones entre la Drummond y el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En este caso son clave los testimonios de Rafael García, ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien declaró en mayo de 2006 que estuvo presente en una reunión en la que Augusto Jiménez –presidente de la Drummond en Colombia–, entregó a un comandante paramilitar un maletín con 200.000 dólares para financiar dichas muertes, así como el testimonio de Edwin Manuel Guzmán, un ex sargento del Ejército Nacional, quien afirmó que la multinacional Drummond ordenó homicidios contra sindicalistas colombianos y dotó a los victimarios de medios de transporte y alimentación.

Así mismo, son fundamentales las declaraciones de dos dirigentes paramilitares, Jorge 40 y Salvatore Mancuso. En el 2004 el primero de ellos mencionó al señalar las fuentes de financiación de sus actividades:

<sup>11</sup> Denuncia pública del 9 de mayo de 2005 suscrita por Sitraminergética, Funtraenergética, Sintramincol, Sintramin, Fenaltrase, Fenasintrap, Cut directiva Bogotá y Cundinamarca, Sintraelecol Costa Atlántica, Uneb, Uso, Asociación Ecate, Nomadesc, Acaceva, Sintraentendiccol, Campaña Prohibido Olvidar.

<sup>12</sup> “Entre el 8 y el 10 de febrero pasado los habitantes de La Jagua de Ibérico (departamento del Cesar) hicieron paro cívico para protestar contra las empresas multinacionales del carbón Drummond y Glencore por la contaminación ambiental que provocan, la falta de oferta de puestos de trabajo a los locales, y el mal estado en que tienen las carreteras que utilizan”. Hilando delgado: el polvoriento entorno de la Drummond, Álvaro Delgado, investigador del Cines. Véase [www.voltairenet.org/article147657.html](http://www.voltairenet.org/article147657.html)

<sup>13</sup> Informe periódico virtual El Espectador, 30 de junio de 2007. <http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=11779>. Acusación presentada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos – Sesión Colombia. Audiencia Minera, noviembre de 2006.

"Cuando hablamos de economía lícita estamos hablando de las economías del campo, de actividad empresarial, industrial.... soy de centro-derecha cuando se trata de defender la propiedad privada, la libertad económica, la industria, la generación de riqueza en un país que está en desarrollo"<sup>14</sup>; el segundo manifestó "que las carboneras en el departamento del Cesar pagaban 'impuestos' a los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como los transportistas de carbón, que abonaban más de 70.000 dólares mensuales"<sup>15</sup>.

## CHIKUITA BRANDS

El primer semestre de 2007 los medios de comunicación nacionales e internacionales le dieron una amplia difusión a la multa impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la multinacional del banano Chiquita Brands. Según la información difundida, esta empresa fue condenada a pagar una suma que puede llegar a los 25 millones de dólares a raíz del reconocimiento que hiciera la empresa de haber financiado con aproximadamente un millón y medio de dólares, desde 2001<sup>16</sup> hasta 2004, al grupo paramilitar que actúa en la zona donde tenía los cultivos de banano<sup>17</sup>.

Durante la década del noventa fueron asesinados aproximadamente mil militantes de la izquierda colombiana en Urabá —muchos de ellos de la Unión Patriótica—, región donde opera Chiquita; gran parte de los asesinados eran trabajadores bananeros. Tanto las voces de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como las pruebas que se han recogido y siguen apareciendo<sup>18</sup>, evidencian cómo los paramilitares, en alianza con la Brigada XVII del Ejército comandada por el tristemente célebre general Rito Alejo del Río, cometieron en conjunto crímenes de lesa humanidad en esa región<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> "Jorge 40" descalifica el proceso", en [www.elmeridianodecordoba.com](http://www.elmeridianodecordoba.com).

<sup>15</sup> Véase [www.elnuevoherald.com](http://www.elnuevoherald.com).

<sup>16</sup> Por cuanto la fecha de expedición de la ley de antiterrorismo de Estados Unidos es del 10 de septiembre de 2001. Aunque los pagos se venían realizando con anterioridad, sólo a partir de la fecha fueron actos judicializables a la luz de dicha normativa.

<sup>17</sup> En Colombia existe un proceso penal en el que Chiquita Brands aparece como víctima (¿) de extorsión, y a pesar de los anuncios de la Fiscalía sobre el inicio de investigaciones en relación con su responsabilidad, apenas se vislumbra la posibilidad de que sus directivos sean llamados a responder por los mencionados pagos.

<sup>18</sup> El paramilitar Salvatore Mancuso manifestó en una de sus versiones ante la Fiscalía que Rito Alejo del Río habría participado en la consolidación del paramilitarismo en la zona. Véase Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo, revista Semana, mayo 15 de 2007, en [http://www.semana.com/wf\\_InfoArticulo.aspx?idArt=103661](http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103661).

<sup>19</sup> Lo que los medios masivos de comunicación no han dicho es que esta no es la primera vez que dicha multinacional incurra en hechos criminales en nuestro país; transcurrió el año 1928, uno de los sindicatos lanzó una huelga en Ciénaga (Magdalena) para presionar la solución al pliego

Por otra parte, se sabe que en octubre de 2001 la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares por haber permitido que su filial colombiana, CI Banadex, sobornara a empleados de la DIAN para comprar su licencia aduanera y portuaria en el puerto de Turbo, Antioquia.

El 21 de noviembre de 2001 el barco Oterloo, que arribó al puerto de la compañía Chiquita Brands, traía consigo catorce contenedores, con un cargamento de 3000 fusiles AK 47 con 5 millones de cartuchos calibre 7.65 mm. Este cargamento fue transportado hasta las faldas del nudo de Paramillo para la entrega a sus destinatarios, los paramilitares comandados por Carlos Castaño, quien un año después afirmaría en el diario *El Tiempo* que éste había sido su "mejor gol" en la búsqueda de armas para su organización<sup>20</sup>. Aunque la Fiscalía colombiana tiene abierto un proceso por la introducción de armas al país, aún no se ha seguido la pista de la responsabilidad de la transnacional y sus directivos en Colombia y Estados Unidos.

## DYNACORP

En el año 2000 empezó la ejecución del Plan Colombia, cuyo componente militar incluía la realización de aspersiones aéreas químicas sobre plantaciones de coca. Estas operaciones de fumigación extensiva y permanente requerían de una importante flota de aeronaves de aspersión y de escolta con artillería, un cuerpo de pilotos y de personal de mantenimiento bien capacitado y, por supuesto, de los elementos químicos para su actividad.

La transnacional Monsanto, productora del glifosato o Roundup, proveyó la mezcla química, y la Dynacorp fue contratada por las autoridades estadounidenses a fin de llevar a cabo las operaciones de fumigación aérea. Entre 2000 y 2006 fueron fumigadas 866.840 hectáreas afectando a población de cientos de municipios por año, llegando incluso a impactar a población ecuatoriana que habita la zona de la frontera común.

---

de peticiones que le había presentado a la entonces United Fruit Company. Era 5 de diciembre, miles de obreros junto a sus familias se apostaban en las barricadas avivando el movimiento, pero nunca alcanzaron a imaginar lo que maquinaba la empresa junto al gobierno, al mando del general Carlos Cortés Vargas, quien expidió el Decreto 1 que ordenaba disolver "toda reunión mayor de tres individuos", y amenazaba con disparar "sobre la multitud si fuera el caso". En consecuencia, a la 1 y media de la madrugada del 6 de diciembre formó a la tropa delante de los concentrados en Ciénaga. Luego de leer los respectivos decretos y de conminar a la multitud a retirarse, dio un plazo de cinco minutos que prolongó por uno más. Según Cortés Vargas, "era menester cumplir la ley, y se cumplió", aproximadamente tres mil personas fueron masacradas por la tropa. La United Fruit Company luego cambiaría de razón social y se convertiría en la Chiquita Brands

<sup>20</sup> Véase Banana "para-republic". Las relaciones entre la multinacional Chiquita Brands y los paramilitares iban mucho más allá de pagarles una vacuna de seguridad. La empresa llegó a transportar y guardar un lote de armas y municiones de Carlos Castaño", revista *Semana*, marzo de 2007, en [http://www.semana.com/wf\\_InfoArticulo.aspx?idArt=101602](http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101602)

Entre las múltiples lesiones a miles de familias se encuentran los derechos a la salud, al medioambiente sano, a la alimentación, a no ser desplazados forzosamente, al acceso a la justicia, entre otros<sup>21</sup>. Pero no sólo estos impactos son causados por la transnacional de la guerra, varios episodios vinculan a personal de la Dyncorp con tráfico de drogas y armas, prostitución infantil y muertes en extrañas circunstancias del personal acantonado en las bases militares colombianas.

Debido a los convenios de inmunidad firmados entre ambos países, la justicia colombiana nunca ha investigado estos hechos. Tampoco se tiene noticia de que sean investigados por la justicia estadounidense. En realidad, ninguna autoridad colombiana ejerce algún tipo de control sobre la actividad mercenaria derivada del Plan Colombia. El Ministerio de Defensa ha afirmado que "no posee información acerca del número de contratistas (nacionales o extranjeros) que desde el 2000 han apoyado los diferentes programas que se vienen implementando con la cooperación del gobierno de Estados Unidos en apoyo al Plan Colombia. Esta información es de manejo exclusivo de la embajada del gobierno de Estados Unidos de América en Colombia"<sup>22</sup>.

Preocupa esta falta de control institucional colombiano sobre la transnacional, máxime cuando las operaciones de aspersión se realizan bajo la lógica de intervención militar en el conflicto armado y político interno.

Como se desprende de lo anteriormente analizado, el comportamiento de las transnacionales en el caso colombiano se ha dado fundamentalmente en un escenario de guerra sucia contra los sindicatos y demás organizaciones sociales, un Estado permisivo con el capital y represivo contra la población, un clima perfecto para el saqueo de los recursos naturales y la mano de obra, y unas formidables ganancias para estas transnacionales. A fin de obtener esos dividendos, tanto empresas como gobierno se han valido del ejército regular y de ejércitos privados paramilitares, que han cometido los más horrendos crímenes contra el pueblo colombiano.

En favor de las transnacionales operan mecanismos de impunidad preestablecidos por éstas y los Estados, que tienen que ver con la ausencia de verdaderos escenarios de justicia que les permitan a las víctimas, sus familiares y los pueblos de los que hacen parte, conocer la verdad y vincular jurídicamente la responsabilidad de estos actores "al margen de la ley".

<sup>21</sup> Véanse los informes de órganos especiales de las Naciones Unidas: Informe Comité del Niño, 2005; Informe sobre la visita a Colombia y Ecuador del Relator sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, 2005-2006; Informe de la visita al Ecuador del Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, 2007; Informe sobre la visita al Ecuador del Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios, 2006; Informe del relator especial sobre los efectos adversos del desecho de tóxicos y productos peligrosos, 2007. Además, pueden consultarse las múltiples denuncias de comunidades colombianas por efecto de las fumigaciones en [www.colectivodeabogados.org](http://www.colectivodeabogados.org), y de comunidades ecuatorianas en [www.accionecologica.org](http://www.accionecologica.org).



## EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS EN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS CONTRA LA IMPUNIDAD

Como lo desarrolla el autor, en los últimos años está tomado forma un debate sobre la participación de las empresas transnacionales como nuevos sujetos del derecho internacional, y consecuentemente sobre la responsabilidad y la exigibilidad –moral, política e incluso legal– de éstas, en casos de violaciones de derechos humanos.

Varios factores contribuyen a impulsar la búsqueda de una mayor claridad frente a las responsabilidades corporativas: por un lado, la vaguedad de las obligaciones jurídicas de las transnacionales frente a la vigencia de los derechos humanos despierta cada vez más preocupaciones en la sociedad, incluso en las mismas empresas, por los posibles daños que puedan derivar a la reputación de éstas; por otra parte, las evidencias de que las empresas ETN contribuyen a potenciar la capacidad de los Estados en perpetrar violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Dentro de este marco, algunas preguntas merecen una reflexión más detenida: ¿qué tan cerca de una violación de derechos humanos tiene que estar una empresa transnacional para que sea jurídicamente responsable?, ¿cómo se está desarrollando la jurisprudencia nacional e internacional con respecto a la responsabilidad de las empresas? Y en fin, puesto que no existe en el derecho internacional un estándar definitivo y terminante –diríamos que intencionalmente puesto que la discusión al respecto ha sido nutrida desde 1945–, para definir la responsabilidad corporativa, ¿cómo podemos aplicar, y cuáles aportes podemos derivar de la categoría de responsabilidad individual frente al debate sobre derechos humanos y negocios?

La reflexión y el análisis que en este escenario hace el movimiento social colombiano –que se nutre de manera muy importante con el estudio del profesor Teitelbaum–, aboga por una mayor responsabilidad y exigibilidad empresarial en los casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y otros crímenes cometidos por el Estado, con el convencimiento de que hay una relación causal estrecha entre los proyectos de las empresas transnacionales y el desencadenamiento de la violencia política y social en Colombia, y en muchos otros países.

Es por ello que dentro de las iniciativas sociales y populares de lucha contra la impunidad, surge como un importante escenario el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que es un tribunal de carácter no gubernamental, constituido formalmente en 1979, cuyo origen data del Tribunal Rusell que tuvo como finalidad juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en la guerra contra el pueblo de Vietnam.

Está integrado por un amplio número de miembros nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso; personalidades del

mundo científico, artístico, religioso, político, literario; expertos en derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario, con alta reputación moral para ejercer función judicial; sus exámenes de las situaciones están basados en las convenciones internacionales, por fuera de las estructuras judiciales de los países, y representan de alguna manera la conciencia ética de los pueblos.

El TPP es un instrumento en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, se ha reunido en 35 ocasiones para juzgar situaciones de muchos países y pueblos sometidos a genocidios; es por esto que diversas organizaciones sociales y populares colombianas solicitaron al TPP que a partir de octubre de 2005, hasta julio de 2008, someta a instrucción y juicio los crímenes cometidos contra el pueblo colombiano por los grupos económicos nacionales y por las empresas transnacionales que operan en el país.

El capítulo Colombia del TPP tiene el propósito analizar y juzgar la política de empresas transnacionales (ETS) que se han beneficiado de crímenes de lesa humanidad bajo la lógica de la acumulación, el control de zonas enteras y de su economía, y del saqueo de los recursos naturales, precarizando la población y destruyendo el medioambiente y la biodiversidad.

Este libro se lanza en el marco de la cuarta audiencia que versa sobre el tema petrolero en Colombia, y que ha estado precedida de las audiencias sobre alimentación, minería y biodiversidad en las que se ha juzgado el comportamiento de transnacionales como Nestlé, Coca Cola, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, BHP Billinton y Anglo Gold, Delmonte, Multifruits, Dyncorp, Repsol, BP y OXY, entre otras, por su compromiso en la violación de derechos humanos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos en Colombia.

Los resultados del TPP hasta ahora son una constatación de las premisas expuestas por el autor sobre la falta de voluntad e incapacidad de los entes de justicia nacionales e internacionales para debatir sobre los altos niveles de impunidad en las violaciones de los derechos humanos y la responsabilidad de las sociedades transnacionales, además de ser una invitación para profundizar el debate sobre los intereses que se esconden detrás de estos crímenes.

Las transnacionales no solamente operan por encima de la ley –en muchas ocasiones creada por ellas mismas–, sino que las condiciones de dominación por ellas impuestas se convierten en regla mundial. Por ello, el conocimiento de sus métodos y la denuncia de sus actividades es el primer paso para controvertir y combatir su hegemonía. Las propuestas del autor no son una receta ni la única alternativa, pero sin duda son esenciales a la hora de plantear y procurar ese otro mundo posible que está construyendo el movimiento social en la lucha por la dignidad de los pueblos.



## CAPÍTULO 2

### Características económico-financieras de las sociedades transnacionales

*"Yo definiría la mundialización como la libertad para mi grupo de invertir donde quiere, el tiempo que quiere para producir lo que quiere, aprovisionándose y vendiendo donde quiere, teniendo que soportar el mínimo de obligaciones en materia de derecho laboral y de convenios sociales" (Percy Barnevik, ex presidente de la sociedad transnacional Asea Brown Boveri (ABB), y miembro de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos).*

**B**arnevik tiene las ideas claras, sólidos principios y una aún más sólida cuenta bancaria. Cuando se retiró de la presidencia de ABB se atribuyó una modesta indemnización de 148 millones de francos suizos (unos 92 millones de euros). Denunciado por estafa por la empresa, llegó a un acuerdo con ésta a principios de 2002, según el cual debe devolver una buena parte, guardándose "sólo" 58 millones de francos suizos (unos 36 millones de euros).

Las actividades y los métodos de trabajo de las sociedades transnacionales cambian continuamente. Algunos autores<sup>23</sup> sostienen que tales sociedades existen desde fines de la Edad Media, y citan como ejemplo el banco de los Médicis, la Compañía de Indias, etc., si bien establecen correctamente una diferencia cualitativa entre dichas sociedades y las sociedades transnacionales actuales. Dice Serge Latouche: "Hecho nuevo, a partir de los años setenta no solamente se mundializa sistemáticamente el capital comercial y bancario, dando nacimiento al mercado financiero mundial, sino que también se mundializa el capital industrial".

Efectivamente, en el periodo premonopolista y concurrencial del sistema capitalista se distinguían tres procesos relativamente autónomos: a) el proceso de producción; b) el proceso de circulación, y c) el proceso de

---

<sup>23</sup> Por ejemplo, Serge Latouche, *La mondialisation démythifiée*, en Edward Goldsmith y Jerry Mander (eds.), *ob. cit.*, p. 12.

realización de la producción, regidos cada uno por sus propios capitales: el capital industrial, el capital comercial y el capital bancario, los dos últimos extrayendo su parte de beneficios (plusvalía) del sólo capital productivo: el capital industrial<sup>24</sup>.

Con el surgimiento del capitalismo monopolista, que se consolida en la segunda mitad del siglo XX con la llamada revolución científica y técnica (electrónica, informática, etc.), se producen dos hechos fundamentales en la economía mundial: el papel hegemónico que asume el capital financiero en el sistema capitalista, y la desaparición de la competencia como mecanismo autorregulador (o relativamente autorregulador) del mercado. Las sociedades transnacionales pasan a ser las estructuras básicas del actual sistema económico-financiero mundial, y sustituyen al mercado como método de organización del comercio internacional<sup>25</sup>, sin que por ello deje de existir la competencia entre los grandes oligopolios, que suele ser encarnizada y sin cuartel, pese a la existencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se supone debe arbitrar los conflictos.

Las relaciones entre las sociedades transnacionales son una combinación de una guerra implacable por el control de mercados o zonas de influencia, absorciones o adquisiciones forzadas o consentidas, fusiones o ententes, y el intento permanente pero nunca logrado de establecer reglas privadas y voluntarias de juego limpio entre ellas. Porque la verdadera ley suprema de las relaciones entre las sociedades transnacionales es "devorar o ser devorados".

De modo que cuando actualmente se oye hablar del mercado y de que "el funcionamiento de la economía debe quedar librado a las fuerzas del mercado", debe entenderse que el funcionamiento de la economía (y de la sociedad en general) debe quedar sometido a la estrategia decidida por el capital monopolista transnacional encarnado en las sociedades transnacionales, cuyo objetivo básico es maximizar sus beneficios, apropiándose por cualquier medio del fruto del trabajo, de los ahorros y de los conocimientos tradicionales y científicos de la sociedad humana.

En las *Conclusiones* del Seminario de Celigny<sup>26</sup>, se puede leer:

Las sociedades realizan dichas actividades de manera separada, conjunta o alternativamente. En sus actividades abarcan diferentes territorios nacionales, variando con rapidez y relativa frecuencia sus

<sup>24</sup> Christian Palloix, *L'économie mondiale capitaliste et les firmes multinationales*, tomo II, François Maspero (ed.), París, abril 1975, p. 103.

<sup>25</sup> Ibid., pp. 106 y 107, quien cita a Stephen Hymer, The efficiency (contradictions) of multinational corporations in *The American Economic Review*, núm. 2, mayo 1970, p. 441.

<sup>26</sup> Asociación Americana de Juristas, Centro Europa-Tercer Mundo, *Las actividades de las sociedades transnacionales y la necesidad de su encuadramiento jurídico*. Seminario internacional interdisciplinario celebrado en Celigny, Suiza, el 4 y 5 de mayo de 2001, Ginebra, junio 2001.

lugares de implantación o de inversión de capitales, en función de su estrategia basada en el objetivo del beneficio máximo (búsqueda de mano de obra más barata, de ventajas fiscales, de subvenciones estatales, de proximidad de las fuentes de materias primas, de proximidad del mercado consumidor, de reglamentaciones flexibles y/o más favorables, de altas tasas de interés para sus capitales especulativos, etc.)<sup>27</sup>.

Pueden funcionar con una sociedad madre y filiales, constituir grupos de un mismo sector de actividad, conglomerados o coaliciones abarcando actividades diversas, unificarse por vía de fusión o absorción o constituir conjuntos financieros (*holdings*). Estos últimos sólo poseen un capital financiero en acciones, con los que controlan empresas o grupos de empresas. En todos los casos (sociedad madre/filiales, grupos, conglomerados, coaliciones y *holdings*) las decisiones más importantes están centralizadas.

Pueden tener su domicilio en uno o varios países: en el de la sede real de la entidad madre, en el de la implantación principal de las actividades y/o en el país donde ha sido registrada la sociedad. Pero siempre puede identificarse una nacionalidad de la sociedad transnacional, en el sentido de que hay un Estado que la sostiene y defiende sus intereses en la Organización Mundial del Comercio, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en otros organismos internacionales, o por medios políticos, militares y otros.

Suele suceder que la actividad realmente productiva está delegada en subcontratistas y que la sociedad transnacional se reserva el "*know how*", la marca y el "*marketing*".

Las primeras sociedades transnacionales aparecieron hacia fines del siglo XIX, primero como grandes empresas nacionales que acumularon capital y poder empleando todos los medios, incluidos la extorsión y el crimen, y comenzaron a extenderse fuera de las fronteras. Por ejemplo, la Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller en 1870 en Cleveland, Ohio<sup>28</sup>.

Durante decenios las sociedades transnacionales estuvieron centradas en la actividad productiva: la extracción y el comercio de materias primas y la fabricación y el comercio de productos industriales<sup>29</sup>, sectores a los que se

<sup>27</sup> Por cierto que las empresas persiguen por otros medios el objetivo de maximizar los beneficios: aumentando los precios de sus productos y servicios, y disminuyendo los costos de los mismos, en detrimento de su calidad. Así es como, por ejemplo, el acceso a alimentos sanos y de calidad se ha convertido en un lujo inaccesible para las mayorías, los medios de transporte público son cada vez son más inseguros, sobre todo en los países pobres, etc.

<sup>28</sup> Harvey O'Connor, *El imperio del petróleo*, Editorial América Nueva, México, 1956.

<sup>29</sup> La actividad industrial y comercial de las grandes empresas transnacionales hasta pasada la primera mitad del siglo XX fue quizás un rasgo dominante pero no exclusivo. Por ejemplo, cuando en 1911 la Corte Suprema de Estados Unidos, por aplicación de la Sherman Antitrust Act de 1890, ordenó la fragmentación de la Standard Oil fundada por Rockefeller en 1870, su heredera fue la Standard Oil de Nueva Jersey. Pero ésta, escribe O'Connor (véase nota anterior), "sólo retiene, piensa y planea. Retener el control de 322 compañías... ya es ciertamente la ena. Cuando algunas de tales

fueron agregando la prestación de servicios, la comunicación, la electrónica, la informática, la biotecnología, entre otros.

El proceso de constitución de las grandes empresas transnacionales es el resultado de la concentración y acumulación del capital, que dio lugar a la formación de grandes oligopolios y monopolios cuya base financiera se consolidó desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la fusión del capital industrial y el capital bancario, fenómeno que Rudolf Hilferding llamó capital financiero (Hilferding, *El capital financiero*, 1910) para destacar lo que él consideró el papel hegemónico del capital bancario en esa fusión. Los grandes monopolios transnacionales también consolidaron su base financiera constituyéndose como sociedades anónimas, que absorbieron el ahorro popular a través de la emisión de acciones (participaciones en el capital y en los beneficios —o pérdidas— de la empresa) y obligaciones (título de crédito contra la empresa que además devenga un interés).

Paul Sweezy<sup>30</sup> critica el enfoque de Hilferding, quien describía “la tendencia del capitalismo como si implicara la sujeción creciente de todos los aspectos de la vida económica a un círculo cada vez más estrecho de grandes bancos”, y agrega Sweezy que “esta opinión es fundamentalmente engañosa. Hilferding confunde una fase transitoria del desarrollo capitalista con una tendencia permanente”, y destaca la capacidad de autofinanciación de las grandes corporaciones (véase también, al respecto, Drouin, nota 37 infra), sin desconocer el papel de los bancos, y coincide con el análisis de Lenin en *El imperialismo, fase superior del capitalismo* (1916) en que lo que caracteriza al capitalismo moderno es la concentración de la producción y la acumulación de capital, la formación de monopolios y oligopolios, y la coalición o fusión del capital bancario y del capital industrial, al que prefiere llamar “capital monopolista” y no “capital financiero”.

Pero sobre el fondo de una tendencia permanente, y a ritmo cada vez más acelerado, de concentración y acumulación del capital a escala mundial, la preeminencia del capital financiero dentro del capital monopolista, que Sweezy llama “fase transitoria del desarrollo capitalista”, es sin duda actualmente el rasgo dominante del sistema.

La hegemonía actual del capital financiero es el resultado de un cambio profundo de la economía mundial a partir del decenio de 1970, momento

---

subsidiarias... se clasifican entre las más altas corporaciones del mundo, pensar y planear viene a ser mucho más importante que retener”. La adopción de las decisiones estratégicas en un centro que tiene sólo esa función y está separado de la actividad industrial y comercial, la que es confiada a empresas subsidiarias o a subcontratistas, es un rasgo sobresaliente de la economía mundializada contemporánea, pero es una forma de organización del sistema que no estaba ausente en los albores de la formación del capitalismo monopolista transnacional.

<sup>30</sup> Paul Sweezy, *Teoría del desarrollo capitalista*, Capítulo XIV, punto 5, Fondo de Cultura Económica, México, 1945.

que marca el fin del Estado de bienestar, caracterizado por la producción en masa y el consumo de masas, impulsado este último por el aumento tendencial del salario real, de la generalización de la seguridad social y de otros beneficios sociales. Es lo que los economistas llaman el modelo "fordista", de inspiración keynesiana, caracterizado en la producción por el trabajo en cadena (taylorismo), iniciado en Estados Unidos, y que se extendió a Europa sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.

El agotamiento del modelo del Estado de bienestar obedeció a varios factores, entre los que cabe destacar los siguientes: que la reconstrucción de la posguerra que sirvió de motor a la expansión económica llegó a su término, y que el consumo de masas tendió a estancarse o a disminuir lo mismo que los beneficios empresarios. También incidió el *shock* petrolero de comienzos de los años setenta. Para dar un nuevo impulso a la economía capitalista y revertir la tendencia decreciente de la tasa de beneficios, se hizo necesario incorporar la nueva tecnología (robótica, electrónica, informática) a la industria y a los servicios, y eso requirió grandes inversiones de capital.

Alguien tenía que pagar la factura, y comienza entonces la época de la austeridad y de los sacrificios (congelación de los salarios, deterioro de las condiciones de trabajo y aumento de la desocupación) que acompañaron a la reconversión industrial. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica en los países más desarrollados impulsó el crecimiento del sector servicios y se produjo el desplazamiento de una parte de la industria tradicional a los países periféricos, donde los salarios eran –y son– mucho más bajos.

En esas condiciones toma cuerpo la llamada "mundialización neoliberal": el paso de un sistema de economías nacionales a una economía dominada por tres centros mundiales: Estados Unidos, Europa y Japón, y un grupo constituido por los "cuatro tigres de Asia": Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur. Las "ventajas comparativas" de los Estados pasaron a ser "ventajas comparativas" de las sociedades transnacionales con diversa implantación territorial.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías la productividad aumentó enormemente, es decir, que con el mismo trabajo humano la producción pasó a ser mucho mayor.

Se abrieron entonces dos posibilidades: o se incitaba el consumo de masa de los bienes tradicionales y de los nuevos bienes a escala planetaria con una política salarial expansiva, una política social al estilo del Estado de bienestar, se reducía la jornada de trabajo en función del aumento de la productividad para tender a una situación de pleno empleo y se reconocían precios internacionales equitativos a las materias primas y los productos de los países pobres, o se tendía a mantener y a aumentar los márgenes de beneficio conservando bajos los salarios, el nivel de ocupación y los precios de los productos de los países del Tercer Mundo.

La primera opción hubiera sido factible en un sistema de economías nacionales, en las que la producción y el consumo se realizan fundamentalmente dentro del territorio, y es posible el pacto social de hecho entre los capitalistas y los asalariados en tanto consumidores. Pero en el nuevo sistema "mundializado", la producción se destina a un mercado mundial de "clientes solventes" y ya no interesa el poder adquisitivo de la población del lugar de producción.

En las condiciones de la mundialización acelerada, los detentadores del poder económico y político a escala mundial, con su visión de "economía-mundo" y de "mercado global" apostaron a la segunda alternativa –bajos salarios, bajos niveles de ocupación, liquidación de la seguridad social, precios bajos para las materias primas, etc.– para elevar su tasa de beneficios.

Hay que precisar que esta opción tuvo como consecuencia acentuar las desigualdades sociales en cada país y en el plano internacional, con lo que se creó una neta diferenciación en la oferta y la demanda de bienes y servicios. La producción y oferta de bienes se orientó no a la gente en general sino a los llamados "clientes solventes". Fue así como la oferta de bienes de lujo aumentó enormemente, y la oferta de nuevos productos como ordenadores y teléfonos portátiles encontró una gran masa de clientes en los países ricos y muchos clientes en la primera periferia no demasiado pobre. Los bienes esenciales para la supervivencia (alimentos, salud, medicamentos) quedaron prácticamente fuera del alcance del sector más pobre de la población mundial. La idea de servicio público y de un derecho irrevocable a los bienes esenciales para vivir con un mínimo de dignidad, fue reemplazada por la afirmación de que todo debe estar sometido a las leyes del mercado<sup>31</sup>.

Predominaron entonces ritmos de crecimiento económico bajos a causa de que un mercado relativamente estrecho imponía límites a la producción, y surgió el fenómeno de las grandes masas de capitales ociosos (incluidos los petrodólares), puesto que no podían ser invertidos productivamente.

Pero para los dueños de dichos capitales (personas, bancos, instituciones financieras) no era concebible dejarlos arrinconados sin hacerlos fructificar.

Es así como el papel tradicional de las finanzas al servicio de la economía, interviniendo en el proceso de producción y del consumo (con créditos,

<sup>31</sup> En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documento E/CN.4/Sub.2/2002/9 de 25 de junio de 2002, se dice, con referencia al comercio de servicios, que una inversión privada extranjera puede producir como resultado el suministro de servicios de dos niveles, uno para sanos y ricos, y otro para pobres y enfermos, la pérdida de personal especializado en los servicios públicos, una excesiva insistencia en los objetivos comerciales a expensas de los objetivos sociales, y un sector privado cada vez más amplio y poderoso que puede amenazar la función del gobierno como principal responsable de los derechos humanos (página 3 de la versión en español).



préstamos, etc.), quedó relegado por el nuevo papel del capital financiero: producir beneficios sin participar en el proceso productivo.

Este último aspecto se concreta básicamente de dos maneras: los inversores institucionales gestores de fondos de pensiones, las compañías de seguros, los organismos de inversión colectiva y los fondos de inversión compran acciones de sociedades industriales, comerciales y de servicios<sup>32</sup>. Esos grupos financieros pasan a intervenir así en las decisiones de política de las empresas con el objeto de que su inversión produzca la alta renta esperada, imponiéndoles estrategias a corto plazo. Y la otra manera en que crece el papel del capital financiero especulativo es que las mismas empresas industriales, comerciales y de servicios invierten parte de sus beneficios en la especulación (por ejemplo, con los llamados productos financieros derivados)<sup>33</sup>, en lugar de hacerlo en la inversión productiva<sup>34</sup>.

El movimiento de capitales en esta actividad improductiva adquiere proporciones gigantescas: en 2006 se batieron todos los récords en el monto anual de fusiones y adquisiciones de empresas pues su volumen alcanzó los tres billones 610.000 millones de dólares, 30% más que en 2005<sup>35</sup>. De ese total de transacciones, las realizadas por los fondos de inversión ascendieron en 2006 a más de 600 mil millones de dólares. Por ejemplo, en Francia se compraron casi 1400 empresas, la mayoría de ellas de talla pequeña y mediana, sobre todo en los sectores de la informática, de la industria química y de la salud, según informó el diario francés *Le Monde* en su edición del 14 de marzo de 2007.

Un caso paradigmático de lo que son y lo que significan a principios del siglo XXI a escala mundial las grandes sociedades transnacionales en los planos económico, financiero, político y social es el fondo de inversiones

<sup>32</sup> Los fondos de inversión colectan recursos provenientes de los fondos de pensiones, de empresas, compañías de seguros, particulares, etc., y los emplean en la compra de empresas industriales, comerciales o de servicios, que conservan si son muy rentables o por razones estratégicas (véase más adelante el ejemplo de Carlyle), o si se encuentran en dificultad, las sanean despidiendo personal y luego las venden con un margen de ganancia considerable. Las compras las realizan utilizando el llamado *Leverage Buy-Out* (LBO) que podría traducirse como "operaciones con efecto de palanca", que consisten en financiar la compra con una parte de capital propio (generalmente el 30%) y otra parte (el 70% restante) con préstamos bancarios, garantizados con el patrimonio de la empresa adquirida. Se estima que los fondos de inversión disponen en el mundo de unos 350 mil millones de dólares para invertir, y que sólo en Europa recogieron en 2005 72 mil millones de dólares de fondos de pensión y de grandes fortunas.

<sup>33</sup> Los productos derivados son contratos cuyo valor depende o "deriva" de un activo subyacente que es tratado en un mercado. Ese activo puede ser un bien (materia prima), un activo financiero (una moneda) o incluso una canasta de activos financieros (índice bursátil). (Drouin, p. 125).

<sup>34</sup> François Chesnais, *Tobin or not Tobin*, L'Esprit Frappeur, Paris, 1998. Del mismo autor, *Le capital rentier aux commandes*, Les Temps Modernes, núm. 607, Paris, janvier-février 2000. Véase también F. Chesnais, *La mondialisation du capital*, Syros, Paris, 1994; bajo la dirección del mismo autor, *La mondialisation financière*, Syros, Paris, 1996.

<sup>35</sup> *Le Monde*, 21 de diciembre de 2006.



Carlyle Group, con sede en Washington, en 1001 Avenida Pensylvania, simbólicamente a mitad de camino entre el Congreso y la Casa Blanca. Esta compañía poco conocida “se hizo inesperadamente importante después del 11 de septiembre” (Dan Briody) porque comenzó a interesarse en sectores tales como la biodefensa, la seguridad informática, y en tecnologías de protección muy sofisticadas.

Carlyle Group, que compra empresas mediante el sistema Leverage Buy-Out (LBO) (véase la nota 32), o participaciones en las mismas, administra 13 mil millones de dólares de activos, participa en 164 empresas, y sus beneficios se elevan a 16 mil millones de dólares anuales. Tiene relaciones de negocios con unas 450 instituciones, entre ellas bancos (ingleses, alemanes, franceses, coreanos), compañías de seguros, emires árabes, fondos de pensión públicos y privados, como Calpers, que administra los fondos de pensión de 1.300.000 jubilados californianos, etc. En febrero de 2001, Calpers adquirió por 175 millones de dólares el 5 por ciento del capital de Carlyle e invirtió otros 250 millones de dólares en diferentes fondos administrados por este grupo. Los fondos públicos de pensión de Ohio, Texas, Florida y Nueva York también han invertido millones de dólares en Carlyle.

Carlyle se concentra en los sectores que con la ola privatizadora mundial han pasado del sector público al sector privado: las industrias de la defensa, aeroespacial y de telecomunicaciones, y también se interesa en las tecnologías de la información, en las biotecnologías y en la industria farmacéutica. Es el undécimo proveedor de armas del Pentágono.

Pero también ha tomado posiciones en la industria de armamentos europea: en septiembre de 2001 entró, a través de United Defense, en el grupo sueco fabricante de armas Bofors Defense, en el Defense Evaluation Research Agency (DERA), filial del Ministerio de Defensa británico, y tiene el 33,8% del capital de Quinetiq, filial privada del DERA, que se ocupa de la investigación en materia de defensa. En abril de 2003 Carlyle entró en Fiat Avio, la rama aeronáutica de la Fiat, y a través de ella obtuvo un lugar en el Consejo de Administración de Arianespace (sociedad aeroespacial europea).

La presencia de Carlyle en aspectos particularmente sensibles de la industria europea lleva a que algunos expertos llamen a dicho Grupo “el caballo de Troya de los americanos en Europa” o “la CIA de los negocios”<sup>36</sup>.

A través de su participación en empresas dedicadas a la seguridad en general, y a la seguridad informática en particular –Sosoft, Infracore y BNX System–, Carlyle tiene acceso a los sistemas de seguridad informática europeos, chinos, etc.

<sup>36</sup> Véase en el Capítulo IV, el apartado 6, Las sociedades transnacionales y la Unión Europea.

Después de fracasar en su intento de controlar el grupo de prensa francés de *Le Figaro*, Carlyle logró poner un pie en la prensa europea al adquirir participaciones importantes en el grupo Aprovia, antiguo grupo de la prensa profesional y de la salud de Vivendi Universal Publishing<sup>37</sup>. Hacia fines del 2002 el grupo Lagardère compró VUP, que tomó el nombre de Editis, pero la Comisión Europea le impone –para preservar la competencia– la condición de vender el 60%, que compró Wendel Investment en 2004.

Cuando se anunció un plan de despidos en ese grupo de prensa, los periodistas reunidos en intersindical expresaron en un comunicado, “sus fuertes reservas sobre la naturaleza muy particular del grupo estadounidense Carlyle, cuyo Consejo de administración está compuesto de varias personalidades de la antigua administración republicana en la Casa Blanca, particularmente el ex presidente Bush”. Y agregaban, “Ese grupo ha nutrido recientemente la crónica a causa de sus relaciones de negocios con la familia Ben Laden de Arabia Saudita”. Finalizaban expresando su alarma ante la estrategia futura (leáse despidos) de los administradores de fondos de pensión que habían tomado el control del grupo de prensa (AFP, 09/11/2001).

En el equipo dirigente de Carlyle se encuentran personajes tan significativos como George Bush, padre; el ex secretario de Defensa de Estados Unidos y ex director Adjunto de la CIA, Frank Carlucci (reemplazado en enero de 2003 por Louis Gerstner, ex director de IBM); James Baker, ex secretario de Estado de Estados Unidos; John Major, ex primer ministro de Gran Bretaña, que es director del grupo Europa de Carlyle, y Fidel Ramos, ex presidente de Filipinas, director del Grupo Asia. Entre sus clientes se encuentran personajes como George Soros, el príncipe Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud de Arabia Saudita, y miembros de la familia Ben Laden, aunque se afirma, sin que sea posible verificarlo, que desde octubre de 2001 dicha familia no tiene intereses en Carlyle.

Los asesores de Carlyle son igualmente renombrados: Arthur Levitt, ex director de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos; Karl Otto Pöhl, ex presidente del Bundesbank de Alemania; Afsaneh Masheyekhi Beschloss, ex responsable de inversiones del Banco Mundial; Liu Hong Ru, antiguo presidente de la comisión china de regulación del mercado; Arifin Siregar, ex presidente del Banco Central de Indonesia, entre otros.

<sup>37</sup> El grupo Aprovia comprende el grupo GSI (*l'Usine nouvelle*, LSA, Industries et technologies), le Moniteur (*La Gazette des communes*, *Le Quotidien du médecin*, *La République du Centre*, Vidal, *Le Moniteur des travaux publics*), el grupo Tests (*DTInformatique*, *Décision Micro*, *L'Ordinateur individuel*) y France Agricole (*Agrorépartition*, RIA). Varios de ellos son puestos de observación esenciales de actividades claves de la economía y de la investigación francesas.

El Carlyle Group sintetiza muy bien los rasgos esenciales del gran capital transnacional contemporáneo: la fusión o coalición del capital financiero y del capital industrial, la versatilidad de sus operaciones, y el control a escala mundial a través del capital financiero de las industrias estratégicas civiles, militares y de la información (medios, informática, etc.), en el que grupos con sede en Estados Unidos desempeñan un papel dominante.

Carlyle Group permite visualizar también cómo una parte de las riquezas producidas por el trabajo humano en todo el mundo, y las ganancias de la industria de guerra y de la "lucha contra el terrorismo", van a parar a los bolsillos no sólo de los potentados estadounidenses sino de una parte de los jubilados de clase media de dicho país, a través de las rentas de los fondos de pensiones invertidos fuera de Estados Unidos.

La confluencia en Carlyle de intereses aparentemente contradictorios puede tener consecuencias dignas de una comedia de enredos. Jean Ziegler, en su libro *Les nouveaux maîtres du monde*, cuenta que en abril de 2002 el Grupo Carlyle reunió en una cena en Ginebra a los banqueros más prominentes de la ciudad y a algunos de sus clientes, a la que asistía también Bush padre. Lo inesperado se produjo cuando se presentó a la puerta Yeslam Ben Laden, medio hermano de Osama Ben Laden, en su calidad de accionista del Grupo, mostrando una invitación a la cena. El encuentro Bush-Ben Laden en la cena finalmente no tuvo lugar porque los guardias de seguridad no permitieron ingresar al multimillonario saudí<sup>38</sup>. O puede adquirir contornos dramáticos: la mañana del 11 de septiembre de 2001, mientras se estrellaban los aviones contra las Torres Gemelas, estaba reunido en Washington el directorio de Carlyle presidido por Frank Carlucci, y en la reunión participaba el medio hermano de Osama Ben Laden. El 12 de septiembre, toda la familia Ben Laden partió de Estados Unidos rumbo a Arabia Saudita en el único vuelo civil autorizado ese día.

El profesor Michel Drouin<sup>39</sup> dice:

El desarrollo de los flujos de capitales internacionales, impulsado por la desregulación y la descompartimentación casi general de los mer-

<sup>38</sup> Fuentes consultadas sobre el Carlyle Group: Pascal Dallecoste, investigador en el Laboratoire de Recherche de l'École de Guerre Économique (Larege), [www.egs.esica.fr](http://www.egs.esica.fr), Qui veut vraiment du Carlyle Group?, [www.infoguerre.com](http://www.infoguerre.com), 2003; Dan Briody, Carlyle's way, Making a mint inside "the iron triangle" of defense, government and industry, January 8, 2002, [www.regderring.com](http://www.regderring.com), 2003; revue Le Point, núm. 1600, Paris, 16/05/03; A:\The Carlyle Group - Former World Leaders and Washington Insiders Make Billions from the War on Terrorism.htm; Media, influence US, manipulations, Carlyle Group: vers un contrôle de la presse européenne? Lié à Bush et Ben Laden, Carlyle s'empare de plusieurs titres de la presse professionnelle, 17/02/2003; Carlyle Group: anatomie d'une pieuvre, [transfert.net](http://transfert.net), 15/06/2003; L'appétit féroce de l'américain Carlyle, Le Canard Enchaîné, núm. 4308, Paris, 21/05/03, p. 4; Jean Ziegler, *Les nouveaux maîtres du monde*, Fayard, octobre 2002, pp. 55 y 56.

<sup>39</sup> Michel Drouin, *Le système financier international*, Armand Colin, Paris, 2001, Capítulo V.

cados financieros, hizo de los años 80 el decenio de la mundialización financiera... Las operaciones financieras, cuyo volumen estaba ya desconectado del volumen de las transacciones en bienes y servicios, se hicieron autónomas, es decir, movidas no por la lógica de las transacciones corrientes sino por la de los movimientos de capitales. La esfera financiera basó su desarrollo sobre ella misma a partir de la búsqueda de un beneficio surgido de la variación de los precios de sus propios instrumentos. El carácter especulativo de esta lógica de crecimiento permite hablar del surgimiento de una economía internacional de la especulación.

Estados Unidos y una parte de la población de dicho país son los primeros beneficiarios del proceso de mundialización financiera, la que les permite apropiarse del producto del trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el planeta. Ronald Mc Kinnon, profesor titular del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Stanford, en un artículo publicado en el Boletín del Fondo Monetario Internacional<sup>40</sup> escribe:

Durante el último decenio, el ahorro de las familias [en Estados Unidos] ha disminuido más de lo que el ahorro público (expresado por los excedentes presupuestarios) ha aumentado en el mismo periodo. El enorme déficit de la balanza de pagos (exportaciones frente a importaciones) de las transacciones corrientes de Estados Unidos, de alrededor de 4,5% del producto nacional bruto de 2000, refleja ese desequilibrio del ahorro. Para financiar un nivel normal de inversión interior –históricamente alrededor del 17% del producto nacional bruto– Estados Unidos ha debido utilizar ampliamente el ahorro del resto del mundo. “Malas” reducciones de impuestos –las que reducen el ahorro público sin estimular el ahorro privado– podrían incrementar esa deuda con el extranjero. Desde hace más de veinte años (es decir, desde antes de 1980), Estados Unidos recurre ampliamente a las reservas limitadas del ahorro mundial para sostener su alto nivel de consumo, el de la administración federal en los años ochenta y el de las familias en los años noventa. Las entradas netas de capitales son actualmente más importantes que en el conjunto de los países en desarrollo. Es así como Estados Unidos, que era acreedor del resto del mundo a comienzos de 1980, se ha convertido en el más grande deudor mundial: unos 2 billones 300 mil millones de dólares en 2000. Los balances de las familias y de las empresas en Estados Unidos muestran el efecto acumulado de los préstamos privados obtenidos en el exterior desde hace diez años. La deuda de las empresas es también muy elevada con relación a su flujo de caja. Sin embargo, no tienen por qué inquietarse. Estados Unidos se encuentra en una situación única y es que disponen de una línea de crédito prácticamente ilimitada, en gran parte en dólares, frente al resto del mundo. Los bancos y otras instituciones financieras de Estados Unidos están relativamente al abrigo

<sup>40</sup> Fondo Monetario Internacional, *Finances et Développement*, junio 2001.

de las tasas de cambio: sus activos ... y sus pasivos son en dólares. En cambio, otros países deudores deben acomodarse a las disparidades de las monedas: los pasivos internacionales de sus bancos y de otras empresas son en dólares y sus activos en moneda nacional.

Países de Asia siguen adquiriendo masivamente los bonos del Tesoro estadounidense, con lo cual Estados Unidos cubre su déficit fiscal. Casi cuatro quintos del financiamiento requerido se obtuvieron de esta manera. En el año fiscal 2006 el déficit fiscal ascendió a 247.700 millones de dólares, un 1,9% de su PIB.

Otro autor <sup>41</sup> escribe: "Con esos recursos externos se financian las reducciones de impuestos con los cuales Bush favoreció a sectores de altas rentas, se obtienen los recursos para mantener la costosa intervención militar en Irak y Afganistán y todo su despliegue de fuerzas alrededor del mundo, permitiéndole además mantener discriminatorias exenciones tributarias".

Con esta "economía internacional de la especulación" se aceleró la acumulación de grandes capitales en pocas manos a expensas sobre todo de los trabajadores, de los jubilados y de los pequeños ahorradores, y se creó la ilusión de que el dinero podía reproducirse por sí sólo, sin participar en el proceso productivo.

En el caso de las participaciones del capital financiero (fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión, bancos, etc.) en industrias y servicios, la elevada renta que exigen y obtienen dichos capitales está fundada en la degradación de las condiciones de trabajo en esas industrias y servicios. Es bien conocido el fenómeno de que cuando una empresa anuncia despidos sus acciones suben <sup>42</sup>.

Éstas fueron las formas en que el capital transnacional mantuvo y mantiene una alta tasa de beneficios y un acelerado ritmo de acumulación y concentración a pesar del crecimiento económico lento y de la existencia de un mercado restringido <sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Hugo Fazio (Centa), A Estados Unidos lo financia el resto del mundo, *Argenpress*, 17/10/2006.

<sup>42</sup> Los escándalos financieros revelados en el curso de 2002 causaron enormes pérdidas a los más grandes fondos de pensión estadounidenses, los que decidieron iniciar juicios contra los responsables, entre ellos Enron y su auditor Arthur Andersen, WorldCom y otros. Calpers, que administra el dinero de 1.300.000 funcionarios californianos, CalSTRS (687.000 docentes del mismo Estado) y Lacera (132.000 empleados de Los Ángeles) han perdido 318 millones de dólares a causa de la quiebra de WorldCom (más de 7 mil millones de dólares evaporados). El fondo de pensión de los funcionarios del estado de Nueva York (112 mil millones de dólares de activos) perdió 300 millones de dólares en la quiebra de WorldCom, etc. Véase *Le Figaro économie*, 18/7/02, pp. I y VII). También se percibe una tendencia de los grandes fondos de pensión a adquirir las empresas, en lugar de limitarse a invertir en las mismas e intentar controlarlas, con lo que la exigencia de asegurar una renta más elevada para los accionistas —a costa de las condiciones de trabajo, los salarios y la estabilidad en el empleo del personal de las empresas— se hace más imperativa.

<sup>43</sup> En un artículo de Eric le Boucher, Les multinationales sur leur tas d'or, *Le Monde*, 5-6/9/2004. (Las multinacionales sobre su montón de oro), se dice que ningún acontecimiento —guerras,



Pero el problema es que el dinero *no es* un valor sino que *representa* un valor. Y que el valor se crea sólo en la producción, y el dinero por sí mismo no puede generar valor y producir beneficios.

En junio de 2001, el señor Sergio Tchuruk, presidente de Alcatel, una gran sociedad transnacional francesa, anunció su intención de crear una empresa sin fábricas. Comentando esta declaración en el diario francés *Le Monde* del 3 de julio de 2001, Jean-Marie Harribey, profesor de ciencias económicas y sociales de la Universidad de Bordeaux IV, decía que la frase de Tchuruk era la expresión más exacta de la utopía capitalista actual, que teoriza sobre la creación de valor por el accionista.

Tales empresas no son un proyecto futurista de Tchuruk sino que ya existen en la realidad: son las que guardan para sí la actividad financiera y subcontratan o controlan la actividad productiva que realizan otras empresas.

El profesor Harribey dice que tales empresas, supuestamente creadoras de valor por el accionista, en realidad no hacen otra cosa que apropiarse del valor creado por la economía real. Esa apropiación de valor, dice Harribey, adopta dos formas. La primera corresponde a un empeoramiento de las condiciones de empleo (bajos salarios, horarios de trabajo flexibles, empleos precarios, desocupación) de manera que el aumento de la productividad no beneficia a los trabajadores y solo redunda en el aumento de los beneficios del capital. La segunda forma en que se produce esa apropiación de valor es a través de una repartición desigual entre el capital productivo y el capital financiero, en beneficio de este último. Pues los gestores de capitales financieros que tienen participaciones en actividades productivas exigen un nivel mínimo de renta que en muchos casos no puede obtenerse manteniendo condiciones decentes de trabajo y una distribución equitativa de los beneficios entre el capital productivo y el capital financiero.

De modo que ahora hay que estudiar a las sociedades transnacionales también como especuladores financieros y, por cierto, también en su función de sociedades que realizan actividades productivas en las esferas más

---

atentados, etc. — hace disminuir los beneficios de las sociedades transnacionales sobre sus fondos propios: 15% en los Estados Unidos, 12 % en Francia. A ese fin, todos los medios son buenos para bajar los costos en caso de necesidad. En total, 374 empresas del índice *Standard & Poors* tienen en sus cofres 555 mil millones de dólares de reservas. Esas reservas aumentaron un 11% en 2004 con relación a 2003 y, a pesar de la recesión de 2001, se duplicaron desde 1999, según la revista *Business Week*. Bouygues, Exxon, Intel y British Telecom han recomprado masivamente sus acciones para hacer subir su cotización. Es un fenómeno mundial. El resultado es que los medios financieros de las empresas superan a sus necesidades, y la tasa de su autofinanciación aumenta: 115% en Estados Unidos, 110% en Alemania y 130% en Japón... Las empresas podrían aumentar los puestos de trabajo y los salarios, pero no es el caso...

De esta capacidad de autofinanciación de las grandes corporaciones ya hablaba Paul Sweezy en 1945 en su Teoría del desarrollo capitalista, donde destacaba la capacidad de autofinanciación de las grandes corporaciones (véase la nota 28).

diversas: desde la extracción y producción de materias primas hasta la prestación de toda clase de servicios (bancos, seguros, salud, comunicaciones, información, fondos de pensiones, etc.), pasando por la producción de una gran variedad de mercancías: bienes de consumo inmediato como los alimentos, bienes durables como automóviles, etc., y también en la esfera de la investigación en todos los órdenes, especialmente en la tecnología avanzada: electrónica, ingeniería genética<sup>44</sup>, etc. Sin olvidar su papel en la industria de armamentos (la que ha reasumido últimamente la hegemonía en Estados Unidos, como veremos más adelante), siempre interesada en colocar su producción, en ensayar sus productos en condiciones reales (guerras del Golfo, de Yugoslavia y de Afganistán, agresión a Irak) y en ampliar sus mercados, por ejemplo, a través de la incorporación de nuevos países a la OTAN; el presidente del Comité Americano por la Ampliación de la OTAN es el vicepresidente de la Lockheed Martin (17 mil millones de dólares de pedidos del Pentágono en 1997)<sup>45</sup>. La misma empresa que a fin de octubre de 2001 (en plena guerra contra Afganistán) se vio agraciada por el gobierno de Estados Unidos con el encargo de construir miles de nuevos aviones militares en los próximos años por un monto sin precedentes de 200 mil a 400 mil millones de dólares. Se trata de 3000 aviones JSF(F-35) destinados a las fuerzas armadas de Estados Unidos y de otros países, que deberán entregarse entre 2006 y 2010.

Pero todo queda en familia: Lynn Cheney, esposa del vicepresidente Dick Cheney, pertenece al directorio de Lockheed Martin.

¿La hegemonía del capital financiero en la economía internacional es, a estas alturas, un rasgo permanente del sistema, como decía Hilferding, o una fase transitoria del desarrollo capitalista, como decía Sweezy, criticando a Hilferding?

Nos parece arriesgado dar una respuesta concluyente. Pero no cabe duda de que la base permanente de la economía capitalista está constituida por el capital productivo, sin el cual el capital financiero (hegemónico o no) no podría existir.

En todo caso, es a través del capital financiero especulativo que una infima minoría se apropia en forma parasitaria del fruto de trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el mundo, al margen de la economía real, es decir, de la economía productiva.

De modo que a la tradicional expropiación del fruto del trabajo que practica el capital en el proceso productivo (plusvalía), se ha venido a sumar la

<sup>44</sup> Véase de Jeremy Rifkin, *Le siècle biotech*, La Découverte, 1998. Edición en inglés *The Biotech Century*, Putnam's Sons, New York, 1998.

<sup>45</sup> Claude Serfati, *Le bras armé de la mondialisation*, *Les Temps Modernes*, núm. 607, Paris, Janvier-Février, 2000.



que realiza el capital financiero especulativo, como acabamos de describir, pero que además tiene a veces una vertiente francamente delictiva.

Por ejemplo, en el caso argentino, los grandes grupos financieros nacionales e internacionales, con la complicidad de los bancos y de los sucesivos gobiernos, y con la bendición y participación del Fondo Monetario Internacional, han despojado al país mediante políticas desenfrenadas de privatización de los bienes públicos, de endeudamiento externo e interno real o ficticio, de estatización de deudas privadas, de fugas masivas de capitales y, finalmente, estafaron a buena parte de la población despojándola de sus depósitos bancarios. El resultado es que en pocos años se multiplicó el número de pobres en Argentina.

En Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía, Enron, se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares, y dejó en la calle a su personal (12.000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.

Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom, y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase<sup>46</sup>.

Una situación similar se produjo también en algunas transnacionales con sede en otros países, como Vivendi y otras en Francia. La acción de Vivendi llegó a cotizarse a 141,60 el 10 de marzo de 2000 y valía sólo 9,30 el 16 de agosto de 2002. Lo que no impidió al principal responsable de Vivendi, Jean-Marie Messier, atribuirse una indemnización "por despido" de 23 millones y medio de dólares que no pudo percibir porque fue cuestionada ante los tribunales franceses, y finalmente Messier, en el marco de una transacción, renunció a la misma.

En junio de 2004 Messier y varios de sus ex colaboradores inmediatos estaban procesados por haber manipulado con compras masivas el curso de

<sup>46</sup> En agosto de 2005 el ex jefe financiero de la firma Worldcom, Scott Sullivan, fue sentenciado a cinco años de cárcel por su participación en el mayor fraude contable en la historia corporativa de Estados Unidos. Sullivan desempeñó también un papel importante como testigo "clave" contra el ex presidente de Worldcom, Bernie Ebbers, quien a su vez fue condenado a 25 años de prisión. Sullivan fue declarado culpable de conspiración, fraude con títulos valores y falsas declaraciones financieras.

La compañía de telecomunicaciones Worldcom colapsó en 2002 luego de un fraude contable de US\$11.000 millones. "Sullivan fue el arquitecto del fraude en Worldcom", dijo la juez federal estadounidense Barbara Jones al entregar el veredicto. El colapso de Worldcom fue la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos. Cerca de 20.000 trabajadores perdieron sus empleos luego de la declaración de bancarrota. La compañía salió de la quiebra en 2004 y hoy se conoce como MCI.

las acciones de Vivendi y haber dado falsas informaciones sobre la situación financiera de la empresa, entre otros delitos.

En 2004, la Autoridad de Mercados Financieros condenó a Messier a pagar una multa de un millón de euros que la Cámara de Apelaciones de París rebajó a medio millón, pero en diciembre de 2006 la Sala Comercial de la Corte de Casación revocó el fallo de la Cámara y ordenó que ésta dictara una nueva sentencia con otra composición.

Quizás para compensar la mala gestión de Messier, Vivendi ha recibido del Estado en los últimos años una ayuda excepcional: 4400 millones de euros de crédito de impuestos y 730 millones de euros de exención de impuestos sobre las plusvalías.

En el caso de WorldCom, un pequeño ahorrista que en marzo de 2000 compró 10.000 dólares en acciones se encontraba en julio de 2002 con que sus acciones valían sólo 200 dólares (Despacho de AFP del 21/07/02).

Muchos jubilados estadounidenses, frente a la reducción de sus ingresos, están optando por buscar nuevamente trabajo, si pueden hacerlo. Lo que no es siempre posible para los que tienen 70-75 años. La revista *Time* ilustra esta situación mostrando a una mujer anciana sirviendo hamburguesas equipada con patines<sup>47</sup>.

Todas estas quiebras, operaciones fraudulentas, escándalos financieros, fugas de capitales, etc., que han tenido lugar a la vista y paciencia (y con la complicidad) de los gobiernos, que no utilizaron los mecanismos de control de que disponen, significan un fenomenal despojo de recursos a enormes masas de la población, y la concentración de dichos recursos en los grandes centros del poder económico-financiero transnacional.

Es interesante constatar que los trabajos de asesor legal de las grandes sociedades que cometieron enormes fraudes, y el de vigilar la transparencia de las operaciones financieras al frente de la Comisión de control de los mercados bursátiles (SEC) de Estados Unidos, son intercambiables: Harvey Pitt<sup>48</sup>, designado por Bush al frente de la SEC, fue abogado de numerosas firmas del Wall Street, entre ellas la consultora Arthur Andersen, cómplice en la defraudación de Enron<sup>49</sup>.

La reacción *ex post facto* del gobierno estadounidense, adoptando la *Corporate Auditing Accountability Act* el 25 de julio de 2002, quizás con

<sup>47</sup> Diario *Libération*, París, 3-4 de agosto 2002, pp. 16 y 17.

<sup>48</sup> Pitt duró en el cargo de agosto de 2001 a noviembre de 2002, fecha en la que renunció a raíz de estar envuelto en diversos escándalos, entre ellos haber nombrado a William Webster, ex director de la CIA, presidente de una nueva comisión de supervisión contable, sin informar a los comisarios del SEC que Webster había sido acusado de fraude por los accionistas de una empresa en la que presidía el comité de auditoría.

<sup>49</sup> *The Washington Times*, 3 de julio de 2002.

la sola finalidad de frenar el "krach" bursátil, se hizo necesaria para restablecer mínimamente la confianza de la población, después de que Bush dijera públicamente: "Los escándalos han traicionado al pueblo americano. Los inversores han perdido su dinero, los jubilados su seguridad y los trabajadores sus empleos. La práctica de negocios deshonestos equivale a robo y fraude"<sup>50</sup>.

Otras formas que permiten al capital financiero transnacional apropiarse en forma parasitaria del fruto del trabajo ajeno, es decir, sin intervenir en el proceso productivo, son: la privatización de la seguridad social, de la que se han hecho cargo fondos privados de pensiones, la sustitución de parte del salario o de otras remuneraciones de que es acreedor el personal de las grandes empresas por acciones o por opciones sobre acciones de la misma empresa (*stock-options*), etc., que son distintas formas de robar o estafar, como dicen los economistas Labarde y Maris. Este tema es muy vasto y excede los límites de este trabajo, por lo que nos remitimos a alguna bibliografía específica<sup>51</sup>.

Pero el capital industrial sigue teniendo un papel de primer orden en el sistema, que se ha reforzado considerablemente en los últimos tiempos desde que sus sectores más agresivos, las industrias petrolera y de armamentos, han recuperado la hegemonía en el centro del poder mundial, con la entronización del equipo Bush, en cuyo gobierno están ampliamente representados ambos sectores industriales, como veremos en el apartado 1 del Capítulo IV.

El 24 de julio de 2002 la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una partida suplementaria de urgencia de 28,9 mil millones de dólares para la "lucha contra el terrorismo", 14,5 mil millones destinados a Defensa, que ya registró una cifra récord en 2001 (379 mil millones de dólares). En 2004 el presupuesto de la Defensa en Estados Unidos superaba ampliamente los 400 mil millones de dólares.

Después del 11 de septiembre de 2001 la "lucha contra el terrorismo" ha sido el pretexto para aumentar los gastos militares. Pero éstos están aumentando desde 1998, es decir, desde bastante antes del atentado del 11 de septiembre, como indicó el Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz (Sipri) de Estocolmo (despacho de AFP del 13 de junio de 2002). En el trienio 1998-2001, según el Sipri, los gastos militares aumentaron ligeramente en Europa occidental y fuertemente en Estados Unidos, en Europa central y

<sup>50</sup> Diario *Liberazione*, Roma, 21/07/02, p. 15.

<sup>51</sup> Philippe Labarde y Bernard Maris, *La bourse ou la vie, la grande manipulation des petits actionnaires*, Albin Michel (ed.), Paris, 2000. Véase también Michel Husson, *Les fausses promesses de l'épargne salariale*, en *Le Monde Diplomatique*, febrero 2000, y Whitney Tilson, *Stock options, perverse incentives*, en [www.foo.com/news/foth/2002/foth020403.htm](http://www.foo.com/news/foth/2002/foth020403.htm), 03/04/02.

oriental, en Asia del Sur, en Medio Oriente y en África, donde el aumento fue el más importante (31% en tres años). Que África, el continente cuya situación social, sanitaria y alimentaria es la peor del planeta figure a la cabeza del aumento de los gastos militares es una aberración total: Para establecer las responsabilidades (aparte de la de los propios dirigentes africanos) no hay que olvidar quiénes son los que promueven las guerras en África, y que los seis países principales vendedores de armamentos en el mundo son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania.

Más recientemente el Sipri informó que en 2005 Estados Unidos gastó en armamentos 478 mil millones de dólares, el 48% del gasto mundial, y que ese mismo año encabezó con Rusia la venta internacional de armamentos (30% cada uno del total mundial de 53 mil millones de dólares de ventas).

El Sipri constata que los gastos militares a escala mundial siguen aumentando velozmente. En 2005 ascendieron a 1 billón (millón de millones) 118 mil millones de dólares, lo que equivale al 2,5% del PBI mundial, o a 173 dólares por cada habitante del planeta. En términos porcentuales, se registró un incremento del 3,4% con respecto al año anterior. El aumento de gastos total en esa materia es perceptible si se toma como referencia el año 2002, en el que el gasto mundial en armamentos fue de 839 mil millones de dólares, es decir, dos terceras partes del monto de 2005<sup>52</sup>.

Actualmente esos sectores industriales dominantes, apoyados en el enorme poderío militar de Estados Unidos, orientan de hecho la política internacional. Son ellos los que, omnipresentes en las más altas funciones de gobierno estadounidense, han optado por una economía de guerra en Estados Unidos, y por la guerra y la ocupación militar de zonas económicamente estratégicas (especialmente las más ricas en petróleo y gas) en todo el mundo, para asegurarse una elevada cuota de beneficios y también el control directo de las principales fuentes y reservas energéticas (Estados Unidos consume el 25% del petróleo mundial pero sólo tiene el 3 por ciento de las reservas). También se ocupan de promover luchas interétnicas en África, como lo hacen otras sociedades transnacionales con sede en países europeos, sobre el fondo de la disputa por el control de materias primas estratégicas que abundan en la región (cobalto, uranio, coltan, diamantes, oro, etc.). Según la revista médica inglesa *The Lancet* de enero 2006, sólo en la República Democrática del Congo diez años de guerra civil han costado entre 3,5 y 4,5 millones de muertos.

La guerra es una opción recurrente del capital monopolista en los momentos de crisis económica, porque es una manera de reactivar la producción industrial sin necesidad de reactivar la demanda (el Estado compra la

<sup>52</sup> BBC Mundo, ¿cuánto cuesta la guerra? 18/09/2006. [www.bbc.co.uk/worldservice](http://www.bbc.co.uk/worldservice)

producción de armamentos con el dinero del contribuyente sin consultarlo, y la población del enemigo elegido “consume”, por cierto involuntariamente, las bombas que recibe sobre su cabeza). Y después de la guerra los grandes monopolios de la industria civil acaparan el negocio de la reconstrucción y de la “ayuda humanitaria”. El caso más reciente es el Líbano, donde los bombardeos israelíes causaron devastadoras destrucciones en la infraestructura civil calculadas en cinco mil millones de dólares, y que ahora recibirá la “ayuda” internacional para la reconstrucción.

En su libro *Capitalismo, Socialismo y Democracia* (1942), el economista Joseph Schumpeter afirmaba que “el capitalismo es por naturaleza una forma o método de cambio económico” de sustitución de lo viejo por lo nuevo, a lo que denominaba “destrucción creativa” (nuevos consumidores, nuevos bienes, nuevos métodos de producción o transporte, nuevos mercados, nuevas formas de organización industrial, etc.). La guerra sería la forma más drástica de “destrucción creativa” inherente al capitalismo. Otras formas de “destrucción creativa” que benefician al gran capital son las grandes catástrofes naturales.

El 11 de septiembre de 2005, despachos de AFP y de Reuters, y el diario mexicano *La Jornada* del 12 de septiembre informaron que la corporación Halliburton<sup>53</sup> —cuya dirección dejó Cheney en el 2000, antes de asumir la vicepresidencia de Estados Unidos, pero de la cual sigue recibiendo emolumentos (194.852 dólares en 2004)— comenzaba a ser señalada en la Bolsa de Valores de Nueva York como la más probable beneficiaria de los principales contratos de reconstrucción de Nueva Orleans después del ciclón Katrina, cuyo costo oscilará entre los 100 mil y 200 mil millones de dólares, según cálculos de aseguradoras y analistas<sup>54</sup>.

El 3 de septiembre de 2005, Halliburton anunció que una de sus subsidiarias, Kellogg Brown y Root (KBR), había sido contratada por la Marina

<sup>53</sup> Halliburton, mediante multimillonarios contratos, es una de las principales beneficiarias de la guerra contra Irak. Beneficios que aumentó notablemente incurriendo en múltiples fraudes en la ejecución de esos contratos. Véase el apartado 1 del Capítulo IV, Las sociedades transnacionales y los gobiernos.

<sup>54</sup> El valor de las opciones accionarias del vicepresidente Dick Cheney en Halliburton pasó de 241.498 dólares en 2004 a más de 8 millones de dólares en 2005, un aumento superior al 3.000%, que todavía podría crecer mucho más si Halliburton continúa obteniendo miles de millones de dólares en contratos del gobierno de Estados Unidos sin licitación ni auditorías.

Un análisis difundido por el senador Frank Lautenberg —demócrata por New Jersey— revela cómo las fortunas de Halliburton y del vicepresidente se elevan sincronizadamente. Halliburton ya consiguió más de 10 mil millones de dólares de la administración de Bush-Cheney en trabajos para “reconstruir” Irak. También obtuvo incontables contratos del gobierno después del huracán Katrina, mientras su filial KBR construye unos enigmáticos centros de detención para 5.000 personas cada uno dentro de Estados Unidos que todavía nadie explica a quiénes están destinados. “Es impropio”, hizo notar Lautenberg, que el vicepresidente continúe beneficiándose de esta compañía al mismo tiempo que la administración le inyecta miles de millones de dólares. *Argenpress Info*, 12/10/2006.



de Estados Unidos para restablecer la energía, reparar techos y remover desechos en tres instalaciones navales dañadas por Katrina. KBR también realiza un balance de daños en otras instalaciones ubicadas en el puerto azotado por el huracán. El trabajo se realiza de acuerdo con un contrato de 500 millones de dólares firmado con la Marina en 2004, cuyo objetivo es dotar de servicios a esta rama militar, en casos de emergencia causados por desastres naturales o conflictos militares.

Bechtel National Inc., también del núcleo de empresas cercano a la Casa Blanca<sup>55</sup>, fue seleccionada por la Federal Emergency Management Agency (FEMA) para proveer viviendas provisorias para la gente desplazada por el huracán.

Por si no fuera suficiente la política gubernamental de otorgar la parte del león de los contratos de reconstrucción a empresas del primer círculo presidencial, en los primeros días de septiembre de 2005 Bush dispuso, con el pretexto de reducir costos fiscales, que las compañías constructoras escogidas por su gobierno que participen en la restauración de Nueva Orleans no estarán obligadas a pagar los salarios promedio locales a los trabajadores que contraten, como está prescrito en la ley Davis-Bacon, vigente desde los años treinta del siglo pasado. Semejante medida ha sido denunciada en un editorial de *The New York Times* como “una proclama vergonzosa” y maniobra “inaceptable en cualquier criterio de decencia humana”, orientada a “condenar a muchos que de por sí son pobres, y ahora desposeídos, a salarios por debajo del tabulador, con lo que se perpetúa su pobreza”<sup>56</sup>.

Decíamos al comienzo de este capítulo que las actividades y los métodos de trabajo de las sociedades transnacionales cambian continuamente. También cambia con frecuencia el nombre de dichas sociedades, ya sea como resultado de fusiones o aunque sigan siendo las mismas sociedades, como una manera de tratar de hacerse olvidar por el público después de haber adquirido una mala reputación a causa de su intervención en delitos financieros o económicos o en graves violaciones de los derechos humanos.

<sup>55</sup> Bechtel es una gigantesca empresa transnacional en posición privilegiada para “reconstruir” Irak, es decir, para participar en el despojo del patrimonio nacional iraquí. Con Ronald Reagan en la Casa Blanca, gente de Bechtel entró en el gabinete. El entonces presidente de Bechtel, George Shultz, fue secretario de Estado; el consejero general de Bechtel, Caspar Weinberger, fue secretario de Defensa y W. Kenneth Davis, vicepresidente de Bechtel para desarrollo nuclear, ocupó el cargo de vicesecretario de Energía.

<sup>56</sup> El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió el 20 de setiembre al gobierno federal, a través de una carta al presidente Bush y a líderes del Congreso, la anulación de la suspensión de la Ley Davis-Bacon en las áreas devastadas por Katrina en la Costa del Golfo y condados igualmente afectados en Florida. La Ley Davis-Bacon requiere el pago de salarios y beneficios prevalecientes en el área geográfica basado en una determinación del Secretario de Trabajo. Bajo el estatuto, los salarios en Nueva Orleans son de 13,42 dólares por hora para un carpintero, 13,93 dólares para un operador y 925 para un jornalero general. Según Bloomberg, estos salarios asegurarían personal de calidad para los trabajos de reconstrucción en el Golfo.

Pero las fusiones, las deslocalizaciones y los cambios de nombre no significan que las sociedades transnacionales se hayan convertido en entes virtuales e inaprehensibles. Es cierto que su imagen se fue despersonalizando primero al constituirse como sociedades anónimas con relación a la época en que un monopolio se identificaba con un nombre propio (Rockefeller, Mellon, etc.). Pero también es cierto que aún hoy siguen teniendo componentes reales y tangibles: capital, sede principal, dirigentes responsables, etc.

Una prueba adicional de su existencia determinable en coordenadas espacio-temporales es su presencia e influencia en organismos y reuniones internacionales, en el papel determinante que ejercen en las orientaciones de los organismos financieros internacionales y en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de los representantes de las grandes potencias y de sus propios equipos de juristas y economistas, y en la influencia que ejercen en las orientaciones económico-financieras y en la política general de casi todos los Estados del planeta. Su existencia real y tangible se manifiesta también en el cuasi monopolio que detentan sobre los medios masivos de comunicación y hasta en su actividad como litigantes, por ejemplo, en la demanda entablada por 39 transnacionales farmacéuticas ante un tribunal de Pretoria contra una ley sudafricana que autoriza la fabricación de medicamentos genéricos, demanda de la que posteriormente desistieron la mayoría de las empresas, dada la indignación a escala mundial que provocó la acción judicial de las empresas.



## CAPÍTULO 3

# Efectos sobre los derechos humanos; políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las actividades de las sociedades transnacionales

### ALGUNOS ANTECEDENTES

**E**l 30 de abril de 1942, Oswald Pohl, jefe de la "Oficina principal económica y administrativa SS" enviaba a Himmler un informe sobre "La situación actual de los campos de concentración": "La guerra ha producido cambios estructurales visibles en los campos de concentración y ha modificado radicalmente sus tareas, en lo que se refiere a la utilización de los detenidos. La detención sólo por motivos de seguridad, educativos o preventivos, no está ya en primer plano. El centro de gravedad se ha desplazado hacia el lado económico".

El reglamento que se dictó en consecuencia decía que los detenidos tenían que trabajar hasta el agotamiento, a fin de alcanzar el máximo rendimiento, que la jornada de trabajo era ilimitada, y que sólo dependía de la estructura y de la naturaleza del trabajo.

De esta mano de obra gratuita y esclava se aprovecharon grandes empresas como Krupp y Siemens, pero particularmente en Auschwitz la IG Farbenindustrie, que instaló en Buna, tercer campo de Auschwitz, una fábrica de caucho sintético. Por allí pasaron unos 35.000 detenidos de los cuales murieron 25.000<sup>57</sup>.

Otras grandes empresas alemanas también participaron y se beneficiaron del holocausto, entre ellas la Bayerische Motoren-Werke (BMW), Volkswagen y Daimler Benz. También la Ford y la General Motors utilizaron el trabajo esclavo bajo Hitler, fabricando durante la guerra vehículos militares en Colonia, Alemania, para el ejército alemán. Henry Ford fue el primero que financió a Hitler, ya en 1922, aun antes que los industriales

---

<sup>57</sup> Raul Hilberg, *La destruction des Juifs d'Europe*, Fayard, 1968.

alemanes, como informó el *New York Times*, el 20 de diciembre de ese mismo año<sup>58</sup>.

Varias de esas empresas que participaron y se beneficiaron del holocausto intervienen hoy en grandes reuniones internacionales, influyen sobre los organismos del sistema de las Naciones Unidas, financian fundaciones y subvencionan ONG, pero retacean, como Volkswagen y Ford<sup>59</sup>, el pago de las indemnizaciones que reclaman los sobrevivientes de los trabajos forzados.

Pero nunca abandonaron del todo sus viejas prácticas y aun hoy violan reiteradamente los derechos humanos, instigando guerras civiles, promoviendo golpes de Estado (en colaboración con la CIA), apoyando dictaduras, violando el derecho a la salud, los derechos laborales y ambientales, entre otros, y las emulan sociedades transnacionales más recientes o antiguas que han cambiado de nombre, pero no de hábitos. Con las consignas de máximo rendimiento, reducción de salarios, aumento de la jornada de trabajo y flexibilización laboral, el reglamento de trabajo de Auschwitz sigue siendo el ideal de esas empresas.

La esclavitud subsiste en forma de tráfico de hombres, mujeres y niños, con fines de explotación laboral o sexual<sup>60</sup>, lo mismo que subsiste el racismo, la xenofobia y las diversas formas de discriminación y de intolerancia, no pocas veces impulsadas desde los gobiernos.

Son incontables los ejemplos que se podrían dar en materia de participación de sociedades transnacionales en golpes de Estado, y sobre su estrecha colaboración con dictaduras. Sólo daremos algunos.

<sup>58</sup> Antony C. Sutton, *Wall Street And The Rise Of Hitler*, Capítulo VI, año 2000. Hitler, en cuyo despacho colgaba el retrato de Henry Ford, condecoró a éste en 1938 con la Gran Cruz del Águila Alemana. Tenían en común, entre otras cosas, un furibundo antisemitismo. Hitler era un gran admirador del trabajo en cadena implantado por Ford en sus fábricas. En su autobiografía *My life and work*, Ford escribió, como recuerda Charles Petterson, *Eternal Treblinka: Our Treatment of Animals and the Holocaust*, que, para el trabajo en cadena, se había inspirado en el modo de operar de los mataderos de Chicago. Así se cierra simbólicamente el círculo. Como dice un personaje de la novela *La vida de los animales* de J. M. Coetzee: "Chicago nos mostró el camino, fue de los corrales para animales de Chicago de donde los nazis aprendieron cómo procesar los cuerpos".

<sup>59</sup> En 1999 el gobierno alemán anunció la creación de un fondo para la indemnización de los trabajadores forzados de la época nazi. Dicho fondo es aprovisionado por el Estado alemán y por ciertas empresas, entre otras: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler-Chrysler, el Deutsche Bank, Friedrich Krupp, Krupp-Hoesch, Hoechst, Siemens, Volkswagen y el Dresdner Bank. Dichas empresas confiaron en la "solución biológica", es decir, la muerte de los sobrevivientes, pero la publicidad creciente sobre su rentable implicación con el nazismo las obligó a buscar la solución de crear un fondo para dejar a salvo su imagen. Pero en Europa Oriental, en particular, cientos de miles de ex trabajadores esclavos de los nazis todavía están vivos. En la región del Báltico, Polonia, Rusia, la República Checa, Hungría y Ucrania viven por lo menos un millón de personas quienes hasta hoy solamente recibieron limosnas (aproximadamente 500 marcos por persona, según la ley de compensaciones de 1993), o ninguna compensación. Sin embargo, estas víctimas fueron excluidas de las negociaciones.

<sup>60</sup> Según las fuentes, ese tráfico involucra anualmente entre cuatro y veinte millones de personas y los beneficios entre 5000 y 7000 millones de dólares.

Un documento hecho público a mediados de abril de 2000 por la prensa de Estados Unidos (*New York Times* e *International Herald Tribune*) revela detalles de la intervención decisiva de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el golpe de estado de 1953 en Irán contra el gobierno del doctor Mossadegh, que había nacionalizado el petróleo, contrariando así los intereses de la Anglo-Iranian Oil Company. Después del golpe, un consorcio de ocho compañías (estadounidenses, inglesas y holandesas) retomaron el control del petróleo, entre ellas la Anglo-Iranian con el nombre de British Petroleum (BP).

En 1954 una acción militar obligó a renunciar al presidente constitucional de Guatemala, Jacobo Arbenz, durante cuyo gobierno se habían realizado importantes reformas económicas y sociales en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la población, entre ellas la reforma agraria. La represión contra los campesinos y los militantes sindicales después del derrocamiento del gobierno constitucional fue extremadamente violenta y continúa aún hoy. Las promotoras y financiadoras de la acción militar fueron la CIA y la empresa transnacional United Fruit Company (actualmente Chiquita Brands), con enormes intereses en toda América Central y el Caribe, particularmente descontenta con la reforma agraria dispuesta por el gobierno de Guatemala.

En 1973 fue derrocado el gobierno constitucional de Chile resultando muerto el presidente, Salvador Allende, con las gravísimas consecuencias para los derechos humanos y los derechos sindicales que son de pública notoriedad. La intervención de la empresa transnacional International Telephone and Telegraph (ITT) en la promoción y financiación del golpe de Estado ha quedado ampliamente demostrada, así como también la intervención directa del gobierno de Estados Unidos y de su Agencia Central de Inteligencia (CIA)<sup>61</sup>. La ITT se sintió afectada por la nacionalización de la compañía de teléfonos, donde poseía el 70% de las acciones. La nacionalización de las minas de cobre, que eran propiedad de compañías estadounidenses, fue también un elemento desencadenante de primera importancia del golpe de Estado contra el gobierno de Allende.

En el informe en tres volúmenes presentado a la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1978 por el profesor Antonio Cassese acerca del efecto de la ayuda y asistencia económica extranjeras sobre el respeto de los derechos humanos en Chile<sup>62</sup>, se describe de manera

<sup>61</sup> *Covert action in Chile 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with respect to Intelligence Activities*, United States Senate, 18 de diciembre 1975 (Church Committee). Citado en Jac Forton, *L'impunité au Chili*, Editions du CETIM, Genève, 1993. Una parte del informe Church está también disponible en internet: <http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html>.

<sup>62</sup> Naciones Unidas, Subcomisión de Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/412, vols. I a III, 1978.

pormenorizada cómo las sociedades transnacionales contribuyeron a consolidar la dictadura de Pinochet y se beneficiaron con la misma. De hecho, fueron cómplices de los crímenes de la dictadura.

A mediados de 1974, el gobierno argentino inició una fuerte represión contra los sindicatos más combativos con el objetivo de "disciplinar" a los trabajadores y disminuir los costos salariales. Varios sindicalistas de diferentes sociedades transnacionales, entre ellas Fiat, John Deere, Massey Ferguson y Renault fueron detenidos y otros secuestrados y asesinados. Después del golpe de Estado militar de marzo de 1976, la represión contra el movimiento obrero se incrementó y alcanzó también a sindicalistas de otras sociedades transnacionales, como Peugeot, Ford y Mercedes Benz<sup>63</sup>. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) que agrupaba en Córdoba, Argentina, a los trabajadores empleados en esas sociedades transnacionales fue objeto de una tenaz persecución: fue intervenido en agosto de 1974 y sus principales dirigentes fueron víctimas de desaparición forzada y asesinados por las fuerzas armadas durante la dictadura militar. Estas sociedades desempeñaron un papel activo en la represión, pues denunciaban a los delegados sindicales a las fuerzas de seguridad, que los detenían o los secuestraban y asesinaban. Por ejemplo, en la empresa Ford de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires, la represión se llevaba a cabo con la participación del gerente de relaciones laborales y otros funcionarios de la empresa, según surge de diversos testimonios. Como se acreditó en un proceso en curso, lo mismo ocurrió en la misma época en la empresa Mercedes Benz<sup>64</sup>.

El 16 de mayo de 2005 el diario *Página 12* de Buenos Aires publicó la siguiente información:

<sup>63</sup> Une année après le coup d'Etat. Situation du mouvement ouvrier en Argentine, Forum, Paris, 1977.

<sup>64</sup> Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1984, pp. 379 y ss. En marzo de 2002, en el Juicio por la Verdad, que se celebró ante los tribunales de La Plata, Argentina, prestó declaración acerca de la desaparición de catorce trabajadores el ex jefe de seguridad de la fábrica Mercedes Benz de Argentina en 1977 y 1978, quien además fue subcomisario en un centro clandestino de detención. En el mismo juicio declaró en abril del 2002 el ex gerente de Asuntos Jurídicos de la misma empresa, quien reconoció haber entregado a la Policía los nombres y las direcciones de los 14 miembros de la Comisión Interna, que luego fueron secuestrados y desaparecidos. En diciembre 2006, el fiscal dio a conocer su dictamen en la causa, en la que se encuentran involucrados, entre otros, la firma DaimlerChrysler (antes Mercedes Benz), José Rodríguez, secretario general del sindicato de trabajadores del sector (Smata), y Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo durante el gobierno de Isabel Perón. Dice el fiscal que la empresa y el sindicato fueron cómplices de los hechos investigados porque estaban al tanto de la "limpieza" que se había desatado, pero "sólo en tanto instituciones". Y por eso, dice, es muy difícil "discriminar responsabilidades estrictamente penales" contra individuos. Es por lo menos curioso que el fiscal atribuya una "voluntad de delinquir" a personas jurídicas y no identifique a las personas físicas que expresaron dicha voluntad, de acuerdo con la teoría penal generalmente admitida de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, según la cual la voluntad de la persona jurídica se expresa a través de sus dirigentes.

Volkswagen, Phillips, Firestone, Chrysler y otras empresas ayudaron en la represión a las dictaduras de Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. Así lo señala una investigación del diario *O Globo*, que publica documentos inéditos del Departamento de Orden Político y Social brasileño. Los documentos muestran que las empresas formaron con los organismos de seguridad de Brasil un "grupo de trabajo" para detectar a aquellos empleados que tenían militancia gremial, quienes eran despedidos y en muchos casos torturados y asesinados.

El golpe de Estado contra João Goulart ocurrió en 1964. En noviembre del 66, al inicio de un período muy duro de represión que se extendería por tres años, representantes de General Motors, Volkswagen, Chrysler, Firestone, Phillips y Constanta se reunieron con el jefe del Departamento de Orden Político de San Pablo y un delegado del ejército. Según el acta de la reunión, cuenta *O Globo*, discutieron sobre los "problemas" en las fábricas y crearon un centro de coordinación.

La documentación, recopilada y revelada por el periodista José Casado, señala que las empresas entregaban a los servicios de inteligencia listas de los trabajadores considerados sospechosos, y que mantuvieron a lo largo del tiempo una cooperación "fuerte" pero "discreta".

"Estábamos defendiendo nuestras empresas de los terroristas, de la subversión", declaró Synesio de Oliveira, representante del grupo Constanta (empresa incorporada a la Phillips en 1998).

Sobre la base de documentos obtenidos en Washington, San Pablo y Buenos Aires, la investigación revela que Volkswagen "montó un departamento interno" con agentes de la DOPS y militares para espiar a los trabajadores, mientras que Chrysler, Scania y Firestone "crearon aparatos de espionaje" en las fábricas.

Por ejemplo, un documento fechado en julio de 1978 por la filial brasileña de la firma sueca Saab-Scania plantea a la policía el caso de dos trabajadores cuyos despidos "se deben al hecho de haber participado del movimiento huelguista".

Las empresas fueron consultadas por *O Globo*, pero todas negaron los hechos o aseguraron que desconocían lo que indicaba la documentación. Volkswagen sostuvo que mantuvo una línea "apolítica" y una relación "avanzada" con sus empleados, mientras Firestone y Chrysler dijeron "desconocer" el tema.

En la Argentina hubo un esquema similar. La embajada de Estados Unidos informó a Washington entre abril de 1976 y junio de 1978 sobre episodios que mostraban "la gran cooperación entre gerentes y organismos de seguridad". Uno de los casos más conocidos es el de Mercedes Benz. En 1975 Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo, ordenó el despido de 115 obreros por razones políticas. En 1976, ya bajo la dictadura, todos los dirigentes gremiales de la planta de González Catán fueron secuestrados. De los 16 delegados, 14 siguen desaparecidos. Sus familiares y los sobrevivientes consiguieron la creación, la semana pasada, de una comisión investigadora.

Mercedes Benz tuvo un extraño comportamiento con las familias de sus empleados desaparecidos, a quienes les continuó abonando el sueldo. Algunos hasta cobraron indemnizaciones por motivos no especificados. En cambio, los operarios que dejaron de ir a trabajar porque corrían el riesgo de ser secuestrados fueron despedidos.

Cuando Aristide asumió el gobierno en Haití en 1991, propuso aumentar el salario mínimo de 1,76 a 2,94 dólares por día. La Agencia para la Inversión y el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid) criticó esta iniciativa, diciendo que significaría una grave distorsión del costo de la mano de obra. Las sociedades estadounidenses de ensamblado radicadas en Haití (es decir, la casi totalidad de las sociedades extranjeras) concordaron con el análisis de la Usaid y, con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia, prepararon y financiaron el golpe de Estado contra el presidente<sup>65</sup>. Como la reacción internacional (el embargo) y el caos interno paralizaron las labores de las empresas estadounidenses en Haití, las tropas de ese país restablecieron a Aristide en el gobierno y aseguraron al mismo tiempo la impunidad y un confortable retiro a los jefes militares golpistas.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos, que intervinieron en Haití con el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se apoderaron en dicho país de la documentación referente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar y probablemente de las pruebas de la intervención de la CIA. Las autoridades de Estados Unidos continúan reteniendo dicha documentación, pese a los reclamos que se le han formulado en diversas ocasiones<sup>66</sup>.

En 2004 se repitió el escenario de 1991, con un Aristide políticamente desprestigiado, sitiado económicamente por Estados Unidos y asfixiado por el Fondo Monetario Internacional. Esta vez la expulsión de Aristide fue orquestada por Estados Unidos con Francia como segundo violín, y legitimada *ex post facto* por el Consejo de Seguridad.

En África, en el momento de la descolonización surgieron líderes como Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral y Jomo Kenyatta, que bregaron por una vía independiente para sus pueblos, contraria a los intereses de las ex metrópolis y de sus grandes empresas. Todos ellos fueron derrocados o asesinados, como Lumumba y Cabral, y reemplazados por dirigentes dictatoriales, corruptos y fieles a las grandes potencias neocoloniales. Ahora esas mismas potencias y sus comparsas se quejan de la corrupción

<sup>65</sup> *Haití After the Coup. A Special Delegation Report of the National Labor Committee, Education Fund In Support of Worker and Human Rights in Central America*, New York, April, 1993.

<sup>66</sup> Véase *Situación de los derechos humanos en Haití*, Informe del experto independiente, Anexo, Naciones Unidas, E/CN.4/2001/106, 30 de enero de 2001, donde se hace referencia a 160.000 páginas de documentos incautados por las fuerzas armadas de Estados Unidos en 1994 en instalaciones militares y paramilitares en Haití.



que reina en África, aparentando olvidar que fueron ellas las que instalaron, sostuvieron y sostienen esos regímenes. (Véase, en este mismo capítulo, el final del apartado 5 sobre la corrupción).

Pese a la existencia de la Convención sobre el crimen de *apartheid*, y a las sanciones recomendadas por la Asamblea General de la ONU (a las que el Consejo de Seguridad se abstuvo de dar fuerza obligatoria), varias grandes potencias y numerosas sociedades transnacionales continuaron colaborando con el régimen de *apartheid* de Suráfrica.

Entre 1986 y 1987, un grupo de tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nombrados por requerimiento de la Asamblea General, estimó que las sociedades transnacionales que continuaban colaborando con el régimen de Suráfrica deberían considerarse cómplices del crimen de *apartheid*, de conformidad con el artículo iii, b) de la Convención contra el crimen de *apartheid*. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1987/11, decidió señalar a la atención de los Estados la opinión expresada por el "grupo de los tres", y encomendó a éste el estudio de las acciones legales que podían emprenderse contra las sociedades transnacionales en el marco de la Convención. La resolución 42/56 del 30 de noviembre de 1987 de la Asamblea General, fue similar a la de la Comisión de Derechos Humanos.

Un relator de la Subcomisión de Derechos Humanos mantuvo actualizada durante varios años una lista de las sociedades transnacionales que colaboraban con el régimen de *apartheid*.

Se podrían dar numerosos ejemplos sobre el papel que siempre han desempeñado y que siguen desempeñado las sociedades transnacionales en la promoción de golpes de Estado<sup>67</sup>, de actividades terroristas<sup>68</sup>, generalmente en colaboración con la CIA, y en el apoyo a regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos. Esta participación de sociedades transnacionales en crímenes, asesinatos y violaciones masivas de los derechos humanos fundamentales es una constante histórica que se remonta al siglo XIX, cuando surgieron las primeras de ellas, como la Standard Oil.

Hay varios casos recientes, que se están ventilando ante distintos tribunales, de complicidad de sociedades transnacionales en el asesinato de opositores a regímenes dictatoriales o de militantes sindicales, ecologistas, etc.<sup>69</sup>.

<sup>67</sup> Christopher Hitchens, *Les crimes de Monsieur Kissinger*, Saint Simon, 2001. En inglés en la revista *Harper's Magazine*, marzo, 2001, y en el libro *The trial of Henri Kissinger*, Verso, 2001.

<sup>68</sup> Richard Labévière, *Les dollars de la terreur. Les États-Unis et les islamistes*, *op. cit.*; René Passet y Jean Liberman, *Mondialisation financière et terrorisme*, *Enjeux Planète*, setiembre, 2002.

<sup>69</sup> Véase más adelante en este trabajo, en el Capítulo VII, el apartado 3, Las jurisdicciones competentes.

Además, con su propia actividad, las sociedades transnacionales violan derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a una alimentación sana y suficiente, a la información objetiva e imparcial, y la mayor parte, sino todos, los derechos económicos, sociales y culturales.

En los apartados siguientes nos limitaremos a esbozar las violaciones de los derechos laborales que cometen las sociedades transnacionales, el control oligopólico que ejercen sobre la información y los entretenimientos, los obstáculos que oponen al derecho al acceso a los conocimientos tecnológicos y a la información científico-técnica, y el papel que desempeñan en el fenómeno de la corrupción y en la degradación del medioambiente.

## **LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS LABORALES POR PARTE DE LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES**

### **El derecho al trabajo**

Los derechos laborales comportan dos vertientes principales que *deberían* ser indisociables pero que en la práctica no lo son: el derecho *al* trabajo, es decir, el derecho a ejercer una ocupación remunerada<sup>70</sup>, y los derechos *en el* trabajo, es decir, el derecho a trabajar en condiciones dignas

<sup>70</sup> Generalmente se entiende como derecho al trabajo el derecho a tener un empleo. Como se verá en este párrafo, ese derecho no se realiza totalmente, pues siempre hay una cuota de desempleados, que ahora tiende a aumentar. Cuando hay despidos o se cierran empresas, los nuevos desocupados reclaman, en general sin resultado, que se anulen los despidos o que mantengan las "fuentes de trabajo". A veces los trabajadores obtienen éxitos parciales y temporarios aceptando la congelación/disminución de los salarios, el aumento de la jornada de trabajo, etc. Pero esas situaciones se reiteran cíclicamente con tendencia a agravarse. Ellas son inherentes al sistema capitalista, a la relación de explotación del trabajo por el capital en el marco del trabajo asalariado. G. F. Hegel escribía ya en 1804: "El hombre disminuye el trabajo para el conjunto, no para los individuos; para los cuales, al contrario, lo acrecienta, porque cuanto más el trabajo se hace mecánico, menos valor tiene y más el hombre debe trabajar... La disminución del valor del trabajo es proporcional al aumento de la productividad del trabajo... las fábricas y las manufacturas basan su existencia en la miseria de una clase". Hegel, *Realphilosophie*, citado por Kostas Papaioannou, *Hegel et Marx: l'interminable débat*, Alia, Francia, noviembre, 1999.

El derecho al trabajo para todos, a tener un trabajo estable y en condiciones dignas, reivindicación absolutamente legítima para los que necesitan trabajar para vivir o por lo menos sobrevivir, debe estar acompañado por la exigencia de la reducción drástica de la jornada de trabajo sin disminución de salarios.

Pero ello no debe ocultar el hecho de que un trabajo digno para todos es un objetivo irrealizable en el actual sistema, y que sólo puede concretarse con la realización de la reivindicación fundamental en materia de trabajo: la abolición del trabajo asalariado, fundamento de la explotación capitalista, para reemplazarlo por el trabajo libremente elegido como obligación o deber social. Véanse las Conclusiones de este trabajo. Puede consultarse sobre estas cuestiones, entre muchas otras obras: Pierre Larroustourou, *Pour la semaine de quatre jours. Sortir du piège des 35 heures*, La Découverte/Poche, Paris, 1999; Dominique Méda, *Le travail, une valeur en voie de disparition*, Alto/Aubier, Paris 1995.

y satisfactorias, en materia de remuneración, limitación de jornadas, descanso, salud y seguridad frente a los riesgos laborales, derechos sindicales, seguridad social, etc.

Contrario a lo que generalmente se afirma, el efecto de la actividad de las sociedades transnacionales (STN) sobre el derecho al trabajo, es globalmente negativo. Veamos.

Las empresas transnacionales se desplazan rápidamente de un país a otro buscando ventajas comparativas, en primer lugar, el costo más bajo posible de la mano de obra. Cuando se instalan en un país crean empleos, pero destruyen muchos más de los que crean, porque desaparecen las artesanías e industrias locales que no pueden competir con la sociedad transnacional. Estos procesos de deslocalización y de gran movilidad de las industrias tienen también efectos negativos sobre el empleo en los países desarrollados.

Entre 1985 y 1992 las inversiones directas en el extranjero de las STN casi se triplicaron (de 674 a 1932 millones de dólares), pero sólo generaron ocho millones de empleos en todo el mundo (el aumento fue de 65 a 73 millones de empleos) de los cuales cinco millones en los países periféricos del sistema (incremento de 7 a 12 millones de puestos de trabajo). Estos 73 millones de puestos de trabajo significan el 3% de la población activa del mundo y 12 millones de empleos en los países periféricos, el 2% de su población activa<sup>71</sup>. Los cinco millones de empleos creados por las STN entre 1975 y 1992 en los países periféricos representan menos del 5% de los desocupados registrados en dichos países, y alrededor del 1% de los desocupados reales. Los efectos derivados consistentes en la posible creación indirecta de empleos en esos países se estiman en 12 millones de puestos de trabajo, es decir, una cantidad igual a los creados directamente por las STN<sup>72</sup>. Los tres millones de empleos creados por las STN entre 1985 y 1992 en los países desarrollados representan menos del 10% de los desocupados en dichos países (36 millones de desocupados en los países de la OCDE en 2006)<sup>73</sup>.

Diferentes expertos calculan que las empresas transnacionales controlan actualmente un tercio de la producción industrial mundial, y que su cifra de negocios anual es superior a la del total del comercio mundial en el mismo lapso.

<sup>71</sup> UNCTAD, World Investment Report. Transnational Corporations, Employment and the Workplace, pp. 175 y xxii. Véase también: OIT, Promover el empleo, Memoria del director general. Conferencia Internacional del Trabajo, 82ª reunión, 1995, p. 24 de la edición en español.

<sup>72</sup> OIT, Memoria del Director General, *ibid.*, p. 24.

<sup>73</sup> Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (CSC) (TUAC, Trade union advisory committee to the OECD: tuac@tuac.org - internet: [www.tuac.org](http://www.tuac.org)). *Prosperité et création d'emplois de qualité, le rôle de l'OCDE. Déclaration du TUAC à la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel, Mai, 2006*, [http://www.tuac.org/statements/communiqu/StMin-2006F\\_WHP.pdf](http://www.tuac.org/statements/communiqu/StMin-2006F_WHP.pdf).

Es decir, que la cantidad de puestos de trabajo y el ritmo de creación de empleos de las STN, son insignificantes en relación con el capital de dichas empresas en el mundo, con el ritmo anual de crecimiento de sus inversiones y con su peso en la economía mundial. Y es más insignificante aún con relación a la población activa mundial y a la cantidad actual de desocupados.

Esto es atribuible a que las inversiones de las STN son capital-intensivas y orientadas a las nuevas tecnologías (informática, electrónica, etc.), que son más bien destructoras que creadoras de empleos. En general, la relación capital invertido/generación de empleo en las STN es muy alta, si se la compara con esa relación en las empresas medianas y pequeñas<sup>74</sup>.

Como hemos señalado, la actividad de las STN en los países periféricos del sistema tiene un efecto negativo sobre el empleo en general, pues provoca la desaparición de industrias y artesanías locales, con el consiguiente aumento del desempleo. Existen excepciones, como ocurre por ejemplo con las fábricas de automotores, que inducen la creación de empresas subcontratistas que fabrican distintos componentes. Dichos subcontratistas solían ser empresas nacionales, pero este renglón lo ocupan ahora grandes empresas transnacionales, por ejemplo Valeo, fabricante de accesorios de automóviles, cuyo volumen de negocios fue de 9234 millones de euros en 2003 y 5309 millones de euros en el primer semestre de 2006, 6,4% más que en primer semestre de 2005<sup>75</sup>.

Una parte importante de las inversiones directas de las STN en el extranjero se efectúa en las zonas francas de exportación. A mediados del decenio de 1980 había unas 176 zonas francas en 47 países en desarrollo, donde las STN empleaban 1.300.000 personas y 600.000 más en sitios similares a las zonas francas<sup>76</sup>. Veinte años más tarde se estima que en el mundo hay 2000 zonas francas que emplean a 27 millones de trabajadores, de los cuales entre el 60 y el 90% son mujeres<sup>77</sup>. De esos 27 millones de trabajadores, 20 millones trabajan en China, 1.300.000 en Bangladesh (Myanmar), un millón en México, 862.000 en Tailandia, 500.000 en los países de América Central, 250.000 en Sri Lanka, 180.000 en Filipinas, etc.<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> Basualdo, Lifschitz y Roca, Las empresas multinacionales en la ocupación industrial en la Argentina, 1973-1983, OIT, Documento de Trabajo núm. 51, 1988, pp. 56 y 57.

<sup>75</sup> Fuente: Valeo. <http://www.valeo.com/automotive-supplier/laia/>

<sup>76</sup> Kreye, Heinrichs y Fröbel, Multinational enterprises and employment, Working Paper N° 55, ILO, 1988, p. 15.

<sup>77</sup> Cinterfor, Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional. [http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue\\_gen/zon\\_fra.htm](http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue_gen/zon_fra.htm)

<sup>78</sup> [www.maquilasolidarity.org](http://www.maquilasolidarity.org)

Las STN instaladas en las zonas francas son mayoritariamente de montaje (maquiladoras) con poco o ningún efecto reproductor sobre la economía y el empleo del país donde actúan<sup>79</sup>.

Cabe concluir, entonces, decía el documento citado en la nota 76, que:

...no hay razón para suponer que el empleo generado por las STN en el mundo cambiará mucho en los próximos años. Por el contrario, la población mundial económicamente activa continuará creciendo bastante rápidamente a un ritmo de más del 2% anual. Según los cálculos de la OIT... deberán crearse por lo menos 600 millones de nuevos empleos hasta el año 2000, para lograr algo que se aproxime al pleno empleo. Esto significa que el empleo directo en las STN en todos sus aspectos es no sólo casi marginal desde el punto de vista numérico, sino que su parte porcentual en la población mundial económicamente activa podría incluso disminuir<sup>80</sup>.

A comienzos de 2007 el panorama en materia de empleo en el mundo sigue siendo sombrío, como se señala en el informe *Tendencias mundiales del empleo 2007* de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado a fin de enero de 2007<sup>81</sup>, donde se dice que el número de personas desempleadas en el mundo se mantuvo elevado a niveles sin precedentes en 2006 a pesar del robusto crecimiento económico, y que si bien hay más personas trabajando que nunca antes, el número de desempleados se mantuvo ese año en una marca sin precedentes de 195,2 millones de personas. La tasa mundial de desempleo, de 6,3%, no tuvo cambios con respecto al año anterior. El informe también destaca que sólo hubo modestos avances en los intentos por sacar de la pobreza unos 1,37 mil millones de trabajadores que, si bien tienen empleo, viven con menos del equivalente de 2 dólares por persona al día, y destaca que no se produjeron suficientes empleos decentes y productivos como para mejorar su situación<sup>82</sup>.

En esta situación contradictoria de crecimiento económico y persistencia de una alta tasa de desempleo desempeñan un importante papel las sociedades transnacionales. En un estudio realizado para la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en 2003<sup>83</sup>, se afirma que las sociedades trans-

<sup>79</sup> Mercedes Pedrero Nieto y Norma Saavedra, La industria maquiladora en México, Documento de Trabajo núm. 49, OIT, 1987, pp. 81-82.

<sup>80</sup> Kreye, Heinrichs y Fröbel, ob. cit., p. 25.

<sup>81</sup> [www.ilo.org/trends](http://www.ilo.org/trends).

<sup>82</sup> Conviene aclarar que hay que relativizar la cifra de desocupados indicada en las estadísticas nacionales e internacionales, porque en general dicha cifra no considera desocupados a las personas que trabajan esporádicamente algunas horas a la semana, a las que por distintas razones han sido efraticadas de las listas de quienes buscan trabajo, etc. Si se incluyera en las estadísticas a estos desocupados "invisibles", la cifra de los sin trabajo podría llegar a duplicarse.

<sup>83</sup> Beverley Carlson, *Job losses, multinationals and globalization: the anatomy of disempowerment* (Destrucción de empleos, multinacionales y globalización: la anatomía de la pérdida del poder), publicado en la serie Desarrollo Productivo núm. 132, Cepal.

nacionales en América Latina tienen una fuerte tendencia a hacer recortes masivos de personal. El documento reúne datos sobre dichos recortes en la región, por sector, empresa y país, y cuestiona la inadecuada información para entender la magnitud e importancia de lo que está ocurriendo. Precisa que estas pérdidas de trabajo han ocurrido en un amplio rango de industrias y servicios, pero particularmente en la del automóvil, en las nuevas tecnologías de la información, bancos y servicios financieros.

## Los derechos *del* trabajo o derechos laborales

Particularmente en los países periféricos, y cada vez en mayor medida en los países centrales, la movilidad de las sociedades transnacionales (posibilidad de cambiar rápidamente su implantación de un país a otro) limita la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores que éstas emplean: la empresa amenaza con retirarse del lugar de implantación o segmentar su producción en diversos lugares si considera excesivas las reivindicaciones de los trabajadores, o simplemente las sociedades “deslocalizan” sus plantas hacia países donde los salarios son más bajos.

Así, las grandes empresas aprovechan la escasez de la oferta de empleo, en otros términos el deterioro del derecho *al* trabajo, para empeorar las condiciones de trabajo, dicho de otra manera, los derechos *del* trabajo o derechos laborales. Y si los trabajadores, pese a todo, ofrecen resistencia, comienza el ataque a los derechos sindicales y la represión, que también puede ser “preventiva”, es decir, dirigida a impedir “preventivamente” la organización de los trabajadores. Es el caso de Wal Mart, el gigante mundial de la distribución minorista<sup>84</sup>.

<sup>84</sup> Según la revista *Fortune*, en 2004 Wal Mart fue por tercer año consecutivo la primera empresa del mundo con un monto de ventas de 262 mil millones de dólares. Tiene un millón y medio de empleados en el mundo, de los cuales un millón en Estados Unidos, y no tolera los sindicatos ni en sus empresas ni en las de sus subcontratistas. Uni-Commerce, el sindicato internacional de los trabajadores del comercio caracterizó a esta corporación como “una compañía obsesivamente anti-sindicatos, en el país y en el extranjero”. La corporación “construye sus ventajas competitivas con bajos salarios, bajos precios y apretando a los proveedores. Con la tasación rapaz de sus compras, puede obligar a sus competidores grandes y pequeños a salir de negocio”, afirmó Uni-Commerce. “Por todo el mundo, Wal-Mart es la amenaza más seria para el empleo, los salarios y las condiciones de trabajo en el comercio”. En abril de 2005 Wal-Mart cerró una tienda en Quebec porque los empleados se habían afiliado al sindicato de trabajadores de la alimentación y del comercio (UFCW). La UNI (Union Network International), cuyos 15 millones de afiliados trabajan en su mayoría en el sector de servicios, lucha desde hace diez años para promover la sindicalización del personal de Wal-Mart, hasta ahora sin mayor éxito. El 14 de octubre de 2006 *Argenpress* informó que un tribunal de Pensilvania condenó a Wal Mart a pagar 78 millones de dólares a raíz de una demanda colectiva de 187.000 trabajadores por violaciones repetidas a la legislación laboral.

La familia Walton, propietaria de Wal-Mart, encabeza la lista de las más grandes fortunas mundiales, con 100 mil millones de dólares, muy distante de la fortuna de Bill Gates, el segundo, que alcanza “apenas” a 46 mil millones de dólares. En la clasificación de las más grandes fortunas de *Forbes* (septiembre, 2005) los miembros de la familia Walton aparecen ocupando los lugares sexto a décimo con 20 mil millones cada uno. La suma de los cinco miembros los pone a la cabeza de la lista con 100 mil millones.



Se podrían dar numerosos ejemplos de esta política de las empresas transnacionales. Pero daremos sólo algunos.

En julio de 2004 el diario francés *Les Echos* informaba que los trabajadores de la empresa Bosch de Vénissieux, Francia, por amplia mayoría aceptaron renunciar a una parte de la reducción del tiempo de trabajo y trabajar seis días más por año a partir de 2005 (una hora más de trabajo por semana) sin compensación salarial, a fin de evitar la deslocalización de la fábrica a la República Checa. La dirección, por su parte, se comprometió a conservar 190 empleos de los 300 que tiene previstos suprimir hasta 2008. El delegado de la Confederación General del Trabajo en la empresa declaró: "Es un doble chantaje, a la vez individual y colectivo: quien rechaza la propuesta será inmediatamente despedido".

En agosto 2004 los sindicatos alemanes de Siemens accedieron a la propuesta empresarial de ampliar la jornada de 35 a 40 horas sin aumento de salarios a cambio de que no se trasladase la producción (teléfonos móviles e inalámbricos) a Hungría. Lo mismo ha pasado en Continental (neumáticos) y en Thyssen Krupps. Son ya cuarenta las empresas alemanas que están negociando ampliar hasta 40, 42 e incluso 50 horas (Volkswagen) el horario semanal y la eliminación de una de las seis semanas actuales de vacaciones pagadas.

El 13 de octubre de 2004 la prensa alemana e internacional anunció que el grupo automotor estadounidense General Motors proyectaba cerrar parcialmente la planta de su marca alemana Opel en Bochum, Alemania. General Motors ultima actualmente los planes de reestructuración de sus plantas europeas con los que espera reducir sus costos en más de 500 millones de euros (615 millones de dólares), y que podrían suponer la desaparición de 12 mil de los 62 mil empleos del grupo en Europa.

El área de montaje de vehículos podría cerrarse a largo plazo, lo que acabaría con 2 mil empleos. La división de fabricación de ejes se trasladaría a Europa del este, posiblemente a la República Checa. El plan de reestructuración no afectará a la planta de Opel en Figueruelas, Zaragoza, España, donde se producen los modelos Opel Corsa, Corsa Van y Meriva y trabajan 7400 personas.

En septiembre de 2005 el presidente del grupo Volkswagen anunció que pondrá en marcha un plan para recortar su plantilla con el fin de hacer frente al exceso de capacidad productiva que sufre la compañía pese al aumento de sus ventas. La dirección de Volkswagen prevé suprimir 14.000 empleos en sus plantas europeas hasta 2008 para reducir los costos en 7000 millones de euros y llegar a 5100 millones de beneficios antes de impuestos.

Es decir, que primero se impone el aumento de la jornada de trabajo con el chantaje del despido, pero después los despidos continúan.

Un caso ejemplar es el de Schneider Electric, líder francés de las herramientas eléctricas, que incita a sus subcontratistas a deslocalizar, explicándoles que "En el contexto actual en que las palabras de orden son intercambios y mundialización, Schneider acelera su desarrollo internacional, con el fin de aumentar la productividad y, visto que en Francia se ha alcanzado un nivel de 'precios techo' los yacimientos de ganancias están fuera de nuestras fronteras". Schneider propone entonces a sus subcontratistas la ayuda de un "gabinete de expertos especializados en el medio de las PME (empresas pequeñas y medianas) industriales y que posee contactos en países emergentes (China, Rumania, entre otras). Este gabinete les ofrecerá un prediagnóstico gratuito"<sup>85</sup>.

Estas políticas parten del hecho de que las diferencias de salario entre los países "centrales" y los países "periféricos" de Asia, América Latina y Europa del este son del orden de 10 a 1, y a veces llegan a 20 a 1, con un nivel de productividad que tiende a igualarse.

Pero estos procesos de deslocalización no se producen solamente de los países ricos a los países pobres, sino también entre países pobres: las sociedades transnacionales deslocalizan sus plantas de los países donde los salarios son muy bajos a otros países donde éstos son aún más bajos.

En el caso de América Latina, Beverly Carlson (véase nota 83) señala la doble desventaja de América Latina en la economía globalizada: "Sus salarios son más altos que los de sus competidores globalizados más pobres. Al mismo tiempo, su nivel de habilidades es más bajo que el de sus competidores globalizados más ricos e incluso que algunos de los más pobres".

Existe, entonces, una especie de "competencia" entre los países pobres para "atraer" las inversiones de las grandes empresas transnacionales que consiste en ofrecerles el costo más bajo posible del factor trabajo, al mismo tiempo que una mano de obra con buena calificación y disciplinada.

Y esto ocurre también en Europa del este. En un estudio de la Oficina Internacional del Trabajo<sup>86</sup> se sostiene que la flexibilidad laboral en los

<sup>85</sup> Diario *Libération*, Francia, 24 de abril, 2004, p. 19.

<sup>86</sup> El estudio, cuyo editor es Daniel Vaughan-Whitehead, ha sido publicado en edición conjunta por la Comisión Europea y la Oficina Internacional del Trabajo con el título *Working and Employment Conditions in New EU Member States – Convergence or Diversity?* En febrero de 2007 la nueva Confederación Sindical Internacional (CSI), resultado de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) publicó un informe sobre *Las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente en la Unión Europea*, donde se analiza la situación en este aspecto país por país. Entre otras cosas, en el informe se dice: "Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo forzoso. Con todo, la trata de personas, esencialmente mujeres y niñas para destinarlas a trabajos forzados y a la explotación sexual, es un problema en cierta medida en prácticamente todos los países. En algunos Estados miembros, los presos están obligados a trabajar para empresas privadas". En las Conclusiones del informe se puede leer:

nuevos países miembros de la Unión Europea es extrema en ciertos casos, aumentando el costo social de su adhesión.

Entre otras cosas, en el estudio de la OIT se dice:

A casi un año de su ingreso a la UE, la evaluación de las condiciones de trabajo en los diez nuevos socios comunitarios muestra que éstas han sufrido un retroceso bajo la presión por ganar competitividad.

Entre las formas de flexibilidad laboral más frecuentes en esos países están los contratos temporales, el aumento del tiempo de trabajo y el recurso a contratos múltiples con el mismo empleado, uno para regular su trabajo habitual, otro que se aplica a sus horas suplementarias, entre otros casos.

Las empresas buscan la flexibilización como una manera “de evitar o reducir el pago de impuestos”, y para ello se aprovechan de los bajos salarios y de una tasa de desempleo todavía relativamente alta.

Los resultados que se registran a un año de la ampliación de la UE —que se concretó el 1 de mayo de 2004— indican que los antiguos miembros de la Unión Europea “han sido los que más se han beneficiado” con la entrada de los diez nuevos socios.

Eso se refleja en datos como el excedente que los antiguos miembros han logrado en su flujo comercial con los nuevos integrantes de la UE.

El editor del estudio, Daniel Vaughan-Whitehead, declaró: “Han ganado las empresas multinacionales, la mayoría de ellas francesas y alemanas, que se han instalado en varios países de Europa del Este” y que pueden mover sus capitales con mayor facilidad.

El economista francés François Chesnais, en el prefacio al libro de Claude Pottier, *Les multinationales et la mise en concurrence des salariés*<sup>87</sup> escribe:

Los grupos industriales multiplican las experiencias tecnológicas y de organización que les permiten obtener niveles de productividad elevados en los NIP (nuevos países emergentes) y en Europa del Este.

---

“En los Estados miembros de la UE sigue habiendo una profunda brecha entre la legislación y la práctica con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. En Europa las mujeres ganan hasta un 40% menos que sus colegas masculinos, registran índices de desempleo más elevados y están escasamente representadas en los cargos directivos. La discriminación económica que sufre la mujer es particularmente grave en algunos de los Estados miembros de Europa Oriental, donde las diferencias salariales en el sector público muchas veces son incluso mayores a las del sector privado. En cualquier caso, la importante concentración de mujeres en puestos de trabajo a tiempo parcial y en el sector de servicios también ha cambiado de manera desfavorable la situación de las mujeres en algunos países de Europa Occidental. La discriminación de que son víctimas las minorías étnicas, particularmente la comunidad romani, es objeto de profunda preocupación. El desempleo es muy superior entre los romaníes en relación con otros grupos de distintos orígenes étnicos. En muchos países, el acoso sexual sigue siendo un problema”.

<sup>87</sup> Claude Pottier, *Les multinationales et la mise en concurrence des salariés*, prefacio de François Chesnais, L'Harmattan, Collection Travail et Mondialisation, Paris, 2003.

Éstos no son exactamente los mismos que en los países de origen, pero son mucho más elevados que antes y aumentan constantemente... buscan sacar ventaja de la situación extraordinariamente favorable que les ofrece esa convergencia "milagrosa" entre el aumento de la productividad y el mantenimiento de disparidades muy acentuadas en materia de salarios, de condiciones de trabajo (seguridad e higiene) y de niveles de protección social...

Los países llamados "en desarrollo" siempre han representado para las empresas de los países industriales del centro del sistema capitalista mundial una reserva de mano de obra con la que pueden contar según sus necesidades, al ritmo y en la escala que les conviene. Durante la fase (1950-1975) de crecimiento rápido de las economías todavía autocentradas y de producción fordista, hizo falta "importar" esa mano de obra, organizar los flujos migratorios hacia las metrópolis industriales. Era ya una forma de establecer la competencia entre los asalariados, pero con límites estrictos. Las relaciones políticas y sociales internas impedían excluir completamente a los inmigrantes de los sistemas de protección social. Aparte de la construcción, las normas de seguridad eran las mismas para todos los trabajadores. Para defender los salarios de los trabajadores más calificados, los sindicatos se vieron obligados, incluso cuando estaban realmente dispuestos, a defender los salarios de los trabajadores inmigrantes no calificados. La nueva configuración de la competencia entre los trabajadores es completamente diferente. Las empresas van al encuentro del ejército de reserva de trabajadores para explotarlos "in situ", allí donde viven. Se aprovechan de la disciplina política, de la competencia local entre los trabajadores, y de las condiciones de bajo costo de la reproducción de la fuerza de trabajo en los países de implantación. La convergencia de los niveles de productividad permite a las empresas internacionalizar la competencia entre los trabajadores, tomando como referencia los niveles de salario y de protección social más bajos. Al mismo tiempo se reducen las necesidades de mano de obra inmigrante. Las implicaciones de este proceso sólo comienzan a discutirse y analizarse. Mientras eso no comience a hacerse, será difícil decir, más allá de los análisis macroeconómicos mundiales relativos a los callejones a que conduce este esquema de acumulación, cómo deben actuar los asalariados de los países industrializados, sus sindicatos y los partidos que todavía quieren defender los intereses de los explotados allí donde éstos estén.

Este párrafo de Chesnais permite comprender mejor el papel central que desempeñan las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo, que plantean problemas sociales para los que todavía falta formular respuestas acertadas y coherentes.

También permite descubrir las razones que han determinado el carácter regresivo de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, aprobada en junio de 1998 por la Conferencia Internacional de

Trabajo de la OIT<sup>88</sup>. Una apreciación desprevenida de dicha Declaración lleva a suponer que es un intento de promover el núcleo fundamental de los derechos de los trabajadores. Pero si se la analiza más detalladamente se puede constatar:

1. Que se trata de una Declaración y no de un Convenio, es decir, que no tiene carácter obligatorio.

2. Que los derechos enumerados en la Declaración son ya objeto de Convenios obligatorios: trabajo forzoso (Convenios 29 y 105), libertad sindical (Convenio 87), derecho de sindicación y de negociación colectiva (Convenio 98), igualdad de remuneración de hombres y mujeres (Convenio 100), no discriminación (Convenio 111) y edad mínima, referido a la abolición del trabajo infantil (Convenio 138).

3. Que ciertas obligaciones de los Estados miembros que no se han adherido a tales Convenios (presentar informes) existían antes de que se aprobara la Declaración (que pretende crear tales obligaciones). En efecto, el artículo 19, párr. 5 apartado e) de la Constitución de la OIT establece la obligación para los Estados que no se han adherido a un Convenio, de informar al director general sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el Convenio, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración.

4. Que la Declaración ha omitido derechos tanto o más fundamentales para los trabajadores (también contemplados en convenios internacionales) que los que ha incluido.

---

<sup>88</sup> En la Organización Internacional del Trabajo, la regresión en materia de normas laborales para adaptarlas a la "mundialización" se puede decir que comenzó abiertamente en 1998 con la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, continuó en 1999 con el Convenio 182 sobre la Prohibición de las peores formas del trabajo infantil, siguió en el 2000 con el Convenio 183 sobre protección de la maternidad, que modificó regresivamente el Convenio 103 de 1952, y continuó en 2001 con el Convenio 184 relativo a la seguridad y la salud en la agricultura.

Esto refleja una tendencia a sustituir las normas laborales obligatorias por compromisos voluntarios de las empresas, del tipo de códigos de conducta, cuya aplicación depende de la buena voluntad de las mismas. Es lo que se denomina la "responsabilidad social de las empresas", un concepto que se trata de popularizar con la contribución de ciertas ONG, de empresas y de Estados.

Una de las expresiones ideológicas de esta tendencia regresiva de la normatividad laboral es el Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, establecido por la OIT, publicado en marzo de 2004: *Por una globalización justa. Crear oportunidades para todos* ([www.ilo.org/wcmsp](http://www.ilo.org/wcmsp)). Entre otras cosas, el Informe dice que "los beneficios que pueden obtenerse de la mundialización son inmensos", y que la mundialización "ha favorecido a las sociedades y economías abiertas". Esta última frase no logra escamotear la realidad subyacente: naciones enteras sometidas al saqueo de las empresas transnacionales y del capitalismo financiero internacional. En un trabajo nuestro, *La crisis actual del derecho al desarrollo*, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao, 2000, Cuaderno núm. 11, pp. 62 a 72, nos referimos a la regresión en los últimos años (atribuible en gran parte a la presión del poder económico y al servilismo de las elites políticas) de las normas laborales, tanto internacionales como nacionales, y particularmente a la eliminación de las medidas de protección para las mujeres en el empleo. A él nos remitimos.

Los derechos omitidos tienen en común ser objeto de una embestida generalizada en nombre de la mundialización y la competitividad, entre ellos:

- a) Salario mínimo (Convenio 131).
- b) Trabajo de mujeres (convenios 45, 89 y 103).
- c) Jornada máxima de trabajo (convenios 1, 30, 43, 47 de 1935 sobre las 40 horas, 49, 153 y Recomendación 116 de 1962, sobre la reducción de la duración del trabajo).
- d) Seguridad e higiene en el trabajo (Convenios con disposiciones generales 31, 97, 155, y 161 y varios convenios y recomendaciones sobre riesgos específicos o ramas de actividad).
- e) Tiempo libre (Recomendación 21 de 1924 sobre la utilización del tiempo libre de los trabajadores).
- f) Seguridad social (convenios con normas generales 102, 118 y 157) y numerosos convenios con normas específicas.
- g) Se han omitido los convenios y las recomendaciones relativos al derecho al trabajo: convenios 122 de 1964 sobre política del empleo y 158 de 1982 sobre terminación de la relación de trabajo, y recomendaciones 122 sobre política de empleo y 169 de 1984 con disposiciones complementarias sobre el mismo tema.

Hemos incluido en la enumeración precedente la Recomendación 21, sobre el tiempo libre, y la 116, sobre la reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario, porque son de rigurosa actualidad, como hemos mostrado, algunas líneas más arriba, con diversos ejemplos recientes de *empresas europeas*. En 1987, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo incluyó a la Recomendación 116 en su clasificación de los instrumentos que convenía promover con carácter prioritario.

Es decir, que lo que en la Declaración aprobada en 1998 aparece como una reivindicación del “núcleo duro” de los derechos laborales, es en realidad un intento de jerarquizar formalmente ciertos derechos, envolviéndolos en el ropaje de una Declaración no vinculante, y de hacer olvidar los Convenios, no sólo aquéllos incluidos en la Declaración sino, y sobre todo, los no incluidos.

Los ejemplos y comentarios precedentes confirman lo que dice el profesor Pietro Basso en su libro *Temps modernes, horaires antiques. La durée du travail au tournant des millénaires*<sup>89</sup>, en el sentido de que el aumento de la

<sup>89</sup> Pietro Basso, *Temps modernes, horaires antiques. La durée du travail au tournant des millénaires*, Editions Page Deux, Lausanne, 2005. Basso dice que el aumento de la carga (física, mental y nerviosa) explica en parte que el trabajo se ha hecho más penoso en los últimos años en los países capitalistas avanzados, y que la flexibilidad, al mismo tiempo que el mantenimiento (y últimamente el aumento de la jornada de trabajo) parasita o fagocita el tiempo fuera del trabajo, es decir, aumenta su peso específico sobre el total del empleo del tiempo de la persona que trabaja. Se está cada vez más



productividad del trabajo, que debería estar acompañada lógicamente de una reducción del tiempo de trabajo (diario, semanal y anual) y de la intensidad del mismo, lo que efectivamente ocurrió de manera general hasta culminar en el decenio de 1920 en que las luchas obreras, ayudadas por el temor de los capitalistas al ejemplo de la revolución de octubre en Rusia, obtuvieron la jornada hebdomadaria de 48 horas. Pero con el fordismo aumentó la intensidad del trabajo, como muestra agudamente Chaplin en el filme *Tiempos Modernos*. Después de esa fecha la jornada se mantuvo estable, aunque disminuyó la jornada anual a causa de las vacaciones más prolongadas y en algunos países disminuyó también la jornada semanal. Pero en los últimos años, pese a que continuó aumentando la productividad, esa tendencia a la reducción de la jornada laboral se invirtió y también aumentó la intensidad del trabajo con el "toyotismo" ("just in time": producción de lo necesario en función de la demanda de cada momento evitando la acumulación de *stocks* de mercancías) y con la flexibilidad laboral.

El empeoramiento de las condiciones de trabajo y de su carga física, mental y nerviosa afecta a todos los asalariados de todas las categorías y en todos los países del mundo, desarrollados o no desarrollados, como indica Pietro Basso en su estudio.

Incluso los empleados y los técnicos superiores sufren esa carga, víctimas de las presiones en el mismo empleo y por la angustia que les produce el temor de perderlo.

Son frecuentes los suicidios de empleados y técnicos superiores cuando son despedidos, sobre todo cuando han pasado los 45-50 años de edad, porque en ese caso sus perspectivas de obtener un nuevo trabajo son muy limitadas.

Pero también se producen suicidios entre el personal en actividad. Por ejemplo, en el ultramoderno Tecnocentro de Renault en Guyancourt, cerca de París, donde el 16 de febrero de 2007 se produjo el tercer suicidio en cuatro meses. Las tres personas que se quitaron la vida trabajaban como ingenieros en los proyectos de concepción de los nuevos modelos de automóviles Renault, donde existe una enorme presión porque con esos nuevos modelos Renault espera recuperar partes del mercado que ha perdido. A raíz de la sucesión de suicidios el Procurador decidió abrir una investigación

---

lejos de la prometida sociedad posindustrial del tiempo libre. Véase una reseña del libro de Basso en la revista *Interrogations*, en [www.revue-interrogations.org/article.php?idarticle](http://www.revue-interrogations.org/article.php?idarticle).

En mayo de 2007 los sindicatos de Austria, donde la jornada semanal legal es de 40 horas, aceptaron un nuevo régimen según el cual, previo acuerdo patronal-laboral, los trabajadores podrán trabajar hasta 60 horas por semana, régimen que podrá ser aplicado hasta 24 semanas por año, a condición de que se intercalen periodos de quince días sin horas suplementarias cada ocho semanas. Este acuerdo implica desconocer la norma europea que establece un *plafond* de 48 horas para la jornada semanal.

penal sobre las condiciones de trabajo en ese sitio. También en Francia, en la central nuclear de Chinon, se produjo el tercer suicidio en seis meses en febrero de 2007. La tensión es insoportable sobre todo entre los encargados de la seguridad de las instalaciones, pues un error puede provocar una catástrofe, y a raíz de la organización del trabajo impuesta por la empresa las relaciones humanas han empeorado mucho en los últimos años: la gente prácticamente no se habla ni se saluda.

## La violación de los derechos sindicales y la represión contra los trabajadores

Estas prácticas de las sociedades transnacionales son moneda corriente en todo el mundo desde hace tiempo.

En el apartado 1 (Algunos antecedentes) de este Capítulo III hemos dado ejemplos históricos de la complicidad de empresas transnacionales con brutales dictaduras en la represión de los trabajadores y del pueblo en general. Estas prácticas se mantienen vigentes.

En Colombia se está cometiendo desde hace varios años un verdadero genocidio de sindicalistas. En la 92 Conferencia Internacional del Trabajo de junio 2004 el delegado trabajador colombiano denunció que en los últimos doce meses habían sido asesinados en su país 108 sindicalistas.

La British Petroleum ha sido acusada en el Parlamento Europeo por el europarlamentario británico Richard Howe de violar los derechos humanos de campesinos, indígenas<sup>90</sup> y sindicalistas en Colombia y, aunque BP niega que financie a los grupos paramilitares, reconoce que financia al ejército colombiano, aunque solo —dice— “con fines estrictamente defensivos”<sup>91</sup>.

<sup>90</sup> Un caso grotesco que ejemplifica el trato dado por las sociedades transnacionales a las comunidades indígenas. En Ecuador los indígenas huaorani concedieron a la transnacional italiana Agip Oil autorización para construir una plataforma petrolera, tender un ramal de oleoducto y extraer crudo en la provincia de Pastaza. A cambio, la empresa se comprometió a entregar a cada una de las seis comunidades huaorani, entre otras cosas, 50 kilogramos de arroz y 50 de azúcar, dos cubos de grasa, una bolsa de sal, un silbato de árbitro y dos balones de fútbol, 15 platos, 15 tazas, y un armario con 200 dólares en medicinas, en una única partida.

El documento firmado por los huaorani deja constancia que Agip Oil “tiene un contrato con el Estado ecuatoriano” para la “exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque 10”, ubicado en la provincia de Pastaza, dentro de los “límites reconocidos como parte del territorio” huaorani. “De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”, Agip Oil consultó a las comunidades huaorani sobre “los posibles impactos del proyecto”, señala el contrato. El coordinador nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakuti-Nuevo País, Miguel Uuco, aseguró que el convenio entre la petrolera italiana y los huaorani viola la Constitución de Ecuador y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

<sup>91</sup> Colombia: British Petroleum en guerra contra los sindicatos, Unión Sindical Obrera de Colombia (USO). Junta Directiva Nacional, 15/02/99, [www.labourmet.org.uk/spanish/1999/coluso.html](http://www.labourmet.org.uk/spanish/1999/coluso.html). La BP se destaca también por sus “performances” socioeconómicas: entre 1990 y 1996 redujo su personal de 116.000 a 53.700 asalariados, y aumentó sus ganancias de 900 millones de dólares en 1993

El 14 de marzo de 2002, el Sindicato de los Trabajadores del Acero de América (United Steelworkers of America), el Sindicato de Trabajadores Mineros de América (United Mineworkers of America) y la Fundación Internacional para los Derechos Laborales (International Labor Rights Foundation) presentaron una denuncia ante la Corte del Distrito Federal de Alabama (Estados Unidos) contra la transnacional Drummond Company Inc., Drummond Ltd., y contra su dueño, el estadounidense Garry Drummond. La demanda se interpuso en nombre del sindicato Sintramienergética de Colombia y de los familiares de los sindicalistas asesinados Valmore Locarno, Gustavo Soler y Víctor Orcasita que fueron, respectivamente, presidentes y vicepresidente de Sintramienergética, seccional El Paso (departamento del César, Colombia). Los demandantes consideran que tienen pruebas suficientes para poder denunciar que la Drummond utilizó los servicios de grupos paramilitares de la región para asesinar a estos tres líderes del sindicato, con el objetivo de librar a esta transnacional de los reclamos laborales de Sintramienergética<sup>92</sup>.

También la transnacional Nestlé promueve la violencia contra sus trabajadores. En 2002, en una de sus fábricas en Filipinas, los trabajadores, que se encontraban en huelga desde hacía cuatro meses, fueron brutalmente golpeados por la policía. Los trabajadores estaban en huelga como protesta porque Nestlé viola los derechos establecidos por la Corte Suprema para los pensionados. Nestlé mantiene 200 agentes de seguridad privada en las dos puertas de la planta, a la vez que ésta le sirve de campamento a la policía filipina.

El 23 de septiembre de 2005 fue asesinado Diosdado Fortuna, dirigente de la huelga en la fábrica de la multinacional Nestlé en la provincia filipina de Laguna. Diosdado Fortuna era también presidente de la Unión de Empleados Filipinos desde que en 1988 su anterior líder, Meliton Roxas, muriera en circunstancias similares frente a esa misma fábrica.

Este crimen se produjo menos de quince días después del asesinato del dirigente sindical y ex trabajador de Nestlé en Colombia, Luciano Enrique Romero Molina.

---

a 4300 millones en 1996; *Quid* 98, Robert Laffont (ed.), Francia, p. 1773. En agosto de 1998 BP se fusionó con Amoco, "la mayor fusión industrial de la historia", que se "celebró" con 6000 despidos; *El Mundo*, España, 12/8/98).

<sup>92</sup> La cuestión de los grupos paramilitares al servicio de las grandes empresas forma parte de un problema más vasto como es el de las empresas privadas de seguridad. Véase José L. Gómez del Prado, *Las empresas privadas de seguridad: ¿mercenarios o corsarios del siglo XXI?*, en *ALAI, América Latina en Movimiento* 2006-06-27, en <http://alainet.org/active/120048langres> Gómez del Prado es miembro del Grupo de Trabajo sobre mercenarios de las Naciones Unidas.

Del mismo autor, *Algunas tendencias emergentes en torno a las actividades de un nuevo agente no estatal: las compañías privadas militares y de seguridad*, en Jessica Almqvist y Felipe Gómez Isa (eds.), "El Consejo de Derechos Humanos: oportunidades y desafíos", Cuaderno Deusto de Derechos Humanos, núm. 40, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, 2006.

En 2002 se presentó ante un juez de la Corte del Distrito de Miami, Florida, una denuncia contra Coca-Cola, con sede en Atlanta, por su presunta complicidad en el asesinato de sindicalistas colombianos.

"Queremos justicia y que la gente sepa la verdad acerca de lo ocurrido en Colombia contra los trabajadores de Coca-Cola", dijo Javier Correa, el presidente de la colombiana Unión Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación, cinco de cuyos dirigentes han sido asesinados desde 1994. La denuncia está relacionada con el asesinato del sindicalista Segundo Gil en 1996, poco después que Richard Kirby, el propietario estadounidense de una planta embotelladora de Carepa, Antioquia, dijera que haría lo necesario para matar y hacer desaparecer a los trabajadores que intentaran sindicalizarse, y se habría puesto de acuerdo con pistoleros para ese fin.

La cuestión central, dice Terry Collingsworth, un jurista de la International Labor Rights Fund, es: "¿Por qué Coca-Cola no intervino para poner fin a la violencia?" Y agrega: "Coca-Cola, como muchas compañías, controla el producto y recoge los beneficios, pero argumenta que no tiene responsabilidades respecto de los trabajadores".

En el Capítulo VII, apartado 3.1, se menciona el caso del juicio que se ventila ante los Tribunales de Nueva York contra la Royal Dutch/Shell, acusada de complicidad en el asesinato de varios dirigentes ogonis en Nigeria.

El informe anual de 2006 de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL, ahora unificada con la Confederación Mundial del Trabajo en la Confederación Sindical Internacional, CSI) presenta un panorama general y reciente de la violación de los derechos sindicales en el mundo<sup>93</sup>. En el comunicado de prensa de presentación del Informe se dice, entre otras cosas:

En 2005, 115 sindicalistas fueron asesinados por defender los derechos de los trabajadores, mientras que se registraron más de 1600 víctimas de agresiones violentas y cerca de 9000 detenidos... Alrededor de 10.000 trabajadores/as fueron despedidos por sus actividades sindicales, y 1700 arrestados. ...América Latina continúa siendo la región más peligrosa para el ejercicio de actividades sindicales, y Colombia encabeza una vez más la lista de asesinatos, actos de intimidación y amenazas de muerte. Setenta sindicalistas colombianos pagaron con su vida por haber intentado defender los derechos fundamentales en el trabajo...

\* ... En Guatemala persiste el clima de violencia y terror, especialmente contra las mujeres trabajadoras, siendo las principales víctimas los tra-

<sup>93</sup> <http://www.ictu.org/displaydocument.asp?Index=991223800&Language=ES>

bajadores/as en los sectores de la educación, la banca y la agricultura. ...La Administración Bush ha continuado atentando contra la libertad sindical y la negociación colectiva en Estados Unidos, contribuyendo así a que las campañas organizadas para destruir sindicatos sigan a la orden del día. Uno de los empleadores más notoriamente antisindicales en aquel país, Wal-Mart, ha exportado también sus prácticas a Canadá...

...Al igual que en otras regiones, *las violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores en las zonas francas* han sido una característica destacada en México y en la República Dominicana en particular, donde las compañías multinacionales sacan provecho de los bajos salarios y de unas condiciones de trabajo abusivas, especialmente en las cadenas de suministros para los sectores del textil y el metal... Las zonas francas industriales en varios países asiáticos, especialmente Bangladesh, India, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka han destacado también por acciones antisindicales por parte de los empleadores, muchas veces en complicidad con los gobiernos, como parte de la implacable batalla a la que se han librado muchas empresas globales para desbancar a sus competidores. ...En Birmania, diez organizadores clandestinos de la ilegalizada Federación de Sindicatos de Birmania fueron arrestados y condenados a penas de prisión de entre tres y 25 años... En Corea del Sur, Kim Tae-hwan, de la central sindical FKTU, ha sido uno de los 17 sindicalistas asesinados en Asia en el transcurso de 2005... La violencia antisindical por parte de la policía y las fuerzas de seguridad ha quedado documentada repetidas veces en India, Camboya, China y muchos otros países... El gobierno conservador de Australia consiguió que el Parlamento nacional aprobase a finales de año una serie de leyes antisindicales, que imponen considerables restricciones al derecho de los trabajadores a contar con representación sindical. Se ha eliminado la protección frente al despido improcedente para casi todos los trabajadores australianos, además de introducir disposiciones para la imposición de importantes multas a los dirigentes sindicales y trabajadores simplemente por intentar que el empleador conceda permisos remunerados para participar en cursos de formación del sindicato o pretender garantizar que no se despidan a los trabajadores sin un motivo justificado.

Pero la violación de los derechos laborales y sindicales no se produce solamente en los países de la periferia del sistema. En las Conclusiones y Recomendaciones de un Informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) hecho público en Ginebra a fin de febrero de 2007<sup>94</sup> se dice, entre otras cosas:

...En algunos países de la UE persisten ciertos problemas con respecto al derecho de libertad sindical y de negociación colectiva... Esto hace

<sup>94</sup> Confederación Sindical Internacional (CSI). Normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente en la Unión Europea. Informe para el examen de la política comercial de la Unión Europea por parte del Consejo General de la OMC, Ginebra, 26 y 28 de febrero de 2007.

referencia principalmente al derecho de huelga y representación de todos los trabajadores/as. También se registra un problema generalizado –y en algunos países en aumento– respecto a la discriminación antisindical en la práctica, que deberá combatirse de manera más activa.

...La UE debe reconocer explícitamente el derecho a emprender acciones secundarias fuera de las fronteras nacionales, como un aspecto integral del derecho de huelga.

...Se requieren medidas para abordar la discriminación de género en los Estados miembros de la UE. Las desigualdades entre hombres y mujeres en los salarios siguen siendo pronunciadas, y las mujeres están muy poco representadas en los cargos directivos y muchas veces registran índices de desempleo más elevados que los hombres, además de quedar concentradas en puestos de trabajo a tiempo parcial.

...Se deben hacer mayores progresos para eliminar el trabajo infantil en la Unión Europea.

La efectiva eliminación del trabajo forzoso y la explotación sexual debe convertirse en una prioridad absoluta. Dado que la trata de seres humanos para estos fines es un problema que concierne a toda la UE.

...Algunos Estados miembros de la UE utilizan a los presos como mano de obra en empresas privadas. Esto supone una clara infracción del Convenio núm. 29 de la OIT. Ha de ponerse fin a tales prácticas y enmendarse la legislación para que esté conforme con el artículo 2(2) (c) del Convenio.

## Seguridad e higiene en el trabajo

Muchos trabajadores en diversas partes del mundo sufren las consecuencias de la violación de las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en particular por parte de las sociedades transnacionales.

El resultado general, según un informe de la OIT destinado al XVI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebró en Viena en mayo de 2002, es que cada año mueren en el mundo dos millones de trabajadores a causa de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo<sup>95</sup>.

Los casos son innumerables pero citaremos solo uno a título de ejemplo.

En los decenios de 1970 y 1980 las empresas bananeras en Nicaragua, Honduras y Costa Rica (y en muchos otros lugares del mundo) utilizaron un pesticida (nemagón) que contenía 1,2- dibromo- 3 -cloropropano, lo que provocó la esterilidad para procrear en unos 1500 trabajadores de los men-

<sup>95</sup> Véase <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2002/23.htm>



cionados países centroamericanos. En el decenio de 1990 abogados de la región, en coordinación con abogados de Estados Unidos, presentaron una demanda en nombre de las víctimas, ante el Distrito 212 de la Corte del Condado de Galveston, Texas, contra los fabricantes y utilizadores de dicho producto: Shell Oil Company, Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Standard Fruit and Steamship Co., Dole Food Company, inc., Dole Fresh Fruit Company, Chiquita Brands inc. y Chiquita Brands International. Se les imputó haber utilizado un producto extremadamente dañino, ocultando deliberadamente su peligrosidad, y no haber indicado a los trabajadores medidas ni proporcionado medios adecuados de protección cuando estaban expuestos al mismo.

En el año 2000 el juicio contra las sociedades continuaba y éstas se obstinaban en desconocer su responsabilidad, negándose a indemnizar a las víctimas.

En noviembre del mismo año se dictó en Nicaragua la Ley 364 que permite enjuiciar a las compañías bananeras, a los fabricantes de pesticidas y a sus distribuidores. De inmediato el embajador estadounidense en Managua manifestó la "inquietud" de su gobierno respecto de dicha ley. El procurador de Nicaragua, sensible a esa "inquietud", recomendó la abrogación de la ley. Pese a ello, en diciembre de 2002 Dow y Shell, fabricantes del pesticida, y Dole, plantador, fueron condenados a pagar 489 millones de dólares a 486 trabajadores, y el 15 de marzo de 2004 una Corte de Managua condenó a los mismos demandados a pagar 82 millones de dólares a otro grupo de trabajadores. Pero las presiones aumentan a fin de que esas sentencias no sean ejecutadas<sup>96</sup>.

La sentencia de diciembre de 2002 en Nicaragua recorrió las vías legales hasta Estados Unidos, pero en octubre de 2003 no fue admitida por la jueza Nora M. Manella, de la Corte del Distrito Central de California. Para ello, alegó defectos de forma, porque la Dole Food Company Inc. no fue demandada correctamente ya que técnicamente no existe, al denominarse en Estados Unidos Dole Food Company Inc. y no Corporation, como se transcribía en la demanda. La jueza adujo que también se violaron los procedimientos jurídicos de las leyes estadounidenses y existen vacíos en la sentencia que dictó la justicia nicaragüense.

Paradójicamente, las multinacionales aprovechan esta decisión iniciando demandas contra los afectados, a quienes acusan, entre otras cosas, de presentar pruebas fraudulentas<sup>97</sup>.

<sup>96</sup> Véase *L'événement syndical*, núm. 28/29, Suisse, 7 juillet 2004. Véase también: Center for International Environmental Law ([www.ciel.org](http://www.ciel.org)).

<sup>97</sup> Vicente Bóx Bornay, *Historia del DBCP en Nicaragua*, abril 2005, en: <http://www.acsur.org/acsur/noticias/noticias/nemagoni.pdf>

El 28 de septiembre de 2005, la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo la presión de los trabajadores afectados, votó una resolución (018-2005) que protege de manera definitiva la Ley 364, "Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos para las Personas Afectadas por el Uso de Pesticidas Fabricados a base de DBCP".

Pero la violación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo se produce también en los países centrales: la sociedad transnacional IBM, y sus subcontratantes, utilizan eters de glicol (que son sustancias cancerígenas y que provocan malformaciones en la descendencia de quienes han estado expuestos a las mismas) en empresas de Francia (Corbeil-Essones, cerca de París) y Estados Unidos (Fishkill, cerca de Nueva York), pese a que el Instituto Curie alertó a IBM en 1988. Dichos productos están prohibidos en Francia para el uso doméstico desde 1998, pero no en la industria, donde está autorizado su "uso controlado". Algunas víctimas han iniciado juicio contra las empresas responsables<sup>98</sup>. Lo mismo ocurre con otros productos cuya utilización es peligrosa para la salud, y cuyo uso doméstico está prohibido pero está permitida su utilización en la industria.

### Utilización de mano de obra esclava o semiesclava

Las sociedades transnacionales no sólo aprovecharon del trabajo esclavo en la Alemania hitleriana (véase el apartado 1, Algunos antecedentes, de este Capítulo), sino que lo siguen haciendo cada vez que se les presenta la ocasión.

En Myanmar (antigua Birmania), tres empresas, la estadounidense Union Oil of California (Unocal), la británica Premier Oil y la francesa Total, se han aprovechado de las "ventajas comparativas" que ofrece el régimen dictatorial de dicho país, que recurre al trabajo esclavo en la construcción de los oleoductos de Yadana (Unocal y Total) y Yetagun (Premier Oil).

En 1997, un tribunal estadounidense de California admitió una demanda contra Unocal y Total presentada por 14 víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos durante la construcción del oleoducto de Yadana. El juez Richard Páez dijo que "las sociedades transnacionales y sus dirigentes pueden ser tenidos por responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos en países extranjeros", y que los tribunales estadounidenses tienen competencia para juzgar dichas violaciones. En su decisión el juez dice que los argumentos de Unocal son "inexplicables" y "difíciles de imaginar"<sup>99</sup>. Véanse más detalles sobre estas causas en el Capítulo VII, apartado 3.1 (Recursos antes tribunales judiciales).

<sup>98</sup> Diario *Libération*, París, 19 de abril de 2001, p. 18.

<sup>99</sup> Inter Press Service, 22 de mayo de 2000.

Las sociedades transnacionales aprovechan otras prácticas que se aproximan al trabajo esclavo. Por ejemplo, Disney tiene subcontratistas en China que hacen trabajar a sus obreros 13 a 17 horas por día, siete días sobre siete por un salario diario de 1 dólar con veinte centavos<sup>100</sup>. En condiciones similares trabajan los obreros y las obreras de los subcontratistas de Nike en el sudeste de Asia<sup>101</sup>.

Otra forma de trabajo semiesclavo es el realizado en las prisiones para empresas privadas (en muchos casos transnacionales), que se practica en China y en muchos países ricos, como Estados Unidos, Francia y Alemania<sup>102</sup>. Según informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en dicho país 30 Estados han legalizado la contratación exterior del trabajo carcelario desde 1990. Y de ese trabajo semiesclavo y mal pagado se aprovechan grandes transnacionales como Microsoft, Boeing y TWA<sup>103</sup>.

Ello a pesar de que el Convenio 29 de la OIT de 1930 en su artículo primero propuso hace 77 años suprimir el trabajo obligatorio en el más breve plazo, voluntad reiterada en la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y que el artículo 2 inciso c) del Convenio 29 prohíbe que el trabajo carcelario "sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado". Véase el Informe de la CSI citado en la nota 94.

## EL CONTROL OLIGOPÓLICO DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS ENTRETENIMIENTOS

El ser humano, para ejercer su derecho a estar informado más allá de su entorno inmediato a fin de conocer lo que ocurre en el mundo, tiene que recurrir a los proveedores de información, es decir, a los medios de comunicación.

En la transmisión de la información a través de los medios de comunicación existen por lo menos dos niveles de subjetividad. El primero consiste

<sup>100</sup> Véase [www.transnationale.org](http://www.transnationale.org).

<sup>101</sup> En mayo de 2002 la Corte Suprema de California condenó a Nike por engañar a la opinión pública con una campaña publicitaria acerca de las condiciones de trabajo (que presenta como buenas) en sus empresas subcontratistas en el sudeste de Asia, incluso Vietnam. Sostiene la Corte que Nike no puede ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (libertad de expresión) para realizar publicidad engañosa; *New York Times*, 4/5/02, p. A4.

<sup>102</sup> OIT, *Trabajo forzoso y tráfico de seres humanos y Alto al trabajo forzoso*, revista *Trabajo*, núm. 39, mayo, 2001.

<sup>103</sup> Véase OIT, *La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio*, documento de información, 2000 (ELIM-Recopilada 2000-01-0014.00ES.DOC), p. 214, y Loïc Wacquant, *Les prisons de la misère, Raisons d'Agir*, París 1999, p. 82. Véase también de Michael Moore (el autor de los filmes *The Big One* y *Bowling for Columbine*), *Dégraissez-moi ça! Petite balade dans le cauchemar américain*, La Découverte, París, 2000, Capítulo 17.

en la selección y jerarquización de la información: el comunicador decide primero qué hechos son noticias y deben comunicarse, y luego cuáles son importantes y cuáles no, es decir, el lugar o el tiempo que se le atribuye a cada noticia en el medio de comunicación. El segundo nivel de subjetividad es la interpretación de cada noticia: el comunicador impregna al hecho con su versión del mismo. De modo que el derecho a estar informado está mediatizado por la subjetividad (o más concretamente por la ideología) del comunicador. Pero también puede ocurrir que la información sea totalmente ocultada o deformada, cuando la misma contraría los intereses de quienes tienen el control económico o político directo o indirecto del medio de comunicación.

El primer requisito para ejercer el derecho de opinión consiste, para poder opinar con conocimiento de causa, en disponer de una información objetiva e imparcial lo cual, como acabamos de ver, no ocurre.

El ser humano puede teóricamente ejercer el derecho de opinión en diferentes niveles: en el entorno inmediato, en la colectividad cercana y ante la sociedad en general. La base del derecho de opinión es la libertad de expresión: cada uno debe poder expresar sus opiniones sin correr el riesgo de sufrir una sanción. Además, el ejercicio del derecho de opinión ante la sociedad en general requiere la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación de masas. Pero este acceso está fuertemente condicionado por la selección que practican –por razones político-ideológicas– quienes controlan dichos medios de comunicación.

La propiedad de los medios de comunicación está sometida desde hace tiempo a un proceso de concentración que se ha acentuado en los últimos decenios.

Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación se han formado grandes conglomerados transnacionales que abarcan la producción y utilización de los soportes materiales: editoriales, periódicos, radiodifusoras, filmes, emisoras de televisión, videos, satélites, medios electrónicos, etc., que dominan también las redes de comercialización y difusión.

Es cierto que en la mayoría de los países todo ciudadano o grupo de ciudadanos tiene teóricamente derecho a crear un medio de información. Pero si tal medio llega a existir, su alcance es limitado y finalmente desaparece o es absorbido por los grandes oligopolios. De todos modos, no puede competir con los consorcios transnacionales, que llegan con sus productos (informativos y otros) a centenares de millones de personas, y que son los verdaderos formadores (más bien deformadores) de la opinión pública.

Actualmente, la concentración oligopólica de los medios de comunicación de masas (incluida la comunicación electrónica), y de los productos de entretenimiento de masas (series televisivas, música popular, parques de diversiones, juegos de video, filmes, etc.) está en su apogeo. Nueve grandes

empresas tienen el control mundial casi total de esos productos: General Electric (NBC-Vivendi Universal), AOL-Time Warner, AT&T Corp, Viacom Inc., Walt Disney, News Corp., Bertelsmann, Sony y Liberty Media Corp., quienes dictan a los seres humanos cómo deben pensar, qué deben consumir, cómo deben utilizar su tiempo libre, cuáles deben ser sus aspiraciones, etc. Uniformizan a escala planetaria los reflejos y comportamientos del ser humano, anestesiando en las personas el espíritu crítico y destruyendo la originalidad y riqueza de la cultura de cada pueblo. Son los vectores de la ideología del sistema dominante, que filtran la información y que tienen la información ya filtrada de esa misma ideología y en función de sus intereses particulares, como veremos enseguida.

Se podría escribir largamente sobre las series de televisión y los programas de entretenimiento que se difunden a escala mundial y que exaltan la violencia, la competencia encarnizada, el dinero como valor supremo, que envilecen la condición humana y reducen a la mujer a la categoría de objeto sexual. También se podrían dedicar largos párrafos a los grupos editoriales transnacionales que para hacer prosperar el negocio de venta de papel impreso, y por razones ideológicas y políticas, venden como excelentes escritores a autores mediocres, cuando no a verdaderos semianalfabetos y plagarios, o como importantes filósofos y ensayistas a insignes charlatanes con el respaldo de una abundante promoción publicitaria.

En resumen, los medios masivos de comunicación, controlados en su inmensa mayoría por consorcios transnacionales, son formidables vectores para la neutralización del espíritu crítico, la domesticación y la degradación intelectual, ética y estética del ser humano.

Esas sociedades transnacionales se ocupan al mismo tiempo de las actividades más diversas, desde la fabricación de equipos electrónicos para uso militar hasta el tratamiento y la distribución del agua potable y la recolección de residuos. En el año 2000, tres de dichas empresas, General Electric, Vivendi y AOL-Time Warner, totalizaron 203 mil millones de dólares de ingresos<sup>204</sup>.

Es decir, que de la comunidad de intereses existente entre los grandes medios de comunicación de masa y el gran capital a través del capital financiero y de los presupuestos publicitarios, se ha pasado a una comunidad concreta de intereses a través de la fusión de conglomerados industriales de diversa naturaleza que incluyen medios de comunicación de masa.

*Por ejemplo, General Electric, que entre otras cosas produce piezas para la industria bélica, es propietaria de la National Broadcasting Company (NBC) y de otras cadenas de televisión. A principios de septiembre 2003,*

---

<sup>204</sup> Véase [www.transnationale.org](http://www.transnationale.org)



*General Electric compró los activos de Vivendi Universal en los medios de comunicación estadounidenses y controla ahora el 80% del grupo media. El nuevo grupo será dirigido por el vicepresidente de General Electric y presidente director general de la NBC.*

Así es como puede ocurrir que cuando un canal de televisión muestra la supuesta precisión "quirúrgica" de un bombardeo aéreo, está haciendo publicidad a un producto bélico electrónico fabricado por el mismo conglomerado de que forma parte la emisora televisiva (por ejemplo la National Broadcasting Company y General Electric).

*En el diario Le Monde del 3 de mayo de 2001, Jeremy Rifkin denunciaba los intentos de privatizar el espectro electromagnético de las ondas radiales, hasta ahora controlado por los Estados en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que concede el uso de las frecuencias. A través de dichas ondas transitan todas las comunicaciones electromagnéticas y su privatización implicaría la renuncia definitiva a lograr que el derecho a la comunicación llegue a ser un derecho igual para todos<sup>105</sup>. Sólo tendrían tal derecho los que pudieran pagar el precio impuesto por las grandes sociedades transnacionales de la comunicación.*

Es ampliamente conocido el "imperio" mediático de Silvio Berlusconi en Italia, que pesa enormemente en las orientaciones electorales de la población. Pero esa no es una "excepción italiana".

*Serge Halimi y Dominique Vidal dicen que la revista francesa L'événement de jeudi, en su edición del 29 de mayo de 1999 calificaba de "cómplices de Milosevic" a Solyenitsine, Marie-France Garaud, Max Gallo y Peter Handke, entre otros, que habían criticado de una manera u otra la guerra de la OTAN contra Yugoslavia. Dicha revista, agregan Halimi y Vidal, pertenece al grupo Matra, fabricante de las bombas de una tonelada guiadas por láser que se arrojaban en ese momento sobre Yugoslavia<sup>106</sup>.*

<sup>105</sup> El acceso de todos a los modernos medios de comunicación está lejos de ser una realidad. En 2005 había en el mundo 888 millones de usuarios de Internet sobre una población de 6.400 millones de habitantes. Los usuarios están muy desigualmente repartidos según las regiones: en África utilizaba Internet el 1,5% de la población; en Asia, el 8,4%; en Europa, el 35,5%; en Medio Oriente, el 7,5%; en América del Norte, el 67,4%; en América Latina y el Caribe el 10,3%, y en Oceanía y Australia, el 48,3%. Datos de: Nielsen/NetRatings, Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), Internet world Stat. Pero en cada región los porcentajes varían según los países, y en cada país hay marcadas diferencias entre las categorías sociales. Además, la cifra 67,4% atribuía a América del Norte no incluye a México, sino solamente a Estados Unidos y Canadá, pues en México sólo el 18% de la población utiliza Internet. En Francia, en 2005 tenían acceso a Internet en la casa el 80% de los cuadros superiores, y sólo un tercio de los obreros (Observatoire des inégalités). En resumen, el acceso a Internet está condicionado en primer lugar por el nivel económico del usuario potencial, y luego por su nivel cultural, la calidad de las infraestructuras existentes, etc.

<sup>106</sup> Véase de Serge Halimi y Dominique Vidal, L'Opinion, ça se travaille... (les médias, l'OTAN et la guerre du Kosovo), Agone Editeur, Marseille, 2000.



El Grupo Matra es en realidad el grupo francés Lagardère, que reúne Matra (industria aeronáutica y militar) y Hachette (industria editorial: Fayard, Grasset, Stock, Calman Lévy, Livre de Poche, etc.), y que adquirió a fines de 2002 el grupo editorial Vivendi Universal Publishing (VUP) (Larousse, Robert, Nathan, Colin, Bordas, Plon-Perrin, Laffont, 10/18, Pocket...), e incluye canales de televisión, revistas, etc.

El dinamismo y la voracidad del Grupo Lagardère hace ya un tiempo que está poniendo nerviosas a las transnacionales estadounidenses, interesadas en los mismos sectores que controla el grupo francés. El grupo Carlyle (Bush padre y otros) ha puesto el pie en publicaciones de la prensa profesional y de la salud que pertenecieron al Grupo VUP y pertenecen ahora al Grupo Aprovia (véase nota 38)

El constructor de aviones Serge Dassault se convirtió en julio de 2004 en el primer propietario de periódicos de Francia al tomar el control del 82% de las partes de la sociedad Socpresse. Esta reúne 70 títulos, entre ellos *Le Figaro*, *L'Express*, *L'Expansion*, *L'Etudiant*, y varios diarios regionales. Socpresse es la sucesora del imperio periodístico Hersant. El monto de la transacción se ha mantenido secreto, pero se estima en 1200 millones de euros.

"A papá le gustan las buenas noticias", dice su hijo Olivier Dassault. En efecto, Serge Dassault dice que él pertenece a esa parte de los lectores que desearía que se hable de las cosas que marchan bien. Igualmente, ha precisado su concepción de dirigente de empresas de prensa declarando que su nuevo imperio le permitirá difundir ideas que él considera sanas. No oculta su intención de intervenir en las políticas de las redacciones para manipular a la opinión pública, en el sentido que será, para él, el más sano<sup>107</sup>. En la misma línea de pensamiento que Dassault, Eduardo de Rothschild, que desde principios de 2005 es propietario del 38,87% de las acciones del diario francés *Libération*, declaró a fines de septiembre de 2005: "Para que un diario se venda bien ...hay que interesarse en el contenido, en la calidad de los artículos...Creo que es un poco utópico querer diferenciar redacción y accionista"<sup>108</sup> La empresa Bouygues, transnacional francesa de grandes obras públicas y propietaria de la cadena de televisión TF1, entrará en el grupo Socpresse. En julio de 2004 había conversaciones al respecto entre los dos grupos. El Sindicato CGT del Libro declaró que la asociación entre Bouygues, TF1 y Dassault en Socpresse "condena al pluralismo ya malherido con las concentraciones realizadas por Dassault y Lagardère".

<sup>107</sup> Después, Dassault vendió algunos títulos regionales propiedad de Socpresse, y en junio de 2005 estaba en conversaciones con el fondo de inversiones británico Candover para venderle el polo de prensa de la región Rhône-Alpes (*Le Progrès*, *Le Dauphiné Libéré* y *Le Bien Public*).

<sup>108</sup> Diario *Le Monde*, 2-3/10/2005, p. 12.

El Sindicato de Periodistas SNJ-CGT habla de “un acontecimiento grave para la prensa escrita en Francia”. Se asocia al Observatorio Francés de Medios de Comunicación que ha lanzado una petición “contra la concentración y el control financiero sobre los medios” para denunciar el casi-monopolio sobre los periódicos que ejercen los grupos Socpresse y Hachette, ambos controlados por los dos más grandes fabricantes de armas franceses.

El gobierno francés, por su parte, por intermedio de su ministro de la Cultura y la Comunicación expuso su opinión ante la Asamblea Nacional el 30 de junio de 2004: “para el gobierno... la alianza de la libertad de expresión y de la realidad económica y financiera contribuyen al pluralismo”.

El 2 de junio de 2003 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos (que preside Michael Powell, hijo del ex secretario de Estado Colin Powell) por tres votos contra dos modificó las regulaciones que limitan la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en dicho país. Uno de los miembros de la Comisión que votó en contra, Michael Crops, declaró:

La FCC refuerza a la nueva élite mediática de América con niveles inaceptables de influencia sobre las ideas e información, de las cuales nuestra sociedad y nuestra democracia tienen una fuerte dependencia. ...Está en juego la eventualidad de conceder un mayor control de vigilantes a unas pocas corporaciones sobre el diálogo civil de nuestro país; más control sobre nuestra música, entretenimiento e información y poder de veto sobre la mayor parte de lo que nuestras familias miran, oyen y leen<sup>109</sup>.

A veces los medios de comunicación de masa dejan de lado hasta la más mínima deontología de la información, y se comprometen activamente en proyectos de derrocamiento violento de ciertos gobiernos que molestan al poder económico transnacional. Es el caso de los grandes medios de comunicación privados de Venezuela: “...después de la victoria de Hugo Chávez en diciembre de 1998, el derrumbe de los partidos tradicionales condujo rápidamente a los medios de comunicación a ocupar el vacío y a encarnar una oposición cada vez más virulenta”<sup>110</sup>. Finalmente, los medios de comunicación privados incitaron abiertamente al golpe de Estado y se abstuvieron de informar cuando la situación comenzó a tornarse favorable al retorno de Chávez al gobierno. El 13 de abril de 2002 el canal de TV Globovisión, a mediodía justificaba esta autocensura como “la decisión de no dar informaciones que podrían perturbar la armonía de la sociedad venezolana” (la

<sup>109</sup> Osvlado León, EE.UU.: triunfo de los monopolios mediáticos, en *América Latina en movimiento*, ALAI, núm. 370, Quito, 10 de junio, 2003. La decisión de la FCC debía entrar en vigor el 4 de septiembre de 2003, pero debido a que algunos ven en ella “una grave amenaza para la democracia”, fue suspendida por la Corte Suprema.

<sup>110</sup> *Diano Le Monde*, 16 /4/2002, p. 5.

misma fuente). Es notorio el paralelo con una parte de la prensa chilena que contribuyó activamente al derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, particularmente el diario *El Mercurio*, generosamente subvencionado en ese entonces por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos<sup>111</sup>.

Felipe Gómez Isa se refiere a esta cuestión en su trabajo *Las empresas transnacionales y sus obligaciones en materia de derechos humanos*, donde escribe:

Finalmente, otro aspecto de las actividades de las empresas transnacionales ...es el impacto que dichas actividades pueden tener en el disfrute de los derechos culturales en el marco de una globalización creciente que también está afectando a los aspectos culturales y a las formas de vida en todo el planeta. Estaríamos caminando, de la mano de los grandes grupos transnacionales de la comunicación y del ocio, hacia lo que Marta Harnecker ha denominado la macdonalización de la cultura (Harnecker, M., *La izquierda en el umbral del siglo XXI; haciendo posible lo imposible*, Madrid, 1999). Y es que las tendencias en el mundo de la tecnología y de la comunicación, siguiendo a Jordi Bonet (Bonet, J., La protección internacional de los derechos humanos, el sistema de las Naciones Unidas y la globalización, *Agenda ONU*, núm. 2, 1999, pp. 39 y ss) en este punto, apuntan en las siguientes direcciones:

- Existe una tendencia a la concentración de las empresas dedicadas a la cultura y a la información, dando lugar a los famosos Grupos Multimedia que, fundamentalmente, tienen su sede en los principales países desarrollados. Ello supone que van a ser esos países los que controlen la mayor parte del mercado cultural e informativo mundial.

- Los flujos de información normalmente tienen un sentido unidireccional, es decir, fluyen del Norte al Sur. En este sentido, es significativo el dato de que tres agencias de noticias mundiales, por supuesto todas ellas radicadas en países industrializados, copan el 80% de las noticias que circulan diariamente en el mundo. Esto puede llegar a producir una verdadera "tiranía de la comunicación" (Ramonet, I., *La tiranía de la comunicación*, Debate, Madrid 1998).

<sup>111</sup> Documentos desclasificados de la CIA e Informe Church del Senado estadounidense de 1975: "Acción encubierta (de Estados Unidos) en Chile 1963-1973" (ya citado en la nota 56): "Con mucho, el mayor —y probablemente el más significativo apoyo a una organización periodística— fue el dinero proporcionado a *El Mercurio*, el principal diario de Santiago sometido a la presión gubernamental durante el régimen de Allende. ... En 1971, la estación (la CIA) estimó que *El Mercurio* no sobreviviría a la presión del gobierno de Allende, induciendo la intervención en el mercado del papel de imprenta y el retiro de los avisos del gobierno. El Comité 40 autorizó setecientos mil dólares para *El Mercurio* el 9 de septiembre de 1971, y agregó otros 965 mil dólares a esa autorización el 11 de abril de 1972. Una evaluación hecha por la CIA concluyó que *El Mercurio* y otros medios apoyados por la Agencia habían desempeñado un importante papel en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973".

- Este auténtico monopolio del mercado cultural e informativo puede llegar a convertirse en un vehículo privilegiado para la homogeneización cultural y la estandarización de patrones y hábitos de consumo.

- Por último, este monopolio cultural e informativo puede acabar poniendo en serio peligro el pluralismo político, social e ideológico. La concentración en muy pocas manos de los mensajes culturales e informativos que llegan hasta el último rincón del planeta gracias a los modernos medios de comunicación de masas (el famoso efecto CNN) puede convertir a dichos medios en instrumento de la globalización como "proyecto de dominación" (Mattelart, A., Que el poder sea volátil, no significa que no exista, entrevista concedida Mariano Aguirre, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, núm. 71, verano, 2000, p. 130). La misma línea de razonamiento es seguida por el profesor Carrillo Salcedo, en cuya opinión "la industria global de la comunicación tiende a ofrecer una determinada filosofía económica y política, donde la primacía del mercado y de ciertos derechos civiles y políticos van en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales" (Carrillo Salcedo, J. A., *Globalization and Human Rights*, Faculty of Law, Athens, 31 march 2000, p. 13, mimeo)<sup>112</sup>.

Pero, al parecer, el control económico de los medios de comunicación no basta y también se recurre al control de los servicios de seguridad sobre los periodistas.

En efecto, en junio de 2006 la Federación Internacional de Periodistas (FIP), hizo un llamado a la Unión Europea para que investigue el espionaje sistemático de funcionarios de seguridad a periodistas en toda la Unión Europea, tras informes recientes de Dinamarca, Alemania y Holanda sobre persecución a colegas, el uso de informantes pagados en los medios de comunicación, e interceptación de líneas telefónicas. "Ha quedado claro que no existen suficientes medidas para proteger la legitimidad del periodismo y defenderlo de la vigilancia de fuerzas de seguridad y autoridades policiales de la Unión Europea", afirmó Aidan White, Secretario General de la FIP<sup>113</sup>.

La Comisión Europea, en su momento, no se pronunció sobre la tendencia monopolística en la prensa francesa, y sólo pidió a Socpresse que se desprendiera del periódico económico *La vie financière* con el fin de preservar cierta igualdad frente al mercado de los anunciantes.

Pero en enero de 2007 la misma Comisión dio a conocer un informe en el que concluye que la concentración de medios no implica necesariamente menos pluralismo.

<sup>112</sup> Felipe Gómez Isa, Las empresas transnacionales y sus obligaciones en materia de derechos humanos, Aportes Andinos, núm. 12, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, en <http://www.uasb.edu.ec/padiv/revista13/actualidad/pdf/Felipe%20Gomez.pdf>

<sup>113</sup> Comunicado de Prensa de la FIP, <http://www.fip-europe.org/default.asp?Index=3862&Language=EN>

La Comisión Europea, confirmando una vez más su condición de fiel mandatario de los intereses de las grandes sociedades transnacionales (véase el apartado 6 del Capítulo IV: La Unión Europea y las sociedades transnacionales) sostiene que la tendencia a la concentración en la propiedad de los medios que se vive en la Unión Europea desde hace diez años, y la entrada de grandes grupos internacionales en el mercado comunitario no implica necesariamente una reducción en el pluralismo informativo, a la vez que destaca la importancia de otros factores como la existencia de códigos editoriales que garanticen la diversidad de opiniones, o la variedad de los contenidos.

Agrega la Comisión que el hecho de que propietarios extranjeros tengan un papel importante en algunos mercados no supone necesariamente “una amenaza al pluralismo de los medios. Depende mucho de las salvaguardas legales y de la independencia editorial real respecto al propietario”. El informe recomienda a estos inversores que apliquen estándares elevados de transparencia editorial.

Esta es la respuesta de la Comisión a la preocupación expresada en diversas ocasiones por el Parlamento Europeo y por algunas ONG, acerca de que la concentración en la propiedad de medios en algunos países de la UE da lugar a un “*enorme poder de creación de opinión pública*”, y excluye los puntos de vista alternativos.

El Consejo de Editores Europeos, una organización que reúne a los principales grupos, entre ellos Bertelsmann, RTL, Reuters, Vocento y PRISA (editor de *El País*), expresó su satisfacción por este informe<sup>134</sup>.

El ejercicio pleno de los derechos a estar informado verazmente, a opinar y a tomar decisiones requiere una pluralidad de fuentes, una pluralidad de medios de información y su gestión democrática y transparente, requisitos básicos que no se cumplen con la concentración monopólica u oligopólica de los medios de comunicación que acabamos de describir.

Sería preciso establecer normas internacionales y nacionales que garanticen el pluralismo de los medios de información, y desarrollar políticas en el mismo sentido para intentar poner freno a este proceso de concentración oligopólica de los medios de comunicación.

<sup>134</sup> Fuentes: <http://blogs.periodistadigital.com/dircom.php/2007/01/17/>, diario Clarín, Buenos Aires, 19/01/07; diario El País, España, 17/01/07. Pese a que la posición de la Comisión Europea es manifiestamente favorable a la concentración de los medios de comunicación y, como consecuencia, contraria al pluralismo, Clarín titula la información: “La Unión Europea a favor del pluralismo de los medios”, aunque después el cuerpo de la noticia es un poco más objetivo. El diario El País también titula: “Bruselas defiende el pluralismo en los medios de comunicación”. Éste es un ejemplo claro de lo que decíamos al principio de este párrafo: “el comunicador impregna al hecho con su versión del mismo”. En este caso la versión de los títulos de Clarín y El País es exactamente contraria a una versión objetiva del hecho. Con el agregado de que Clarín en el título involucra a la Unión Europea, es decir, a todas las instituciones europeas, incluido el Parlamento, cuando en realidad la postura a favor de los oligopolios transnacionales compromete sólo a la Comisión Europea.

Así mismo, debería prohibirse que las sociedades propietarias de medios de comunicación de masa participen en conglomerados multiindustriales o multiservicios, a fin de evitar, en la medida de lo posible, que intereses económicos particulares influyan sobre la objetividad de la información.

Tales medidas podrían inspirarse en párrafo 3 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas u opiniones".

## EL CONTROL DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA

En 1974, el Programa de Acción por un Nuevo Orden Económico Internacional propuso establecer instrumentos eficaces de cooperación en el campo de la industria, de la ciencia y de la tecnología, de los transportes, de la navegación y de los medios de comunicación de masas. El concepto de cooperación técnica entre los países en desarrollo (TCDC) se formuló en la Conferencia de Buenos Aires de 1978. El plan de acción de la Conferencia fue adoptado por la Asamblea General de la ONU y su puesta en práctica se encargó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El proyecto, elaborado en 1979, preveía un sistema de intercambio de información entre los países del Tercer Mundo (Development Information Network Devnet). Se estableció un organismo de ejecución: Comunicación para el Desarrollo (Codev). Pero Estados Unidos se opuso al Proyecto, amenazando con retirar su contribución al PNUD si éste lo llevaba adelante. Estados Unidos adujo, entre otras cosas, que con el dinero de las Naciones Unidas se iba a poner en pie un competidor de las agencias de prensa comerciales. El Proyecto tuvo que abandonarse, pero cierto tiempo después se estableció un Sistema Piloto de Información Técnica (SPIT) mucho más modesto que Devnet<sup>115</sup>.

Después de los tempestuosos debates sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación en la Unesco, vinculados a la voluntad de Estados Unidos (y de Gran Bretaña) de mantener el control sobre la transferencia de tecnologías... los Estados Unidos cambian de estrategia: en lugar de afrontar a las organizaciones internacionales, las transforman en verdaderos vectores de expansión del libre cambio

<sup>115</sup> Anthony Giffard, *Un pont à travers le Sud: le Système Pilote d'Information Technique (SPIT)*, en *Revue Tiers Monde*, Institut d'Étude du Développement Économique et Social, Université de Paris I, tomo XXXV, N° 138, avril juin, 1994.



generalizado. ...Las experiencias de puesta en práctica y de utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en los países del Sur... no inclinan al optimismo en la medida en que parecen realizarse a un precio económico y sociopolítico elevado: pérdida relativa de la soberanía del Estado, presiones convergentes de las sociedades transnacionales y, lo que es nuevo, de la mayor parte de los organismos internacionales, hacia el modelo del libre cambio generalizado y amenazas de represalias, en caso de éxito parcial, de parte de los países de la OCDE, en particular de los Estados Unidos...

...El Estado (en los países en desarrollo), cuya función se ha desdibujado, ya no puede desempeñar, incluso muy parcialmente, su papel de árbitro y con frecuencia se contenta con aceptar la política del Banco Mundial consistente en reservar esos servicios (sistemas desarrollados de telecomunicaciones) a las elites y a la clientela empresaria y descuida a las capas populares, consideradas insolventes<sup>116</sup>.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Cnuced-Unctad) se trabajó mucho tiempo en la elaboración de un código de conducta en materia de transferencia de tecnología, pero jamás se llegó a un consenso internacional sobre su contenido, pues los intereses en juego de los países más ricos y de las grandes sociedades transnacionales imposibilitaron tal acuerdo. Otras iniciativas similares respecto a las inversiones extranjeras y a las relaciones intrafirmas tampoco prosperaron.

En el Capítulo IV de este trabajo se analizan los problemas que plantean para la utilización social de los conocimientos el Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic, Trips en inglés) celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio (apartado 3, a) y los tratados bilaterales sobre derechos de propiedad intelectual (apartado 4, c).

## LA CORRUPCIÓN

Muchas grandes sociedades transnacionales tienen estrechos lazos con la mafia financiera internacional. Eva Joly, hasta 2002 jueza de instrucción en Francia a cargo de grandes *affaires* escribe: "...yo pensaba que estábamos ante una criminalidad superficial, marginal, accidental, una especie de falta de moral individual. Hoy tengo la certidumbre de que la criminalidad financiera está incrustada en la economía y que ensombrece nuestro porvenir"<sup>117</sup>.

<sup>116</sup> Yvonne Mignot Lefebvre, *Technologies de communication et d'information, une nouvelle donne internationale?*, en *Revue Tiers Monde*, loc. cit.

<sup>117</sup> Eva Joly, *Notre affaire à tous*, Les Arènes, Paris, 2000, p. 183. En julio de 2003 Eva Joly publicó otro libro, *Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre?*, Les Arènes, Paris, 2003, donde relata las persecuciones y amenazas que sufrió mientras instruía la causa ELF. Véase también Christian de Brié, *Dans l'archipel planétaire de la criminalité financière*, en *Le Monde Diplomatique*, abril, 2000.

Quizás sin saberlo, Eva Joly estaba repitiendo lo que escribió Marx en los *Manuscritos de 1844, Tercer Manuscrito [El dinero]* cuando se refiere al dinero en la sociedad capitalista y su papel, entre otros, de medio universal de corrupción, citando un párrafo de *Timón de Atenas* de Shakesperare.

La corrupción es un fenómeno mundial, cuyos protagonistas activos principales son grandes sociedades transnacionales. La corrupción tiene graves consecuencias económicas y sociales, y es un justo motivo de preocupación para quienes se interesan por una gestión honesta de la administración de los Estados y por la posibilidad del control democrático de dicha gestión.

Hay formas de corrupción que no se contemplan en las definiciones habituales ni se tratan en las conferencias internacionales, que también distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas en la adopción de decisiones de política económica y social, como son (tanto en los países pobres como en los países ricos) el financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de ONG, de medios de comunicación de masa, etc.

La promoción de la lucha contra la corrupción no es siempre inocente y a veces obedece también a intereses particulares bien definidos. En la lucha sin cuartel por los mercados nacionales e internacionales (de servicios, de armamentos, de bienes de consumo industrial y civil, etc.) hay empresas que están en posición ventajosa (por su poderío económico, porque su oferta es mejor en precio o calidad, porque el espionaje industrial y comercial les permite tener mejor información para negociar los contratos [la red anglosajona de espionaje Echelon] o porque simplemente cuentan con el respaldo económico, político y militar de Estados Unidos).

Las empresas que no cuentan con estas ventajas, para poder competir con ciertas posibilidades de éxito tienen que recurrir con más frecuencia a la corrupción de los funcionarios públicos y de los dirigentes de empresas privadas que representan a la contraparte en sus negociaciones comerciales. De esta manera, la corrupción puede neutralizar esas ventajas comparativas que hemos mencionado, de que gozan grandes empresas transnacionales.

De ahí que sobre todo las grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, estén interesadas en imponer internacionalmente medidas anticorrupción (aunque no

---

En febrero de 2002 la jueza Eva Joly anunció su retiro de la función judicial. Su anuncio fue precedido por algunos días por uno similar del juez Eric Halphen y de la noticia del traslado, a su pedido, de la jueza Laurence Vichnievsky a otras funciones. Un año antes había abandonado la carrera judicial la jueza Anne José-Fulgères. Todos ellos se ocupaban de asuntos de corrupción y de negociados de gran envergadura, y todos denunciaron las fuertes presiones, provenientes de los medios políticos y económicos, de que fueron objeto.

es seguro que se propongan respetarlas ellas mismas) para seguir beneficiándose de las aludidas ventajas comparativas<sup>118</sup>.

Es sintomático que se interesen particularmente en la lucha contra la corrupción el Banco Mundial y una ONG dedicada específicamente al tema: Transparency Internacional (TI).

El papel del Banco Mundial en la economía planetaria y qué intereses sirve son temas suficientemente conocidos y no vale la pena extenderse, aunque diremos algo al respecto más adelante. No obstante, cabe comentar que el ex director del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, obligado a renunciar el 17 de mayo de 2007 por haber aumentado indebidamente el salario a su amiga funcionaria en el Banco antes de ocupar ese cargo en 2005, en su condición de secretario adjunto de defensa de Estados Unidos participó en la política de este país para la reconstrucción de Irak, que incluía multimillonarios proyectos cuestionados por corrupción y mala gestión.

Y agrega Emad Mekay, corresponsal en Washington de Inter Press Service en un artículo difundido el 26 de abril de 2006 (Corrupción: las pocas nueces del ruidoso Wolfowitz):

...Desde que asumió la presidencia del Banco Mundial, Wolfowitz evitó examinar proyectos de la institución en Irak, a pesar de la existencia de numerosos informes sobre fraude en la nación ocupada y dentro de su gobierno, patrocinados por Estados Unidos. Por ejemplo, un préstamo del Banco Mundial por 100 millones de dólares destinado a la construcción de 82 escuelas se resolvió en noviembre pasado sin las debidas diligencias en materia de control de la corrupción. Lo mismo ha sucedido con proyectos en los que el Banco está involucrado, relativos al suministro de agua, los servicios sanitarios, el desarrollo urbano y las emergencias de salud de Irak, al igual que otros de asistencia técnica, los que suman de 500 millones de dólares, según los críticos.

En cuanto a Transparency International, citamos a continuación fragmentos de una nota aparecida en la página 23 de *Le Monde Diplomatique* de noviembre de 2000 (traducción nuestra):

Transparency International fue fundada en 1993 por el Sr. Peter Eigen, un ex funcionario del Banco Mundial... Clasifica a los países en función de la corrupción existente en las administraciones y en los hombres políticos. La organización se ha fijado como regla no denunciar por su nombre a las empresas corruptoras. Sus ataques se dirigen exclusivamente contra los Estados. Es la principal debilidad de su acción porque ciertas sociedades transnacionales no tienen raíces nacionales y T.I. las elimina de entrada de sus estudios.

<sup>118</sup> Véase Bernard Cassen, *Arrière-pensées dans la lutte anticorruption*, *Le Monde Diplomatique*, mayo 2001, p. 8)

...El presupuesto de la organización en 1999 fue de 2 millones y medio de dólares. Un tercio proviene de donaciones de grandes fundaciones internacionales, otro tercio proviene de organismos para el desarrollo y de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el último tercio es cubierto por grandes empresas... (como IBM y General Electric),...

General Electric, uno de los *sponsors* de TI, fue condenada en 1997 a una multa de 25 millones de dólares por actos de corrupción en Egipto (de la misma fuente).

Pero con independencia de las intenciones de algunos promotores de las campañas contra la corrupción, ésta es una lacra real que es preciso denunciar y combatir, y cuyas causas profundas y mecanismos es necesario desentrañar.

La corrupción de los funcionarios públicos es un delito en muchos países, por lo menos formalmente. Pero en los países más ricos, aunque existe cierto rigor para sancionar a los propios funcionarios públicos incurso en corrupción, no se castiga a los nacionales que corrompen funcionarios extranjeros.

Una excepción a esto último es Estados Unidos, donde se sancionó en 1977 una ley sobre las prácticas de corrupción en el exterior, bajo el impacto de los casos de sobornos pagados por las empresas Lockheed, Northrop y Gulf Oil. Pero las legislaciones europeas son mucho más "liberales" y no castigan el soborno a funcionarios extranjeros. Más aún, en Alemania, en Suiza y en Bélgica, entre otros países europeos, el fisco autoriza a deducir de los impuestos tal clase de gastos, es decir, que la corrupción de funcionarios extranjeros está de hecho legalizada.

Hace unos años, cuando se debatió en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el tema de la corrupción, los representantes de los países ricos intentaron atribuir el fenómeno exclusivamente a los países del Tercer Mundo, pero éstos se opusieron a tal enfoque y la Comisión adoptó finalmente una resolución indicando que la corrupción constituía un fenómeno mundial.

En los 8 y 9 Congresos de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente se abordó el tema de la corrupción. En el 9 Congreso, el ex juez italiano Antonio di Pietro dijo que en materia de corrupción no había hacer la diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados, que el análisis debía basarse en la "democracia de la responsabilidad" y no en la "democracia de la prosperidad", que el fenómeno rebasaba las fronteras nacionales y que afectaba no sólo a los funcionarios sino al sector privado<sup>119</sup>.

<sup>119</sup> Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 29 de abril al 8 de mayo de 1995, Capítulo V A, párrafo 248, A/CONF.169/16.

En los últimos años se han aprobado convenios internacionales contra la corrupción (véase Capítulo VII, apartado 1). Pero como se verá en el párrafo citado, las sociedades transnacionales eluden las legislaciones nacionales y los convenios internacionales anticorrupción continuando esas prácticas delictivas a través de filiales cuyas sedes se encuentran en países donde no rigen dichas legislaciones y convenios.

A pesar de dichos convenios, y aunque se advierten ligeros progresos, la corrupción siguen gozando de buena salud, por ejemplo, en la Unión Europea. En el apartado 6 del Capítulo IV de este trabajo nos referimos a cómo la Comisión Europea trabaja en equipo con las grandes sociedades transnacionales europeas (la Mesa Redonda de los Industriales Europeos - ERT).

La corrupción es muchas veces un factor determinante de las privatizaciones y "desregulaciones", y de las condiciones en que éstas se realizan.

La faz internacional de esas privatizaciones con matices delictivos incluye el asesoramiento técnico y la financiación del Banco Mundial. Por ejemplo, éste aprobó en diciembre de 1992 un crédito de 30 millones de dólares, al 7,6% de interés anual, destinado al Perú, para financiar la asistencia técnica al programa de privatizaciones de dicho país. El Banco Mundial no sólo organiza el despojo del patrimonio nacional de diversos países, sino que se hace pagar por las víctimas del despojo y además con intereses usurarios.

En *Le Monde Diplomatique* de julio de 2001, en un recuadro al pie de la página 15 se cita a un funcionario del gobierno francés que habla de los "rapaces que en nombre de la libre empresa, por ejemplo en ocasión de las privatizaciones, se apoderan con total impunidad de sectores enteros de la economía".

Un cable de Interpress Service del 18 de octubre de 2005 dice:

El Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional vuelve a mostrar este año la comprometida situación del Sur, que cuenta con una pequeña ayudita de los bancos del Norte industrial.

"La fuga total de capitales anual de África es de unos 150.000 millones de dólares, mientras que el total del flujo de asistencia que recibe el continente asciende a 25.000 millones", dijo a IPS Chandrashekar Krishnan, director ejecutivo de la filial de Transparencia en Gran Bretaña.

"Esa fuga de capitales representa, básicamente, la ruta de los bienes estatales en manos de políticos corruptos", agregó Krishnan. "Ese dinero es depositado en instituciones financieras de Londres, de Zúrich, de Nueva York."

"Sugiero que los gobiernos occidentales hagan mucho más para asegurarse de que sus sistemas financieros no sean utilizados para lavar dinero", recomendó.

Pero el hecho de que los bancos de Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos reciban dinero sucio no queda marcado en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International (IPS, 18/10/2005).

## LA DEGRADACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Una de las manifestaciones más dramáticas de la degradación del medioambiente es el cambio climático, resultado de una multitud de causas que interactúan entre sí, algunas naturales y otras originadas en la actividad humana. Esta última influye cada vez más en dicho cambio como consecuencia de la irracionalidad del modelo económico dominante fundado en la ganancia máxima para un puñado de gigantescos grupos económicos que fomentan y promueven una cultura consumista, y de despilfarro en el sector de la población mundial que tiene un nivel de ingresos suficiente como para adoptarla<sup>120</sup>.

En 1974, se publicó el Modelo Mundial Latinoamericano, un informe preparado por un grupo de sociólogos y economistas de la región, con un enfoque crítico y diferente del informe preparado por Dennis Meadows para el Club de Roma, que se había publicado en 1972 con el título de "Los límites del crecimiento".

Aludiendo a este último informe, en el Modelo Mundial Latinoamericano se decía que la catástrofe ecológica prevista en otros modelos para un futuro más o menos lejano, era una realidad actual para buena parte de la humanidad<sup>121</sup>.

En efecto, hace ya tiempo que la deforestación está produciendo daños incalculables, que industrias contaminantes (muchas de ellas desplazadas de los países desarrollados a los países del Tercer Mundo) envenenan la atmósfera, el agua y la tierra, y que enormes cantidades de desechos tóxicos son también exportados de los países industrializados a los países menos avanzados<sup>122</sup>.

La deforestación es una importante causa concurrente a la degradación ambiental. Se pueden dar numerosos ejemplos, además del bien conocido caso de la Amazonia.

<sup>120</sup> Sobre el tema de este párrafo puede verse Peter Utting (ed.), *The Greening of Business in Developing Countries*, edición conjunta UNRISD y Zed Books, 2002. La relación entre el modelo económico dominante y los problemas ambientales está muy bien descrita, con gran cantidad de datos y una contribución especial de J. K. Galbraith (p. 42 de la versión en inglés), en el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 1998, del PNUD.

<sup>121</sup> Amílcar Herrera, *Un monde pour tous, Le modèle mondial Latino Américain*, Presses Universitaires de France, 1977.

<sup>122</sup> Véanse el informe de la relatora especial, señora Fatma Zohra Ouachi-Vesely, sobre los Efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos, presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo del 2000, E/CN.4/2000/50, y los informes de años anteriores sobre el mismo tema.



Así, en América Central, las áreas boscosas que en 1960 ocupaban el 60% de la superficie total del territorio, ahora ocupan sólo el 30%. Se estima que actualmente se pierden en esa región 350.000 hectáreas de bosques por año, lo que significa una tasa anual de deforestación del 1,5%, una de las más elevadas del mundo, con graves secuelas ecológicas, como por ejemplo la escasez de agua para el riego y para el consumo de las poblaciones urbanas. Esto es la consecuencia de un proceso así llamado de modernización por un lado, y de estrategias de supervivencia por el otro. La modernización ha consistido en la tala indiscriminada para vender la madera, extender las tierras de pastoreo para producir carne destinada a la exportación (la llamada "*hamburger connection*") producir banano, café y algodón también destinados a la exportación, explotar minas, etc.<sup>123</sup>

Las consecuencias sociales han sido el desplazamiento de sus tierras de los campesinos pobres y de los pueblos indígenas quienes, al ocupar nuevas tierras más alejadas, practican estrategias de supervivencia, talando árboles para usar la madera como combustible y también para venderla. Cuando los campesinos pobres y los indígenas quieren resistir el despojo de sus tierras, la represión y las matanzas no se hacen esperar. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo financian estos procesos de "modernización", cuyo resultado es la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el enriquecimiento de las elites locales incluidos los jefes militares, enormes beneficios para empresas transnacionales y el empobrecimiento y la degradación de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, en un marco de deterioro acelerado del medioambiente.

No ha sido ni es muy diferente la situación en África, donde a primera vista se pueden atribuir las hambrunas a las condiciones meteorológicas y a las guerras, pero un análisis más profundizado pone de manifiesto el papel funesto desempeñado por la colonización europea, que devastó enormes extensiones de bosques para apropiarse de las maderas, y fomentó los cultivos de exportación, como el café, el cacao y el maní, este último con efectos particularmente negativos para la conservación de la humedad de la tierra. Se marginaron los cultivos de subsistencia y se modificaron los hábitos agrícolas de los pueblos africanos, tales como el desplazamiento de los cultivos, la rotación y la acumulación de reservas, todos ellos aptos para afrontar sin hambrunas los periodos de sequía.

En África, los bosques fueron arrasados para proveer de maderas exóticas a los mercados de los países llamados civilizados. Entre 1930 y 1970 se estima que fueron destruidos entre el 25 y el 30% de los bosques húmedos

<sup>123</sup> Peter Utting, *The Social Origins and Impact of Deforestation in Central America*, UNRISD, Discussion Paper N° 24, 1991.

de África. Sobre todo en los últimos decenios, esta elevada tasa de deforestación con consecuencias ecológicas catastróficas (sequía y erosión) obedece en buena parte a la transformación de los bosques en tierras de cultivos de exportación, en un intento desesperado de obtener divisas para pagar los servicios de la deuda<sup>124</sup>.

En Asia la situación no es diferente. Por ejemplo Nepal, que posee en sus bosques maderas muy cotizadas, tiene además el triste privilegio de exhibir la tasa de deforestación más elevada del mundo, el cuatro por ciento anual<sup>125</sup>.

La deforestación, además de las consecuencias locales tales como la sequía, la erosión y los cambios en la temperatura, puede producir efectos climáticos en regiones vecinas o más alejadas como resultado de diferentes factores: cambio de dirección de los vientos dominantes, transformación de corrientes atmosféricas húmedas en corrientes secas, etc.

La gran preocupación suscitada por la contaminación atmosférica y los efectos previsibles del "efecto de invernadero": cambios climáticos importantes, transformación en desiertos de regiones enteras actualmente cubiertas de vegetación, aumento del nivel de los océanos, etc., llevó a la firma en 1997 del Protocolo de Kyoto.

El 11 de diciembre de ese año los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kyoto, a poner en ejecución un conjunto de medidas para reducir los gases con efecto de invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en un 5,2% de media sus emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004. Con la ratificación de Rusia se cumplió el requisito para que el protocolo de Kyoto entrara en vigor: la ratificación por parte de países industrializados responsables de, al menos, un 55% de las emisiones de CO<sup>2</sup>.

Casi todos los países del mundo ratificaron el Protocolo, salvo Estados Unidos, que considera que sería catastrófico para su economía someterse al mismo. Una campaña publicitaria, con un costo de 13 millones de dólares contra la firma del Protocolo por Estados Unidos fue financiada y realizada por la *Global Climate Coalition* compuesta, entre otras, por Ford, General Motors, Mobil y Union Carbide<sup>126</sup>. El 5 de marzo de 2007 el diario francés *Le Figaro*, haciendo eco de una noticia publicada en el *New York Times*, informó

<sup>124</sup> Solon Barradough y Krishna Guimire, *The social dynamics of deforestation in developing countries: Principal issues and Research Priorities*, Discussion paper N° 16, UNRISD, 1990.

<sup>125</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>126</sup> Véase Ann Doherty, *Les transnationales et leurs groupes de lobbying*, en *Empresas transnacionales y derechos humanos*, AAJ, CETIM y FICAT, Ginebra, 2000.

que Estados Unidos —que con el 22,3% del total mundial es el primer emisor de gases con efecto de invernadero (lo sigue China con el 15,9%)— comunicó oficialmente a principios de marzo de 2007 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) de la que Estados Unidos es parte, que en el decenio comprendido entre 2002 y 2012 aumentará dichas emisiones en un 11%, es decir, a un ritmo prácticamente igual al del decenio precedente (11,6%) en lugar de reducirlo en un 7% entre 1990 y 2012, como debería hacerlo de haber aceptado los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto.

En el Protocolo se introdujeron cláusulas autorizando a los principales emisores de dichos gases a comprar el derecho a contaminar, financiando proyectos de desarrollo limpios en los países pobres, y a obtener créditos para seguir contaminando a cambio de la plantación de bosques, que absorberían los gases contaminantes.

Se señala con frecuencia la importante contribución a la contaminación atmosférica que producen las emanaciones de los medios de transporte tales como los automóviles, los camiones y los aviones, y se propone la utilización de medios técnicos para disminuir dichas emanaciones.

Pero se oculta el hecho de que a causa de la organización económica y social dominante fundada en la ganancia, se produce una utilización excesiva de esos medios de transporte: del automóvil particular en las ciudades debido en parte a la carencia de un servicio público adecuado, de los otros medios de transporte a causa de la irracionalidad del sistema productivo, fragmentado en diversos países en función del objetivo de bajar los costos salariales y de las materias primas. Esta fragmentación de la producción en diversos sitios alejados entre sí (materias primas procedentes de lugares alejados de los centros de producción, estos últimos fragmentados y también alejados entre sí) da por resultado que en todo el proceso de elaboración de un producto hasta que llega al consumidor hay una alta y desproporcionada inversión de transporte, lo que constituye un factor agravante de la contaminación ambiental. Se cita con frecuencia el ejemplo de que un yogurt, desde que comienza a fabricarse hasta que llega al consumidor recorre centenares o quizás miles de kilómetros.

Un documento de la Unión Europea no lo dice directamente pero lo deja traslucir:

La supresión de las barreras al comercio y a los viajes transfronterizos ha aumentado el volumen de las mercancías de larga distancia y el transporte de pasajeros. El mismo fenómeno se ha repetido tras la ampliación de la UE en 2004 al aumentar considerablemente el transporte, sobre todo por carretera, entre los nuevos Estados miembros y el resto de la Unión.

El crecimiento constante de la movilidad impone una gran presión a los sistemas de transporte. La congestión en las carreteras y los

aeropuertos aumenta la contaminación, añadiendo un 6% al consumo estimado de combustible de la UE.<sup>127</sup>

Tampoco son mencionados, salvo por los activistas, los efectos contaminantes de las guerras: diseminación de productos tóxicos, derrame de petróleo provocado por la destrucción de oleoductos y de tanques de combustible, etc.

Se pretende falsamente, en el interés exclusivo de los grandes grupos económicos, que con los biocombustibles se puede solucionar, por los menos en parte, el problema de la contaminación ambiental, sin modificar un ápice las causas profundas de la misma (véase la última parte de la nota 116). (131?)

Se podrían dar numerosos ejemplos de la relación entre el sistema económico-social dominante y la degradación del medioambiente. En el apartado 2 d) de este Capítulo hemos dado el del uso de pesticidas tóxicos por parte de sociedades transnacionales en las plantaciones bananeras de América Central, con graves consecuencias para el medioambiente y para la salud de los trabajadores; en el apartado 3 del Capítulo VII nos referimos a la catástrofe de Bhopal, una de las mayores, sino la mayor tragedia humana en materia de contaminación ambiental, provocada por la negligencia deliberada de la Union Carbide. Varias empresas petroleras son acusadas de contaminar las aguas y el medioambiente donde realizan su explotación, entre ellas Texaco en Ecuador, Oxi en Colombia, Shell en Nigeria, Repsol en Argentina y en Bolivia, etc. El mismo reproche se les hace a empresas mineras en distintas partes del mundo.

Merece un párrafo aparte la contaminación de los mares y de las costas causada por buques tanques petroleros propiedad de grandes empresas transnacionales o fletados por éstas, cuando sufren averías o naufragan, o cuando proceden a la limpieza de sus tanques en alta mar.

Periódicamente la flora y la fauna marítima, y las costas, son contaminadas a causa de mareas negras provenientes de barcos petroleros. Entre los casos más notorios cabe citar: Torrey Canyon en 1967, Olympic Bravey en 1976, Boehlen en 1976, Amoco Cádiz en 1978, Tanio en 1980, Exxon Valdez en 1989<sup>128</sup>, Erika en 1999 y Prestige en 2002. Esta contaminación

<sup>127</sup> Véase [http://europa.eu/pol/trans/overview\\_es.htm](http://europa.eu/pol/trans/overview_es.htm)

<sup>128</sup> En diciembre de 2006 la Corte de Apelaciones de San Francisco redujo de 4,5 a 2,5 mil millones de dólares el monto de los daños punitivos que Exxon debe pagar a las víctimas por la catástrofe ecológica de 1989. El Tribunal estimó que había varias circunstancias atenuantes a favor de la empresa, pese a que en la sentencia se refirió "al comportamiento irresponsable de la compañía que puso al comando del supertanker a un alcohólico reconvicto". Por su parte, un responsable de la organización ecologista estadounidense PIRG declaró que era "escandaloso que la compañía petrolera más rentable del mundo pueda obtener una reducción de los daños punitivos". Exxon obtuvo en los primeros meses de 2006 un beneficio neto de 29,2 mil millones de dólares sobre un monto de negocios de 287,6 mil millones (AFP, 22/12/2006).

de los mares resulta también de la erupción accidental de pozos petroleros y de plataformas en alta mar (Ekofisk en 1977, Ixtoc en 1979 y Piper Alpha en 1982), y de operaciones clandestinas de limpieza de los "tankers" cerca de las costas<sup>129</sup>.

El transporte marítimo de otras materias peligrosas puede provocar también la contaminación de los mares. Esta contaminación de los mares y de las costas es el resultado de una estrategia empresarial consistente en utilizar navíos viejos y en mal estado y, para eludir la responsabilidad en caso de accidente (y también para eludir las leyes laborales) el navío enarbola bandera de complacencia (más de la mitad de los barcos existentes están registrados en un país que no es el de la sede o domicilio del propietario), se crean sociedades propietarias pantalla, etc.

El Prestige es un ejemplo en ese sentido: era uno de esos navíos (el 40% de los que navegan por los mares) que no respetaban las normas vigentes. Había sido construido hacia 26 años en Japón, propiedad de una empresa domiciliada en Liberia, estaba matriculado en las Bahamas, armado por la filial suiza de un conglomerado ruso, explotado por una empresa griega con una tripulación compuesta de griegos, rumanos y filipinos trabajando en condiciones deplorables. Había sido declarado apto para navegar por una sociedad de certificación estadounidense y remolcado por un barco chino.

El Prestige es una ilustración de los subterfugios a que recurren las sociedades transnacionales para eludir sus responsabilidades. En el Capítulo VII desarrollamos el tema de esa responsabilidad.

Existe un organismo intergubernamental para indemnizar a las víctimas de las contaminaciones por hidrocarburos, el FIPOL, financiado por los petroleros de sus 85 Estados Miembros. Es un sistema que permite limitar la responsabilidad de los propietarios de navíos (85 millones de euros para los más importantes) y la indemnización del FIPOL tiene un "plafond" de 180 millones de euros, muy por debajo del monto de los daños causados por grandes catástrofes, como las provocadas por el Erika o el Prestige.

## Los organismos genéticamente modificados.

En 2006, la superficie mundial de los cultivos con plantas transgénicas continuó aumentando: un 13% respecto a 2005, 12 millones de hectáreas en cifras absolutas, alcanzando a 102 millones de hectáreas. En el mismo año, los nueve primeros países con cultivos transgénicos han sido (en millones de hectáreas y productos): Estados Unidos, 54,6 de soja, maíz, algodón, canola (colza), calabaza, papaya y alfalfa; Argentina, 18 de soja, maíz y algodón;

<sup>129</sup> Los casos enumerados están entre los que tuvieron más difusión pública. En realidad, el número de dichos accidentes es mucho mayor. Se puede consultar una lista bastante completa en [http://www.cetmar.org/documentacion/mareas\\_negras\\_catastrofes.htm](http://www.cetmar.org/documentacion/mareas_negras_catastrofes.htm)



Brasil, 11,5 de soja y algodón; Canadá, 6,1 de canola, maíz y soja; India, 3,8 de soja, maíz y algodón; China, 3,5 de soja y algodón; Paraguay, 2 de algodón; Sudáfrica, 1,4 de algodón; Uruguay 0,4 de maíz y soja. Los países con superficies de cultivos transgénicos entre 50 y 200 mil hectáreas son: Filipinas, Australia, Rumania, México y España, y con superficies inferiores a 50.000 hectáreas: Colombia, Francia, Irán, Honduras, República Checa, Portugal, Alemania y Eslovaquia<sup>130</sup>. Al parecer, Rumania ha prohibido el cultivo de transgénicos a partir de enero de 2007.

Grandes sociedades transnacionales, como Monsanto, manipulan y difunden semillas genéticamente modificadas, privilegiando la rentabilidad inmediata de sus inversiones sobre el principio de precaución.

En 1994 el Congreso brasileño aprobó una ley de Bioseguridad que fue reglamentada por el poder ejecutivo en enero de 1995. En Brasil, formalmente las empresas deben cumplir con esta ley y sus peticiones de autorización son analizadas por una Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) creada por esa ley. Los primeros ensayos en pequeña escala –mal fiscalizados por la autoridad pública– comenzaron a hacerse en 1997 y, ya al año siguiente, Monsanto tenía la autorización para vender la soja resistente al glifosato. Para la liberación de la soja de Monsanto el ministerio de Agricultura estimaba que sus pruebas, que analizaban apenas la eficacia agronómica del producto, eran suficientes. Pero no se habían hecho estudios de impacto ambiental ni de posibles consecuencias en la salud humana. Dos organizaciones sociales –Greenpeace Brasil, y el Instituto de Defensa del Consumidor (IDEC)– iniciaron una acción civil en la justicia federal que tuvo éxito porque obtuvieron suspensiones de las liberaciones de transgénicos y poco después la justicia resolvió prohibirlos en forma cautelar. Pero en agosto de 2003 una jueza anuló dicha medida cautelar.

El veredicto fue festejado por Monsanto y por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), que representa a los empresarios rurales, como una “liberación” de la siembra comercial de la variedad de soja producida por Monsanto con la marca Roundup Ready (RR).

Monsanto produce una serie de semillas genéticamente modificadas de soja, trigo, algodón y maíz, y fabrica el herbicida Roundup, que contiene glifosato. Las semillas genéticamente modificadas que produce Monsanto reciben el nombre de Roundup Ready, por su capacidad de resistir al herbicida Roundup que contiene glifosato.

Distintas fuentes afirman que los productos transgénicos y los herbicidas tolerados por dichos transgénicos, además de provocar enfermedades

<sup>130</sup> Fuente: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA). [www.isaaa.org](http://www.isaaa.org).



en los seres humanos, pueden arruinar las especies naturales, erosionar los suelos y alterar su sistema bacteriano natural haciéndolos poco aptos para los cultivos.

Por ese motivo se aplica, o se trata de aplicar, con respecto a los transgénicos, el llamado principio de precaución, consistente en no autorizar su consumo humano hasta que no esté fehacientemente probado que no afectan al organismo.

En el informe anual, publicado en mayo 2004, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se dice que los transgénicos podrían ayudar a combatir el hambre en el mundo<sup>131</sup> pero, agrega el informe, todavía quedan dudas sobre las repercusiones que el uso de transgénicos puede tener en la salud. Los primeros datos científicos sobre la influencia de la ingeniería genética demuestran que es necesario seguir investigando. "En general, los científicos están de acuerdo en que los cultivos transgénicos sembrados en la actualidad y los alimentos derivados de ellos son inocuos, a pesar de que se sabe poco de sus efectos a largo plazo", explica Jacques Diouf, director general de la FAO.

---

<sup>131</sup> La FAO atribuye a la biotecnología un poder que no tiene o lo tiene relativamente: ayudar a combatir el hambre en el mundo. Hay regiones donde los alimentos escasean a causa de conflictos armados, de desastres naturales, del abandono de cultivos tradicionales destinados a la alimentación local a favor de cultivos intensivos y erosionantes destinados a la exportación (hay que conseguir divisas para pagar la deuda externa y los productos manufacturados importados), pero globalmente el planeta dispone de alimentos suficientes para alimentar adecuadamente a toda la humanidad. Las causas fundamentales del hambre en el mundo son la mala distribución de los alimentos a escala planetaria, la ausencia de una política agrícola nacional de seguridad alimentaria, y la falta de poder adquisitivo de los más pobres, que no les permite adquirir alimentos suficientes. Y sobre todo, el hecho de que millones de campesinos en el mundo carecen de tierra y no tienen acceso al agua.

Contradictoriamente, mientras se habla por un lado de la escasez de alimentos y de que la población mundial crece más rápidamente que la producción agrícola, ahora se propaga la idea y comienza a ponerse en práctica la fabricación de biocombustibles (Brasil hace ya algunos años que está a la vanguardia en la materia). Con falsos argumentos ecológicos de que el uso de biocombustibles permitirá disminuir la contaminación ambiental, su promoción lleva inexorablemente a sustraer a la alimentación humana y a la cadena alimentaria una buena parte de la producción agrícola. Quizás eso sirva para dar salida a la sobreproducción agrícola (subsidiada) de unos cuantos países ricos pero será sin duda un factor agravante de la crisis alimentaria en los países pobres. Como muy gráficamente dice el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil en un documento publicado a fin de febrero de 2007: "No podemos mantener los tanques llenos y las barrigas vacías". Pueden encontrarse varios artículos interesantes sobre esta cuestión en el Boletín núm. 112 del Movimiento Mundial de los Bosques ([www.wrm.org.uy](http://www.wrm.org.uy)). En uno de ellos se dice con razón: "Resulta por tanto evidente que ésta no es una buena solución ni para la gente ni para el ambiente. Sin embargo, es una excelente oportunidad de negocios para grandes empresas que operan a nivel nacional y en particular para las grandes transnacionales. Entre ellas se cuentan las vinculadas a la producción y comercialización de productos agrícolas de exportación, las industrias biotecnológica y química (que aumentarán sus ventas de material transgénico e insumos agrícolas), la industria automotriz (que podrá seguir creciendo bajo un manto "verde"), las nuevas empresas surgidas en la ola de los biocombustibles y las propias empresas petroleras, que ya se están incorporando a este nuevo y lucrativo negocio".

Pero la determinación científica de la peligrosidad o no de los OGM para el ser humano está perturbada por los enormes intereses en juego.

En su libro *Ces OGM qui changent le monde*<sup>132</sup>, Gilles-Éric Séralini, investigador en biología molecular y experto ante la Unión Europea, escribe que la aplicación del principio de precaución consistente en determinar la inocuidad de los OGM se enfrenta al problema de que los investigadores y especialistas que deben pronunciarse sobre dicha inocuidad son incitados por los gobiernos de los países ricos a colaborar con los industriales, y de que la gran mayoría de ellos y de los institutos de investigación es subvencionada por dichos gobiernos y por fondos privados, como por ejemplo en Francia la Plataforma biotecnológica Genoplante. Existe manifiestamente un conflicto de intereses que induce a poner en tela de juicio la objetividad y neutralidad de esos especialistas. Y agrega Séralini que los investigadores independientes, que pueden realizar dictámenes periciales contradictorios, no reciben la misma generosa ayuda financiera.

En un documento elaborado en abril de 2006 por Amigos de la Tierra Europa y Greenpeace<sup>133</sup> se informa que la Comisión Europea puso fin a la moratoria resuelta en 1998 para todos los OGM y comenzó a autorizar algunos transgénicos. Así, en mayo de 2004 autorizó la importación del maíz dulce OGM Bt 11 destinado a la alimentación humana, a pesar de la oposición de la mayoría de los Estados europeos, y desde septiembre de 2004 la misma Comisión agregó 31 variedades de maíz transgénico Monsanto MON810 al catálogo común de semillas de la Unión Europea.

Dice Séralini,

En Europa los agricultores para cultivar, percibir subvenciones y comercializar sus cosechas en gran escala, deben comprar sus semillas sobre un catálogo llamado oficial. El papel de los proveedores de semillas es seleccionar las más rendideras y ponderan las características de una variedad autorizada. Las compañías que venden semillas (transgénicas o no) son con frecuencia grandes grupos, como Novartis (ahora Syngenta), Monsanto, Rhône Poulenc o Aventis, BASF, Du Pont de Nemours... Hemos visto que que las nuevas variedades más reputadas del catálogo han sido cruzadas varias veces en algunos años con las OGM y se han convertido, según la reglamentación en vigor, en transgénicas... cuando, en los próximos años las variedades más cultivadas estarán disponibles en el catálogo en su versión OGM, los agricultores no tendrán muchas opciones, y los dueños de los brevets de esas semillas poseerán los derechos de reproducción de los maíces

<sup>132</sup> Gilles-Éric Séralini, *Ces OGM qui changent le monde*, Champs Flammarion, Paris, 2004, p. 16.

<sup>133</sup> Friends of the Earth Europe, Greenpeace, *Commission Européenne et OGM: les doutes qu'on nous cache*. La Comisión Europea, obligada por un recurso presentado por Friends of the Earth Europe, tuvo que dar acceso a los informes científicos que había mantenido secretos. Véase <http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/ogm-commission-europeenne.pdf>

ricos, de todos los cereales y de todas las legumbres patentadas... Como para dominar la agricultura mundial<sup>134</sup>.

El documento de Amigos de la Tierra y Greenpeace cita informes científicos que mantuvo secretos la Comisión Europea, para demostrar que ésta, mientras por un lado se apoya en dichos informes para invocar las incertidumbres existentes sobre las consecuencias de los OGM para el medioambiente y la salud en el litigio comercial que opone Argentina, Canadá y Estados Unidos a la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio, por otro lado, para autorizar la introducción de transgénicos en Europa, adopta la posición contraria y se basa en los informes y las evaluaciones favorables a los OGM de la transnacional Monsanto. El documento de las dos organizaciones concluye que "la Comisión Europea más bien favorece los intereses de las industrias biotecnológicas que la protección del medioambiente y de la salud humana".

En enero de 2007 circulaba por internet un vídeo en francés, mostrando investigaciones efectuadas sobre ratas que demostrarían los efectos dañinos para el organismo de la soja transgénica, y también la falta de transparencia respecto a esta cuestión con que actúan el gobierno francés y los organismos pertinentes de la Unión Europea<sup>135</sup>.

En cuanto al herbicida Roundup, estudios científicos afirman que el glifosato produce o puede producir graves efectos sobre la salud. Por ejemplo, el equipo de investigación sobre ciclos celulares y desarrollo de la Comisión Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) ha demostrado el carácter potencialmente cancerígeno de Roundup. Este estudio ha sido publicado en *Chemical Research in Toxicology* en 2002, y en *Toxicological Science* en 2004. En febrero 2004 la revista *Environmental Health Perspective* publicó un estudio sobre el potencial "perturbador endocrino" de Roundup.

El 26 de enero de 2007, en uno de los juicios en curso contra Monsanto en Francia, iniciado como consecuencia de una denuncia de la Asociación Eau et Rivières de Bretagne, la 5 Cámara Correccional de los Tribunales de Lyon dictó sentencia condenando a la empresa transnacional a pagar una multa por un monto ínfimo de 15.000 euros, después de declararla culpable del delito de "publicidad mentirosa". En las etiquetas y piezas publicitarias de su herbicida Roundup, Monsanto anunciaba que "es totalmente biodegradable" y que su uso deja "el suelo limpio". En sus considerandos, el tribunal de Lyon sostuvo que el glifosato no es biodegradable ni siquiera según las especificaciones del producto incluidas por Monsanto en el embalaje, y por tanto tampoco deja el suelo limpio, más aún teniendo en cuenta que se

<sup>134</sup> Seralini, ob. cit., pp. 71, 72 y 77.

<sup>135</sup> Véase <http://video.google.fr/videoplay?docid=-8996055986353195886>

recomienda su uso permanente. Además, el Tribunal señaló que Monsanto y la sociedad Scotts France, que es la distribuidora exclusiva de Roundup en Francia, y que también fue condenada por el Tribunal a una multa de 15.000 euros, conocían las características ecotóxicas del producto, pero que a pesar de ello difundieron mensajes publicitarios engañosos "conteniendo argumentos ecológicos erróneos con el objetivo de hacer creer falsamente en la existencia de una inocuidad total e inmediata para el ambiente de sus productos". Según un organismo francés competente en la materia, el Institut Français de l'Environnement (IFEN), las dos moléculas químicas de Roundup se encuentran en el 55 y 35%, respectivamente, de las aguas superficiales francesas<sup>136</sup>.

La biotecnología y las técnicas agrícolas pueden mejorar la calidad de los cultivos y la cantidad de las cosechas. Pero también pueden tener un efecto diametralmente opuesto.

En los años setenta la "revolución verde" iba a terminar con el hambre en el mundo. El uso de fertilizantes, de pesticidas, de plantas híbridas permitiría incrementar enormemente la producción y acabar con el hambre. Aparte de las ganancias embolsadas por grandes transnacionales fabricantes de pesticidas, de fertilizantes y de híbridos, el resultado global de dicha "revolución" fue nulo, con el agravante de las enfermedades producidas por pesticidas y fertilizantes, y el deterioro de especies naturales causada por la introducción de híbridos.

Ocurre lo mismo con los transgénicos y los herbicidas tolerados por dichos transgénicos, que pueden arruinar las especies naturales, erosionar los suelos y alterar su sistema bacteriano natural haciéndolos poco aptos para los cultivos, y provocar enfermedades en los seres humanos. Lo anterior, sin ayudar en absoluto a combatir el hambre en el mundo, pero sí a aumentar enormemente las ganancias de grandes conglomerados transnacionales, que pasan a controlar la producción agrícola a través de sus semillas transgénicas patentadas que los agricultores están obligados a comprar para cada siembra, so pena de transgredir los derechos de patente del fabricante.

<sup>136</sup> Véase [www.eau-et-rivieres.asso.fr/index](http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index).

## CAPÍTULO 4

# Relaciones entre las sociedades transnacionales y los poderes políticos nacionales y las organizaciones internacionales

Utilizando su enorme poder, las sociedades transnacionales se han rodeado de una constelación de economistas, juristas, periodistas, profesores universitarios, sociólogos, politólogos, organizaciones no gubernamentales, etc. Y sobre todo, tienen a su servicio a la mayoría de los dirigentes políticos de los Estados y a altos funcionarios de las organizaciones internacionales<sup>137</sup>. Eso les permite desarrollar una intensa actividad en posición dominante a escala planetaria en todos los ámbitos de la actividad humana.

La enorme influencia de las sociedades transnacionales sobre la sociedad humana en general se ha convertido en una amenaza real y actual para la democracia en cada país y para la paz y la democracia en el mundo en general.

## LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES Y LOS GOBIERNOS

Si bien en todos los países existen estrechas relaciones entre el poder político y el poder económico, representado principalmente este último por las grandes sociedades transnacionales, el caso paradigmático de esta relación es el de Estados Unidos, donde más que de relación puede hablarse, sobre todo actualmente, de fusión o confusión entre el poder político y el poder económico.

En efecto, para verificar esto basta analizar los *currículum* del presidente Bush, del vicepresidente Cheney y de los ministros, secretarios o consejeros, y podrá comprobarse la confluencia entre los intereses privados que éstos representan y la política, tanto interior como exterior, del gobierno.

---

<sup>137</sup> "Soy estúpido, pero como el dinero es el espíritu real de todas las cosas su poseedor no puede ser estúpido. Además, puede comprar a los que tienen talento y ¿no es acaso el que tiene poder sobre los inteligentes más inteligente que ellos?" Karl Marx, *Manuscritos económico-filosóficos*, (Tercer Manuscrito), Grijalbo, México, 1971.

El "Center for Responsive Politics" tiene en su sitio web un documento<sup>138</sup> en el que proporciona el detalle de los vínculos de Bush, del vicepresidente Cheney y de los miembros del gabinete del presidente con grandes corporaciones transnacionales, y llega a la conclusión de que los funcionarios que no tienen una estrecha relación con sociedades transnacionales constituyen una excepción.

En el documento se dice que Bush es un "hombre del petróleo texano" aunque no tuvo éxito como empresario independiente.

Dick Cheney, desde 1995 hasta agosto de 2000, un mes después de que Bush lo eligió como su compañero de fórmula, fue director ejecutivo de Halliburton, la más grande compañía mundial de servicios vinculada a la industria petrolera. Dicha empresa mantuvo estrechas relaciones comerciales con una empresa petrolera rusa, la Tyumen Oil Co., acusada de estar vinculada a la mafia rusa y al tráfico de drogas. Bajo la dirección de Cheney, la sociedad Halliburton, en buena parte a través de su subsidiaria Kellogg Brown & Root (KBR), obtuvo contratos gubernamentales por 2300 millones de dólares, la mayoría de ellos con el Ejército, para construir instalaciones militares en Albania, Bosnia, Kosovo y Haití, entre otros lugares<sup>139</sup>.

Después, Halliburton adquirió una posición dominante en la "reconstrucción" de Irak. En marzo de 2003, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense encargó a Kellogg Brown & Root (KBR), subsidiaria de Halliburton, la reparación de las infraestructuras petroleras iraquíes según las modalidades definidas por Halliburton tres meses antes. Todo ello sin licitación. Halliburton pasó del décimonoveno lugar entre los proveedores de las fuerzas armadas estadounidenses en 2002 al primer lugar en 2003, por un total de 4200 millones de dólares, comprendido el mantenimiento y la alimentación de las tropas de Estados Unidos en el extranjero, negocio que en setiembre de 2004 representaba 8600 millones de dólares, incluyendo sobrefacturaciones, mil millones de gastos "dudosos" y 422 millones de gastos "injustificados", según un informe de la comisión política demócrata del Senado estadounidense. KBR facturaba 20.000 comidas por día y servía 10.000, incluyendo alimentos congelados vencidos después de un año. "...Prácticamente todos los aspectos del contrato quedaron bajo el control de la oficina del Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Eso me perturbaba". (Bunnatine Greenhouse, responsable de la atribución de contratos del Cuerpo de atribución de contratos del Cuerpo de Ingenieros)<sup>140</sup>.

<sup>138</sup> The Bush Administration: Corporate Connections, en [www.opensecrets.org/bush/cabinet.asp](http://www.opensecrets.org/bush/cabinet.asp).

<sup>139</sup> Cheney Led Halliburton to feast at Federal Trough. State Department questioned deal with firm linked to Russian mob, en [www.publici.org/story](http://www.publici.org/story).

<sup>140</sup> *Diario Le Monde*, 30/06/2005. "Les démocrates relancent l'offensive contre les "passe-droits" accordés par l'administration à Halliburton".



En septiembre de 2005, Halliburton y su filial KBR aparecen en posición privilegiada para hacer grandes negocios en la región devastada por el ciclón Katrina (véase el Capítulo II).

El ahora ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, está vinculado a una serie de grandes empresas: entre ellas Pharmacia, General Instrument, Motorola, Gulfstream Aerospace, absorbida por General Dynamics, Kellogg y también a la transnacional sueco-suiza Asea Brown Boveri<sup>141</sup>.

La ex consejera Nacional de Seguridad y actual Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, estuvo en el directorio de Chevron (actualmente Chevron Texaco), transnacional petrolera sumamente interesada en los yacimientos de la cuenca del Mar Caspio. Sus servicios fueron tan apreciados que quisieron ponerle su nombre a un buque-tanque de 130.000 toneladas. Fue también miembro de las transnacionales de corretaje Charles Schwab y de seguros Transamerica Corporation.

Si se consultan las fuentes mencionadas, se puede apreciar que si bien la industria petrolera y de armamentos son dominantes en el equipo Bush, está igualmente bien representada toda –o casi toda– la cúpula del poder económico.

La quiebra de Enron ha sacado a la luz pública el tráfico de influencias a favor de dicha empresa ejercido por Bush y por Cheney, compensado con generosas donaciones para la campaña electoral.

Ya en 1988 el actual presidente Bush intentó presionar al gobierno argentino, invocando su condición de hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, para que firmara un contrato con Enron mediante el cual el Estado latinoamericano vendería gas a la sociedad transnacional a un precio extremadamente bajo<sup>142</sup>.

El vicepresidente Cheney, invocando el "privilegio ejecutivo", se ha negado a revelar a una Comisión de la Cámara de Representantes las actas de las reuniones de la "task force" sobre política energética que él preside, celebradas en 2001 con los ejecutivos de Enron, de donde surgirían las ventajas obtenidas por dicha empresa en el proceso de desregulación del mercado energético en Estados Unidos<sup>143</sup>.

No es difícil establecer la estrecha relación entre los intereses representados en el gobierno de Bush y su agresiva y belicista política exterior, que ha tomado un extraordinario impulso después del 11 de septiembre de 2001

<sup>141</sup> Véase [www.transnationale.org](http://www.transnationale.org).

<sup>142</sup> David Corn, *Hebdomadario, The Nation*, Estados Unidos, 1994, artículo reproducido en febrero de 2002. Rodolfo Terragno (ex ministro argentino de Obras Públicas), George W. Bush, Enron y yo, *La Nación*, Buenos Aires, 18 de enero de 2002.

<sup>143</sup> [www.salon.com/politics/feature/2002/01/29/cheney\\_enron](http://www.salon.com/politics/feature/2002/01/29/cheney_enron).

en nombre de la "guerra contra el terrorismo": los Estados designados como "delincuentes" o refugio de terroristas tienen en común grandes reservas petroleras u otros recursos naturales, entre ellos el agua. Lo mismo que la mayoría de los países y regiones donde se han instalado o han incrementado su presencia últimamente fuerzas militares estadounidenses.

La promoción de los intereses de la industria de armamentos y la opción por una economía de guerra se reflejan en el proyecto de presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos para 2003 y los años siguientes, dividido en seis sectores con aumentos que van del 21 al 157%, totalizando algo menos de 380.000 millones de dólares para 2003<sup>144</sup>. Esto es una inversión de la tendencia de los últimos años, pues los gastos militares como porcentual del PIB habían disminuido desde 1994 al 2000 (3% en 1999 y 2000, 3,5% en 2003), aunque en cifras absolutas el presupuesto militar está aumentando por lo menos desde 1998.

En febrero de 2007 Bush presentó al Congreso el proyecto de presupuesto. Si fuera aprobado, autorizaría un gasto de 716.500 millones de dólares en defensa entre principios de 2007 y el 30 de septiembre de 2008, incluidos 235.100 millones de dólares en Irak y Afganistán (diversas fuentes). Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) de París, en un artículo publicado el 19 de febrero de 2007, proporciona las siguientes cifras para el año fiscal 2008: 623.000 millones de dólares, comprendido el presupuesto ordinario del Pentágono y los "extras" para las guerras de Irak y Afganistán. Un aumento del 10,5% con relación al año anterior y de 62% con relación a 2001<sup>145</sup>.

Si bien los estrechos lazos entre el poder político y el poder económico en el gobierno Bush tienen características caricaturescas, dichos vínculos son una constante tanto en Estados Unidos como en casi todos los Estados del planeta. En Francia, la subordinación del gobierno a los intereses y a la avaricia ilimitada de los grandes patrones, además de constituir una fuente de inspiración para los humoristas políticos, tiene graves consecuencias sociales en materia de empleo, salud, educación, salarios, seguridad social, etc.

Un cambio en el elenco político puede producir también un cambio de ciertos sectores económicos por otros en la primera línea de las ventajas que ofrece el control de la administración del Estado, pero nada más.

<sup>144</sup> Datos obtenidos de [nizkor@derechos.org](mailto:nizkor@derechos.org). Fuente: Información del Departamento de Estado de Estados Unidos, 7/2/02, en [www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020205-serdef2.html](http://www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020205-serdef2.html).

<sup>145</sup> Se puede tener una idea de cómo se realiza la gestión de esas sumas astronómicas si se sabe que el monto de los contratos celebrados sin licitación por el Ministerio de la Defensa de dicho país durante los seis últimos años ha sido de 362 mil millones de dólares, lo que representa el 40% de los contratos desde 1998. Entre los principales beneficiarios de dicha irregularidad se encuentra, como hemos señalado, Halliburton, que ha obtenido numerosos contratos en Irak. Información publicada el 1 de octubre de 2004 en la página 44 del diario económico francés *La Tribune* citando como fuente al *Centre for Public Integrity* de Estados Unidos.

Incluso puede acontecer que grandes partidos con programas aparentemente diferentes, que generalmente se alternan en el gobierno al ritmo de las elecciones y del descontento pendular de la población, se ponen de acuerdo para gobernar conjuntamente, poniendo así de manifiesto que más allá de las apariencias tienen en común una cuestión esencial: la gestión de los intereses del gran capital.

Como ocurre en Alemania, donde los aparentemente irreconciliables rivales Socialdemócratas (SPD) por un lado, y la coalición de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) por el otro, gobiernan ahora juntos en una "gran coalición", llevando a la práctica una política francamente antisocial.

## **LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES Y LAS NACIONES UNIDAS**

En 1978 la organización no gubernamental Declaración de Berna, publicó un folleto titulado *L'infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies*, donde se explicaban de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales (Brown Boveri, Nestlé, Sulzer, Ciba Geigy, Hoffmann La Roche, Sandoz, Massey Ferguson, etc.) para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ahora ya no se trata de "infiltración", sino que se le han abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, a las que se las llama "actores sociales", siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros en detrimento de los Estados y de los gobiernos, que se ven reducidos al papel de gestores del sistema dominante.

La asociación ("*partnership*") con instituciones de la llamada "sociedad civil" contribuye a acentuar la posición hegemónica planetaria de las sociedades transnacionales derivada de su poderío económico y financiero, lo que les permite ejercer un papel preponderante, no sólo en la formulación de las orientaciones económicas y financieras, sino también en los ámbitos político, social y cultural.

La idea de incorporar a los "actores sociales" o "sociedad civil" a la cúpula de la ONU inspira a la Secretaría General de las Naciones Unidas desde hace algunos años, y se adoptó oficialmente con el lanzamiento del *Global Compact*, el 25 de julio de 2000, en la sede de la ONU en Nueva York, con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros "representantes de la sociedad civil". Entre las sociedades participantes en el *Global Compact*, se encuentran entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Rio Tinto y Novartis, con densos "currícula" en materia de violación de los

derechos humanos y laborales, o de daños al medioambiente; la Lyonnaise des Eaux (ahora Suez), cuyas actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en Argentina y en Francia, y más recientemente en Chile<sup>146</sup>. Participaron también en dicha inauguración cinco asociaciones patronales y nueve ONG, entre las cuales Amnesty International (que tiene en su sede en Londres un Grupo "business", fundado en 1991 y dirigido hasta el 2001 por sir Geoffrey Chandler, ex director de Shell International) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

Cuando se habla de la participación de los "actores sociales" o de la "sociedad civil", se pretende hacer creer que es una forma de participación ciudadana o popular, cuando en realidad se trata de lo que Gramsci, siguiendo a Hegel y a Marx, denomina sociedad civil; el gran capital, los medios de comunicación controlados por aquél, la parte de la intelectualidad y de las diferentes organizaciones sociales al servicio del sistema dominante, funcionando junto al Estado pero fuera de él como aparatos de dominación económica, hegemonía ideológica y control social. Hegel incluso a veces la denominaba sociedad civil y otras, más claramente, "sociedad burguesa" (*bürgerliche Gesellschaft*).

Esta alianza entre la ONU y las grandes sociedades transnacionales crea una peligrosa confusión entre una institución política pública internacional como las ONU, que según la Carta representa a "los pueblos de las Naciones Unidas", y un grupo de entidades representativas de los intereses privados de una elite económica internacional. Dicha alianza va, pues, en sentido exactamente opuesto al necesario proceso de democratización de la Organización. La presencia de algunas ONG, así tengan una gran reputación internacional, no cambia el contenido profundamente antidemocrático y contrario a la Carta de las Naciones Unidas del *Global Compact*.

El *Global Compact* fue anunciado en 1998 por el Secretario General de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado "La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible" (A/52/428).

El Secretario General decía en ese informe que "...la desregulación... se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo" (párr. 50 del Informe), y propugnaba la venta de las empresas públicas confiando "...la propiedad

<sup>146</sup> Sobre la privatización del agua potable véase el informe del 1 de marzo de 2002 a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del señor Miloon Kothari, Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, E/CN.4/2002/59, párrs. 55 a 65. Véase también el informe del Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, El Hadj Guisse, sobre el derecho a disponer de agua potable, párrs. 58; 59 y 60, E/CN.4/Sub.2/2004/20.

y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros" (párr. 29). Al comienzo del mismo párrafo se pronuncia contra la "amplia distribución del capital de las empresas privatizadas", es decir, contra la participación de los pequeños ahorristas. La propuesta es clara: todas las grandes empresas rentables deben estar monopolizadas por el gran capital transnacional.

Es un intento de legitimación de la política practicada a escala mundial de malvender las empresas públicas rentables (a veces mediante procedimientos francamente corruptos) para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

El Secretario General, en su Informe, parecía ignorar que el sector público ha contribuido al progreso y a la cohesión sociales, y a la innovación tecnológica. Omite además tener en cuenta que, con frecuencia, imponer los criterios de gestión propios del sector privado, entre ellos el de ganancia, tiene un efecto negativo sobre las empresas públicas, y socava los fines de las mismas y la noción de servicio público.

Georg Kell, director ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas (*Global Compact*) escribía en 2004 en el prólogo a un documento de una organización llamada SustainAbility titulado "La ONG del siglo XXI, en el mercado por el cambio":

Además, se hace necesario, dada la supremacía de las demandas en los mercados, que los agentes sociales se pongan al día en los fundamentos del mercado actual con el fin de alcanzar sus objetivos. El Pacto Mundial es un experimento ambicioso de colaboración de múltiples grupos de interés dirigido a incorporar los principios universales sobre derechos humanos, trabajo y medio ambiente a los mercados globales<sup>147</sup>.

Manifiestamente el mercado, y no el ser humano, está en el centro de las preocupaciones del *Global Compact*. Ahora la Secretaría General se empeña en potenciar esta cruzada neoliberal promoviendo la formación de sucursales del *Global Compact*, formadas por empresarios y Gobiernos, en distintos países.

<sup>147</sup> [www.ecodes.org/documentos/resumen\\_siglo\\_XXI.pdf](http://www.ecodes.org/documentos/resumen_siglo_XXI.pdf). La ilustración que acompaña al documento es inequívoca en cuanto a la ideología de su contenido: una cantidad de relucientes carritos de los que se utilizan para hacer las compras en los supermercados. Un párrafo del documento despeja cualquier duda que pudiera subsistir: "Las ONG del siglo XX pasaron la segunda parte del siglo como outsiders, desafiando al sistema. Las ONG del siglo XXI se integrarán en él progresivamente. Las ONG del siglo XX se centraron en los problemas, considerados como síntomas del fracaso del mercado. Las ONG del siglo XXI se ocuparán de las soluciones que se logran a través de los mercados (y a menudo mediante su trastorno). Muchas ONG del siglo XX comenzaron como pequeñas instituciones, y más tarde se hicieron mayores. El crecimiento continuará, pero las ONG del siglo XXI invertirán fuertemente en redes. Gran parte de la financiación de las ONG del siglo XX tuvo como origen los sentimientos públicos de ira o culpa. Las ONG del siglo XXI tratarán de persuadir a los patrocinadores de que son buenas inversiones" (énfasis agregado).



Fiel a su irresistible vocación de servicio al poder económico y financiero transnacional, el 27 de abril de 2006 el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, dio la campanada de apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York con una invitación al mundo de las finanzas a adherir a los Principios para la Inversión Responsable.

Esta nueva propuesta fue desarrollada por el *Global Compact* y la Iniciativa de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el propósito de proveer un marco para integrar aspectos sociales y ambientales a las inversiones. "Hoy es cada vez más claro que los objetivos de las Naciones Unidas –paz, seguridad, desarrollo– van de la mano con la prosperidad y el crecimiento de los mercados. Si las sociedades fallan, los mercados fallan", dijo Kofi Annan en Wall Street.

Antes de tocar la campana que abre la jornada bursátil, Kofi Annan explicó las características de los Principios: "Ofrecen una guía para conseguir mejores retornos en inversiones a largo plazo y mercados más sustentables".

También elogió al Pacto Mundial (*Global Compact*), un acuerdo que "se ha convertido en la iniciativa de responsabilidad corporativa más amplia del mundo".

"En señal de que el paso que damos hoy es realmente significativo, los líderes de algunas de las más grandes e influyentes instituciones de inversión en el mundo se han unido a nosotros", manifestó el Secretario General antes de hacer extensiva la invitación a todos los participantes de la Bolsa de Nueva York (Fuente: Noticias de la ONU).

La puesta en práctica de la estrategia de conferir una cuota de poder cada vez mayor en el seno de las Naciones Unidas a las sociedades transnacionales comenzó en 1993 con la supresión de órganos de las mismas que significaron en su momento un intento de establecer un control social sobre las actividades de dichas empresas.

Uno de tales órganos fue la Comisión de Sociedades Transnacionales, creada por el Consejo Económico y Social (Ecosoc) por resolución 1913 (LVII) en diciembre de 1974. Estaba compuesta por 48 Estados Miembros, y se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar sobre las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta para las mismas<sup>148</sup>, que nunca vio la luz.

El Ecosoc creó también en 1974, por resolución 1908 (LVII), el Centro de Sociedades Transnacionales, organismo autónomo dentro de la Secretaría de la ONU, que funcionó como secretaria de la Comisión de Sociedades Transnacionales.

<sup>148</sup> Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des sociétés transnationales: Rapport sur la première session, document E/5655; E/C.10/6, New York, 1975, para. 6 et 9.



En 1993, a pedido del gobierno estadounidense<sup>149</sup>, el Secretario General de la ONU decidió transformar el Centro de Sociedades Transnacionales en una División de Sociedades Transnacionales y de Inversiones Internacionales en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

Por su parte, por resolución 1994/1 del 14 de julio de 1994, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) decidió transformar la Comisión de Sociedades Transnacionales en una Comisión del Consejo de Comercio y Desarrollo de la Unctad, teniendo en cuenta el "cambio de orientación" de la Comisión (consistente dicho cambio en haber abandonado los intentos de establecer un control social sobre las sociedades transnacionales y ocuparse, en cambio, de la "contribución de las transnacionales al crecimiento y al desarrollo").

En distintos órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas (OMS, FAO, CNUCED, Unesco, OIT, etc.) se manifiesta de diversas maneras este viraje más o menos acentuado hacia posiciones neoliberales, motivado, entre otras cosas, por su penuria presupuestaria: a veces ese *aggiornamento* le permite obtener fondos de algunos Estados o de fuentes privadas, si no para su presupuesto general, por lo menos *para programas determinados en los que están interesados los donantes*.

En octubre de 2002, la Unesco y la Sociedad Suez (antes Lyonnaise des Eaux) firmaron un acuerdo de cooperación con vistas a mejorar el acceso del agua potable para todos. A cambio de unos centenares de miles de euros, el gigante transnacional, que avanza a grandes pasos en el control del agua y obtiene concesiones de explotación de los recursos hídricos en todo el mundo corrompiendo a los funcionarios públicos, ha adquirido el derecho de intervenir en el programa hidrológico internacional de la Unesco que comporta estudios científicos y educativos para mejorar la gestión de los recursos hídricos en todos los países del mundo.

Un caso paradigmático: el 20 de noviembre de 2002, décimo tercer aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se celebró como "McDonald's World Children's Day", como resultado de un convenio celebrado en julio de ese año por Carol Bellamy, entonces directora ejecutiva de Unicef, que actuó con el respaldo de Kofi Annan, y la transnacional Mc Donald's.

Las protestas de diversas organizaciones, de especialistas en salud infantil y nutricionistas, que sostuvieron que la Unicef no podía aparecer asociada al símbolo por excelencia de la mala alimentación infantil, no lograron convencer a la señora Bellamy de que cancelara el acuerdo con McDonald's. Así fue como la Unicef vendió su imagen a McDonald's por un

<sup>149</sup> François Chesnais, *La mondialisation du capital*, ob. cit., p. 53, nota 2.

puñado de dólares. Un dato adicional: la señora Carol Bellamy es ciudadana de Estados Unidos, uno de los dos países del mundo (el otro es Somalia) que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño<sup>150</sup>.

La esperanza de obtener fondos del Banco Mundial (en general frustrada) lleva a los órganos especializados de Naciones Unidas a realizar actividades conjuntas con la entidad financiera internacional.

Así, puede verse por ejemplo a los representantes del Banco Mundial discutiendo temas de educación en reuniones convocadas por la Unesco.

Se organizan reuniones sobre las cuestiones más diversas donde el tema central es la participación del sector privado, y las empresas son los invitados de honor: Seminario sobre los pueblos indígenas y las empresas privadas (Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001), debate general en el Comité de los Derechos del Niño sobre la participación del sector privado en la realización de los derechos del niño (Ginebra, 20 de setiembre de 2002), entre otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) debería desempeñar un papel independiente y decisivo frente a las epidemias que asuelan el planeta. Su ex directora, Gro Harlem Brundtland, dijo en Davos el 29 de enero de 2001: "Debemos proteger el derecho de las patentes... La industria ha hecho un esfuerzo admirable para cumplir con sus obligaciones con sus donaciones de medicamentos y sus reducciones de precios". Y su director de gabinete explica esa profesión de fe por la necesidad de obtener financiación privada, pues los Estados les proporcionan pocos fondos, y de hacer buena figura ante Estados Unidos, que tiene los "cordones de la bolsa" mundial<sup>151</sup>. En situación similar se hallan todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas: búsqueda de financiación privada y tendencia a ocuparse de programas que interesen a las empresas y a Estados Unidos o a otros países ricos. Las contribuciones voluntarias no van al presupuesto general del organismo sino a un proyecto determinado.

Un dato inquietante: el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está en sus dos terceras partes financiado por contribuciones voluntarias de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y de otros donantes privados, lo que la hace inevitablemente vulnerable a las presiones, en particular del gobierno de Estados Unidos, que es el principal donante, y

<sup>150</sup> Desde enero de 2005, la nueva directora del Unicef es Ann Margaret Veneman, también estadounidense. En 1993 Veneman entró a trabajar en la firma de abogados y "lobbyistas" Patton, Boggs & Blow, y también estuvo en el Directorio de Calgene, una de las más grandes empresas de alimentos genéticamente modificados. Uno de los clientes de Patton, Boggs & Blow fue Dole Foods, el mayor productor mundial de frutas y legumbres. En 2001 Veneman fue nombrada Secretaria de Agricultura por Bush, y en enero de 2005 dejó ese cargo para asumir como directora del Unicef.

<sup>151</sup> Jean-Loup Motchane, Quand l'OMS épouse la cause des firmes pharmaceutiques, en *Le Monde Diplomatique*, julio, 2002, p. 10.

cuya simbiosis con el poder económico transnacional se ha explicado en el punto precedente de este capítulo<sup>152</sup>.

Están lejos los tiempos en que el entonces Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazaba una donación de computadoras de un gobierno porque su aceptación podía comprometer su independencia y era contraria a las normas de las Naciones Unidas.

También las "cumbres" mundiales caen cada vez más bajo la influencia de las grandes sociedades transnacionales, como es el caso de la Cumbre de Johannesburg para un desarrollo sostenible de agosto-septiembre 2002, cuyo orden del día fue "secuestrado" por las grandes empresas, como dice un artículo aparecido en *The Guardian*, de Londres del 9 de agosto 2002, citando a *Christian Aid*. Esta última comienza su documento diciendo: "Las sociedades transnacionales han secuestrado el orden del día de la Cumbre..., mientras que las medidas destinadas a beneficiar a los pobres han sido aguadas"<sup>153</sup>.

Otro tanto ocurrió con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Esta última se desarrolló en dos etapas: en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005. En el Comité preparatorio que se celebró en agosto 2002 en Ginebra, el sector privado corporativo estuvo doblemente representado, pues además de contar con representantes directos de las empresas (entre ellas, Sony, Alcatel, Deutsche Telecom, Japan Telecom, Swisscom), y de asociaciones empresariales de carácter internacional como el Foro Económico Mundial (que reúne a las 1000 corporaciones más grandes del mundo), la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de Radiodifusión, etc., acreditaron decenas de delegados bajo la denominación de "organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil" (Eduardo Tamayo, Agencia ALAI).

<sup>152</sup> El ACNUDH recibe contribuciones de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, de las fundaciones y de otros donantes privados. Desde 1994 una media de aproximadamente 90 gobiernos contribuyen con fondos al ACNUDH. Las contribuciones voluntarias han aumentado de 15 millones de dólares en 1994 a 60 millones de dólares en 2004, y se espera un nuevo aumento en 2005.

Aunque el ACNUDH trabaja con ahínco para ampliar su base de donantes, la mayor parte de la financiación voluntaria del ACNUDH procede de un pequeño número de éstos. En 2003, 10 donantes importantes facilitaron el 79,4% del total de las contribuciones voluntarias al ACNUDH; los 20 donantes más importantes aportaron el 97,6% de esas contribuciones.

En 2004 cinco contribuyentes aportaron más de 30 millones de dólares. Estados Unidos aportó algo más de 10 millones; Noruega, entre 5,1, y el Reino Unido, los Países Bajos y la Comisión Europea, aportaron 5,8 millones de dólares. (Fuente: documentos del ACNUDH).

Sobre 253 funcionarios con que cuenta la Oficina del ACNUDH, 166 reciben sus salarios de los gobiernos, vía contribuciones voluntarias. Para ellos no rige el principio de la distribución geográfica, y 79 de los 166 son nacionales de 8 países ricos: Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia (Informe del Alto Comisionado E/CN.4/2004/100). Por regla general, los gobiernos pagan los salarios de sus nacionales.

<sup>153</sup> Terry Macalister y Paul Brown, en *The Guardian*, Londres, 09/08/2000, y *Christian Aid*, en [www.christian-aid.org.uk](http://www.christian-aid.org.uk)

Actualmente se puede decir, sin temor a equivocarse, que todo el sistema de las Naciones Unidas está contaminado por la influencia que tienen las sociedades transnacionales en las decisiones de los organismos que lo componen.

## **El proyecto de "normas" para las STN de la Subcomisión de Derechos Humanos: un intento parcialmente frustrado**

En 1998, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución con el fin de estudiar la actividad y los métodos de trabajo de las STN en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo. En uno de los párrafos de dicha resolución señalaba que uno de los obstáculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en la concentración del poder económico y político en manos de las grandes empresas transnacionales.

En la misma resolución, la Subcomisión decidió la creación y estableció el mandato de un Grupo de Trabajo para que realizara ese estudio. El Grupo de Trabajo designado en 1998 tenía que realizar una labor de análisis e investigación de las actividades y los métodos de trabajo de las sociedades transnacionales, tema sin duda trascendente para unos y molesto e inoportuno para otros.

El miembro estadounidense de la Subcomisión se apresuró a presentar al Grupo de Trabajo un proyecto que llamó primero "Principios", luego "Directrices", y finalmente "Normas" destinadas a las sociedades transnacionales.

El método era por lo menos equivocado, pues un proyecto de tal naturaleza requería previamente investigar las entidades a las que estaba dirigido. Es decir, que primero había que estudiar las actividades y los métodos de trabajo de las STN, y después proponer directrices para limitar los abusos de aquéllas.

El primer Proyecto del representante estadounidense era una especie de código voluntario para las STN, que éstas podían adoptar o dejar de lado, lo que se suele llamar "*soft law*" (derecho blando) o "no derecho". Era un intento de cambiar algo para que todo siguiera igual. Y también, de desviar al Grupo de Trabajo de su tarea principal: estudiar las actividades y los métodos de trabajo de las STN en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y del derecho al desarrollo.

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro Europa Tercer Mundo (Cetim) objetaron el método de "poner el carro delante del caballo", es decir, comenzar por lo que debería haber sido, en todo caso, la culminación de los trabajos del Grupo. Pero como el Grupo lo aceptó, ambas ONG

se empeñaron en tratar de mejorar el Proyecto, proponiendo reformas de fondo al mismo a fin de que adquiriera cierta consistencia jurídica y alguna eficacia.

La AAJ y el Cetim, después de cuatro años de debates, de la organización de un seminario interdisciplinario<sup>154</sup> y de una reunión de dos días con los miembros del Grupo de Trabajo, lograron que se mejorara el Proyecto, pero muchas cuestiones esenciales no se incorporaron al mismo como, por ejemplo, la responsabilidad civil y penal de los dirigentes de las empresas, la responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales con sus proveedores y subcontratistas, la primacía del servicio público sobre el interés particular, la prohibición de patentar formas de vida, etc.

En sus sesiones de agosto de 2003, la Subcomisión adoptó una resolución aprobando el proyecto y lo remitió, conforme al procedimiento correspondiente, a la Comisión de Derechos Humanos. Pero en dicha resolución, en lugar de pedir a la Comisión que lo aprobara, como suele suceder en casos similares, se le solicitó que recogiera las observaciones de los gobiernos, de los órganos de las Naciones Unidas, de las instituciones especializadas, de las organizaciones no gubernamentales, etc., sobre el Proyecto, y que encarase la posibilidad de constituir un grupo de trabajo abierto para revisar el mismo. Era el reconocimiento implícito de la validez de las críticas y objeciones de la AAJ y el Cetim al proyecto elaborado por el Grupo de Trabajo de la Subcomisión.

Es interesante destacar la actitud de algunas grandes organizaciones no gubernamentales, las que desde la primera versión del Proyecto, decididamente inaceptable, pidieron su aprobación inmediata por la Subcomisión, aparentemente sin importarles ni poco ni mucho la calidad y la eficacia del mismo, y adoptaron la misma actitud todos los años con las nuevas versiones del Proyecto, que no eran mucho mejores que la primera. Quizás algunas de ellas decidieron adoptar un "perfil bajo" para no enturbiar sus buenas relaciones con grandes sociedades transnacionales.

Pese a que el Proyecto aprobado por la Subcomisión está lejos de ser una panacea en materia de control y encuadramiento jurídico de las sociedades transnacionales, éstas reaccionaron vivamente contra el mismo con un documento de unas 40 páginas, firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) y la Organización Internacional de Empleadores (IOE), instituciones que agrupan a las grandes empresas de todo el mundo. En dicho documento afirman que el proyecto de la Subcomisión socava los

<sup>154</sup> Asociación Americana de Juristas, Centro Europa-Tercer Mundo. "Las actividades de las sociedades transnacionales y la necesidad de su encuadramiento jurídico". Seminario internacional e interdisciplinario celebrado en Celigny, Suiza, el 4 y 5 de mayo de 2001. Folleto publicado en Ginebra en junio de 2001.



derechos humanos, los derechos y los legítimos intereses de las empresas privadas, y que las obligaciones en materia de derechos humanos corresponden a los Estados y no a los actores privados, y exhortan a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión<sup>155</sup>.

Finalmente, en 2005, la Comisión de Derechos Humanos, ignorando por completo el Proyecto de normas adoptado en 2003 por la Subcomisión, aprobó la resolución 2005/69 en la que invitó al Secretario General de la ONU a designar un relator especial, para el cual sugirió un mandato inspirado en el *Global Compact*. Al aprobar dicha resolución, la aplastante mayoría de los Estados Miembros de la Comisión cedió a las presiones de las empresas transnacionales, claramente formuladas en su documento.

Y para que nadie pensara que el Proyecto de la Subcomisión puede invocarse como una norma internacional vigente, la Comisión de Derechos Humanos se ocupó de precisar en el último párrafo de su resolución 2004/116 que dicho Proyecto "...al ser un proyecto de propuesta, carece de autoridad legal y que la Subcomisión no debería ejercer ninguna función de vigilancia a este respecto".

En julio de 2005, el Secretario General Kofi Annan completó la obra regresiva de la Comisión de Derechos Humanos en esta materia nombrando representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al señor John Ruggie, su asesor principal en el *Global Compact*.

Basta leer el informe del señor Kofi Annan de 1998 donde anunció el *Global Compact*, significativamente titulado "La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible" (A/52/428), los discursos de Georg Kell, director ejecutivo del *Global Compact*, y de John Ruggie, para percibir la ideología neoliberal al servicio del poder económico transnacional dominante en ese ámbito. Y, por cierto, contraria a imponer normas de cumplimiento obligatorio a las sociedades transnacionales. El señor Ruggie lo ha dicho: el *Global Compact* "no es un código de conducta y las Naciones Unidas no tiene mandato para ello ni la capacidad para verificar su aplicación".

Pese a todo, y para no abandonar el terreno al poder económico transnacional, en agosto de 2005 la Asociación Americana de Juristas, por intermedio del autor de este trabajo, y el Centro Europa-Tercer Mundo, propusieron en un escrito presentado a la Subcomisión de Derechos Humanos que el

<sup>155</sup> International Chamber of Commerce, Organisation Internationale des Employers, *Joint views of the IOE and ICC on the draft, "Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights"*, en [www.iccwbo.org](http://www.iccwbo.org). Véase también Corporate Europe Observatory (CEO), *Shell Leads International Business Campaign Against UN Human Rights Norms*, CEO Info-Brief, March, 2004.



Grupo de Trabajo, en cumplimiento de su mandato, examinará los efectos de los métodos de trabajo y de las actividades de las sociedades transnacionales sobre el funcionamiento de los organismos de las Naciones Unidas.

En agosto 2005 la Subcomisión aprobó una resolución por la que encomendó al Grupo de Trabajo la preparación de dos documentos: uno sobre la función de los Estados en la garantía de los derechos humanos con referencia a las actividades de las empresas transnacionales, y otro sobre los acuerdos económicos bilaterales y multilaterales, y su repercusión en los derechos humanos de los beneficiarios, que el Grupo de Trabajo encomendó a tres de sus miembros.

En agosto de 2006, las señoras Chinsung Chung y Florizelle O'Connor presentaron a la Subcomisión el documento de trabajo A/HRC/Sub.1/58/CRP.8 *Bilateral and multilateral economic agreements and their impact on human rights of the beneficiaries*, y el señor Gáspár Bíró presentó a dicho organismo el documento de trabajo A/HRC/Sub.1/58/CRP.12 *The role of the State in the guarantee of human rights with reference to the activities of transnational corporations and other business entities*, ambos distribuidos sólo en inglés. El autor de este libro, así como Cetim, tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración de ambos documentos.

La continuidad o no de este tema en la Subcomisión está pendiente—cuando escribimos estas líneas a comienzos de 2007— de las decisiones del nuevo Consejo de Derechos Humanos sobre la sobrevivencia misma de la Subcomisión y, en caso de que ésta siga existiendo, sobre el contenido de su mandato.

Por su parte, en 2006 John Ruggie escribió su primer informe para la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2006/97), pero el mismo no se trató porque la Comisión se disolvió sin celebrar, como correspondía, su última sesión.

Los primeros párrafos del Informe de Ruggie son “descriptivos”, como él mismo escribe al comienzo del párrafo 13, y bastante objetivos, agregamos nosotros. Pero después va derivando hacia la atribución de un papel decisivo a las empresas en la sociedad: “los agentes de la sociedad civil y los responsables de las políticas cada vez son más conscientes del hecho de que la participación de las empresas es un ingrediente social del éxito” (párr. 17). Y ya en el párrafo siguiente hace pasar el centro de gravedad de la sociedad política a la empresa:

a los gobiernos les resultaba difícil, si no imposible, responder al aumento de las demandas internas de pleno empleo y de mayor equidad económica. Estos dos fracasos propiciaron la emergencia de horribles “ismos” enemigos de la empresa, de los derechos humanos y, en última instancia, de la paz mundial. Por el contrario, los acuerdos institucionales posteriores a 1945 sobre las relaciones monetarias y comerciales

conciliaron los compromisos de liberalización internacional con un amplio margen para crear redes de seguridad e inversiones sociales nacionales" (párr. 18).

Y aquí ya estamos en pleno enfoque neoliberal: *mitigar* las demandas sociales y suprimir el conflicto y los "horribles ismos" con "redes de seguridad", sustituyendo el poder político ejercido en representación de los ciudadanos, todos iguales ante la ley, por los "actores sociales", algunos con mucho poder y otros sin poder alguno, para *mitigar*, no para *satisfacer*, las demandas sociales. Ruggie presentó su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2007 (A/HRC/4/74). En el mismo desarrolla argumentos intentando demostrar que las sociedades transnacionales no están obligadas por el derecho internacional, y que lo más apropiado es concertar a las empresas, a las Naciones Unidas (*Global Compact* mediante) y a la "sociedad civil" para establecer declaraciones de buenas intenciones en forma de soft law, códigos de conducta, etc., cuya aplicación será controlada por las mismas empresas y por representantes de la "sociedad civil"<sup>156</sup>.

## LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se creó en virtud de uno de los acuerdos contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay, firmada en Marrakech en abril de 1994, y entró oficialmente en funciones el 1 de enero de 1995.

El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que existió desde 1947, no era una institución sino un tratado de 38 artículos, con una estructura burocrática muy ligera: un director, un director general adjunto, tres subdirectores, etc., hasta que fue reemplazado en 1995 por la Organización Mundial del Comercio. En el GATT las negociaciones entre países podían ser globales, lo que posibilitaba que las partes pudieran hacer concesiones recíprocas sobre sectores distintos, por ejemplo, productos agrícolas contra productos manufacturados.

Los países del Tercer Mundo participan en las discusiones preliminares y en las discusiones de fondo en la OMC con una serie de desventajas. En primer lugar, la OMC tiene más de 150 Estados Miembros a enero de 2007, pero en las negociaciones participan realmente entre 30 y 35

<sup>156</sup> El autor de este libro escribió un comentario sobre el primer informe del señor Ruggie, un resumen que puede encontrarse en <http://alainet.org/docs/13433.html>, y otro sobre el segundo informe que fue presentado por el Centre Europe Tiers Monde con el código A/HRC//4/74 a la sesión de marzo de 2007 del Consejo de Derechos Humanos. Una síntesis del mismo fue publicada por el Transnational Institute ([www.tni.org](http://www.tni.org)) en inglés y en español.

Estados, siendo la mayoría de los ausentes Estados del Tercer Mundo. Además, sólo un tercio de dichos Estados tienen una delegación permanente en la OMC<sup>107</sup>. Las negociaciones se realizan por sector y éstos son numerosos, lo que requiere que cada Estado cuente con muchos funcionarios especializados, cosa que no sucede con la mayoría de los países del Tercer Mundo.

En el cúmulo de reuniones y negociaciones, a muchas de las cuales la mayoría de los países no asisten, se discuten asuntos aparentemente técnicos pero con serias consecuencias de política económica, como decidir qué subsectores entran en cada sector. Por ejemplo hay que decidir si la gestión de un hospital se la clasifica en los servicios de gestión (liberalizados) o en la esfera del servicio público de la salud (excluido hasta ahora de las negociaciones), o si el audiovisual es una mercancía (sector liberalizado) o un servicio (todavía sujeto a negociación). Después muchos países se encuentran con el hecho consumado y deben soportar las consecuencias.

Por el contrario, los países del G8, en particular Estados Unidos, cuentan con numerosos funcionarios especializados y equipos de asesores, en muchos casos estudios de abogados especializados en negocios internacionales que representan de hecho los intereses de las empresas transnacionales, lo que les permite aprovechar en su beneficio las dificultades técnicas que entrañan las negociaciones.

Además, en la reunión ministerial de la OMC en Doha en noviembre de 2001, que comenzó la ronda de negociaciones que lleva el nombre de la ciudad sede de la reunión inaugural, en su etapa preparatoria se utilizó un procedimiento de toma de decisiones totalmente antidemocrático, consistente en que previamente los miembros, individualmente o en grupos plurilaterales negociaban con la Secretaría. En Doha los ministros daban sus opiniones a los "facilitadores", nombrados por el presidente de la reunión sin consulta previa. Los "facilitadores" y la Secretaría trabajaron en una conclusión que no tenía relación alguna con las opiniones vertidas por varios ministros.

Sólo algunos iniciados saben quiénes son realmente los "facilitadores", llamados "hombres verdes", porque los primeros conciliábulos de esta naturaleza se realizaron en un salón verde en la reunión de Seattle.

Después de la reunión de noviembre de 2001 en Doha, el director saliente de la OMC, Mike Moore, propuso institucionalizar el sistema de los "hombres verdes", propuesta que fue muy bien acogida por Pascal Lamy, hasta hace poco Comisario de Comercio de la Unión Europea, y ahora director de la OMC.

<sup>107</sup> Pierre Jacquet, Patrick Messerlin y Laurence Tubiana, *Le cycle du millénaire. Rapport pour le Conseil d'analyse économique (Premier Ministre)*, La Documentation Française, Paris, 4 Trimestre, 1999.

El sistema de los “hombres verdes” cuenta con el apoyo total de la Unión Europea y de Estados Unidos, y es un paso más para que la OMC esté al servicio de los países ricos y de las sociedades transnacionales. De este modo se excluye de la adopción de decisiones a la mayoría de los países miembros de la OMC<sup>158</sup>.

Las decisiones de la Organización Mundial de Comercio son obligatorias y los Estados que no las acatan pueden sufrir sanciones. Las consecuencias de estas decisiones pueden ser dramáticas para los derechos fundamentales de los pueblos.

### **El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC, TRIPS en inglés)**

En el marco de este Acuerdo, la India *ya perdió* un litigio en la OMC frente a Estados Unidos y a la Unión Europea por una cuestión similar a la planteada en el juicio de las 39 transnacionales farmacéuticas (que finalizó con un arreglo entre las partes) contra África del Sur.

En 1997 el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio dio la razón a Estados Unidos, que reclamaba contra la legislación de la India que impide de manera temporaria el registro de patentes sobre productos farmacéuticos y agroquímicos (Decisión AB 1997 5. WT/DS50/AB/R, del Órgano de Apelación de la OMC, del 13 de diciembre de 1997). El Órgano de Apelación hizo una interpretación discutible de los procedimientos y de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo Adpic para exigir a la India que otorgara de inmediato a las transnacionales farmacéuticas derechos exclusivos de comercialización sin esperar el 1 de enero del 2005, como sostenía la India, de acuerdo con su interpretación de los párrafos mencionados del artículo 70 y de los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 65 del Acuerdo.

La Unión Europea (Comunidades Europeas), que actuó en el litigio como tercero, junto a Estados Unidos y contra la India, argumentó que era inadmisibles la referencia de la India a la importancia para los países en desarrollo de la cuestión de los derechos exclusivos de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos. La Unión Europea invocó el principio *pacta sunt servanda* (los tratados deben ser cumplidos) contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, pero olvidó el artículo 53 de la misma Convención, que dispone la nulidad de todo tratado opuesto a una norma imperativa de derecho internacional general. En este caso las normas que consagran el derecho a la salud y a la vida.

Aunque no se invoque la nulidad del Adpic, se debe hacer prevalecer en la interpretación de dicho Acuerdo la primacía de los derechos huma-

<sup>158</sup> Véase [www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-153/tendencias02.htm](http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-153/tendencias02.htm).

nos fundamentales y del interés general. La prohibición temporaria de registrar patentes establecida por la India responde al objetivo de mejorar los niveles de salud de la población de dicho país, facilitándole el acceso a precios módicos a los medicamentos esenciales. En la decisión del Órgano de Apelación primó una interpretación discutible del Adpic favorable a los intereses de las empresas transnacionales farmacéuticas y contraria a los derechos fundamentales del pueblo de la India y a la política de la Organización Mundial de la Salud que favorece (¿favorecía?) la utilización de una lista de medicamentos esenciales.

El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic) es uno de los acuerdos fundadores de la Organización Mundial del Comercio. La orientación decididamente "liberalizadora" de la OMC cambia bruscamente en este Acuerdo, porque se trata de la propiedad monopólica u oligopólica que detentan las sociedades transnacionales, de las tecnologías más avanzadas y de muchas marcas y patentes, que es fuente de enormes ganancias. Por eso nunca se llegó a un acuerdo en las discusiones celebradas durante años en el Cnuced-Unctad para aprobar un Código Internacional de Conducta sobre la Transferencia de Tecnología, y finalmente se aprobó el Adpic, que refuerza en los hechos la propiedad oligopólica o monopólica de los conocimientos aprovechables económicamente.

La duración de la protección conferida por una patente se ha fijado en 20 años (art. 33), y la de las marcas es indefinida (siete años renovables indefinidamente, art. 18), lo que significa demorar excesivamente el momento en que los nuevos conocimientos pasan al dominio público, en beneficio exclusivo de los propietarios de las patentes, generalmente sociedades transnacionales. Pero las grandes empresas han encontrado la manera de prolongar la duración de las patentes de los medicamentos mediante una nueva presentación de los mismos (nuevo uso) sin que haya innovación técnica.

Se argumenta que la protección del propietario durante un largo plazo motiva a éste para invertir en la investigación, pero se olvidan cuatro aspectos: 1) que buena parte de la inversión en investigación la hace el Estado (es decir los contribuyentes), y que los laboratorios gastan mucho más en publicidad que en investigación; 2) que los beneficios de la comercialización de los conocimientos (que suelen ser exorbitantes como es el caso de las drogas de base en la industria farmacéutica) amortizan la inversión que ha hecho el propietario de la patente y comienza a producirle enormes ganancias netas en lapsos muy breves; 3) que los nuevos conocimientos son el resultado de un trabajo social realizado por científicos, técnicos y trabajadores, y de un proceso histórico de acumulación de saber, de modo que es muy discutible su pertenencia exclusiva a quien invirtió capital en la investigación (si realmente invirtió y no se limitó a aprovechar la inversión



pública), y 4) que un derecho de patente muy prolongado fomenta el precio de monopolio y perjudica por consiguiente al consumidor.

Por ello es inexacto lo que afirmaba el entonces Secretario General de la ONU Kofi Annan que "solo el sector privado tiene el dinero, las habilidades y la capacidad de gestión para dirigir las cuestiones relacionadas con el desarrollo"<sup>159</sup>. En los hechos, las grandes sociedades transnacionales se apropian por diversos medios y en su exclusivo beneficio de los conocimientos que son por naturaleza sociales.

Entre los medios utilizados está la apropiación "legal" (el acuerdo Adpic y las patentes y marcas), y la biopiratería, consistente en la apropiación de hecho y patentamiento ilegal de los conocimientos ancestrales y de materia orgánica y organismos vivos y sus partes, entre ellos, por ejemplo, los genes<sup>160</sup>.

El Acuerdo Adpic incluye el patentamiento de formas de vida (art. 27, inc. 3, apartado b: microorganismos), lo que implica, entre otras cosas, una infracción a la legislación internacional en materia de patentes<sup>161</sup> y la eventual apropiación privada de conocimientos y técnicas tradicionales que pertenecen al patrimonio común de diferentes pueblos.

Formalmente, el Acuerdo ADPIC admite la posibilidad de excluir del sistema de patentes a los seres vivos, aunque en el artículo 27, 3, b) del mismo dice: "Sin embargo, los Miembros preverán la protección de variedades vegetales por brevets, mediante un sistema sui generis eficaz o por una combinación de ambos...". No especifica qué quiere decir un "sistema sui generis eficaz". Así, en el Adpic, de todas maneras queda la puerta abierta al patentamiento de variedades vegetales.

Este "sistema sui generis eficaz" está establecido, con el nombre de "derechos del obtentor", en la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), que no es mencionada en el Adpic. Pero en la gran mayoría de los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual está incluida la obligación de adherir a dicha Unión, con lo que en tales tratados desaparece hasta la posibilidad formal de excluir el patentamiento de organismos vivos (véase más adelante en el párrafo 4 (c) de este Capítulo: Los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual).

<sup>159</sup> Citado por el World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) en la página web que este conglomerado de 120 sociedades transnacionales comparte con la ONU.

<sup>160</sup> Véase Jeremy Rifkin, *Le siècle biotech. Le commerce des gènes dans le meilleur des mondes*, La Découverte, Paris, 1998. En inglés, *The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World*, G. P. Putnam's Sons, New York, 1998.

<sup>161</sup> Agnès Bertrand, *Comment peut-on breveter la vie?*, en *Symposium GATT/WTO*, 17-18 de noviembre de 1995, Cetim.



Las nuevas Directrices de 1998 para el examen de solicitudes de patentes de la Oficina Europea de Patentes también dejan abierta la puerta para el patentamiento de organismos vivos. Comienzan diciendo que "encontrar una sustancia que se produce libremente en la naturaleza", es un "mero descubrimiento y, por tanto, no patentable". Pero continúa: "...Si una sustancia encontrada en la naturaleza tiene que ser en principio aislada de lo que la rodea y se desarrolla un proceso para obtenerla, ese proceso es patentable. Por otra parte, si la sustancia puede caracterizarse apropiadamente por su estructura, por el proceso mediante el cual se la obtiene o por otros parámetros ...y es 'nueva' en el sentido absoluto de no tener una existencia previamente reconocida, entonces la sustancia per se puede ser patentable"<sup>162</sup>.

Además, el patentamiento de organismos vivos plantea un nuevo problema en lo referente a la transmisión de los conocimientos, porque "cuando se trata de un organismo vivo, por más completa que sea una descripción, no permitirá la reproducción de la invención... [como exige la norma vigente sobre patentes] para eludir esa dificultad se ha decidido no exigir la descripción sino el depósito del organismo vivo (o del material biológico)"<sup>163</sup>. De modo que los derechos reconocidos al supuesto inventor (que no es tal porque se trata de un organismo vivo o un material biológico) ya no tienen como contrapartida la transmisión de un nuevo saber.

El Acuerdo Adpic ha acentuado los aspectos negativos ya existentes de la transferencia de tecnología, producirá una profundización de la brecha tecnológica entre los países industrializados y los países periféricos en detrimento del desarrollo de estos últimos, y afectará derechos humanos fundamentales como los derechos a la salud y a una alimentación suficiente, con consecuencias quizás menos espectaculares que las del sida en África, pero igualmente funestas para buena parte de la humanidad

El 27 de noviembre de 2000, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales organizó un debate sobre el derecho de propiedad intelectual como derecho humano. Allí propusimos dos cosas:

1. que el Comité estableciera una clara distinción en este derecho como derecho humano por un lado, cuando se trata del derecho intelectual de la persona autora del invento o creación, y como derecho patrimonial por el otro, cuando se trata de la propiedad de una patente, detenida por ejemplo por una empresa.

2. Que el Comité recomendase que, en todo lo que se refiere a la propiedad intelectual, en particular en lo que concierne a la interpretación del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio relativo a los aspectos de

<sup>162</sup> *Perspectivas bioéticas*, núms. 7/8, coeditada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Gedisa.

<sup>163</sup> Vandana Shiva, *La nature sous licence ou le processus d'un pillage*, CETIM, Ginebra, 1994, p. 54.

la propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic), y a la solución de diferendos en el marco de dicho Acuerdo, se reconociera la primacía de los derechos humanos y del interés general.

Varios otros participantes hicieron propuestas similares.

Posteriormente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración en la que se dice:

Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual –aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales– se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales<sup>164</sup>.

En noviembre de 2005 el Comité aprobó la Observación General No. 17 sobre los derechos de autor, donde reiteró que el artículo 15, inciso 1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales protege los intereses morales y materiales del autor o los autores, los que no necesariamente coinciden con los intereses e inversiones de las corporaciones, protegidos como propiedad intelectual en las legislaciones nacionales y en los tratados internacionales<sup>165</sup>.

<sup>164</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Los derechos humanos y las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Declaración del Comité, Naciones Unidas, E/C.12/2001/15, 14/12/2001, párr. 6.

<sup>165</sup> En su resolución 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisión de derechos humanos de la ONU dijo, entre otras cosas:

“Afirma que la protección de los intereses morales y materiales que resultan de toda producción científica, literaria o artística de que una persona es autora es, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 de la DUDH y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 15 del PIDESC, un derecho humano, en los límites del interés general.

Declara, sin embargo, que dada que la aplicación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debería la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos científicos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentación y del derecho a la autodeterminación, hay conflictos visibles entre el régimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra;

Recuerda a todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos.”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho: “...Contrariamente a los derechos humanos, los derechos de la propiedad intelectual son generalmente provisorios y pueden ser revocados, concedidos bajo licencia o atribuidos a otro. Si los derechos de la propiedad intelectual pueden cedérse, tener una duración y un alcance limitados o ser negociados, modificados o perdidos, los derechos humanos son intemporales y constituyen la expresión de prerrogativas fundamentales que pertenecen a la persona...”. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre “Los derechos humanos y la propiedad intelectual”, E/C.12/2001/15, párr. 6, adoptada el 14 de diciembre de 2001.

## La cuestión de los medicamentos genéricos a bajo precio

Puede ocurrir que un derecho de propiedad intelectual muy rentable, como es el caso de los medicamentos para el tratamiento del sida, incite a los laboratorios a descuidar la investigación destinada a elaborar una vacuna. Se afirma que los laboratorios prefieren continuar vendiendo medicamentos contra el sida a promover la investigación que podría llevar a la elaboración de una vacuna.

Cabe preguntarse si el derecho patrimonial de propiedad intelectual puede predominar sobre los derechos humanos de buena parte de la población de África, que está siendo diezmada por la enfermedad, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio fijado por los grandes laboratorios transnacionales dueños de las patentes es varias veces mayor que el de los mismos medicamentos producidos en Brasil, India, Sudáfrica y Tailandia.

Algunos grandes laboratorios han prometido rebajar los medicamentos contra el sida destinados a los países africanos, pero en ningún caso quieren aceptar la competencia de los mismos medicamentos producidos en países del Tercer Mundo, mucho más baratos. Incluso el laboratorio Pfizer ha preferido poner gratuitamente un medicamento, el fluconazole, a disposición de los enfermos en África del Sur, a aceptar la competencia del mismo producto de origen tailandés, quince veces más barato<sup>166</sup>.

Después de arduas negociaciones en la OMC, a fines de 2002 parecía haberse llegado a un acuerdo en el sentido de que los países pobres que no tienen capacidad para producir ellos mismos los medicamentos necesarios podrían recurrir a la importación de genéricos a bajo precio. Pero el 16 de diciembre de ese año Estados Unidos torpedeó el acuerdo proponiendo que el derecho de importar medicamentos genéricos se limitara a tres pandemias: el sida, la malaria y la tuberculosis, y a otras 19 enfermedades transmisibles. La Unión Europea, a través de su entonces Comisario de Comercio Pascal Lamy, propuso una supuesta vía intermedia: que fuera la Organización Mundial de la Salud la que arbitrara en cada caso si una enfermedad constituye un problema de salud pública.

Germán Velázquez, responsable del programa de acceso a los medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, rechazó la propuesta europea diciendo que ese no es el papel de la OMS, que las autoridades de cada país son las que deben decidir las prioridades en materia de salud pública<sup>167</sup>.

<sup>166</sup> Véase *Afrique et sida, une nouvelle donne?*, en <http://perso.wanadoo.fr/devernon/Afrique%20et%20Sida%20.html%20>.

<sup>167</sup> *Diano Libération*, París, 10 de enero de 2003, p. 25.

El 30 de agosto de 2003 los medios de “desinformación” anunciaron que se había llegado a un acuerdo por consenso “histórico” en la OMC sobre los medicamentos genéricos, y que de ahora en adelante los países pobres tendrían acceso a los mismos a bajo precio. En realidad, el consenso consistió en que todos los demás países, detalle más o detalle menos, se plegaron a las exigencias de Estados Unidos, es decir, a las exigencias de las transnacionales farmacéuticas.

En un comunicado conjunto, Médicos sin Fronteras e Intermón Oxfam resumieron bien los alcances del acuerdo, diciendo que el mismo sólo aporta algunos elementos positivos a los países pobres y preserva los intereses de la industria farmacéutica de los países ricos. Agregaron que “las normas sobre patentes seguirán elevando el precio de los medicamentos y que los miembros de la OMC no parecen darse cuenta de que las rígidas medidas que quieren imponer no van a servir para garantizar la producción de genéricos a largo plazo, más bien al contrario, los países en desarrollo tendrán pocas alternativas a los altos precios y a los monopolios de las compañías farmacéuticas”. Criticaron también que el acceso a los genéricos se limite a situaciones de emergencia sanitaria. Céline Charveriat, portavoz de Oxfam, declaró:

Es un mal negocio, el acuerdo es muy difícil de aplicar y legalmente poco claro. Los países que quieran beneficiarse de él tendrán que recorrer un camino plagado de obstáculos. (En efecto, dichos países tendrán que someterse a la supervisión del secretariado de la OMC, del Consejo del ADPIC y del presidente del mismo). Se trata de 20 páginas llenas de cláusulas complicadas, contradictorias y ambiguas y los países pobres no tendrán otra opción que comprar medicinas caras si quieren seguir tratando a sus enfermos.

El acuerdo sobre genéricos del 30 de agosto de 2003 empeora *la letra* del Acuerdo Adpic que establece ciertas excepciones al régimen de patentes por razones de salud pública: la posibilidad de importar medicinas de los países donde se producen más baratas, y las licencias obligatorias, que permiten a los países en condiciones de fabricar medicamentos baratos obligar a las empresas farmacéuticas a ceder los derechos de patente y de esa manera producir sus propias medicinas genéricas.

De todos modos, las “concesiones” de las transnacionales farmacéuticas en el acuerdo del 30 de agosto de 2003, que de hecho son ventajas adicionales, no les costarán prácticamente nada, pues, por un lado, siguen teniendo acceso al mercado de los países pobres, que representa muy poco para ellas, y continúan teniendo el monopolio del mercado de los países ricos, que representa la casi totalidad del mercado de medicamentos, donde no pueden ingresar los medicamentos baratos producidos en países del Tercer Mundo<sup>168</sup>.

<sup>168</sup> África representa el 1,3% de las ventas de las transnacionales farmacéuticas, o sea 3,5 mil millones de dólares, contra 100 mil millones de ventas en Europa y 169 mil millones en Estados Unidos.

Pese al escándalo internacional que provocó el juicio de 39 transnacionales farmacéuticas contra el gobierno de Sudáfrica por permitir la fabricación de medicamentos contra el sida a bajo precio, la transnacional farmacéutica Novartis se aventuró en un litigio similar contra la India en agosto de 2006. Las primeras audiencias comenzaron a celebrarse ante la Corte de Justicia de Madras a fin de enero de 2007.

Nos referiremos brevemente a otros acuerdos celebrados en el marco de la OMC, con la finalidad de demostrar que en ellos también los principales beneficiarios son las grandes sociedades transnacionales<sup>169</sup>.

### El Acuerdo relativo a textiles y vestidos

En materia de comercio internacional de textiles y vestidos, desde 1974 existían los acuerdos multifibras, destinados a establecer restricciones a la exportación de vestimentas y textiles de los países periféricos hacia los países desarrollados. Los acuerdos multifibras (que eran fundamentalmente proteccionistas de la industria textil de los países desarrollados) costaban miles de millones de dólares a los consumidores de los países de la OCDE, especialmente a los consumidores de más bajos ingresos, que consagran una buena parte de sus recursos a la compra de ropa.

Conviene señalar que, hasta la liberación del comercio textil en 2005, las pérdidas de empleo en la industria textil en los países desarrollados eran sobre todo consecuencia de los cambios tecnológicos y no de la competencia de la industria textil de los países periféricos. Los acuerdos multifibras tenían por objeto no proteger el empleo, sino las inversiones de capital<sup>170</sup>.

Las grandes beneficiarias de los acuerdos multifibras eran las sociedades transnacionales, que actúan como exportadores privilegiados, implantándose en las zonas francas de los países pobres donde aprovechan el bajo costo de la mano de obra en general, y femenina e infantil en particular, y también como importadores privilegiados con tarifas preferenciales y como distribuidores en los países desarrollados<sup>171</sup>.

El Acuerdo GATT de 1994 relativo a textiles y vestidos, que entró en vigor en 1995, previó la eliminación total de los acuerdos multifibras en un plazo de diez años, que se cumplió en enero de 2005.

---

según datos oficiales de Estados Unidos citados en julio 2001 en Durban, XII Conferencia Internacional sobre el SIDA, por el doctor Richard Laing, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Durban (despacho de AFP del 5 de marzo de 2001).

<sup>169</sup> Hemos desarrollado un poco más el tema de la OMC y el de los Acuerdos en nuestro libro *La crisis actual del derecho al desarrollo*, Cuaderno núm. 11 del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, España, 2000, pp. 47 a 59.

<sup>170</sup> UNCTAD, *The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment*, New York, 1994, p. 109.

<sup>171</sup> Patrick Messerlin, *La nouvelle Organisation Mondiale du Commerce*, Dunod, Paris, 1995, p. 124, nota 1.



Además, el acuerdo de 1994 previó medidas de salvaguarda, antidumping, de salvaguardas transitorias, etc. En los primeros meses de 1994, la Unión Europea impuso unas veinte medidas antidumping sobre productos textiles provenientes de nuevos exportadores, como la India y Paquistán<sup>172</sup>.

Esto puede explicar el gran interés existente en los países desarrollados por introducir en los convenios comerciales una cláusula social, interés manifiestamente económico y con una finalidad proteccionista, y no revelador de una súbita preocupación social.

El 1 de enero de 2005 quedó liberado el comercio de textiles y China, que ya ocupaba un lugar muy importante en ese sector, aumentó verticalmente a partir de esa fecha sus exportaciones. Por ejemplo, en pocos meses las exportaciones destinadas a Europa se multiplicaron por dos y hasta por cinco, según las prendas. Algo similar ocurre en Estados Unidos.

Los industriales textiles de los países desarrollados pensaron poder resistir la competencia concentrándose en la alta calidad, pero China tiene los conocimientos y la maquinaria, adquirida en Alemania, Japón y Corea del Sur, para competir también ventajosamente en ese sector.

Las consecuencias para los países que tienen un sector industrial textil que emplea una numerosa mano de obra (Grecia, Portugal, Turquía, Marruecos, Túnez, América Latina y el Caribe, Bangladesh, etc.) de la irrupción masiva en el mercado mundial de los productos textiles de origen chino a un precio muy bajo que desafía toda competencia, entre otras razones por el salario extremadamente bajo de los trabajadores chinos<sup>173</sup>, han sido particularmente graves en términos de cierre de fábricas, cesantías, disminución de salarios y empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal que permanece ocupado<sup>174</sup>. La industria textil de los países desarrollados también acusó el impacto<sup>175</sup>. Estados Unidos reaccionó inmediatamente imponiendo cuotas a la importación de textiles de origen chino, y la Unión Europea negoció con China en junio de 2005 cuotas de importación.

Si bien la industria textil de los países desarrollados sufre los efectos de la competencia de China, los gobiernos de dichos países no quieren des-

<sup>172</sup> Ibid., p. 132.

<sup>173</sup> En encuestas realizadas en 2003 por Werner International, el promedio del costo de la mano de obra en China era de 0,69 dólares por hora, comparado con 26,10 dólares por hora en Japón, 14,24 en Estados Unidos, 14,71 dólares por hora en Italia, y 18,10 en Alemania. Fuente: Ing. Agr. Roberto Cardellino - José Luis Trifoglio - S.U.L., en base The Woolmark Co. mercados@sul.org.uy.

<sup>174</sup> Por ejemplo, en Bangladesh la industria textil y del vestido ocupa a dos millones de personas directamente y a 10 millones indirectamente, y se estimaba que en 2005 podrían perderse un millón de empleos.

<sup>175</sup> El impacto social de esta situación en los países europeos y en Estados Unidos es también grave en materia de pérdida de empleos y deterioro de las condiciones de trabajo y de salario en ese sector industrial.



atar una guerra económica con el gigante asiático. Por una parte, porque los sectores dominantes de sus economías son otros: maquinaria de alta tecnología, aeronáutica, biotecnología, servicios, etc., y prefieren sacrificar la industria textil a cambio de mantener abierto el mercado chino para la producción de sus industrias dominantes.

Por otra parte, los textiles a muy bajo precio que entran al mercado de los países desarrollados tienen la ventaja de que pueden disminuir el costo de la fuerza de trabajo<sup>176</sup> en dichos países. En efecto, la ropa ocupa un lugar importante en el presupuesto de las familias, que varía más o menos entre el 10 y el 40% según el nivel de ingresos, según se trate de familias con niños o no, urbanas o rurales, etc. En las familias de bajos recursos la comida y la ropa y, si es el caso, el alquiler de la vivienda, constituyen los rubros más importantes.

De modo que el acceso a ropa muy barata alivia en mayor o en menor medida el presupuesto familiar, o por lo menos compensa los aumentos en otros rubros de dicho presupuesto y, como consecuencia, puede disminuir, o no aumentar, el costo de la fuerza de trabajo.

Según el acuerdo de junio 2005 entre la Unión Europea y China, que estableció cuotas para el ingreso de textiles chinos en Europa, China fue autorizada a exportar a la UE un total de 105 millones de pantalones para hombre entre el 11 de junio y el 31 de diciembre de 2005, lo cual situaría la cuota anual de este producto en 316 millones de unidades, pero ya a principios de agosto dicha cuota estaba cubierta como consecuencia de los pedidos masivos formulados por los importadores y grandes distribuidores europeos, deseosos de aumentar considerablemente el volumen de sus negocios con la venta de ropa a muy bajo precio. La consecuencia es que en los puertos europeos quedaron bloqueados durante cierto tiempo decenas de millones de prendas de vestir de origen chino hasta que se encontró una solución para que esa ropa entrara al mercado europeo. Con la implantación de las cuotas se quiso satisfacer a los industriales textiles europeos, y con la "flexibilización" de las mismas se cede a la presión de la gran distribución, deseosa de vender enormes cantidades de ropa barata al consumidor europeo de bajos recursos.

Estas son las consecuencias de la "mano invisible del mercado" y de la "libre competencia" a escala mundial, que incluye la libre competencia en materia de costo de la mano de obra, con sus perdedores y sus ganadores. Los perdedores son las decenas de millones de trabajadores (en este caso de

<sup>176</sup> De manera esquemática puede decirse que el costo de la fuerza de trabajo está representado por la remuneración que necesita el trabajador para que él y su familia puedan mantener el nivel de vida medio correspondiente a su situación social. Costo de la fuerza de trabajo y, consecuentemente, nivel de vida que pueden tener hacia su elevación o su descenso, en términos absolutos o relativos, según las circunstancias económicas y la relación de fuerzas sociales en un momento dado.

la industria textil y del vestido) que se quedan en la calle o están obligados a aceptar el deterioro de sus condiciones de empleo. Y también pierde la industria textil de numerosos países que no puede competir con los productos de origen chino. Los ganadores son los gigantes de la importación y de la distribución, y las grandes empresas de las industrias dominantes en los países desarrollados, que se benefician con la disminución, o por lo menos la estabilización, del costo de la fuerza de trabajo, como se explicó unas líneas más arriba.

Esto desmiente una vez más la teoría económica neoclásica de que el libre comercio internacional tiende a la nivelación de la remuneración de factores a escala mundial. Dicho de otra manera, los hechos desmienten la afirmación de que el "libre" comercio internacional a la larga "empuja" hacia arriba el desarrollo económico y el nivel de vida a escala planetaria.

Siempre subsisten las diferencias de remuneración del capital (beneficios) entre diferentes sectores industriales (textil y aeronáutica, por ejemplo), y la tendencia del capital a reducir el costo de la mano de obra orientando sus inversiones hacia las regiones de salarios más bajos. Esa es la estrategia de las sociedades transnacionales, que libran una lucha feroz entre ellas, totalmente ajena a la idea de la "competencia pura y perfecta". La reorientación del capital hacia sectores industriales o regiones geográficas más rentables se reproduce incesantemente, y el resultado es bien perceptible: algunos ganadores y decenas de millones de perdedores, lo que explica en buena medida el hecho de que la brecha entre ricos y pobres, a escala mundial y también nacional hace decenios que no cesa de aumentar<sup>177</sup>.

## El Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio

El artículo 1 de este Acuerdo establece que el mismo se aplicará a las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de mercan-

<sup>177</sup> Puede consultarse el trabajo, siempre actual, *Precio, salario y ganancia* de Carlos Marx (1865), donde éste explica: 1) La relación entre el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del obrero, la dominación del capitalista; 2) la inevitable ruina, bajo el sistema actual, de las clases medias burguesas y del llamado estamento campesino, y 3) el sojuzgamiento y la explotación comercial de las clases burguesas de las distintas naciones europeas por Inglaterra, el déspota del mercado mundial, en [www.ucom.es/info/bas/es/marx-eng/](http://www.ucom.es/info/bas/es/marx-eng/)

Véase también John Eaton, *Economía Política*, Amorcortu, Argentina, 1971; Capítulo 8, reimpresión 2004; Paul Sweezy, *Teoría del desarrollo capitalista*, tercera parte, Fondo de Cultura Económica, México, 1945; Antonio Pesenti, *Lecciones de economía política*, Capítulo XIII, La Habana, 1972. Véase así mismo, *Mondialisation et commerce international*, Cahiers Français, núm. 325 de la Documentation Française, París, marzo-abril, 2005, en [www.ladocumentationfrancaise.fr](http://www.ladocumentationfrancaise.fr). Contiene trabajos de varios autores. En el editorial se dice: "La historia muestra que si la mundialización y el comercio internacional no constituyen fenómenos recientes, está demostrado el hecho de que el libre comercio genera ganadores pero también perdedores".

cias, es decir, que excluye a las inversiones relacionadas con el comercio de servicios, tema que veremos más adelante en el literal e).

El artículo 2 establece que ningún miembro aplicará medidas que sean incompatibles con las obligaciones de "trato nacional" y de "eliminación general de las restricciones cuantitativas" (arts. III y XI del GATT de 1994).

Esto puede entenderse como la renuncia de los Estados a su prerrogativa soberana de establecer condiciones a las inversiones extranjeras en función de los intereses nacionales, en nombre de la "libre competencia" cuyos resultados sociales acabamos de comentar.

### Las negociaciones sobre el comercio agrícola en la OMC

El fracaso de las negociaciones de septiembre de 2003 en Cancún sobre el comercio agrícola ha puesto de relieve la profunda contradicción existente, también en ese plano, entre la Unión Europea y Estados Unidos por un lado, y los países pobres o semidesarrollados, por el otro.

La raíz del conflicto consiste en que la sobreproducción agrícola de la Unión Europea y de Estados Unidos está ampliamente subvencionada, en especial los cereales, el azúcar, los productos lecheros, el algodón, etc., que compiten en el mercado internacional con los mismos productos del Tercer Mundo.

Se estima que en 2003 el monto total de las subvenciones ascendió a más de 300 mil millones de dólares anuales, es decir, unas seis veces la "ayuda" al desarrollo.

Este *dumping* de los países ricos tiene por consecuencia la limitación del acceso al mercado internacional de los países exportadores del Tercer Mundo y la ruina en estos últimos países de los pequeños campesinos que producen cultivos de subsistencia y para el mercado interno, y también para la exportación, pues no pueden competir con la producción subvencionada.

Por ejemplo, en el caso del algodón, unos 12.000 productores estadounidenses recibieron en 2002 más de 3 mil millones de dólares de subvenciones, lo que les permite vender por debajo del costo de producción. Por otro lado, el beneficio de los cultivadores de algodón en África, que tendría que dar para vivir a unas 10 millones de personas, se redujo prácticamente a cero. Los principales países de África exportadores de algodón (Benin, 75% de las exportaciones, Mali, 50% de sus recursos en divisas, y Tchad, primer producto de exportación) perdieron 250 millones de dólares.

Además, sobre todo las transnacionales agroalimentarias estadounidenses están cambiando desde hace años los hábitos alimentarios en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, han logrado suplantar en algunos países africanos la mandioca, producida localmente, por el trigo que dichos países deben importar; en Japón el arroz y el pescado han sido en buena parte

suplantados por el trigo y la carne, también importados. O han logrado introducir su propia producción compitiendo con el mismo producto local, como ocurre con el maíz en México, que se autoabastecía desde hace miles de años y ahora importa de Estados Unidos el 30% del maíz que se consume en el país.

La agricultura local, con sus sistemas tradicionales adaptados al clima y a la tierra, tienden a desaparecer y, al mismo tiempo, desaparecen el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria.

La Unión Europea y Estados Unidos realizan esa política no sólo por razones económicas, sino también políticas: sus agricultores no son muy numerosos pero constituyen una reserva electoral mayoritariamente conservadora que puede resultar decisiva en una elección. Lo mismo ocurre en Japón con los productores de arroz, que están subvencionados a nivel del 700% del costo de producción.

Dice Messerlin<sup>178</sup> que las subvenciones a las agricultura costaron 86 mil millones de dólares a los contribuyentes y a los consumidores de la Unión Europea en 1990. Pero en muchos casos, sigue diciendo Messerlin, los agricultores están lejos de ser los principales beneficiarios de esta política: el 80% de las subvenciones a la exportación para los cereales franceses son percibidas por siete sociedades transnacionales: tres europeas (Richco, Soufflet y Toepfer) y cuatro estadounidenses (Cargill, Continental, Dreyfus y Tradigrain).

Haciendo una extrapolación de esta estimación de Messerlin para 1990, y sobre la base de que alrededor del 80% del comercio agrícola internacional está en manos de sociedades transnacionales, se puede suponer que en 2003 las sociedades transnacionales del sector se quedaron con unos 200 mil millones de los más de 300 mil millones de dólares de las subvenciones a la agricultura.

Cabe concluir que los países ricos "exportan" su problema agrícola de sobreproducción con las consecuencias que se acaban de ver (elevado costo—unos mil dólares anuales por familia— para los contribuyentes europeos, estadounidenses y japoneses por un lado, y hambrunas, cambio de los hábitos alimentarios y ruina de la agricultura local en los países pobres, por el otro), y que las principales beneficiarias de esta política son las sociedades transnacionales agroalimentarias<sup>179</sup>.

<sup>178</sup> Messerlin, ob. cit., p. 63.

<sup>179</sup> Fuentes consultadas sobre la cuestión agrícola, entre otras: Messerlin, *La nouvelle Organisation mondiale du commerce*, ob. cit.; Michel Rainelli, *l'Organisation mondiale du commerce* La Découverte, Paris, 2000; Wolfensohn, James (presidente del Banco Mundial), *Un enjeu crucial pour les pauvres*, en *Le Monde*, 12/09/03; Joaquín García y Juan Velázquez, *Para entender Seattle*, núm. 38, revista electrónica española *Cultura para la esperanza*, 2000, en [www.eurosur.org/acc/](http://www.eurosur.org/acc/), entre otras.

## El Acuerdo general sobre el comercio de servicios<sup>180</sup>

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés) de la OMC está completamente separado del acuerdo sobre bienes (GATT), lo que impide la negociación "cruzada", es decir, que un país en desarrollo ponga como condición para abrir sus fronteras a los servicios que se abran las fronteras de la otra parte a sus propios productos. Sin embargo, el Acta Final permite en cambio las represalias "cruzadas", es decir, que una gran potencia puede cerrar sus fronteras a los bienes de un país en desarrollo si, por ejemplo, éste no cumple con los acuerdos de "liberalización" en materia de servicios<sup>181</sup>.

Dice Rafael H. Barrera Gallón: "El AGCS tuvo su origen en las presiones de las multinacionales de USA agrupadas en la Coalición Americana de Servicios creada en 1982, y de las multinacionales europeas agrupadas también desde 1982 en el Foro Europeo de Servicios auspiciado por la OCDE"<sup>182</sup>.

<sup>180</sup> Para la elaboración de este literal hemos consultado distintos trabajos, entre otros, Raoul Marc Jen-  
nar, *L'OMC: de Doha a Hong-Kong via Genève*, en URFIG - [www.urfig.org](http://www.urfig.org); Nico Hirtl, miembro  
de la asociación belga "Llamamiento por una escuela democrática", *La OMC y el gran mercado de  
la educación*, en <http://users.skynet.be/aped>; Colin Arce Gómez, jefe de la Oficina Jurídica de la  
UNED, Costa Rica, *Educación universitaria y tratados de libre comercio*; Chakravarthi Ragavan, en  
Tercer Mundo Económico, *¿La exportación del caso Andersen?*

<sup>181</sup> Messerlin, *ib. cit.*, p. 253.

<sup>182</sup> Rafael H. Barrera Gallón, presidente de la Federación Colombiana de Colegios de Contadores  
Públicos, ha escrito un exhaustivo trabajo sobre la liberalización de los servicios profesionales: *Las  
negociaciones sobre servicios profesionales en los TLC con los Estados Unidos, un coto privado  
de caza para las multinacionales y transnacionales*. Señala Barrera Gallón: "Es clara la intención  
en estas negociaciones de los servicios profesionales de aislar a los profesionales de los sectores  
sociales más golpeados por las políticas neoliberales, mayoritarios en las naciones, cuando se  
clasifican sus servicios en el capítulo de los servicios prestados a las empresas. Acorde con lo  
anterior los dirigentes de los países comprometidos con los acuerdos de libre comercio adelantan  
políticas educativas neoliberales conducentes a preparar mano de obra medianamente capacitada  
y profesionales acordes a las necesidades de las multinacionales en sus países... Diferentes estudios  
sobre las medidas de las legislaciones de los estados de EUA sobre la aplicación de las disciplinas  
de la AGCS, y otras más exigidas a los países con los cuales han suscrito o negocian acuerdos  
comerciales, destacan la existencia de gran cantidad de obstáculos para que profesionales de  
otros países puedan emigrar y ejercer sus profesiones". Y más adelante: "Dentro de esa situación  
macroeconómica y con esos mecanismos los efectos desastrosos de los TLC con EUA sobre los  
profesionales son de tres dimensiones, ya que además de la vana ilusión de poder salir a ejercer  
en los estados federados, o de poder competir con sus profesionales, como segunda tragedia  
al terminar de arrasarse con los TLC la producción industrial y agrícola por favorecerse la libre  
circulación de las mercaderías de las multinacionales maquiladoras y los productos agropecuario  
super subsidiados decrecen las oportunidades y espacios donde aplicar el talento nacional en el  
desarrollo de los países al sur del Río Grande y se aumenta el subempleo y desempleo profesional,  
y como tercer efecto, al entregar nuestros mercados de servicios profesionales a extranjeros con  
la eliminación de las reglamentaciones profesionales y darles el mismo trato nacional sin reci-  
procidad quedaran la gran mayoría de los profesionales latinoamericanos excluidos de ejercer  
dignamente sus profesiones", en [www.colegiosdecontadores.org.co](http://www.colegiosdecontadores.org.co). Barrera Gallón presentó  
su trabajo en el taller internacional sobre el ALCA y los tratados bilaterales organizado por el  
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) en Bogotá los días 29 y 30 de  
marzo de 2005.



El Acuerdo general sobre el comercio de servicios de la OMC tiene dos partes: el acuerdo principal que contiene las normas y disciplinas generales, y las "listas" nacionales en las que figuran los compromisos concretos que asume cada país con respecto al acceso de los proveedores extranjeros a sus mercados internos.

El AGCS abarca todos los servicios que son objeto del comercio internacional con dos excepciones: los servicios suministrados al público en el ejercicio de las facultades gubernamentales, es decir, todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios (art. 1, inc. c) y, en el sector del transporte aéreo, los derechos de tráfico y todos los servicios relacionados directamente con el ejercicio de los derechos de tráfico.

El AGCS define, así mismo, cuatro formas en que un servicio puede ser objeto de comercio, conocidas como "modos de suministro": 1) *Suministro transfronterizo*. Servicios suministrados de un país a otro. Por ejemplo, un usuario de un país recibe servicios del extranjero a través de su infraestructura de telecomunicaciones o de correos; ese suministro puede incluir servicios de consultoría o informes sobre investigación de mercado, asesoramiento telemédico, capacitación a distancia o proyectos de arquitectura. 2) *Consumo en el extranjero*. Los consumidores de un país utilizan un servicio en otro país. Por ejemplo, nacionales de un país se trasladan al extranjero en calidad de turistas o pacientes para recibir los servicios correspondientes. 3) *Presencia comercial*. Una empresa de un país establece sucursales o filiales para que presten servicios en otro país. Por ejemplo, un servicio es suministrado en un país por una filial, sucursal u oficina de representación, establecida en el territorio de dicho país, de una empresa de propiedad y control extranjeros (banco, grupo hotelero, constructora, etc.). 4) *Movimiento de personas*. Personas que se desplazan de su propio país para suministrar servicios en otro país ya sea como proveedores independientes (por ejemplo, consultor, profesional sanitario, docente) o como empleados de un proveedor de servicios (por ejemplo, consultoría, hospital, constructora).

A nivel global, el sector servicios es potencialmente el más rentable de la economía contemporánea, lo que explica el particular interés por el mismo del gran capital transnacional<sup>183</sup>.

El Acuerdo general sobre el comercio de servicios tiene como objetivo la liberalización progresiva del mismo: "...los Miembros entablarán una serie de negociaciones sucesivas... que tendrán lugar periódicamente, con miras a elevar progresivamente el nivel de liberalización" (art. XIX del Acuerdo).

<sup>183</sup> Según un comunicado de prensa de la OMC del 9 de noviembre de 2006, en 2005 las exportaciones mundiales de bienes sumaron 10,16 billones de dólares, y la exportación de servicios comerciales alcanzó la suma de 2,41 billones de dólares.



Esta "liberalización progresiva", está acompañada en el Acuerdo por la cláusula del "acceso a los mercados" (art. XVI), el "trato nacional" (art. XVII), es decir, que las empresas extranjeras deben recibir igual trato que las empresas nacionales, incluso el mismo que las empresas del Estado de servicios públicos, y también el trato de "nación más favorecida". El trato de la nación más favorecida constituye uno de los principios más importantes del AGCS, cuyo artículo II prescribe que los Miembros otorguen a los servicios y los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro el mejor trato que otorguen a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro país, independientemente de que este último sea o no Miembro de la OMC. Esta obligación garantiza que cualquier medida liberalizadora, ya sea negociada bilateralmente o aplicada unilateralmente, se ampliará a la totalidad de los Miembros.

Como el Acuerdo no define los servicios, qué es un servicio es también objeto de las negociaciones, pero el gran capital transnacional tiene claros sus objetivos en este terreno: las finanzas, las comunicaciones, los transportes, la informática, el audiovisual, la publicidad, la salud, la educación en todos los niveles, los seguros, las pensiones, la distribución de mercancías, la hotelería, el turismo, el suministro de energía, el suministro de agua, la gestión de residuos, etc. Muchos de esos sectores ya son ampliamente dominados por grandes sociedades transnacionales y otros, como la educación y la salud, están en camino de serlo.

El AGCS, y las sucesivas negociaciones sobre la aplicación del mismo, implican la privatización de los servicios públicos esenciales, es decir, que lo que deberían ser derechos básicos para cada ser humano con independencia de su nivel de ingresos (la salud, la educación, el agua potable, etc.), se están convirtiendo en mercancías que sólo están al alcance de las personas solventes.

Las negociaciones en el marco del AGCS comenzaron el año 2000 y debieron culminar en 2005, pero a comienzos de 2007 continuaban estancadas. Los compromisos que asuman los Estados en dichas negociaciones serán en buena medida irreversibles, en el sentido de que el desistimiento de un compromiso implica compensaciones de un costo sumamente elevado, difícilmente soportables para un país pobre, entre otras cosas por la obligación de reconocer y pagar el lucro cesante a las empresas que se consideren perjudicadas.

Las negociaciones en el marco del AGCS se están llevando a cabo de manera confidencial y reservada, sin que la información sobre las mismas llégue a la opinión pública ni a los respectivos parlamentos nacionales. Debido a esto, cuestiones esenciales que pueden afectar gravemente el modo y las condiciones de vida de las personas se están decidiendo en círculos cerrados de los gobiernos con participación decisiva del poder económico

transnacional a través de sus representantes, que actúan como asesores de los gobiernos o como funcionarios de los Estados o de organismos interestatales. Los pueblos, que sufrirán las consecuencias de estas decisiones, no participan en absoluto, ni directamente a través de sus propias organizaciones, ni por intermedio de los parlamentos nacionales.

## La OMC como instrumento de la mundialización capitalista ultraliberal

En el contexto de la mundialización de la economía (mundialización de la producción, del comercio, de las finanzas, de las comunicaciones, etc.), la OMC va mucho más allá de la regulación del comercio transfronterizo y constituye un mecanismo institucional de imposición planetaria del modelo desregulador neoliberal, erosionando seriamente las funciones de los poderes públicos en el interior de cada Estado, su capacidad de negociación externa, y el derecho de autodeterminación de los pueblos y de los Estados.

La cooperación con el FMI y con el Banco Mundial (art. III del Acuerdo constitutivo de la OMC) y la *Declaración sobre la contribución de la OMC para una mayor coherencia en la elaboración de políticas económicas a nivel mundial* están dirigidas a ese fin. La *Declaración* invita al director de la OMC a examinar, con el director general del FMI y el presidente del Banco Mundial, las formas de cooperación de las tres instituciones con miras a lograr una mayor coherencia en la elaboración de políticas económicas a nivel mundial.

También el Órgano de Examen de Políticas Comerciales (OEPC), creado por el Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech, contribuye a la imposición del modelo único neoliberal a escala planetaria. En dicho Anexo 3 se lee: "... el mecanismo de examen permite apreciar y evaluar colectivamente, de manera periódica, toda la gama de las políticas y prácticas comerciales de los diversos Miembros...".

Es así como el OEPC produce informes de evaluación de los Estados Miembros, calificándolos según la diligencia con que aplican las políticas de desregulación, privatización de los servicios públicos, apertura de las fronteras a la importación, etc.

El 1 de agosto de 2004, los entonces 147 países miembros de la OMC aprobaron un acuerdo sobre el fin de los subsidios a la agricultura que, sin embargo, no establece cómo ni cuándo se pondrá fin a los mismos. La política de subsidios a la agricultura que practican los países desarrollados, en particular Europa y Estados Unidos, es la "bestia negra" de los países pobres grandes exportadores de productos agrícolas.

El precio pagado por los países pobres por este acuerdo, de contornos sumamente imprecisos, es muy alto: la aceptación de reanudar las negocia-

ciones sobre *otros temas* que fracasaron en Cancún en septiembre 2003, y que debieron culminar en Hong Kong en diciembre 2005. Esos "otros temas" son los que realmente interesan a las grandes potencias: reanudar verdaderas negociaciones y fijar las nuevas reglas del juego para reimpulsar la liberalización de los intercambios mundiales estipulada en la ronda de Doha, iniciada en 2001. Esa liberalización incluye la reducción o eliminación de las barreras arancelarias en los países del Sur a los productos industriales del Norte, y la liberalización de los servicios, lo cual implica una competencia insostenible para la industria nacional de los países pobres, y la privatización y el control por empresas transnacionales de servicios esenciales como la salud y la educación.

Las negociaciones de la Ronda de Doha celebradas en Hong Kong fracasaron, volvieron fracasar en julio de 2006, y el *impasse* seguía a comienzos de 2007.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) emitió un comunicado el 8 de agosto de 2006, en el que dijo entre otras cosas que el fracaso de la Ronda de Doha de negociaciones para liberalizar el comercio internacional se debía sobre todo a la lucha para obtener ventajas en los mercados agrícolas por parte de las grandes potencias, empresas y *lobbies*. El enfoque adoptado en las negociaciones fue equivocado desde el principio, según la FAO, ya que no tuvo suficientemente en cuenta los intereses de los países en desarrollo y se centró en "el libre comercio, más que en el comercio justo". Se esperaba que las negociaciones ofrecieran soluciones a las necesidades de los países pobres y los pequeños campesinos, "pero nunca se centraron en estas cuestiones", dijo también la FAO.

Puede afirmarse que la Organización Mundial del Comercio sirve de base y complementa la trama de tratados regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio, y ha venido a sumarse al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional como parte del sistema institucional internacional económico-financiero al servicio del gran capital transnacional.

## **LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES Y LOS TRATADOS REGIONALES, SUBREGIONALES Y BILATERALES DE LIBRE COMERCIO**

*"Yo doy un yacimiento petrolífero y me dan en cambio la bencina para mi encendedor". Leopoldo Marechal, Megafón y la guerra, 1970.*

El planeta está envuelto en una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros internacionales, regionales y bilaterales que han subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional de los derechos humanos, incluido el derecho a un medioambiente

sano, las Constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo nacional y las leyes laborales y sociales vigentes.

Esta trama, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de "trato más favorable", de "trato nacional", y de "nación más favorecida", que figuran en casi todos los tratados, funciona como un sistema de vasos comunicantes que permite a las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales.

Todo esto comporta la primacía de los derechos del capital sobre los derechos democráticos y humanos de los pueblos. Se consolidan —como régimen jurídico de obligatorio cumplimiento— las políticas de liberalización y privatización. Se trata de lograr, mediante acuerdos internacionales, que estas políticas *no puedan ser revertidas*.

Es la regresión a una especie de derecho feudal o corporativo, opuesto al derecho público nacional e internacional, y que funciona en el interés exclusivo del gran capital transnacional y de los Estados ricos, y en detrimento de los derechos fundamentales de los Estados llamados periféricos y de sus pueblos.

Con el agravante de que este derecho corporativo está acompañado de un fuerte sistema coercitivo para asegurar su aplicación: multas, sanciones y presiones económicas, diplomáticas, militares, etc. Y para el arreglo de los diferendos entre las partes se han creado "tribunales arbitrales" al margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional, entre los que cabe destacar los que se constituyen en el seno del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI)<sup>184</sup>.

Forman parte de este sistema de derecho corporativo los acuerdos internacionales, regionales, subregionales y bilaterales<sup>185</sup>.

<sup>184</sup> Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, *ex officio*, el presidente del mismo Banco Mundial. En el seno del CIADI se constituyen tribunales arbitrales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (136 de éstos forman parte del CIADI), que aceptan someterse a su arbitraje. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos de igual a igual con empresas privadas, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la jurisdicción territorial de sus tribunales. El Convenio del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo (véase Capítulo IV, numeral 4, apartado d. Diversas maneras de liberarse de estos tratados), se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros. Pero hoy forman parte del CIADI una veintena de Estados de América Latina y el Caribe, la mayoría de los cuales se adhirieron en el decenio de 1990. No son parte del CIADI Brasil, Cuba, Haití, México y República Dominicana. En mayo de 2007 Bolivia, Nicaragua y Venezuela anunciaron su retiro del CIADI. En la OMC funciona otro tribunal: el Órgano para la solución de controversias.

<sup>185</sup> Los tratados internacionales son fundamentalmente los celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (véase el apartado 3 en este mismo Capítulo). Entre los Acuerdos regionales cabe destacar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México que rige desde 1994, y el Central American Free Trade Agreement (CAFTA).

Los tratados bilaterales (2000 aproximadamente en vigor en todo el planeta), son poco visibles para la opinión pública, muchos de ellos han sido celebrados a hurtadillas y *son aun más perjudiciales para los derechos de los pueblos que los tratados internacionales o regionales en vigor o en proyecto.*

Los tratados bilaterales comprenden fundamentalmente tratados de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI), de libre comercio (TLC), de derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología.

Estos tratados son el resultado de una táctica de los centros del poder económico-político planetario, particularmente de Estados Unidos, consistente en negociar uno a uno con gobiernos débiles o corruptos propensos a ceder.

Esto es lo que está ocurriendo en América. Estados Unidos eligió primero la vía rápida de un sólo tratado continental para someter a todo el continente a sus designios, basándose en el precedente del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA o ZLEA): es el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Este proyecto de acuerdo continental se estuvo negociando desde 1994 sin ninguna participación de los pueblos y de los parlamentos, pero distintos grupos y movimientos sociales dieron la señal de alarma explicando las consecuencias nefastas para los derechos de los pueblos del continente que acarrearía la aprobación del ALCA<sup>186</sup>. Esto ayudó a que varios gobiernos manifestaran su reticencia frente al mismo, aunque no una verdadera oposición, pues continuaron –y continúan– hablando de lograr un “buen” ALCA, que es como hablar de tener un “buen” cáncer.

Lo cierto es que el proyecto ALCA parece estar en hibernación, y Estados Unidos optó por otra metodología, consistente en negociar separadamente tratados bilaterales y subregionales.

---

Existen además el Tratado europeo de Maastrich y otras estructuras regionales como la Asociación de Naciones del Este de Asia (ASEAN), el ASEAN Free Trade Area (AFTA) y la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). El Proyecto de Tratado Constitucional europeo, que fue preparado por los gobiernos sin participación popular alguna, estaba destinado a ser una pieza maestra en Europa de este derecho antidemocrático y neoliberal al servicio del poder económico transnacional. Pero, por lo menos en la versión actual, fue dejado de lado porque fue rechazado en los referendos realizados en Francia y en Holanda, y para entrar en vigor requería la ratificación unánime de los Estados Miembros. Véase más adelante, en este Capítulo, el apartado 6, Las sociedades transnacionales y la Unión Europea.

<sup>186</sup> La aprobación del ALCA afectaría los derechos de los trabajadores, de los pequeños agricultores, del pequeño comercio, el derecho a la cultura y a la educación, a la salud, a un medioambiente sano, el acceso al agua, etc. Esto puede inferirse del mismo proyecto y del balance que puede hacerse de diez años de existencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA-ZLEA), de factura similar al proyecto ALCA.



Examinaremos brevemente los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI), los tratados bilaterales de libre comercio (TLC) y los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual.

## Los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI)

Estos tratados han precedido a los tratados bilaterales de libre comercio y hay más de un millar vigentes a escala mundial. Se celebran entre Estados pero los derechos que acuerdan se confieren a particulares, y en los mismos se incluyen disposiciones relativas al mecanismo de solución de las controversias que puedan surgir con motivo de la inversión, entre el inversor extranjero y el Estado receptor de la inversión. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en un TPPI hace surgir la responsabilidad internacional del Estado receptor de las inversiones por los daños ocasionados al inversor. La novedad radica en que el procedimiento para hacer cesar tal conducta y obtener un resarcimiento se aparta del derecho internacional clásico.

En el sistema clásico el particular no tiene acceso directo al tribunal y es el Estado de su nacionalidad el que hace suyo el reclamo a través de la protección diplomática, pero en virtud de las doctrina Calvo (véase d, 3 infra) esto solo puede suceder una vez que el particular afectado ha agotado los recursos administrativos y judiciales establecidos en la legislación nacional del Estado al que pretende demandar.

En el sistema de los TPPI esto se modifica, ya que se admite el acceso directo de los particulares a la instancia arbitral internacional en las condiciones pactadas en el tratado.

Veamos cuáles son los principales contenidos de los TPPI en vigor:

1. *Las inversiones extranjeras gozan siempre del trato más favorable*, aunque éste no esté previsto en el mismo TPPI, pero sí en otros tratados o normas. El incumplimiento del trato más favorable genera la responsabilidad del Estado receptor, exigible por los procedimientos (en general un tribunal arbitral) que el mismo tratado prevé.

Esto significa que en todos los casos se dará el trato más favorable a la inversión, independientemente de cuál sea la norma (nacional o internacional) que acuerde mejores condiciones a las inversiones.

2. *Trato nacional*. Toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe ser extendida a los inversores extranjeros. Los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado, pues ello implicaría violar la igualdad de trato entre inversores nacionales y extranjeros.

3. *Cláusula de "nación más favorecida"*. Las ventajas que se acuerden mutuamente dos Estados en un tratado bilateral se extienden automática-



mente a los tratados que éstos celebren con otros Estados, donde se incluya la cláusula de "nación más favorecida", cláusula que existe en casi todos, sino en todos, los tratados bilaterales.

4. *Ausencia e incluso prohibición de requisitos de desempeño.* Los requisitos de desempeño consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional: utilizar, en lo posible, materia prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, etc. *Estos requisitos no figuran en los TPPI y en algunos casos están expresamente prohibidos*, como en el tratado argentino-estadounidense y en el suscrito entre Canadá y Uruguay. En algunos casos la situación del Estado receptor es peor que en el TRIM (Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de bienes), celebrado en el marco de la OMC, que prohíbe los requisitos de desempeño sólo en el comercio de bienes. Por ejemplo, el tratado uruguayo-canadiense extiende la prohibición de los requisitos de desempeño a los servicios y a la transferencia de tecnología. De modo que, en ese marco, el Estado receptor no puede exigir al inversor que transmita el *know how* a los socios locales o a los trabajadores locales. Es decir que, en este caso, no hay incorporación de tecnología al Estado receptor.

5. *Los TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u "otras medidas de efecto equivalente".* Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que "privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar", como dijo el tribunal arbitral en el caso "Metalclad c/México", en el marco del TLCAN<sup>187</sup>.

6. Los TPPI prevén la compensación por pérdidas que se produzcan por una variedad de causas, entre ellas la pérdida de ganancias futuras o esperadas, como se ha señalado en 5.

7. Los TPPI prevén las transferencias al exterior del capital, los beneficios, las remuneraciones, las regalías, los honorarios por consultorías, etc., de manera irrestricta, en divisas libremente convertibles.

<sup>187</sup> En 1996 la empresa estadounidense Metalclad demandó al gobierno mexicano por violar el capítulo 11 del TLC, cuando el gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del TLC, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de "expropiación", y el gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares. El laudo arbitral en Metalclad Corporation c. Estados Unidos Mexicanos (caso ARB(AF) 97/1) se puede encontrar en <http://www.worldbank.org/icsid/cases/mm-awards.pdf>. Dicho laudo es muy ilustrativo porque el contenido del TLCAN es similar a muchos TPPI en vigor, y a los TLC en proyecto o a los ya vigentes, y las interpretaciones del tribunal arbitral en el caso Metalclad pueden dar una idea del grado de subordinación económica, social, política e institucional a que quedan sometidos los Estados que celebran tales tratados. Hay que decir que el gobierno federal mexicano autorizó, por servilismo e irresponsabilidad, la instalación del vertedero, y que fue el gobierno local quien posteriormente se opuso, lo que debilitó la situación jurídica del Estado mexicano en el juicio arbitral.

## Los tratados bilaterales de libre comercio

Mientras el ALCA parece estancado, como continuación del proceso iniciado por los TPPI y por las reformas “neoliberales” de las leyes sobre inversiones extranjeras, varios países están negociando tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos. “Están negociando” es una manera de decir. En realidad se trata de que firmen un contrato de adhesión al tratado tipo que ya tiene preparado y les presenta Estados Unidos, y la negociación consiste en tratar de introducir algunos retoques formales al tratado tipo estadounidense<sup>188</sup>.

Chile es el primer país del continente americano cuyo gobierno firmó, y su Parlamento aprobó en octubre de 2003 un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, que entró en vigor en enero de 2004.

El CAFTA es el acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos, por un lado, y El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, por el otro. Los cuatro primeros países mencionados ya lo ratificaron. Costa Rica sigue postergando su decisión, pues hay una fuerte oposición popular a la ratificación. La ratificación o no será decidida por referendun popular, pero antes de que los costarricenses aprueben o rechacen la firma del Tratado en la consulta popular prevista “tentativamente” por el Tribunal Supremo

<sup>188</sup> El tratado bilateral tipo estadounidense está basado en la *Trade Act* promulgada por el presidente Bush en agosto de 2002, que estableció la Bipartisan Trade Promotion Authority (Autoridad bipartidaria para la promoción del comercio), conocida también como “Vía rápida para celebrar tratados comerciales” (*fast track*), que confirió durante cinco años, es decir hasta julio de 2007, amplias facultades al presidente, en nombre de la seguridad nacional, de la libertad y de los intereses de Estados Unidos, para celebrar tratados comerciales que el Congreso puede aprobar o desechar, pero no modificar. Estas facultades conferidas al presidente en la *Trade Act* pueden ser renovadas o no por el Congreso en julio de 2007. En los puntos 1) y 2) (b - Recomendaciones) de la Sección 2101 del Título XXI la ley dice: “La expansión del comercio internacional es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. El comercio exterior es un elemento crítico para el crecimiento económico, el poderío y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo... La seguridad nacional de Estados Unidos depende de su seguridad económica que, a su vez, está cimentada en una vibrante y creciente base industrial. Los acuerdos comerciales deben maximizar las oportunidades de los sectores más importantes de la economía. La expansión del comercio ha sido el motor del crecimiento económico. Los acuerdos comerciales maximizan las oportunidades para sectores críticos y componentes esenciales de la economía de Estados Unidos, tales como la tecnología de la información, las telecomunicaciones y otras tecnologías de vanguardia, industrias básicas, bienes de capital, equipos médicos, servicios, agricultura, tecnología ambiental y propiedad intelectual. El comercio creará nuevas oportunidades para Estados Unidos y preservará la fuerza incomparable de Estados Unidos en los asuntos económicos, políticos y militares”.

Es algo similar a los superpoderes conferidos a Bush para “combatir el terrorismo”. La elección el 31 de marzo de 2005, de Paul Wolfowitz, secretario adjunto de defensa de Estados Unidos y uno de los artífices de la agresión contra Irak, como presidente del Banco Mundial es una prueba más de que para la administración estadounidense las guerras de agresión y la estrategia económico-financiera internacional son dos caras de la misma moneda. Si Bush hubiera oído hablar de Clausewitz podría parafrasearlo y decir que “la guerra es la continuación de los negocios por otros medios”. Wolfowitz fue obligado a renunciar el 17 de mayo de 2007 por cargos de corrupción. Véase el apartado 5, La corrupción, del Capítulo III.

Electoral para el 23 de septiembre de 2007, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia evaluará la constitucionalidad del Tratado.

La República Dominicana negoció su ingreso al acuerdo, que pasó a llamarse CAFTA-RD. La República Dominicana lo ratificó en 2005, pero ahora Estados Unidos quiere modificarlo para introducir nuevas concesiones.

Hubo negociaciones conjuntas de Colombia, Ecuador y Perú para celebrar un TLC con Estados Unidos. Pero en diciembre de 2005 el presidente de Perú decidió concluir separadamente el Tratado con Estados Unidos, que fue ratificado por el Congreso peruano en junio de 2006. Colombia, por su parte, firmó el TLC en noviembre de 2006. No obstante, Estados Unidos quiere introducir enmiendas al tratado ya firmado. Con el reciente cambio político se puede presumir que Ecuador no firmará el Tratado con Estados Unidos.

Vale la pena analizar un poco en detalle el TLC Chile-Estados Unidos, para tener una idea de lo que significan estos Tratados.

Resumimos a continuación el análisis que ha hecho el economista chileno Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre de Chile, en un documento que presentó al Tribunal Constitucional chileno alegando la inconstitucionalidad del Tratado.

El núcleo del Tratado es el capítulo 10, que comporta 3 secciones. La Sección A comprende los artículos 10.1 a 10.13 que se refieren a la inversión, la Sección B, (arts. 10.14 a 10.26), se refiere a la solución de controversias inversionista-Estado, y la Sección C, cuyo único artículo 10.27 contiene las Definiciones de algunos de los términos de este capítulo.

El artículo 10.1 (a) se aplica a los inversionistas de Estados Unidos en Chile, el artículo 10.1 (b) a las inversiones cubiertas, es decir, las inversiones de Estados Unidos que ya existen en Chile, y el artículo 10.1 (c) se aplica a las inversiones en Chile provenientes de cualquier país del mundo pero sólo con relación a lo que estipulan los artículos 10.5 y 10.12. Este artículo 10.1 (c) es una violación de la soberanía chilena, pues se le imponen a Chile obligaciones con inversores de otros Estados que no son partes en el Tratado y con los cuales Chile nada ha negociado.

En virtud del artículo 10.5.3, Chile puede imponer medidas administrativas, ambientales, sanitarias, de ubicación de producción, a una inversión *de cualquier país del mundo*, pero siempre y cuando esas restricciones no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales. Esto significa que un inversionista de cualquier país podría comprar un terreno u obtener en concesión una mina abandonada en el desierto chileno, para depositar en ellas residuos nucleares, y Chile no podría impedirlo, porque podría ser demandado por restricción encubierta al comercio o inversión internacional.

Ninguna autoridad chilena tendrá poder de decisión en caso de conflicto con un inversionista extranjero, sobre alguna disposición de este capítulo. Sólo tribunales arbitrales internacionales tendrán competencia para resolver estas controversias.

El artículo 10.12, que también concierne a los inversionistas de todo el mundo, establece que una Parte, es decir Chile o Estados Unidos, podrá mantener o hacer cumplir cualquiera medida que sea compatible con este capítulo, para garantizar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta *inquietudes* en materia ambiental. Se habla de tomar en cuenta inquietudes, pero no se dice que Chile pueda denegar una inversión que afecte la preservación del medioambiente. Al no poder el Estado chileno impedir una inversión que no respete el medioambiente, se está violando el inciso 8 del artículo 19 de la Constitución chilena que establece: "El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que ese derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza". Lo curioso es que el gobierno chileno ha renunciado a su obligación constitucional de preservar el medioambiente no sólo frente a los inversores del Estado cocontratante, Estados Unidos, sino a los inversores de Estados indeterminados, que no son parte en el Tratado<sup>189</sup>.

Los demás artículos de este capítulo conciernen solamente a los inversionistas de Estados Unidos. El artículo 10.9 llamado Expropiación e indemnización, establece que Chile no "Expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización", salvo que sea por utilidad pública, de una manera no discriminatoria, y mediante el pago de una indemnización al valor de mercado. Inversión cubierta se refiere a las inversiones de estados Unidos ya existentes en Chile, que no podrán ser alcanzadas por medidas de Chile que puedan ser consideradas equivalentes a la expropiación. Por su parte, el artículo 23.3.6 del capítulo 23 (Excepciones), establece que: "Los artículos 10.9 (Expropiación e indemnización) y 10.15 (Sometimiento de una reclamación a arbitraje), se aplicarán a una medida tributaria que se alega como expropiatoria o como una violación de un acuerdo de inversión o una autorización de inversión".

Esto quiere decir que Chile estaría imposibilitado de efectuar modificaciones tributarias que afecten a inversionistas de Estados Unidos, so pena de ser demandado ante un tribunal arbitral internacional, por establecer medidas que pueden ser consideradas expropiatorias.

Estas disposiciones, que restringen las facultades de las autoridades chilenas en materia tributaria, son manifiestamente violatorias de la soberanía chilena e inconstitucionales.

<sup>189</sup> Sobre la interpretación totalmente restrictiva de las "cláusulas ambientales", puede verse el laudo *Metaclad*, párrafos 96, 98, 109 y 111.

Según el artículo 10.9, el aumento de las regalías también puede ser considerado como una medida equivalente a la expropiación.

Además, el artículo 10.9 sobre Expropiación e indemnización, al establecer que la indemnización debe basarse en el valor de mercado y no debe excluir los derechos sobre yacimientos mineros, viola la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución de 1925, que en el inciso quinto del literal a) establece: "En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del núm. 10 del artículo 10 *no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros*", disposición que está vigente por mandato de la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980 que establece: "La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17ª transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución". La no indemnización por la nacionalización o expropiación de concesiones mineras es absolutamente lógica y concordante con el inciso sexto del núm. 24 del artículo 19 de la Constitución que establece: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas". Es doblemente inconstitucional entonces, que el Estado tenga que indemnizar por recuperar, mediante expropiación, lo que le pertenece, y que sólo había entregado en concesión.

Con relación a la solución de controversias, en la sección B del capítulo 10, en el artículo 10.15 establece que el demandante podrá someter a arbitraje una reclamación, si el demandado ha violado una autorización o un acuerdo de inversión. Se desprende de este artículo que el Estado chileno solo puede ser demandado, pero nunca podrá ser demandante, aunque considere que un inversionista no respeta las disposiciones de este tratado. Más explícito respecto de esta unilateralidad ante la ley, es el artículo 10.27 llamado Definiciones, que define precisamente que demandado es la Parte que es parte en una controversia, y Parte sólo se les llama a los Estados firmantes de un tratado.

Por toda controversia que se produzca con relación a este Tratado, los tribunales chilenos no tendrán competencia: sólo la tendrán tribunales arbitrales internacionales, compuestos de 3 árbitros, uno de Chile, otro de la otra Parte, y otro de una nacionalidad distinta. El derecho que se aplica en estos juicios es el derecho internacional consuetudinario y no las leyes chilenas, lo que deroga en forma tácita el artículo 16 del Código Civil chileno que establece: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile". En este caso los bienes situados en Chile que corresponden a inversiones de Estados Unidos, y las inversiones de cualquier país del mundo de acuerdo con los artículos 10.5 y 10.12, no se regirán por leyes chilenas, pese a lo que dice el artículo 16 del Código Civil.



El Tribunal Constitucional chileno ya ha dictaminado sobre la delegación de facultades jurisdiccionales a tribunales internacionales. El último dictamen sobre esta materia fue el Rol 312 del 3 de octubre 2000; con relación a las facultades jurisdiccionales que los requirentes atribuían a la Comisión Administradora del Tratado Minero con Argentina, el Tribunal Constitucional resolvió:

La Presidente subrogante Ministro señora Luz Bulnes Aldunate, concurre al fallo en el entendido que los artículos 5, 18, 19 y 20 del Tratado no crean un tribunal con facultades jurisdiccionales. Queda en claro que la Comisión Administradora es sólo un mediador y las "otras funciones" que se le pueden otorgar por el artículo 18 tendrán ese mismo carácter. Si así no fuera, se trataría de un tribunal internacional al que se le habría delegado soberanía y sus resoluciones obligarían al Estado de Chile. Para ello sería menester que se reformaran los artículos 5, 73 y 79 de la Constitución Política. Teniendo presente estas consideraciones, la señora Ministro concurre a la sentencia de autos.

Además, el Tribunal Constitucional, dijo que "si un tratado contiene normas propias de la ley orgánica constitucional, debe someterse a control preventivo y obligatorio de constitucionalidad por este Tribunal, al igual que los proyectos de ley orgánica constitucional".

Como se ve, el Tratado bilateral de comercio celebrado por Chile con Estados Unidos plantea numerosos problemas constitucionales. Y la Constitución de Chile, en el artículo 82, inciso 2°, establece que corresponde al Tribunal Constitucional resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Es decir, establece una especie de *control preventivo* de los Tratados, antes de que sean ratificados por el Congreso.

Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios chilenos no tuvieron inconveniente en votar la ratificación del tratado sin consultar al Tribunal Constitucional.

A fines de 2003 el Tribunal Constitucional resolvió no acoger a tramitación la petición presentada para que se declarase inconstitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Tribunal rechazó la solicitud, argumentando que "teniendo a la vista únicamente el hecho de que las personas no tienen derecho a presentar al Tribunal Constitucional sus observaciones, porque eso contradice el artículo 82 respecto a nuestras atribuciones legales, no consideramos los argumentos (de fondo)".

## Los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, TRIPS en inglés) es muy criticado, y con razón. Pero hay una serie de tra-



tados bilaterales sobre la misma cuestión que los países ricos celebran con los países pobres en interés de las sociedades transnacionales, que agravan las disposiciones del Adpic. Por eso se los llama "TRIPS-plus".

Por ejemplo, el Adpic admite la posibilidad de excluir del sistema de patentes a los seres vivos, aunque en el artículo 27, 3, b) del mismo dice: "Sin embargo, los Miembros preverán la protección de variedades vegetales por brevets, mediante un sistema *sui generis* eficaz o por una combinación de ambos...". No especifica qué quiere decir un "sistema *sui generis* eficaz". Así, en el Adpic, de todas maneras queda la puerta abierta al patentamiento de variedades vegetales.

Pero la mayoría de los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual obligan a los signatarios a adherirse a la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), que no es mencionada en el Adpic.

El UPOV es un tratado celebrado en 1961 del que eran miembros hasta 1994 sólo países del Norte y Sudáfrica. Pero desde esta última fecha comenzaron a adherirse al mismo países del Sur. El tratado otorga amplia latitud para patentar plantas, y expone a los agricultores, para poder seguir sembrando y cultivando, a tener que pagar cada vez más derechos a las grandes sociedades transnacionales especializadas en ingeniería genética y en "piratería genética".

Como el derecho tradicional de patentamiento requiere que el objeto de la patente sea un invento, con lo que quedan excluidos los organismos vivos que existen en la naturaleza, con el UPOV se consagraron los llamados "derechos del obtentor" que se refieren a las variedades vivas obtenidas con manipulaciones genéticas<sup>190</sup>.

Así es como con los tratados bilaterales que obligan a adherir al UPOV desaparece la posibilidad que tienen los Estados miembros del Adpic de excluir de sus leyes de patentes a las plantas y a los animales.

Aparte de los abusos que se cometen con el patentamiento de seres vivos, pues se patentan genes y otros materiales vivos existentes en la naturaleza<sup>191</sup>, con las reformas introducidas en 1991 al UPOV 78 se suprimió totalmente el derecho fundamental del agricultor a guardar o intercambiar con otros agricultores para la siembra siguiente semillas que tengan "derechos de obtentor" registrados<sup>192</sup>.

<sup>190</sup> Véase más arriba, en este mismo Capítulo, el apartado 3 a). El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC, TRIPS en inglés).

<sup>191</sup> Véase Jeremy Rifkin, *Le siècle biotech*, La Découverte, Paris, 1998.

<sup>192</sup> Véase Silvia Ribeiro, *Campeños, biodiversidad y nuevas formas de privatización*, en *América Latina en movimiento*, núm. 384, febrero, 2004, en [www.alainet.org](http://www.alainet.org), [www.etc.group.org](http://www.etc.group.org)

Los siguientes son dos ejemplos de la utilización abusiva del patentamiento de seres vivos (en este caso semillas transgénicas).

Monsanto demandó a dos agricultores canadienses de apellido Schmeiser el pago de regalías a raíz de que plantas nacidas de semillas transgénicas transportadas por el viento o por insectos desde predios vecinos crecieron espontáneamente en sus campos. La transnacional acusó a los agricultores de violar su patente de canola (colza) transgénica, resistente al herbicida Roundup, también fabricado por Monsanto.

El 21 de mayo de 2004 la Corte Suprema de Canadá emitió la sentencia definitiva en el caso.

Los Schmeiser nunca utilizaron la canola transgénica: sus campos se contaminaron porque el viento y los insectos fueron los vectores de la contaminación de sus cultivos y no lo supieron hasta que Monsanto envió sus inspectores a sacar muestras y una carta amenazándolos con llevarlos a juicio si no pagaban los miles de dólares que estimaba le debían por regalías. Distintos tribunales dictaron sentencias contra los Schmeiser sosteniendo que, aunque no se podía demostrar su culpabilidad, deberían haber advertido a Monsanto que podría haber plantas contaminadas accidentalmente y pedirle que las retirara, o de lo contrario se estaban “aprovechando” de los genes patentados. Por esta razón, los condenaron a pagar casi 20 mil dólares de multas y regalías y más de 150 mil dólares por los gastos de juicio, además de que Monsanto los amenazó con nuevos juicios por haber denunciado públicamente el caso.

La sentencia de la Corte Suprema, por cinco votos contra cuatro, afirmó que la patente sobre genes de canola transgénica es válida también en las plantas contaminadas, y por tanto los Schmeiser estaban ¡“privando a Monsanto del pleno gozo de su monopolio”! al “usar” plantas que contenían genes con su patente. Sin embargo, la Corte estimó que los Schmeiser no tenían que pagar nada a Monsanto, porque no sacaron provecho alguno de la canola transgénica, ya que nunca usaron el herbicida Roundup.

Según Pat Mooney, director del Grupo ETC, con sede en Canadá, “Monsanto se consiguió una patente inflexible. Ahora puede decir que sus derechos se extienden hasta cualquier cosa en la que se introduzcan sus genes, ya sean plantas, animales o humanos”. La Corte de Canadá fue incluso más allá de la ley de patentes de Estados Unidos –notoriamente pro monopolica–, porque sentenció que la patente sobre un gen se extiende a cualquier organismo superior que contenga al gen patentado. “Bajo este veredicto, la expansión de la contaminación se convierte en una estrategia rentable de las corporaciones para extender sus monopolios”, dijo Mooney<sup>193</sup>.

<sup>193</sup> Silva Ribeiro, *La Jornada*, México, 25 de mayo, 2004.

El otro caso, también protagonizado por Monsanto, se refiere a la producción y exportación de soja transgénica en Argentina.

En 1996 el gobierno argentino autorizó el cultivo comercial de la soja transgénica. Fue uno de los primeros países en el mundo en hacerlo después de Estados Unidos, haciendo caso omiso del principio de precaución. La superficie sembrada de soja, que en ese entonces era de un millón de hectáreas, creció exponencialmente hasta alcanzar en 2006 a 14 millones de hectáreas, casi toda ella soja transgénica Roundup Ready patentada por Monsanto.

En 1996 Monsanto tenía sumo interés en difundir y rentabilizar sus OGM y encontró en Argentina un campo propicio para esos fines. Las semillas de soja RR de Monsanto se vendían a bajo precio y a veces hasta se regalaban.

Los agricultores guardaban semillas para la siembra siguiente sin pagar regalías a Monsanto por su patente. Se consideraban amparados por la legislación argentina que los autorizaba a hacerlo, y también por la UPOV 78. Monsanto, por su parte, durante un tiempo no formuló reclamos, pese a que se consideraba con derecho a cobrar las regalías.

Pero cuando la soja RR estuvo bien implantada en Argentina y se convirtió en una actividad vital para la economía de dicho país, Monsanto decidió pasar a la ofensiva, denunciando el uso "ilegal" de las semillas de soja RR, y exigiendo el pago de regalías por todas las semillas RR utilizadas, incluso las guardadas por los agricultores para la siembra siguiente.

Los agricultores y el gobierno argentino rechazaron el reclamo de la empresa transnacional, y Monsanto contraatacó intentando cobrar en Europa a los importadores europeos, que son los principales compradores de soja argentina y de sus derivados, las regalías no pagadas en Argentina, de acuerdo con la "teoría" de Monsanto de que tiene derecho a cobrarlas allí donde se encuentre el gen que tienen patentado.

Por cierto, los importadores europeos no quieren y consideran que no tienen por qué pagar el sobreprecio que les quiere imponer Monsanto, y la parte argentina se encuentra en la difícil alternativa de pagar lo que les reclama la sociedad transnacional, o correr el riesgo de perder a los compradores más importantes de su principal producto de exportación.

### **Diversas maneras de liberarse de estos tratados**

Si existe la voluntad política de hacerlo, se puede salir de la trampa de los tratados bilaterales de libre comercio, y de promoción y protección de inversiones, restablecer el derecho público nacional e internacional, y defender y promover los derechos humanos.

Hay diversas maneras de lograrlo:

1. *Denunciando los Tratados* cuando concluye su vigencia para evitar su reconducción automática. Pero el comienzo de la vigencia de un tratado o su tácita reconducción pueden ser recientes y, en ese caso, el momento en que se lo pueda dar por terminado al finalizar su vigencia puede estar muy lejano. Sin embargo, en general los tratados incluyen un mecanismo de denuncia que puede formalizarse en cualquier momento durante su vigencia, aunque sus efectos son suspensivos, es decir, que la denuncia produce sus efectos transcurrido cierto lapso.

2. *Invocando la preeminencia de una norma jerárquicamente superior.* El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, dice lo siguiente:

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros Tratados y Convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas de derecho internacional general que no puede ser vulneradas por otros tratados o acuerdos internacionales, so pena de nulidad de estos últimos.

3. *Restableciendo la competencia territorial de los tribunales nacionales.* En muchos tratados bilaterales de comercio y de inversiones, en el TLCAN y en el proyectado ALCA se incluye una cláusula de renuncia a la jurisdicción nacional en favor de tribunales arbitrales para dirimir conflictos entre un particular inversor y el Estado receptor de la inversión.

Esta renuncia implica el abandono de la llamada “doctrina Calvo”, que se basa en los principios de la soberanía nacional, de la igualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros y de la jurisdicción territorial. Según la doctrina Calvo, los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados, y los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de agotar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen.

La doctrina Calvo está incorporada a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (art. 15); al Pacto de Bogotá (art. 7), a la resolución 3171 del 17 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones

Unidas (Soberanía permanente sobre los recursos naturales), punto 3, y a varias Constituciones nacionales<sup>194</sup>.

4. *Efectuando el control de constitucionalidad de los tratados.* Los tratados internacionales pueden ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los Tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogmática de la Constitución en lo que se refiere a los derechos y las garantías contenidos en ella, y más particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía de *jus cogens* (normas imperativas de derecho internacional)<sup>195</sup>.

5. *Verificando si existen vicios insanables en la celebración y aprobación de un Tratado, que acarreen su nulidad.* En la aprobación de un Tratado pueden haber vicios de procedimiento que acarreen su nulidad. Por ejemplo, cuando está previsto en la ley o en la Constitución nacional el control constitucional previo y éste no se efectúa.

Otra causa de nulidad de un Tratado son los vicios de fondo.

A ellos se refiere la Sección 2 (arts. 46 a 53) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que lleva el título *Nulidad de los tratados*.

Ya nos hemos referido en el numeral 2) al artículo 53 de la Convención de Viena.

Según el artículo 46 de la misma Convención puede ser causa de nulidad de un Tratado si ha sido celebrado en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno de una de las partes que lo celebró.

Combinando los artículos 46 y 53 sería causa de nulidad de un Tratado su celebración en violación de los derechos y las garantías fundamentales consagrados en la Constitución del Estado, y en las principales normas del derecho internacional de los derechos humanos, como los derechos a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la educación, etc.

6. *Invocando la nulidad de un Tratado celebrado por autoridades de un Estado que, al hacerlo, han violado su mandato.* Las autoridades de un

<sup>194</sup> Constituciones de Argentina (art. 116); de Bolivia (art. 24); de El Salvador (arts. 98 y 99); de Ecuador (art. 14); de Guatemala (art. 29); de Perú (art. 63, 2° c); de Venezuela (art. 151), entre otras.

<sup>195</sup> En enero de 2005 el Consejo de los canadienses, la Unión de Trabajadores Postales del Canadá (CUPW) y el Comité sobre los problemas de la pobreza (CCPI) – Council of Canadians, the Canadian Union of Postal Workers (CUPW), and the Charter Committee on Poverty Issues (CCPI) – denunciaron la inconstitucionalidad del NAFTA ante un Tribunal superior del Canadá por privar a los tribunales canadienses de la competencia que les atribuye la Constitución, entre otras materias, para entender en las demandas de inversores extranjeros contra el Estado. Véase [http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/disp/cupw\\_archive-en.asp](http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/disp/cupw_archive-en.asp), y la ponencia de Steven Shrybman presentada en el Taller internacional sobre el ALCA y los tratados bilaterales organizado por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) en Bogotá los días 29 y 30 de marzo de 2005. Publicado en Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Juicio al libre comercio. Aspectos jurídicos de los TLC. *El Otro Derecho*, núm. 33, Margarita Flórez, Héctor Moncayo y Libardo Herreño (eds.), Bogotá, diciembre de 2005.



Estado que han firmado y ratificado un Tratado con cláusulas que vulneran la soberanía de dicho Estado y los derechos fundamentales de la población, además de cometer graves delitos que podrían incluir el de traición, han violado su mandato, que consiste en desempeñar sus funciones en el marco de la Constitución, de las leyes y de las normas internacionales fundamentales, obligatorias para todos los Estados. El Tratado será nulo, por haber una de las partes violado su mandato y la otra parte no podrá alegar la ignorancia de ese hecho para sostener la validez del Tratado, cuando la violación del mandato fuere manifiesta.

7. *Promoviendo iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios, etc., contra los tratados ya vigentes o en trámite de negociación, contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales.* Según los países, la consulta popular es obligatoria o facultativa. A su vez, la obligatoria puede ser obligatoria automática, cuando se está frente a un caso previsto específicamente en la Constitución, y obligatoria acotada a determinados procedimientos, que sólo son iniciados cuando surge una situación predefinida (por ejemplo, un conflicto entre el ejecutivo y el Congreso no solucionable en el marco del sistema representativo).

A su vez, las consultas facultativas se dividen en dos grupos: cuando la iniciativa proviene “desde arriba” (es decir, cuando son los órganos estatales los que tienen de manera exclusiva el derecho de poner en marcha el mecanismo), y cuando la iniciativa proviene “desde abajo”, es decir, de la propia ciudadanía. En los casos de iniciativas “desde arriba” éstas pueden provenir del ejecutivo, del Congreso o de ambos de manera coordinada. En los casos de iniciativas “desde abajo” es importante precisar cuál es la barrera que se debe sortear (porcentaje o número mínimo de firmas de ciudadanos) para poner en marcha el mecanismo.

Por su carácter, los resultados de las consultas populares pueden ser *vinculantes o no*, y en caso de ser vinculantes *con o sin exigencia de un determinado quórum*.

Por ejemplo, en Colombia, el artículo 103 de la Constitución dice: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”. Y la Ley 134 de 1994 reglamenta la iniciativa popular y normativa, el referendo, el referendo aprobatorio y el referendo derogatorio<sup>196</sup>. Así mismo, el artículo 88 de la Constitución colombiana dice:

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio,

<sup>196</sup> Véase Mesa de trabajo: las reformas sociales que Colombia necesita, realizada por numerosas organizaciones populares: CUT, CGTD, CPC, Plataforma DESC, ILSA, ANUC, etc., Bogotá, noviembre de 2004.



la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

Este artículo fue reglamentado por la Ley 472 de 1998.

Hemos desarrollado más ampliamente el tema de los tratados bilaterales en nuestro trabajo "Los tratados bilaterales de libre comercio (el Alca está entre nosotros)", presentado como ponencia en el III Congreso Internacional sobre Derechos y Garantías en el Siglo XXI organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires en septiembre de 2004 y, más desarrollado y actualizado, en el Taller internacional sobre el ALCA y los tratados bilaterales organizado por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) en Bogotá en marzo de 2005<sup>197</sup>.

## **LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES, EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO MUNDIAL**

En julio de 1944, la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).

Ya en 1943, cuando comenzaba a vislumbrarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a discutir las bases de la organización de la economía mundial en la posguerra.

John Maynard Keynes, designado por las autoridades británicas para participar en las deliberaciones, propugnaba la creación de una cámara de compensación mundial (Clearing Union) que permitiría hacer todas las transacciones internacionales a un tipo de cambio fijo referido a una moneda internacional, el "bancor", emitida por la Clearing House. Se trataba de un verdadero sistema monetario internacional regulador de las finanzas internacionales, que conservaba la simetría entre las partes, con mecanismos de control y, eventualmente, de financiación para los países deficitarios, y una participación de cada país en función de sus capacidades financieras. Sería una especie de Banco a escala internacional en el que los "clientes" serían los Estados.

Pero esta propuesta no fue aceptada por Estados Unidos, en ese momento en la cumbre de su poderío económico como único gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, que impuso en Bretton Woods sus puntos

<sup>197</sup> Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Juicio al libre comercio. Aspectos jurídicos de los TLC, ob. cit.

de vista: un sistema de cambios fijos (con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las monedas), y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de Estados Unidos (art. IV de los Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978).

Y en lugar de un Banco o "Clearing House" internacional, propuso un Fondo en el cual los países miembros depositaran una suma (cuota), en parte en oro y en parte en moneda nacional. Con este sistema, cuando un país miembro se encontrara en dificultades financieras tenía derecho a recibir en diversas monedas una suma equivalente a su cuota en oro, sin condiciones. Para recibir una suma superior, debía ajustarse a las condiciones impuestas por el Fondo en materia de política económica, monetaria y presupuestaria.

Así es como en la práctica se institucionalizó el dólar como moneda internacional, obligando a todos los países a acumular reservas en dólares para hacer frente a las fluctuaciones de sus respectivas monedas, resultante del estado de su balanza de pagos. Con este sistema, la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene necesidad de defender el dólar ("un dólar siempre es un dólar") pues los Bancos Centrales de los otros países tienen que hacerlo para mantener la paridad de su moneda respecto a éste.

En septiembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó sin votación los acuerdos entre las Naciones Unidas, por una parte, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, por la otra.

En los hechos, los acuerdos constituyeron más una declaración de independencia de ambos organismos financieros que de cooperación con las Naciones Unidas.

En el debate sobre los acuerdos, realizado en el Consejo Económico y Social en agosto de 1947, el representante de Noruega dijo que el Ecosoc se apartaría de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas si los aprobara, agregando que su delegación no estaba dispuesta a reconocer al Banco Mundial como organismo especializado, sometiendo a las condiciones impuestas por el mismo Banco. El representante de la Unión Soviética, por su parte, señaló en el mismo debate que ciertas disposiciones de los dos acuerdos violaban los artículos 57, 58, 62, 63, 64 y 70 de la Carta de las Naciones Unidas, referidos al funcionamiento de los organismos especializados y a las facultades del Ecosoc a ese respecto. El representante de Venezuela lamentó que los acuerdos hubieran ido más lejos de los que parecía necesario, en particular el párrafo 3 del artículo IV, que aconsejaba a las Naciones Unidas que evitaran hacer recomendaciones al Banco con relación a los préstamos o a las condiciones o circunstancias de su financiamiento<sup>198</sup>.

<sup>198</sup> Actas resumidas de la reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, agosto de 1947.

En 1997 participamos, en representación de la Asociación Americana de Juristas, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí tuvimos ocasión de intervenir y formular preguntas a los representantes del FMI y del Banco Mundial.

Las conclusiones que pudimos extraer de dicho diálogo las comunicamos a la Comisión de Derechos Humanos en una intervención oral durante sus sesiones de marzo de 1997. En síntesis dijimos que el FMI no se ocupaba del desarrollo ni del pleno empleo, que figuran entre las funciones que le atribuyen sus Estatutos. En cuanto a la política monetaria, dijimos que el FMI era incapaz de evitar la anarquía financiera internacional y solo desempeñaba el papel de "bombero" en situaciones tales como la crisis mexicana, o prestaba dinero por razones políticas como lo había hecho con Rusia en vísperas electorales. En cuanto a la deuda, afirmamos que el papel del FMI consistía básicamente en mantener la presión sobre los países deudores e imponerles políticas contrarias a los intereses nacionales y populares.

Seguimos diciendo que el representante del Banco Mundial había admitido ante el Grupo de Trabajo que para no ocuparse de los derechos humanos el Banco invocaba su Convenio Constitutivo que le prohíbe inmiscuirse en política.

En efecto, así lo hizo cuando se negó a aplicar las sanciones contra Suráfrica en la época del *apartheid*, dispuestas por la Asamblea General de la ONU. En 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó dos resoluciones disponiendo medidas económicas contra los entonces gobiernos racista de Suráfrica y colonialista de Portugal, que reiteró en 1967 mencionando expresamente al Banco Mundial. Sin embargo, éste violó las resoluciones de la Asamblea General y continuó negociando con los dos países sancionados, aduciendo que sus Estatutos le prohibían interferir en los asuntos políticos internos de los Estados. El servicio jurídico de la ONU rechazó la argumentación del Banco, señalando que el párrafo de los Estatutos que le prohibía interferir en la política de los Estados no podía interpretarse en el sentido de que no cumpliera las decisiones de la Asamblea General referidas a las obligaciones internacionales en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

En el mismo intercambio, en el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, el representante del Banco Mundial reconoció que éste no tenía ningún organismo ni personal especializado en derechos humanos.

No obstante ello, en años recientes el Banco Mundial ha comenzado a ocuparse de las cuestiones más diversas: justicia, gobierno, educación, recursos hídricos, salud, medioambiente, etc., con el objetivo de imponer

en todas ellas los enfoques neoliberales. Y ha hecho de la lucha contra la pobreza uno de sus "caballitos de batalla"<sup>199</sup>.

Los programas del Banco Mundial de apoyo a reformas judiciales en diversos países están impregnados del mismo enfoque neoliberal. Por ejemplo, en un documento confidencial del Banco de hace algunos años sobre un proyecto de ayuda a la reforma judicial en Rusia, se dice: "...desarrollar la educación y la formación jurídica (para producir abogados competentes, jueces y otros funcionarios judiciales necesarios para defender y aplicar los derechos de los agentes del mercado) y reformar el sistema judicial (las mejores leyes, si se aplican de manera inapropiada o inadecuada, no pueden defender al sector privado contra las intrusiones del Estado ni contra el poder monopólico en el mercado)" (párr. 4). Para el Banco Mundial, según el mismo documento, la principal preocupación es que los jueces defiendan la propiedad privada y la libertad de contratación (párr. 26). No figura en dichos programas la más mínima alusión a los derechos humanos (por ejemplo, el derecho a un proceso justo e imparcial).

En el periodo de sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en julio-agosto de 2001, dos de sus miembros, la señora Udagama y el señor Onyango, presentaron un informe sobre la mundialización<sup>200</sup>.

Los autores decían en el informe que si bien la protección y promoción de los derechos humanos es primordialmente una obligación de los Estados, otras entidades tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no están de manera alguna exceptuadas de responsabilidad en ese terreno. Afirmaban que las instituciones internacionales multilaterales "tienen la obligación de no tomar medidas que afecten la situación social de un país dado".

En el debate que se suscitó en la Subcomisión, el representante del FMI afirmó que dicha institución no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones, y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos<sup>201</sup>.

<sup>199</sup> En diciembre de 2006 la propia oficina auditora del Banco Mundial confirmó lo que todo el mundo sabe: las políticas del Banco Mundial no han logrado reducir el número de pobres en los países que reciben sus créditos. El Grupo Independiente de Evaluación (IEG) señaló que el Banco se había concentrado demasiado en el crecimiento económico de esas naciones y había dejado que el desempleo y la pobreza se consolidaran o se agravaran. "El Banco ayudó a muchos países a entrar en una senda de crecimiento a través de una mejor administración económica, pero las estrategias de crecimiento no siempre son suficientes para mejorar las oportunidades de trabajo y las condiciones de vida de los pobres", señala el IEG en su estudio "Revisión anual de la efectividad en desarrollo 2006: logrando resultados", Interpress Service (IPS) Washington, 8/12/06.

<sup>200</sup> La mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/2001/10, 2 de agosto de 2001. El informe final fue presentado en 2003. Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/2003/14.

<sup>201</sup> Cfr. Communiqué de presse du 8 août 2001, HR/5C/01/11 y 12.

Esta declaración del representante del FMI provocó vivas réplicas, salvo alguna notable excepción, de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que "no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional", y otro sugirió que la Subcomisión "debía adoptar una posición clara indicando que los sistemas comerciales y financieros están sometidos al derecho internacional y por lo tanto tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos".

El FMI y el Banco Mundial son formalmente organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, y como tal deberían actuar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, pero en los hechos no es así, pues actúan con total independencia del sistema, sin dar prácticamente ninguna participación en sus decisiones a los órganos principales de ONU<sup>202</sup>.

En el seno del FMI, el poder de decisión pertenece a los cinco países que reúnen la mayoría de las cuotas, pues el artículo XII sección 5 de sus Estatutos establece el voto ponderado en los órganos de dirección (Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración). Además, un solo país, Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos superior a la minoría de bloqueo, que es del 15%. En el Banco Mundial el mecanismo de funcionamiento es similar.

De modo que un pequeño grupo de países, muy poderosos económicamente, impone al resto del mundo las orientaciones de la política económica. En el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo. De manera que las "recomendaciones" y los "principios directores" del FMI no son otra cosa que la coacción ejercida sobre los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional, a fin de que adapten su política económica y financiera a los intereses del gran capital transnacional: privatización de los servicios públicos, reducción del gasto social, aumentos de las tarifas de dichos servicios, congelación de los salarios, apertura incondicional de las fronteras a los productos y servicios extranjeros, etc.

En un trabajo de Erskine Childers<sup>203</sup> éste señala que no corresponde a las instituciones de Bretton Woods ocuparse de los problemas de política macroeconómica, pues estudiarlas es función de las comisiones del Ecosoc, y adoptarlas corresponde la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sigue diciendo que, de conformidad con el artículo 58 de la Carta de las Naciones

<sup>202</sup> Sydney Dell, *Relations between the United Nations and the Bretton Woods institutions*, Uppsala Roundtable on future role of the United Nations, documento preparado para el North South Roundtable en Uppsala, Suecia, 6-8 de septiembre de 1989.

<sup>203</sup> Erskine Childers, *United Nations Reform: Relevance of the Southern Perspective*, publicado por el International NGO Network on Global Governance and Democratization of International Relations, Ginebra, 1994, p. 7.



Unidas es la Asamblea General quien debe hacer recomendaciones sobre dichas políticas y, de acuerdo al artículo 63, es el Ecosoc quien debe coordinar su puesta en práctica por los organismos especializados.

En los hechos, las instituciones de Bretton Woods tienen un poder de decisión excepcional sobre las orientaciones de las economías nacionales de los países menos desarrollados, como mandatarios de los países ricos, sin base alguna en el derecho internacional vigente. Por el contrario, no tienen poder alguno sobre las orientaciones económicas de los países ricos, pese a que la enorme deuda externa e interna de algunos de ellos justificaría ampliamente la aplicación de una política de ajuste estructural, de acuerdo con las concepciones del Fondo. Ni el Fondo ni el Banco, pese a que las grandes potencias dicen que son los "únicos organismos competentes" del sistema, tienen una política mundial económica o financiera. Tal política va a la deriva de los intereses coyunturales del capital financiero e industrial transnacional.

Todo esto confirma que el FMI y el Banco no son en la práctica organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como está previsto en la Carta, sino meros instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital.

Las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras, tienen el deber de promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo (arts. 55, 56, 57, 58, 63 y 64 de la Carta de las Naciones Unidas), y de respetar, en tanto personas de derecho internacional, los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia ha dicho que los deberes y derechos de entidades como las Naciones Unidas y los organismos especializados "deben derivarse de (sus) propósitos y funciones, contenidos explícita o implícitamente en (sus) instrumentos constitutivos y desarrollados en la práctica"<sup>204</sup>.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son personas jurídicas internacionales (organizaciones internacionales), y son jurídicamente responsables por las violaciones que cometan, sea por omisión o por acción, de los derechos económicos, sociales y culturales, y tienen la obligación de reparar los daños causados, de cesar las violaciones y de no reincidir. Como personas jurídicas, pueden incurrir en responsabilidades penales, lo mismo que sus dirigentes responsables.

En efecto, a las dos instituciones financieras les sería aplicable en materia penal la doble imputación: contra la institución como persona jurídica y contra los integrantes de los órganos que toman las decisiones. El artículo

<sup>204</sup> Corte Internacional de Justicia, Opinión consultiva, *Reparación de perjuicios sufridos al servicio de las Naciones Unidas*, Reports, 1949, p. 174.



XII, Sección 4 c) de los Estatutos del FMI, establece la autonomía del director respecto de los Estados, de modo que tiene la entera responsabilidad de sus decisiones. Y en cuanto a los administradores y gobernadores, que son nombrados por los Estados, tampoco pueden estar exentos de una eventual responsabilidad penal por las decisiones que votan en nombre de sus respectivos gobiernos, pues no es aceptable, en el estado actual del derecho internacional, que puedan invocar como eximente de responsabilidad las "órdenes recibidas".

Una situación equivalente se presenta en el caso del Banco Mundial, para el presidente por un lado y para los gobernadores y los directores ejecutivos por el otro (art. V del Convenio constitutivo).

La responsabilidad penal de los funcionarios nombrados por los Estados en ambas instituciones no exime a éstos (en particular a aquellos que detentan estatutariamente el poder de decisión en virtud del voto ponderado), de su responsabilidad jurídica como Estados, en los términos expuestos sobre la responsabilidad de los Estados en el Capítulo V de este trabajo<sup>205</sup>.

Jean Ziegler, relator especial sobre el derecho a la alimentación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, escribió en su informe de 2005 (E/CN.4/2005/47):

La segunda cuestión que se está debatiendo actualmente es la de las responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos de organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco

Mundial y la OMC. Habida cuenta de la influencia de esas organizaciones en la determinación de las políticas económicas, especialmente en los países del Sur, esas organizaciones pueden tener repercusiones importantes para los derechos humanos. No hay duda de que, por ejemplo, los programas de reforma económica impuestos por el FMI y el Banco Mundial a los países endeudados tienen una influencia directa profunda sobre la situación del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de muchos países. Sin embargo, al tratarse de organizaciones intergubernamentales a las que los gobiernos dan instrucciones para que tomen esas medidas, se plantea la cuestión controvertida de determinar si se puede considerar que esas organizaciones son sujetos de derecho autónomos, con obligaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, algunos consideran que la OMC es un simple mecanismo de negociación entre Estados y que, por consiguiente, los gobiernos miembros son responsables de

<sup>205</sup> Desde el año 2000 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas está estudiando el tema de la responsabilidad internacional, por acción o por omisión, de las organizaciones internacionales, como son por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo hace en relación con la responsabilidad de los Estados, en tanto miembros de esas organizaciones internacionales o para los casos de responsabilidad conjunta de un Estado o grupo de Estados con una organización internacional. En 2005 ya había aprobado varios proyectos de artículos sobre el tema. Véase [www.un.org/ilc](http://www.un.org/ilc).

todas las normas y medidas de la Organización. Sin embargo, otros opinan que organizaciones como el Banco Mundial y el FMI, a pesar de incluir en sus consejos ejecutivos a los gobiernos de los Estados, actúan de manera autónoma, y que es importante considerar las responsabilidades directas que tienen en sí mismas las organizaciones intergubernamentales como instituciones (párr. 37).

El señor Ziegler agrega en su informe que "...La cuestión de las obligaciones directas de las organizaciones intergubernamentales es sumamente importante y el Relator Especial tiene la intención de abordarla más detenidamente en su próximo informe a la Comisión".

## LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES Y LA UNIÓN EUROPEA

Un periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys<sup>266</sup>, cuenta cómo, mediante el trabajo en equipo de la Comisión Europea (que emite directivas extralimitando sus atribuciones), y de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT) (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ayudados por el Tribunal Europeo de Luxemburgo que interpreta a su manera las reglas comunes sobre la competencia del Tratado de Roma de 1957 que instituyó la Comunidad Económica Europea, está culminando el despojo al patrimonio público de los países europeos de las industrias actualmente más dinámicas y rentables: las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas.

El libro de Selys es de 1995, pero desde entonces y hasta hoy la ofensiva privatizadora de la Comisión Europea contra los servicios públicos (con el respaldo activo de las sociedades transnacionales) no ha cesado: en su punto de mira se hallan ahora el correo, la salud, la educación y el medioambiente. En un artículo publicado en *Le Monde Diplomatique* de julio de 2000 (Susan George y Ellen Gould, *Libéraliser, sans avoir l'air d'y toucher*) se cita un documento de la Comisión Europea en el que se afirma lo siguiente: "la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios - OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del mundo de los negocios"<sup>267</sup>.

<sup>266</sup> Gérard de Selys, *Privé de public: À qui profitent les privatisations?*, Ediciones EPO, Bruselas, 1995.

<sup>267</sup> Un grupo de investigadores, que forma parte del Corporate Europe Observatory (CEO) ha publicado un estudio completo sobre el papel de las sociedades transnacionales en el seno de la Unión Europea: Belén Balariya, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adan Ma'anit y Erik Wesselius, *Europe Inc: Liens dangereux entre institutions et milieux d'affaires européens*, Agone Editeur, Marseille, 2° trimestre del 2000. Edición original en inglés: *Europe Inc. Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power*, Pluto Press and CEO, 1999.

El 4 de junio de 2003, el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, acordó por amplia mayoría autorizar la liberalización de los mercados de la electricidad y el gas, incluido el suministro a particulares, a partir del 1 de julio de 2007.

El 23 de septiembre de 2004 la Comisión Europea publicó un "Libro verde" titulado *Los contratos públicos de la defensa*, en la perspectiva de abrir a la "libre competencia" la compra de material militar. Al comienzo de la Introducción se dice:

El presente Libro Verde constituye una de las acciones anunciadas por la Comisión Europea en su Comunicación titulada "Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa", adoptada el 11 de marzo de 2003. A través de estas acciones, la Comisión Europea se propone contribuir a la construcción progresiva de un mercado europeo de equipos de defensa (European Defence Equipment Market, EDEM), más transparente y más abierto entre los Estados miembros, que, sin dejar de respetar las especificidades del sector, lo haga económicamente más eficaz.

El 7 de diciembre de 2006 la Comisión Europea emitió nuevas directrices tendientes a limitar las excepciones a la "libre competencia" en materia de contratos con la industria militar, con el propósito proclamado de continuar "liberalizando" dicho sector.

Esta presión a favor de la liberalización del sector vendría de los mismos industriales del armamento.

Pero, ¿quiénes son estos industriales del armamento?

En el diario *Le Monde* del 14 de julio de 2005 (Les fonds américains irriguent l'industrie de défense européenne) se informaba que poderosos fondos de inversión estadounidenses, Blackstone, KKR, One Equity Partner entre otros, están tomando el control de sectores de la industria europea vinculadas a la defensa: QinetiQ, Bofors Weapons, Gemplus...

Y proporcionaba los siguientes datos, entre otros: en julio de 2003, Carlyle<sup>208</sup> y Finmeccanica compraron el 70 y el 30%, respectivamente de Fiat Avio. También en 2003, el fondo KKR compró un tercio del capital del motorista militar Eurojet, y a fin del mismo año compró MTU, primer motorista alemán. En 2000, Texas Pacific Group adquirió el 25% de Gemplus. En febrero 2003, Carlyle compró el 33,8% de QinetiQ, etc.

No puede excluirse que además de los objetivos puramente económicos de buscar mayores beneficios, estos movimientos de capitales responden a una geoestrategia político-militar de los centros de poder estadounidenses, en la cual el proyecto de "liberalizar" la industria europea de la defensa, contenido en el Libro Verde de la Comisión Europea, desempeña el papel de caballo de Troya.

<sup>208</sup> Véase, en el Capítulo II, detalles sobre el Carlyle Group.

Algunos Gobiernos europeos, cuando se les reprocha la política de privatizaciones, incluidos los servicios públicos, responden que lo hacen "obligados por Bruselas" (sede de la Comisión Europea). Pero la práctica demuestra que cuando no quieren seguir las indicaciones de "Bruselas" en otras materias no lo hacen, y si no conservan en el dominio público los servicios públicos fundamentales es porque no tienen la voluntad política de hacerlo.

La Comisión Europea, presidida por el señor Barroso, tiene una tonalidad más neoliberal que la anterior. Quizás el ejemplo más sobresaliente es el de la señora **Neelie Kroes-Smit**, de Holanda, Comisaria de la Competencia. Como ministro de Transportes y de Telecomunicaciones de su país procedió a la privatización parcial del Correo, y en la actividad privada estuvo en puestos de dirección en varias sociedades transnacionales<sup>209</sup>.

Las grandes empresas transnacionales europeas, agrupadas en la Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa (Unice) controlan estrechamente a la Comisión Europea, y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de "lobbistas" para influir sobre las decisiones de la Comisión<sup>210</sup>.

El Proyecto de Tratado Constitucional europeo, destinado a dar jerarquía constitucional a la política neoliberal actualmente dominante en Europa, fue preparado por una asamblea de personas cooptadas y presidida por Valéry Giscard d'Estaing, y el texto definitivo del proyecto fue aprobado por los jefes de Estado y de gobierno. No hubo participación de los ciudadanos, salvo en los países donde se decidió someter el texto a referendo, para su rechazo o aprobación. Para su entrada en vigor el proyecto requería la aprobación unánime de los Estados miembros. Pero en los referendos celebrados en Francia y Holanda fue rechazado por la mayoría de los votantes, de modo que el proyecto, en su redacción actual, quedó archivado.

<sup>209</sup> Entre ellas en Volvo, miembro de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT), MMO2 (telefonía), la compañía ferroviaria holandesa, las filiales en los Países Bajos de Mc Donald's, Lucent (equipos telefónicos), Thales (antes Thomson) transnacional con sede en Francia activa en las industrias aeroespacial, de la defensa, de la seguridad y en los servicios.

<sup>210</sup> Veamos qué dice la Unice de sí misma, en <http://www.unice.org/> Le porte parole des entreprises en Europe:

"La Unice es la voz del mundo de los negocios ante las instituciones de la Unión Europea. Sus 39 miembros son las organizaciones industriales multisectoriales y las organizaciones de empleadores de 31 países europeos y representa más de 16 millones de empresas, sobre todo pequeñas y medianas. La Unice es también un interlocutor en el diálogo social europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea principal de la Unice es informar e influenciar los procesos de decisión en la Unión Europea, a fin de que las políticas y las propuestas legislativas con un efecto sobre la actividad económica en Europa tengan en cuenta las necesidades de las empresas. La primera prioridad de la Unice es promover la competencia en el medio económico y la inversión a escala europea, el único camino para alcanzar un desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo de los negocios necesita una Comisión eficaz."

Si hubiera entrado en vigor, para su ulterior reforma hubiera necesitado el acuerdo unánime de todos los Estados miembros, de modo que su enfoque neoliberal y antisocial hubiera resultado prácticamente inmodificable. Los dirigentes europeos ahora reflexionan e intercambian opiniones sobre la manera de dar vida a un nuevo proyecto.

El Proyecto no proporcionaba respuesta alguna a los problemas sociales que se plantean actualmente en Europa: al amparo de la "libre circulación de industrias y capitales" la formación de enclaves industriales modernos en los países pobres del Este de Europa con salarios un poco más elevados que la media nacional (entre 5 y 10 veces inferiores a los de los países ricos del Oeste), la persistencia de una alta tasa de desocupación en esos mismos países y, como contrapartida, la caída de los salarios, el deterioro de los derechos laborales y el aumento de la jornada de trabajo y de la desocupación en los países más desarrollados del continente europeo. (Véase en el apartado 2 b del Capítulo III): Los derechos *del* trabajo o derechos laborales).

La Unión Europea está negociando una serie de acuerdos regionales de asociación económica (llamados EPA por sus siglas en inglés) con países pobres. Los EPA son convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonou, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.

La UE sostiene que los EPA integrarán a los países ACP a la economía mundial, promoverán el desarrollo sustentable y contribuirán a la erradicación de la pobreza.

Los convenios propuestos bajo el pacto de Cotonu eliminarían los aranceles a los productos de importación y facilitarían a los países de la UE la venta de bienes subsidiados. La UE negocia acuerdos similares con otros países pobres.

Dos organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y EcoNews África, de Kenia, señalaron en un informe titulado "Los EPA a través de los lentes de Kenia", publicado en septiembre de 2005, que el deteriorado sector manufacturero, la creciente pobreza y el desempleo en países como Kenia deben ser seriamente considerados antes de firmar estos convenios, agregando que la liberalización económica y comercial de los últimos años en ese país africano produjo "situaciones extremas", incluyendo altos índices de criminalidad y de prostitución, deterioro de la educación e incluso suicidios, y que el número de personas pobres aumentó de 11 a 17 millones, más de la mitad de la población keniana<sup>211</sup>.

<sup>211</sup> Reports exposes impact of free trade deals, en <http://www.traidcraft.co.uk/template2.asp?pageID=1867>

## CAPÍTULO 5

# Responsabilidad de los estados por las actividades de las sociedades transnacionales<sup>212</sup>

**E**l derecho al desarrollo y al goce progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales comporta obligaciones de cada uno de los Estados respecto de sus propios pueblos, y también obligaciones de cada Estado y del conjunto de la comunidad internacional respecto de los seres humanos en general. Estas obligaciones implican el deber de cada Estado de hacer el máximo de esfuerzos para promover el progreso económico, social y cultural de su pueblo y contribuir, en colaboración con la comunidad internacional, a dicho desarrollo a escala mundial (resoluciones 2626 (XXV), 3201 (S VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas).

De modo que las obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales no se limitan a sus propios pueblos sino que abarcan a la sociedad humana en general. Son los llamados “derechos de la solidaridad”, consagrados en los artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 3, inciso 3º de la Carta de las Naciones Unidas, y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se refieren a la cooperación internacional.

Hay en esta categoría de derechos una obligación activa universal de los Estados de garantizarlos y una obligación pasiva universal de respetarlos. Los Estados pueden incurrir entonces en violación por omisión, al no garantizarlos, o en violación activa, al no respetarlos, por ejemplo, mediante políticas económicas y sociales regresivas respecto de sus propios pueblos o

---

<sup>212</sup> Sobre la responsabilidad de los Estados y otros temas conexos se pueden consultar interesantes trabajos en la publicación de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, *La responsabilidad internacional. Aspectos de derecho internacional público y derecho internacional privado*, XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 1989. Carlos Jiménez Piernas (ed.), Alicante, 1990.



imponiendo tales políticas a terceros Estados. En cualquiera de ambos casos los Estados son jurídicamente responsables de tales violaciones, cuando han sido cometidas por sus órganos o sus funcionarios.

Pero también los Estados son responsables por las violaciones cometidas por los particulares que están bajo su jurisdicción, cuando no han adoptado las precauciones necesarias para evitar dichas violaciones y para proteger a las víctimas.

De la responsabilidad del Estado deriva su obligación de reparar el daño causado a las víctimas, de dar seguridades de que no se repetirá la violación y, tratándose de un crimen internacional (como son a nuestro juicio las violaciones graves y masivas de los derechos económicos, sociales y culturales), la posibilidad de que el Estado sea objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional hasta que cesen las violaciones y proceda a reparar el daño causado.

Los instrumentos internacionales básicos en materia de derechos humanos no contienen disposición expresa alguna relativa a la responsabilidad del Estado por las actividades violatorias de los derechos humanos realizadas por particulares, con la sola excepción de la Convención sobre la discriminación contra la mujer, cuyo artículo 2, inc. e) dice: "...tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por *cualquiera persona, organizaciones o empresas*" (énfasis agregado).

Sin embargo, en algunos instrumentos internacionales se perfila la responsabilidad del Estado por omisión en las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares, por ejemplo, la *aquiescencia* del funcionario en la comisión de torturas (art. 2 de la respectiva Convención), la *tolerancia* del Estado en las desapariciones forzadas (arts. 2 y 5 de la Declaración de la Asamblea General de la ONU sobre desapariciones forzadas, y art. 2 de la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006) y está reconocida en la Observación General No. 31 del Comité de Derechos Humanos, del 29 de marzo de 2004<sup>213</sup>.

<sup>213</sup> En el párrafo 8 de la Observación General núm. 31 se dice: "No cabe considerar que el Pacto es supletorio del derecho penal o civil interno. Sin embargo, sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Partes de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas. Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Partes infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado".

Pero la responsabilidad internacional del Estado por los efectos dañosos transfronterizos de actividades realizadas por particulares dentro de su jurisdicción o bajo su control está establecida en la jurisprudencia, en diversas convenciones internacionales, entre ellas la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación<sup>214</sup>, ha sido objeto de trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en los temas "Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos internacionales", y "Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional"<sup>215</sup>. En la jurisprudencia internacional es muy conocido el fallo arbitral de 1941 *Fundición de Trail*? (Estados Unidos c. Canadá), donde se dijo que de acuerdo con los principios del derecho internacional... ningún Estado tiene el derecho de usar o permitir el uso de su territorio en forma que el territorio de otro Estado o las personas o bienes que allí se encuentren sufran daños... El fallo estableció la responsabilidad del Estado (Canadá) donde operaba la empresa que causaba el daño, y la responsabilidad de la misma empresa<sup>216</sup>.

La Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996 relativa a la "Legitimidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares" dijo: "La obligación general que tienen los Estados de velar para que las actividades ejercidas en los límites de su jurisdicción o bajo su control respeten el medioambiente en otros Estados forma ahora parte de las reglas del derecho internacional del medioambiente". La Corte se pronunció de manera similar en su fallo del 25 de septiembre de 1997 en el caso *Gabcikovo-Nagymaros*, párr. 53.

Hay instrumentos internacionales obligatorios, que se refieren en su mayor parte a la protección del medioambiente, tales como el principio 21 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, reafirmado por las resoluciones de la Asamblea General 2995 (XXVII), 3129 (XXVIII), 3281 (XXIX) (Carta de los deberes y derechos económicos de los Estados); la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, a la que se atribuye valor de *jus cogens*<sup>217</sup>; la Convención de las Naciones Unidas sobre

<sup>214</sup> Convención aprobada el 21 de mayo de 1997.

<sup>215</sup> Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 52 periodos de sesiones (julio-agosto 2000), Asamblea General, Suplemento núm. 10 (A/55/10) e informes anteriores. En 2001 la CDI finalizó el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos internacionales y lo remitió a la Asamblea General de la ONU, que el mismo año aprobó la resolución 56/83, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en cuyo anexo se recoge el Proyecto de artículos aprobado por la CDI. El texto del mismo puede consultarse en el sitio de la Comisión de Derecho Internacional, [www.un.org/law/ilc/index.htm](http://www.un.org/law/ilc/index.htm).

<sup>216</sup> Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales*, vol. III, p. 1905 y ss.

<sup>217</sup> El Principio 2 de la Declaración de Río dice: "De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus

el derecho del mar (Montego Bay, 1982); el Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales (Helsinki, marzo de 1992); los Convenios de Basilea de 1989, en vigor desde mayo 1992 (162 Estados Partes en diciembre de 2006); de Bamako de 1991, sobre desperdicios peligrosos y su transporte transfronterizo y eliminación; de Helsinki de 1992 sobre el efecto transfronterizo de los accidentes industriales; de Lugano de 1993 sobre la responsabilidad civil resultante de actividades peligrosas para el medioambiente; la Convención de Rotterdam de 1998 sobre pesticidas y otros productos químicos peligrosos, en vigor desde febrero de 2004 (110 ratificaciones en octubre 2006), entre otras, que establecen la responsabilidad de quien provocó el daño y, en general, la responsabilidad subsidiaria del Estado si no adoptó las medidas preventivas a fin de evitar los efectos perjudiciales de tales actividades. En diciembre de 1999 los Estados partes en el Convenio de Basilea de 1989 aprobaron un protocolo sobre la responsabilidad y la indemnización de los daños resultantes del transporte y eliminación de desperdicios peligrosos ([www.basel.int](http://www.basel.int)). El artículo 16 del Protocolo dice: "El Protocolo no afectará los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de las normas del derecho internacional general en lo que respecta a la responsabilidad de los Estados"<sup>218</sup>.

En mayo de 2001 se aprobó el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP) que entró en vigor en mayo 2004.

Se puede concluir que la responsabilidad internacional de los Estados por las actividades de particulares que provocan daños en su propio territorio y daños transfronterizos, está perfectamente establecida en el derecho internacional y es aplicable a las actividades de las sociedades transnacionales.

---

propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medioambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional" (énfasis agregado). El Principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 contiene una disposición similar.

<sup>218</sup> Véase el Informe de la Relatora Especial sobre los desechos tóxicos señora Fatma-Zohra Ouhachi-Vesely, Naciones Unidas, E/CN.4/2001/55 del 19 de enero de 2001, quien considera el traslado y vertimiento ilícitos de desechos tóxicos como violatorio no sólo de las normas específicas sino de los instrumentos básicos en materia de derechos humanos, y señala la responsabilidad particular de las empresas transnacionales en ese terreno.

## CAPÍTULO 6

# Encuadre jurídico de las actividades de las sociedades transnacionales

### EL ABANDONO DE PROYECTOS DE NORMAS OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS PARA LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES

Los principales intentos de crear un marco jurídico internacional específico obligatorio para las sociedades transnacionales (código de conducta y código sobre transferencia de tecnología) no han tenido éxito (véase en el Capítulo IV el apartado 2: Las sociedades transnacionales y las Naciones Unidas, particularmente las partes referidas a la transformación y el cambio de contenido en el decenio de 1990 de la Comisión y del Centro de Sociedades transnacionales, creados en 1974, y al archivo, en 2005, del Proyecto de normas preparado por la Subcomisión de Derechos Humanos).

Sólo existen la Declaración de Principios Tripartita sobre las Sociedades Transnacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo –cuyos mecanismos de seguimiento la OIT intenta actualizar y reforzar<sup>239</sup>, y algunos otros instrumentos no obligatorios, como las “directrices” de la OCDE (1976, reformadas en 1979, 1984 y 2000), el Conjunto de principios para el control de las prácticas comerciales restrictivas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 35/63), etc. En el plano regional, los países del Pacto Andino mantuvieron durante cierto tiempo (decenio de 1970) un cuadro jurídico bastante completo respecto de las sociedades transnacionales, particularmente la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, pero después dichas normas se flexibilizaron considerablemente.

<sup>239</sup> Véase Séptima encuesta sobre el curso dado a la Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, OIT, GB.280/MNE/1/1 y 1/2, Ginebra, marzo de 2001.

Una excepción a este vacío normativo vinculante, referido específicamente a las empresas es, como ya lo hemos mencionado, la Convención sobre la discriminación contra la mujer, cuyo artículo 2, inc. e) dice: "...tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas". Y el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra los deberes de "toda persona" respecto a la comunidad.

## **LAS TENDENCIAS "PRIVATIZADORAS" (CÓDIGOS VOLUNTARIOS Y CONTROLES PRIVADOS). LA LLAMADA "RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS"**

Cuando a fines del decenio de 1980 se abandonó el proyecto de un código internacional de conducta para las sociedades transnacionales, después de más de diez años de trabajos de la Comisión de Sociedades Transnacionales (véase el apartado 2 del Capítulo IV), las sociedades transnacionales se sintieron enteramente libres para actuar con la exclusiva finalidad de obtener beneficios máximos, y con total desprecio por los derechos humanos y ambientales.

Pero la depredación incontrolada de los recursos naturales y algunas grandes catástrofes ecológicas, así como las graves violaciones de los derechos sociales y laborales imputables a grandes sociedades transnacionales comenzaron a inquietar a una parte de la opinión pública, lo que dio lugar a campañas para exigir a las empresas una conducta más acorde con los derechos humanos, incluidos los derechos ambientales. Entre otras cosas, ofrecer en el mercado los llamados "productos ecológica y socialmente correctos".

### **Productos "social y ecológicamente correctos" como oferta diferenciada de la producción en masa**

Quienes calculan todo en términos económicos no podían dejar de ver en este fenómeno una "demanda" aprovechable de un segmento del mercado consumidor, lo que los incitó a hacer una "inversión ética", poniendo en el mercado productos diferenciados por un ingrediente "ecológico" o "social", por ejemplo en forma de etiquetado (label) o de un "satisfecit" otorgado por una ONG.

Este enfoque coincide con las nuevas estrategias para captar segmentos del mercado consumidor.

Como la demanda de bienes estandarizados producidos en gran escala por las grandes empresas comenzó a estancarse a causa de la caída del poder adquisitivo de buena parte de los consumidores, las nuevas tecnologías de

gestión de la producción permitieron desarrollar una nueva estrategia para el mercado: la oferta del mismo producto, pero diversificado.

Por ejemplo, en el caso de los automóviles, introduciendo diferencias reales (cambios técnicos sin importancia) o formales (diseño). En estos casos la empresa "crea" una demanda específica en el mercado consumidor.

Otra forma de diferenciación del producto que emplean las empresas para ganar segmentos del mercado es responder a una expectativa latente del consumidor. Por ejemplo, la hamburguesa de McDonald's, que antes era igual en todo el mundo, ahora se ofrece adaptada a los gustos locales. En este caso la empresa no "crea" una demanda sino que "responde" a una demanda específica latente.

El gigante transnacional L'Oreal (más de 14 mil millones de euros de volumen de negocios en 2005) compró en marzo de 2006, por 940 millones de euros al contado la empresa británica Body Shop (616 millones de euros de volumen de negocios) que ofrece en 2085 puntos de venta en 54 países productos "ecológica y éticamente correctos", tales como jabón de aceite de jojoba y manteca de cacao, envueltos en papel reciclado<sup>220</sup>.

Esta estrategia permite a las grandes empresas mantener las ventajas de la producción en masa con presencia dominante en el mercado mundial e incorporar la oferta diferenciada para segmentos particulares del mercado. La oferta de productos diferenciados, que con las tecnologías y la organización empresarial tradicionales parecía quedar reservada a las empresas medianas y pequeñas, con las nuevas tecnologías industriales y organizacionales es una estrategia al alcance de las grandes compañías<sup>221</sup>.

Aparte de esta motivación puramente económica de "oferta diferenciada", que encaja perfectamente en la estrategia comercial de las grandes empresas en este periodo, la introducción del tema de los derechos humanos y medioambientales en la actividad de las grandes sociedades transnacionales obedece también a otras razones:

1. Evitar el deterioro de la imagen de la empresa (o recomponer la imagen ya deteriorada) ante la opinión pública, particularmente sensibilizada por los temas ambientales, por la denuncia de la explotación del trabajo infantil, por la inseguridad alimentaria, etc., y alejar así el riesgo de perder una parte del mercado consumidor.

2. Eliminar competidores aceptando ciertas reglas que suelen implicar costos difíciles de afrontar para las empresas económicamente más débiles<sup>222</sup>.

<sup>220</sup> Diario Libération, Francia, 19 de marzo, 2006, p. 20.

<sup>221</sup> Benjamin Coriat, *L'atelier et le robot*, Christian Bourgeois Éditeur, Francia, 1990.

<sup>222</sup> J. Diller, Responsabilité social et mondialisation: qu'attendre des codes de conduite, des labels sociaux et des pratiques d'investissement?, en *Revue Internationale du Travail*, vol. 138, núm. 2, 1999, BIT, Genève, p. 132.



3. La negociación de "labels" y códigos voluntarios con instituciones y asociaciones permite a las grandes empresas ejercer una influencia moderadora sobre éstas y, a veces, ponerlas en situación de subordinación (algunas de estas instituciones o asociaciones pasan de la posición de observadores exteriores a la de "verificadores", y aun de "asesores" de las sociedades transnacionales)<sup>223</sup>. Estas "asesorías", que se ocupan de los efectos más chocantes para la opinión pública de las actividades de las sociedades transnacionales, no se ocupan de las causas y permiten a las empresas corregir sus estrategias de imagen (*greenwash*) e incluso introducir algunas pequeñas reformas, en general temporarias, a un mínimo costo.

### Autocontrol y control exterior "independiente" de las sociedades transnacionales

Ya en la primera mitad del decenio de 1970 habían comenzado a establecerse ciertas regulaciones privadas, pues las grandes empresas prefirieron tomar la iniciativa en ese terreno, para evitar el riesgo de verse sometidas a normas obligatorias emanadas del poder público. Además, experimentaron la necesidad de fijar –en el marco de una competencia sin cuartel– ciertas reglas de juego, entre ellas, por ejemplo, tratar de excluir la corrupción para la conquista de nuevos mercados.

Esta especie de "*fair play*" entre las grandes sociedades transnacionales en la lucha por la conquista de mercados es sistemáticamente transgredido por las empresas anglosajonas, por ejemplo, mediante la red de espionaje electrónico UK-USA *Echelon* que, entre otras cosas, practica el espionaje industrial y comercial. También la, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), se ha reconvertido parcialmente al espionaje comercial e industrial.

En 1975, las organizaciones patronales estadounidenses crearon el Business Conduct Guidelines Committee, con representantes de las 200 principales empresas. En 1979 ya tenía 300 códigos vigentes.

Fuera del ámbito de las empresas también se desarrollaron mecanismos de control. Entre 1978 y 1980 los expertos contables, agrupados en el American Institute of Certified Public Accountants, desarrollaron normas de control que obligaban a las empresas a hacer aparecer de manera explícita los montos pagados para la obtención de mercados. La Comisión de control de los mercados bursátiles (Security Exchange Commission-SEC) de Estados Unidos comenzó a actuar también en ese sentido.

Pierre Lascoumes señala que la movilización de los profesionales del control y de la auditoría es indisoluble del interés que tienen en que se desarrolle

<sup>223</sup> Peter Utting, *Business Responsibility for Sustainable Development*, OPG 2, UNRISD, Ginebra, 2000.

este nuevo mercado: interés directamente financiero, por un lado, y de más largo alcance, por el otro, en la medida que su función de vigilancia refuerza su poder ante los dirigentes de las empresas y los pone en situación de intermediarios entre las sociedades y los poderes públicos<sup>224</sup>. Esto es particularmente válido para los "big five" (ex "big five") del "consulting": Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte et Touche, KPMG y PriceWaterhouse Coopers.

En efecto, en años recientes se manifestó la tendencia a que fueran las grandes empresas consultoras las que hicieran la función de auditoría y control de las sociedades transnacionales, tanto en materia de gestión económica y financiera (lo que no es nuevo) como en materia de gestión social, laboral y medioambiental, lo que constituye una novedad.

La auditoría y el control de las grandes sociedades constituyen un nuevo mercado (el "mercado del control"), que genera importantes beneficios para quienes realizan tales actividades, beneficios que aumentan rápidamente de un año a otro. "Se trata de un fenómeno que ha dado origen a una nueva industria de asesores y de agencias que brindan servicios a las empresas en materia de responsabilidad social"<sup>225</sup>.

A mediados de 2002 los escándalos financieros involucraron a las grandes consultoras como Arthur Andersen, que se disgregó, a PriceWaterhouse Coopers y a otras, que quedaron en una posición delicada.

La *Corporate Auditing Accountability Act*, sancionada en Estados Unidos el 25 de julio de 2002, como reacción (¿de fachada?) frente a esos escándalos, establece severos controles sobre la contabilidad de las empresas, penas de prisión de hasta 20 años para los responsables de fraudes, y prohíbe que una misma empresa consultora acumule la función de consultor y de auditor.

Esta última disposición llevó a PriceWaterhouse Coopers a vender a IBM el 30 de julio de 2002 su división de consultoría (32.000 empleados e implantación en 52 países) por 3500 millones de dólares, conservando la división de "certificaciones". Para compensar el gasto, IBM anunció el despido de 13.000 de sus empleados<sup>226</sup>.

Ejemplos de normas privadas internacionales son las series ISO 9000 (gestión de calidad), ISO 14000 (gestión del medioambiente) y SA 8000 (Responsabilidad social).

<sup>224</sup> Pierre Lascoumes, *Régulations professionnelles au-delà ou en-deçà du droit? Chartes éthiques et codes de bonne conduite*, en *Noir, gris, blanc, les contrastes de la criminalité économique*, Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, núm. 36, Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, La Documentation Française, Paris, 1999.

<sup>225</sup> Dwight W. Justice, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, El concepto de responsabilidad social de las empresas: desafíos y oportunidades para los sindicatos, en Oficina Internacional del Trabajo, *La responsabilidad social de las empresas: mitos y realidades*, Manuales de Educación Obrera, núm. 130, 2003, p. 1.

<sup>226</sup> IBM anuncia 13.000 despidos, principalmente en Europa, Reuters, 05/05/2005.

La Organización Internacional de Normalización (International Organization of Standardization) agrupa a instituciones privadas de unos 120 países, y ha elaborado normas ISO 9000 e ISO 14000.

Las empresas han participado también en la elaboración de la SA 8000, implementada en diciembre de 1997 por el Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), organización no gubernamental establecida en Nueva York. La SA 8000 se basa en Convenios de la OIT en materia de trabajo infantil, trabajo forzoso, seguridad en el trabajo, remuneración, etc. Para demostrar a sus clientes y a la opinión pública en general que es socialmente responsable, pues respeta la SA 8000, una empresa debe obtener la acreditación o certificación de la CEPAA.

Lindsay Descombes, director gerente de SGS Mauritius, explica que las empresas están interesadas en obtener la certificación de la CEPAA porque, dado el papel que desempeñan actualmente los medios de comunicación, "la imagen pública de toda empresa ocupa un lugar privilegiado"<sup>227</sup>.

A comienzos del decenio de 1990 comenzaron a aparecer los códigos de conducta que las empresas elaboran para sí mismas, a veces con la intervención exterior de ONG en la etapa de elaboración del código o de control de su aplicación. Levi Strauss, Nike y Reebok, por ejemplo, elaboraron sus propios códigos de conducta, como reacción a las campañas (*clean clothes* y otras) sobre las condiciones de trabajo deplorables existentes en los lugares de producción, localizados en países pobres.

Pero ocurre que, en la práctica, los códigos de conducta no se aplican en esos lugares de producción, porque a menudo estas grandes sociedades transnacionales no son empresas productoras, pues subcontratan la producción, *externalizando así los costos y los riesgos* (véase el apartado 6 del Capítulo VII), y funcionan como empresas de servicios, que venden una marca y una imagen, y se ocupan de la distribución y la comercialización. Por ejemplo, Nike no tiene ninguna fábrica. Toda su producción es confiada a 736 unidades de subcontratistas en 56 países los que, en octubre de 2001, empleaban a más de medio millón de personas: 455.000 en Asia (de los cuales 176.000 en China y 100.000 en Indonesia), 35.000 en América Latina, 9.500 en África y 55.000 en el resto del mundo. Los 20.000 empleados que tiene Nike en Estados Unidos se ocupan de funciones financieras, de diseño y de "marketing". Los salarios oscilan entre 60 y 70 euros por mes en China y en Indonesia, para una jornada de diez horas diarias, seis días por semana. Es decir, un salario de unos 25 centavos de euro por hora<sup>228</sup>. Y Nike no se hace responsable de la situación laboral existente en esos centros de producción.

<sup>227</sup> PROSI Magazine, núm. 365, junio de 1999.

<sup>228</sup> Les petis pas de Nike, Alternatives Internationales, Francia, julio-agosto, 2002, pp. 60-61.

Es decir, que hay un gran paso entre la adopción de códigos de conducta (sean más o menos completos o no) y su aplicación en la práctica en las empresas subcontratistas<sup>229</sup> y, como se verá en los apartados siguientes, en las mismas grandes empresas que los han elaborado.

### **El *partnership* entre grandes organizaciones no gubernamentales y sociedades transnacionales**

A la exigencia de un control externo realmente independiente, las sociedades transnacionales responden contratando auditorías de grandes consultoras transnacionales (con los resultados delictuosos hechos públicos en 2002), o aceptando pseudocontroles de ONG más o menos complacientes, cuya función oscila entre el control y el asesoramiento (de preferencia directa o indirectamente remunerado) de dichas sociedades. Dice Justice: "La responsabilidad social de las empresas... se adapta bien al crecimiento de las alianzas público-privadas y a la creciente utilización de ONG como proveedoras de servicios en nuevas formas de filantropía"<sup>230</sup>.

Por ejemplo, en el marco de la campaña *clean clothes* (ropas limpias), un grupo de ONG elaboró e hizo público en febrero de 1998 un proyecto de Código de conducta para el comercio y la industria de la confección de artículos de *sport* (ropas y calzado). Es muy completo y en su Capítulo IV (Control independiente, acreditación y certificación) dice que una vez que un número suficiente de sociedades o de organizaciones patronales hayan adoptado el código de conducta establecerán, conjuntamente con las organizaciones sindicales y las ONG apropiadas, una institución independiente llamada "Fundación". A continuación el documento describe detalladamente las funciones de la "Fundación" en materia de control "independiente" de la aplicación del Código, entre ellas la asistencia técnica a las empresas y un sistema de certificación. Y también establece que "la Fundación será financiada por contribuciones de las organizaciones participantes y por el pago de servicios por parte de las sociedades contratantes".

En nuestro conocimiento, este proyecto de código no ha sido aceptado por ninguna empresa.

Otras ONG, que gozan de gran reputación desde hace tiempo en la defensa de los derechos humanos en general, se ocupan ahora también de vigilar el comportamiento de las sociedades transnacionales.

<sup>229</sup> Véase Diller, ob. cit. También G. Verna y Jacques Bertrand, *Éthique de la production en sous-traitance: le cas de l'industrie du vêtement*, en X Colloque interdisciplinaire sur l'objectivité des droits de l'homme, 9-11 janvier 1997, Documents de séance, Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme, Université de Fribourg (Suisse). Véase también: Oficina Internacional del Trabajo, *La responsabilidad social de las empresas: mitos y realidades*, Manuales de Educación Obrera, núm. 130, 2003/1.

<sup>230</sup> Justice, ob. cit. Véase nota 204.

En un artículo publicado en *Le Monde Diplomatique* en mayo de 1998, el entonces secretario general de Amnistía Internacional (AI) decía que las instituciones financieras internacionales y las sociedades transnacionales "...deben utilizar su influencia para tratar de poner fin a las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y por los grupos armados de oposición en los países donde ellas operan". Después de indicar que el silencio de las grandes empresas no es neutro, el secretario general de AI continuaba diciendo: "cuando el mundo hacía campaña para evitar la ejecución de Ken Saro-Wiwa y sus ocho coacusados ogonis en Nigeria, en 1995, AI exhortó a la compañía petrolera Shell, uno de los más importantes inversores en dicho país, a intervenir... pero la empresa se negó, aduciendo que no podía intervenir en la política nigeriana". El secretario general se refería a la Shell como una empresa muy influyente en Nigeria, que podía interceder con todo su peso ante el gobierno de dicho país, aparentando ignorar el papel decisivo de la Shell en la represión del pueblo ogoni en general y en la decisión final sobre la suerte de Saro-Wiwa y de sus compañeros en particular<sup>231</sup>. Por el contrario, afirmaba en el mismo artículo (en la nota 2) que "después Shell ha expresado públicamente su apoyo a los derechos de la persona humana". Indudablemente, este "certificado de buena conducta" otorgado por Amnistía Internacional tiene un gran valor para la imagen pública del gigante petrolero.

En el mencionado artículo se anunciaba que Amnistía Internacional había elaborado una "lista de control" para ser incorporada a los códigos de conducta de las empresas. En el punto 2 (Security) de los "Principios de Derechos Humanos de Amnesty International para las sociedades", se dice que "El personal de seguridad empleado o contratado (por las empresas) debería estar formado de manera apropiada. Los procedimientos deberían estar en conformidad con los Principios Básicos para el uso de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley...". Esta es una manera de reconocer la privatización del uso de la fuerza y de legitimar las milicias privadas de las sociedades transnacionales.

Un artículo publicado en diciembre de 2000 en *Le Monde Diplomatique*<sup>232</sup> relata las campañas de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch para "incitar" a las grandes sociedades transnacionales a "asumir responsabilidades económicas y sociales de conformidad con su poder y su influencia". Y se informa que AI ha encontrado la feliz réplica al argumento de las empresas de que "*human rights is not the business of business*"; "*hu-*

<sup>231</sup> Véase *The role of Shell in Ogoni*, en [www.mosopcanada.org/text/shell](http://www.mosopcanada.org/text/shell). Los familiares de Ken Saro Wiwa están querrelando actualmente a la Shell ante un tribunal de Nueva York, por complicidad en la muerte del líder ogoni (véase el Capítulo VII, apartado 3 de este trabajo).

<sup>232</sup> Roland-Pierre Paringaux, *De la complicité avec les dictatures au "capitalisme éthique"*. Business, pétrole et droits humains, en *Le Monde Diplomatique*, diciembre, 2000, pp. 4 y 5.



*man rights is the business of business*", y que dicha ONG "ha decidido tender la mano a las multinacionales, consideradas en este asunto como asociadas", y "ha desarrollado una política de encuentros y de intercambio de ideas con miras a llegar a un objetivo común". Estos intercambios deben haber estado facilitados por el hecho de que un ex dirigente de Shell, sir Geoffrey Chandler, era en esa época responsable del Grupo "negocios" de Amnistía Internacional en el Reino Unido, como se indica en el mismo artículo.

Otro caso de asociación entre una ONG y una sociedad transnacional es el del *partenariat* entre la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y el Grupo Carrefour.

Con 79 mil millones de euros de ventas, 400.000 empleados, 10.385 supermercados implantados en todas las regiones del planeta (cifras de 2003), Carrefour es el segundo gigante mundial de la distribución minorista —el primero es Wal Mart<sup>233</sup> de Estados Unidos— y una de las más importantes sociedades transnacionales francesas.

La "cooperación" con Carrefour consiste esencialmente, explica la FIDH, en que Carrefour adopte una "Carta proveedor" y que se ponga en ejecución una metodología para controlar el respeto de dicha Carta: Carrefour deberá respetar ciertas normas fundamentales y hacerlas respetar por el proveedor, en particular una serie de derechos laborales. Si el proveedor no respeta dichos derechos, Carrefour se reserva el derecho de rescindir los pedidos en curso e interrumpir definitivamente las relaciones comerciales con el mismo.

La FIDH realiza el control exterior "independiente" del cumplimiento de esos compromisos; si lo considera necesario mediante visitas en el terreno, financiadas por Carrefour, según han admitido los representantes de esa ONG.

Se ha establecido un marco legal a esta colaboración entre la FIDH y Carrefour: una sociedad civil sin fines de lucro llamada Infans, en cuyo consejo de administración la FIDH es mayoritaria. Infans está totalmente financiada por Carrefour con un aporte de 70.000 euros sobre tres años. Es decir, un millonésimo de su cifra anual de negocios y algunos cienmilésimos de sus beneficios netos anuales.

El acuerdo entre la FIDH y Carrefour establece que "El trabajo de la FIDH se desarrolla de manera *confidencial* (énfasis agregado). Sin embargo, si la FIDH considera que sus recomendaciones no se aplican de manera satisfactoria, puede decidir hacer públicas sus observaciones después de un plazo de cuatro meses"<sup>234</sup>.

<sup>233</sup> Véase la nota 78.

<sup>234</sup> Véase [www.fidh.org/ecosoc/rapport/2003/fr/car1405f.PDF](http://www.fidh.org/ecosoc/rapport/2003/fr/car1405f.PDF)



De modo que, según ese acuerdo, los proveedores de Carrefour deben respetar ciertas normas laborales, so pena de perder a su único comprador, pues Carrefour ejerce un monopsonio (situación comercial en la que una empresa es el único comprador de una serie de proveedores de productos o servicios).

Pero el acuerdo entre la FIDH y Carrefour no prevé que este último pague precios justos a sus proveedores, de manera que la sociedad transnacional, en posición de monopsonio, puede imponer, e impone, los precios a que adquiere los productos, los que por cierto son bajos. Entonces puede ocurrir que el proveedor, que recibe precios bajos por sus productos, reduzca aun más sus márgenes de beneficio mejorando las condiciones laborales de su personal, bajo la amenaza de perder a su único cliente, o que no las mejore, en cuyo caso Carrefour puede optar por cerrar los ojos y seguir comprándole o dejar de comprarle y anunciar su decisión con un buen despliegue publicitario destinado a cultivar su imagen pública.

Refiriéndose a estos códigos de conducta destinados a los proveedores, dice Justice que:

...fueron una respuesta a la publicidad negativa vinculada a la explotación y otras prácticas laborales abusivas en los procesos de producción de marcas famosas... Las cadenas internacionales de producción (cadenas de valor) cada vez más elaboradas fueron facilitando que las empresas eludieran sus responsabilidades... Los códigos de proveedores se convirtieron en una forma de "controlar los riesgos" que corre la reputación de una marca<sup>236</sup>.

En un documento de ATTAC se dice: "Las concentraciones en la gran distribución francesa han llevado a la formación de un verdadero oligopolio que fija los precios de la producción en un contexto que lleva a la ruina a los proveedores (empresas y agricultores), a sus asalariados y a los ciudadanos-consumidores"<sup>236</sup>.

A Carrefour, el *partenariat* con la FIDH no le cuesta prácticamente nada, y es una excelente contribución para su imagen pública. También para mejorar su imagen, Carrefour no se priva de anunciar en su página "web" su asociación con la FIDH, pese a que el acuerdo con esta última le prohíbe hacer esa clase de publicidad<sup>237</sup>.

<sup>236</sup> Justice, *ob. cit.* Véase nota 204.

<sup>236</sup> [http://www.france.attac.org/IMG/pdf/4\\_pages\\_gd.pdf](http://www.france.attac.org/IMG/pdf/4_pages_gd.pdf). Véase también de Christian Jacquiau, *Les coulisses de la grande distribution*, Albin Michel. Para ofrecer precios cada vez más bajos a las centrales de compra, los proveedores deben comprimir sus costos... El consumidor de bajos ingresos ya no compra un producto sino un precio, y se establecen así dos niveles de consumo: productos baratos pero de mala calidad para los pobres, y productos sanos y de buena calidad pero caros (provenientes por ejemplo de la agricultura tradicional a la que se la llama biológica) para la minoría de consumidores de altos ingresos. Un mecanismo perverso cuyo principal beneficiario es la gran distribución.

<sup>237</sup> Véase [www.carrefour.com/francais/nosengagements](http://www.carrefour.com/francais/nosengagements).

En el sitio web Foro de Amigos del Pacto Mundial<sup>238</sup> se informa que el 4 de mayo de 2004 se realizó un almuerzo “en torno de la FIDH y Carrefour”. Dice la noticia: “En el marco del diálogo con las ONG –una de la cuatro misiones del Foro– Antoine Bernard, director ejecutivo de la FIDH, y Daniel Bernard, PDG del Grupo Carrefour, presentaron el 4 de mayo, en un almuerzo en el Instituto de la Empresa, el *partenariat* FIDH-Carrefour a 60 empresas adherentes”.

Quizás como eco de ese almuerzo, el 10 de mayo de 2004, hacia el final del informativo de 19.45 hs. del canal de televisión francoalemán ARTE, se difundió una nota sobre los resultados supuestamente benéficos de la asociación Carrefour-FIDH para los trabajadores de los subcontratistas de Carrefour en los países pobres.

Pero, según parece, los presuntos beneficiarios de estos “controles independientes” están cada vez peor.

A principios de 2004 Oxfam publicó los resultados de un estudio realizado sobre el terreno, que consistió en interrogar a unas 1300 trabajadoras y visitar 95 talleres de confección y 33 granjas. Las conclusiones del estudio son inequívocas: la gran mayoría de las obreras que trabajan en los talleres subcontratistas de las grandes empresas de Europa y de Estados Unidos sufren “condiciones de trabajo cada vez más precarias a causa de los nuevos esquemas industriales planetarios”<sup>239</sup>.

Las condiciones de trabajo del personal de Carrefour, como las del personal de todos los otros grandes supermercados, caracterizadas por los bajos salarios, los horarios prolongados e irregulares, y la inestabilidad, no forman parte del acuerdo con la FIDH, porque la mejora de dichas condiciones laborales podría afectar los generosos márgenes de beneficio del gigante transnacional<sup>240</sup>.

Los beneficios netos de Carrefour se cuentan actualmente en miles de millones de euros, y el porcentaje del aumento de dichos beneficios de un año a otro es una cifra de dos dígitos, en tanto que el incremento de los salarios del personal es casi nulo. El ex director general de Carrefour, Daniel Bernard<sup>241</sup>, percibió en 2002, sin contar los beneficios de sus *stock options*

<sup>238</sup> Global Compact, en <http://www.institut-entreprise.fr/index.php?id=341>.

<sup>239</sup> La dégradation des conditions de travail s'ampifie chez les sous-traitants des pays en développement, *Le Monde*, 27/02/04.

<sup>240</sup> En el semanario *Lyon Capitale*, núm. 555, de Lyon, Francia, de la semana del 24/01/06, se publicó el relato de dos agentes que trabajaron por cuenta de una empresa privada de seguridad para Carrefour en Écully, cerca de Lyon. En el artículo los agentes cuentan cómo vigilaban a los empleados de Carrefour hasta en su vida privada, en particular a los activistas sindicales para sorprenderlos en falta, a fin de poder justificar un despido, e incluso les tendían trampas para hacerlos caer en falta. Uno de los agentes dice haber participado así en cerca de 150 despidos.

<sup>241</sup> Perdió su cargo en febrero de 2005 y fue compensado por la empresa con 9 millones de euros a cobrar en cuatro años, y otros 29 millones como “complemento de jubilación”.

y otras ventajas, 2.650.436 de euros, el equivalente a 188 años de salario mínimo. En 2005, el principal accionista de Carrefour, la familia Halley (fortuna estimada: 3400 millones de euros), recibió por concepto de dividendos 92 millones de euros, que equivalen a 7776 años de salario mínimo<sup>242</sup>.

Carrefour, lo mismo que los otros gigantes de la distribución, están entre los principales vectores de la sociedad de consumo: en sus enormes y brillantes locales se tienta al ciudadano común con toda clase de productos: desde alimentos elaborados (que alguien ha llamado OCNIS – Objetos Comestibles No Identificados), hasta toda clase de artilugios electrónicos más o menos inútiles, ofrecidos supuestamente a bajo precio (véase nota 241).

A las sociedades transnacionales estas asociaciones con las ONG les pueden significar algunos gastos suplementarios, en forma de donaciones o contribuciones para el presupuesto de la ONG, proporcionándoles infraestructuras en grandes reuniones internacionales o financiando reuniones para debatir precisamente sobre la manera de controlar a las sociedades transnacionales.

Se puede concluir que las sociedades transnacionales son los principales beneficiarios de este “control independiente” practicado por ciertas ONG, pues así se dan una buena imagen pública y logran evitar verdaderos controles exteriores públicos y obligatorios.

Cabe interrogarse también acerca del nivel de independencia con que esas ONG abordan la cuestión de las sociedades transnacionales.

### **Ineficacia de los controles privados y de los códigos de conducta voluntarios**

Puede decirse entonces que los resultados de los códigos de conducta voluntarios y de los controles privados son pobres, sino nulos. En general, el comportamiento de las grandes sociedades transnacionales en materia ambiental, laboral y social no ha cambiado, y los casos con los que se pretende demostrar lo contrario son aislados, circunscritos a aspectos particulares y con efectos sólo temporarios (por ejemplo, el código de Levy Strauss ha sido revisado “a la baja”).

La International Baby Food Action Network y Geneva Infant Feeding Association publicaron un trabajo de Judith Richter y Jörg Schaaber, acerca de los “diálogos” entre las ONG y las empresas, donde sobre la base de su propia experiencia y la de otros hacen un análisis crítico de la cuestión<sup>243</sup>.

<sup>242</sup> [http://www.inegalites.fr/article.php?id\\_article=346](http://www.inegalites.fr/article.php?id_article=346)

<sup>243</sup> Judith Richter y Jörg Schaaber, Checklist for “Dialogues” with Industry, International Baby Food Action Network y Geneva Infant Feeding Association (IBFAN-GIFA), Ginebra, abril, 2002. [info@gifa.org](mailto:info@gifa.org). Véase también Céline Ovadia, La ética al servicio de las ganancias, en *Le Monde Diplomatique*, edición Cono Sur, noviembre, 2002.

Consideran que la cuestión fundamental que debe ser examinada es si los diálogos directos con la industria son la manera más eficaz y democrática de defender el interés público. Plantean luego una serie de preguntas y respuestas sobre otras cuestiones cruciales, por ejemplo, qué posibilidades tienen las ONG en este tipo de diálogo de lograr cambios comparadas dichas posibilidades con el riesgo de traicionar los intereses públicos que defienden, cuáles son los objetivos ocultos de la empresa (por ejemplo, mejorar su propia imagen), cuál es el poder real de la ONG frente a la empresa, etc. Entre los mayores riesgos de tal diálogo señalan el de privatizar problemas públicos ("transferir de la arena pública a la esfera privada", dichos problemas). Entre las alternativas que proponen están las mesas redondas, los debates públicos y las audiencias públicas.

Según Utting (véase nota 224), las campañas para que las grandes sociedades transnacionales respeten los derechos laborales y ambientales tienen sólo un efecto limitado sobre la opinión pública.

El resultado principal perseguido por las sociedades transnacionales que participan en estas iniciativas—aparte de establecer ciertas reglas de juego entre las mismas sociedades— es el *Greenwash*: "Disinformation disseminated by an organisation so as to present an environmentally responsible public image"<sup>244</sup> Es decir, presentar al público una imagen "ambiental" y "social".

En octubre de 1999 Michelin anunció la supresión de 7500 empleos. Michelin gozaba de una buena calificación en materia social conferida por Arese, agencia francesa que se ocupa de la evaluación social de las empresas. Arese llegó a la conclusión de que Michelin no había faltado a sus responsabilidades sociales, sino que sólo había evaluado mal el efecto en la opinión pública del anuncio de los despidos. Arese puso entonces una mala nota a Michelin por el mal manejo de sus relaciones con la sociedad civil. No por los 7500 despidos.

En Estados Unidos, Monsanto ha recibido un premio... ¡medioambiental!<sup>245</sup>

Un estudio, ya citado en la nota 223), realizado por Diller sobre 215 códigos de conducta adoptados por las sociedades transnacionales<sup>246</sup> muestra que en materia de derechos laborales el 75% de ellos se ocupan de la salud y la seguridad en el trabajo; el 66% de la discriminación; el 45% del trabajo

<sup>244</sup> *The Concise Oxford English Dictionary*, 1999. Citado por Utting, ob. cit., p. 4.

<sup>245</sup> Revista *Enjeux, Les Echos*, núm. 154, enero, 2000, pp. 43 y 45.

<sup>246</sup> J. Diller, Responsabilité sociale et mondialisation: qu'attendre des codes de conduite, des labels sociaux et des pratiques d'investissement?, en *Revue Internationale du Travail*, vol. 138, núm. 2, BIT, Genève, 1999, pp. 124-125, y notas 35, 38 y 49. Véase también *Voluntary Approaches to Corporate Responsibility*, con artículos de Rhys Jenkins, Peter Utting y Renato Alva Pino, publicación del Servicio de las Naciones Unidas de Relaciones con las ONG (NGLS), Ginebra, mayo, 2002.

infantil; el 40% del nivel de salarios; el 25% del trabajo forzado, y sólo el 15% de la libertad sindical. El mismo estudio hecho sobre 12 etiquetados sociales indica que 11 de ellos se ocupan del trabajo infantil; la mitad se ocupa de los niveles salariales y un tercio de ellos de otros derechos laborales como la libertad sindical, la negociación colectiva, la seguridad y la salud en el trabajo. Diller opina que el enfoque de los códigos de conducta y de los etiquetados sociales examinados es muy selectivo, y las normas invocadas lo son de diferente manera: "en la mayoría de los casos, esas normas son definidas por los autores de los documentos, según su propia idea de los objetivos a alcanzar". "Las normas definidas por los códigos o los programas de *labels* en general difieren de las normas internacionales de trabajo, cuando no son contrarias a las mismas". Incluso "muchos de los códigos elaborados por las empresas consideradas pioneras en ese campo no mencionan las normas internacionales de trabajo ni otros instrumentos de la OIT. La observación vale particularmente para Liz Claiborne y Levi-Strauss. El código de Reebok sólo contiene una referencia general a las normas internacionales relativas a los derechos humanos". Si bien algunos códigos reconocen la libertad sindical, otros tienden a excluir la acción sindical, por ejemplo Caterpillar y Sara Lee Knit.

Se propone también otra forma de control sobre la conducta de las sociedades: la de los accionistas y de los fondos de inversión que tienen participaciones en las mismas.

En las asambleas de accionistas, salvo excepciones, los proyectos de resolución referidos a cuestiones sociales obtienen pocas veces más del 15% de los votos y con frecuencia menos del 10%.

Los fondos de inversión que tienen en cuenta criterios sociales (francamente minoritarios), lo hacen de manera imprecisa y poco sistemática, y deben hallar un compromiso entre dichos criterios y las reglas comunes en materia de inversión, que tienen sobre todo en cuenta la seguridad y el rendimiento de la inversión.

En estos controles de los códigos de conducta voluntarios hay un gran ausente: los trabajadores de las mismas sociedades. A veces ocurre que no existen versiones de los códigos voluntarios en el idioma de los trabajadores de la empresa.

¿Es posible sostener seriamente que se pueden resolver problemas de tal magnitud con medidas del tipo de códigos de conducta voluntarios, controles privados, etiquetados sociales, control de los accionistas, control de los fondos de inversión, etc.?

¡Si hasta los presuntos verificadores, además de ser incompetentes<sup>247</sup> a veces aprovechan dolosamente de su posición! Hace algún tiempo se hizo

<sup>247</sup> Les Big Five sur la soiflette, Management, Francia, enero, 2000.

público que seis directores de PriceWaterhouse Coopers estaban siendo investigados por la Security Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos porque habrían utilizado informaciones privilegiadas obtenidas de las auditorías de sus clientes para hacer afortunadas operaciones en bolsa (delito de iniciados)<sup>248</sup>. Más recientemente, la sociedad Arthur Andersen apareció involucrada en la quiebra fraudulenta de Enron. La actuación fraudulenta de Andersen está sacando a luz la actuación de otras empresas consultoras en materia financiera, como Merrill Lynch, que aconsejan a los ahorristas inversiones de resultado dudoso con el sólo fin de aumentar sus propias ganancias. En abril de 2002 estalló el escándalo ya anunciado en un artículo publicado en *Business Week* el 18 de febrero del mismo año: PriceWaterhouse Coopers fue acusada de realizar auditorías falsas y de ocultar información a los inversores en su calidad de auditora del monopolio del gas Gazprom de Rusia.

Cabe entonces preguntarse: ¿quién verifica a los verificadores?

Pero las sociedades transnacionales ni siquiera soportan a estos verificadores *soft*: el 24 de abril de 2000, Philip Knight, patrón de Nike, hizo llegar a la prensa un comunicado manifestando su profundo disgusto frente al hecho de que la Universidad de Oregon había entrado al consorcio por los derechos del trabajador (Workers Rights Consortium). Con esta actitud —continuaba diciendo Knight— la Universidad toma posición contra la nueva economía global *que me permite ganarme la vida* (sic). Concluía anunciando que suspendía definitivamente las donaciones a dicha Universidad. Por razones similares cortó los fondos a otras dos universidades<sup>249</sup>.

En mayo de 2000 se reunió en Budapest el Congreso Mundial de la Cámara Internacional de Comercio (ICC). En un discurso grabado, Kofi Annan se dirigió al Congreso afirmando que la ONU y la ICC eran “buenos y estrechos asociados”. Pero las cortesías reverenciales del Secretario General de las Naciones Unidas no lograron ablandar al presidente de la ICC, Adnan Kassar, quien creyó necesario establecer lo que él llamó una importante condición: no debe haber propuestas para cubrir el *Global compact* (véase Capítulo IV, apartado 2) con normas obligatorias (*prescriptive rules*). “Nosotros resistiremos cualquier tendencia en ese sentido”, añadió. Y describió el *Global compact* como un mosaico de acciones emprendidas por las empresas, cada una en su esfera de actividad, mostrando cómo contribuyen a los derechos humanos, a la preservación del medioambiente y a la preservación de los derechos humanos de los trabajadores (tres valores esenciales)<sup>250</sup>.

<sup>248</sup> *Marianne*, Francia, 24-30 de enero, 2000, p. 13.

<sup>249</sup> *Diano Libération*, París, 6-7 de mayo, 2000, p. 23.

<sup>250</sup> [www.iccbo.org/home/news\\_archives/2000/buda\\_global.asp](http://www.iccbo.org/home/news_archives/2000/buda_global.asp), 18/05/2000.



¿Cómo puede justificarse que el respeto de las normas jurídicas (por esencia obligatorias) pueda dejarse al libre arbitrio de los destinatarios de las mismas a través de un sistema de códigos y controles voluntarios? Es impensable que a un ciudadano común se le deje la opción de decidir libremente, por ejemplo, si va a cumplir o no un contrato, o cuáles normas penales va a respetar y cuáles no.

Como lo explica George Soros, con la autoridad que le da el hecho de estar él mismo “en las entrañas del monstruo”: “Si yo mismo me impongo reglas sin imponerlas a los otros, mis resultados en el mercado se resentirán, pero esto no tendrá efecto alguno sobre los mercados porque ningún agente aislado puede influir sobre ellos. Existe una diferencia entre el hecho de establecer reglas y el hecho de respetarlas. Establecer reglas implica decisiones políticas o colectivas, respetarlas implica decisiones individuales que son las que prevalecen en el mercado”. Y más adelante: “El capitalismo necesita el contrapeso de la democracia”<sup>251</sup>.

Este tratamiento diferencial y privilegiado frente a la ley conferido a las grandes sociedades transnacionales con respecto a la criminalidad ordinaria ya lo denunciaba Edwin H. Sutherland en su célebre *White collar crime* (1949): “Más específicamente, el problema puede resumirse así: desde el punto de vista de una teoría del comportamiento criminal, ¿los actos ilegales perpetrados por las empresas pueden analizarse en el mismo plano que los robos con efracción, los robos y todos los crímenes que son habitualmente el objeto de las teorías criminológicas?”

La postulación de códigos voluntarios y de controles privados para las sociedades transnacionales parece aceptar la posibilidad de que existan zonas de *no derecho* para las sociedades transnacionales o, en el mejor de los casos, que las sociedades transnacionales tengan un derecho “a la carta”.

Estas ideas de “códigos voluntarios” o de “derechos específicos” para determinadas categorías de personas reflejan una tendencia a la privatización o “corporativización” del derecho, una especie de neofeudalismo que renuncia al principio del Estado democrático de derecho fundado en la igualdad de todos ante la ley.

Nosotros abordamos esta cuestión en un documento presentado a un coloquio interdisciplinario organizado en 1998 por el Instituto Interdisciplinario de Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Friburgo, Suiza<sup>252</sup>, donde reivindicábamos el papel del Estado y de la ley en los conflictos y las

<sup>251</sup> G. Soros, *La crise du capitalisme mondial, l'intégrisme des marchés*, Plon, Paris, 1998, p. 21.

<sup>252</sup> A. Teitelbaum, *Etat et société civile, en Société civile et autorités publiques face à l'indivisibilité des droits de l'homme*. 11 Colloque interdisciplinaire sur l'objectivité des droits de l'homme, 12-14 novembre 1998. Documents de séance, Instituto Interdisciplinario de ética y de derechos humanos, Universidad de Friburgo, Suiza.

tensiones que se producen en la sociedad humana como resultado de la existencia de intereses diferentes y aún contradictorios, y citábamos a Necker, quien en su libro *Législation et le commerce des grains* (1775) decía:

El Propietario sólo ve en el trigo el fruto de sus cuidados y el producto de la tierra que le pertenece y quiere disponer del mismo como de sus otros ingresos. ...El Comerciante sólo ve en ese alimento una mercancía que se vende y se compra y quiere poder comprarla y revenderla de conformidad con sus intereses. El Pueblo ...ve el trigo como un elemento necesario para su conservación, quiere vivir de la tierra que está bajo sus pies y asegurarse la subsistencia con su trabajo. ...El Propietario invoca los derechos de la propiedad; el Comerciante los derechos de la libertad; el Pueblo los derechos de la humanidad. ...Es en medio de ese choque continuo de intereses, de principios y de opiniones que el Legislador tiene que buscar la verdad<sup>233</sup>.

En conclusión, los códigos de conducta voluntarios son iniciativas privadas y, por tanto, ajenos a la actividad normativa de los Estados, de cumplimiento obligatorio, y a la actividad normativa (convenios, resoluciones, declaraciones, etc.) o incitativa para promover nuevas normas o la aplicación consecuente de normas ya existentes (directrices, declaraciones de principios, etc.) de las organizaciones internacionales interestatales. Y la práctica ha demostrado, además, que dichos códigos de conducta voluntarios son ineficaces.

No obstante, algunos juristas opinan que el incumplimiento de los códigos de conducta voluntarios podría invocarse con base en el principio de que una obligación asumida unilateralmente es también exigible por un tercero interesado y, así mismo, podría alegarse como competencia desleal de una empresa el hecho de que afirme falsamente que aplica y respeta un código de conducta voluntario.

## **LAS NORMAS JURÍDICAS EN VIGOR SON TAMBIÉN OBLIGATORIAS PARA LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES Y SUS DIRIGENTES**

Se requiere, pues, proponer soluciones para el encuadre jurídico de las sociedades transnacionales que partan de ciertas premisas básicas:

a) Los Estados nacionales y las organizaciones interestatales internacionales son comunidades de derecho, es decir, están construidas sobre

<sup>233</sup> Citado por Pierre Spitz, *Les greniers de l'État. Céréales, FAO*, vol. 12, núm. 6, noviembre-diciembre, 1979. No se nos escapa que el Estado no es un auténtico mediador, sino el garante del sistema social vigente. Pero tampoco ignoramos que las leyes no son la simple expresión de la voluntad de las clases dominantes, sino la resultante en cada caso de la relación de fuerzas en un momento dado entre las diferentes clases sociales. Y así puede haber y hay normas jurídicas generales y particulares favorables a los intereses de las clases subordinadas, cuya aplicación éstas debían exigir al Estado.

bases jurídicas objetivas (normas nacionales e internacionales) que, con independencia de que en los hechos se respeten en mayor o en menor grado, y del nivel de su evolución, constituyen la referencia para establecer las reglas de juego de la convivencia humana.

b) Estas normas son obligatorias para las personas físicas y jurídicas.

c) Las sociedades transnacionales son personas jurídicas y, en tanto tales, sujetos y objeto de derecho. De modo que las normas jurídicas vigentes son también obligatorias para las sociedades transnacionales.

d) En el ejercicio de sus funciones, los dirigentes de las sociedades transnacionales también están obligados a respetar las normas jurídicas vigentes.

e) Las tendencias modernas en materia penal, reflejadas en numerosas legislaciones nacionales y en instrumentos internacionales, reconocen la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y también se admite la doble imputación, es decir, que es imputable por un lado la persona jurídica y, por el otro, las personas físicas (dirigentes de la entidad) que tomaron la decisión incriminada o que, pudiendo hacerlo, no se opusieron a ella.

f) La heterogeneidad, fragmentación y a veces contradicción de las normas vigentes de derecho internacional en diferentes dominios se pone de manifiesto al abordar la cuestión del encuadramiento jurídico de las sociedades transnacionales. Se requiere lograr la coherencia entre las normas estableciendo una jerarquía de las mismas, partiendo del principio de que los derechos humanos, considerados individual y colectivamente, están en la cúspide de la pirámide normativa, como manifestación del interés general, expresado por todos los ciudadanos, libres e iguales en derechos, a través de los mecanismos constitucionales de la democracia representativa y participativa.

g) La aplicación del principio de la responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales con sus filiales de hecho y de derecho, con sus proveedores, contratistas y licenciarios, es un prerequisite indispensable de la eficacia en la práctica de su encuadramiento en normas obligatorias.

Se trata entonces de establecer de qué manera se encuadra a las sociedades transnacionales y a sus dirigentes en las normas nacionales e internacionales vigentes y se las sanciona, en el ámbito de las jurisdicciones nacionales e internacionales, en caso de transgresión a las mismas. Y se trata también de consolidar y desarrollar las normas específicas existentes referidas a las sociedades transnacionales, y de reabrir el tema de los códigos de conducta obligatorios para dichas sociedades y en materia de transferencia de tecnología.

## CAPÍTULO 7

# Responsabilidad jurídica, civil y penal de las sociedades transnacionales. Normas aplicables y jurisdicciones competentes

Cuando la actividad de las sociedades transnacionales, como la de cualquier persona física o jurídica, produce daños o implica violaciones de los derechos humanos, deben responder civilmente, reparando el daño causado, restableciendo, si es posible, el *statu quo ante*, y ajustando su conducta a las normas vigentes. Y si los daños o las violaciones constituyen crímenes, deben responder también penalmente y sufrir las sanciones correspondientes, tanto la empresa como los dirigentes responsables.

## ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Antes de seguir adelante intentaremos dilucidar una cuestión recurrente en el derecho internacional de los derechos humanos. Se suele sostener que los derechos humanos constituyen una categoría especial de derechos que sólo pueden ser violados por los Estados y sus funcionarios, y no por los particulares. Y que los delitos cometidos por estos últimos pueden constituir violaciones de los derechos humanos sólo cuando el Estado aparece como copartícipe por acción o por omisión. Es decir, que hay violación de los derechos humanos sólo cuando surge, de una manera u otra, la responsabilidad del Estado.

De manera que la misma acción que engendra la responsabilidad directa o subsidiaria del Estado a título de violación de los derechos humanos, cometida por un particular, también engendrará su responsabilidad pero a título de crimen o delito según el respectivo derecho nacional, y no a título de violación de los derechos humanos.

Este enfoque restrictivo de la noción de derechos humanos tiene una explicación histórica y otra pragmática.

Durante mucho tiempo predominó la idea de que los derechos humanos son esencialmente derechos individuales frente al poder del Estado. La

lucha por estos derechos, y contra la omnipotencia del poder del Estado se tradujo en la obtención de cartas de garantías y derechos para los “hombres libres” (Carta Magna de 1215, Bill of Rights de 1689).

Pero esta noción ha evolucionado al compás de nuevas realidades sociales, y ahora se reconoce, aunque no existe consenso al respecto, que los derechos humanos pueden ser violados, no sólo por el Estado, sino por personas privadas.

El reconocimiento de las obligaciones de las personas privadas en materia de derechos humanos, y de su responsabilidad en el caso de incurrir en violaciones de los mismos, quedó consagrado en el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se fue afianzando en la doctrina, en la legislación nacional, en numerosos convenios internacionales, especialmente en materia de protección del medioambiente, y en la jurisprudencia. Citamos algunos ejemplos en este trabajo, particularmente en el apartado 4 del capítulo VI, y en los tres apartados siguientes de este Capítulo.

Desde el punto de vista del derecho positivo puede decirse que los derechos humanos son aquéllos que han sido admitidos como tales en las normas internacionales y en la gran mayoría de los Estados nacionales, muchos de los cuales han incorporado aquéllas a su derecho interno. Son los derechos inherentes a la dignidad intrínseca propia de la persona humana, cuyo titular es el ser humano, y cuya naturaleza no cambia quienquiera sea el que los vulnere, sea el Estado o los particulares. Su violación debe ser sancionada en todos los casos y genera a favor de la víctima el derecho a la reparación.

Por otra parte, no hay que confundir entre la obligación de respetarlos, que es universal, y el deber de garantizarlos, de sancionar su violación y de asegurar la reparación a las víctimas, que es función del Estado y de los organismos internacionales de derecho público internacional pertinentes.

Pero el enfoque limitativo o restrictivo en la definición de qué son los derechos humanos, que consideramos anacrónico y jurídicamente insostenible<sup>254</sup>, tiene efectos prácticos.

Si se excluye a las personas privadas, entre ellas a las sociedades transnacionales, del marco jurídico que garantiza la protección de los derechos humanos, éstas quedan sometidas sólo al derecho interno común, que es manifiestamente insuficiente para llegar a responsabilizarlas y, eventualmente, sancionarlas.

<sup>254</sup> Con el antecedente de Nüremberg, y sobre todo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en vigor desde el 1 de julio de 2002, ya no se puede sostener que las personas no pueden ser autoras de violaciones de los derechos humanos en cualquiera de las formas de participación criminal: autoras, coautoras, instigadoras y cómplices, y no sólo esto último, como pretenden ahora algunas personas y organizaciones.

Ello es así porque en los países centrales las sociedades transnacionales cuentan con una legislación favorable y, sobre todo, con el respaldo incondicional de los gobiernos. Y en los países periféricos del sistema pueden violar las normas internas o hacerlas reformar en su propio interés y, por cierto, pueden también violar los derechos humanos con la complicidad de las elites dirigentes de muchos de esos países y así asegurar su impunidad.

Es sabido que hay empresas transnacionales que son más poderosas económicamente que muchos países pobres<sup>255</sup>, y que además cuentan con un arsenal jurídico a su servicio –los tratados bilaterales de libre comercio y de promoción y protección de inversiones, entre otros–, y jurisdiccional –los tribunales arbitrales del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi, Icsid en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, *ex officio*, el presidente del mismo Banco Mundial<sup>256</sup>, el Órgano de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio, etc.–.

Esto, unido a la extrema fluidez de movimientos transfronterizos de las STN, sobre todo de su capital financiero pero también de su capital fijo, que les permiten eludir el cumplimiento de las leyes y los reglamentos nacionales, hacen manifiestamente insuficientes las legislaciones internas y exige imperativamente la aplicación de los procedimientos y mecanismos internacionales de derecho público existentes, y la creación de otros más eficaces que obliguen a las STN a respetar los derechos humanos y las sujeten a la sanción correspondiente en caso incurrir en su violación.

Eso es precisamente lo que dichas empresas, sus asesores y mentores no quieren.

## LAS NORMAS APLICABLES

Las normas pertinentes, además de las que existen en el ámbito nacional, son una serie de instrumentos internacionales vinculantes para los Estados y aplicables, tanto en el ámbito internacional como nacional, a las personas físicas y jurídicas, incluidas las sociedades transnacionales y sus dirigentes.

Hay amplio consenso en el sentido de que la no incorporación al derecho interno de las normas internacionales vigentes genera la responsabilidad internacional del Estado que ha omitido hacerlo. Entre esos instrumentos

<sup>255</sup> El volumen de negocios de las más grandes sociedades transnacionales es equivalente o superior al PIB de muchos países, y el de media docena de ellas es mayor que el PIB de los 100 países más pobres reunidos; Utting, *Business Responsibility for Sustainable Development*, UNRISD, Ginebra, enero, 2000. Según las fuentes, entre un tercio y la mitad de las entidades económicamente más poderosas del planeta son sociedades transnacionales y el resto son Estados.

<sup>256</sup> Véase la nota 165.



internacionales cabe mencionar: La Declaración Universal de Derechos Humanos; los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos Civiles y Políticos, y las Convenciones sobre la discriminación racial, sobre la discriminación contra la mujer, sobre los derechos del niño, y contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; la Convención contra el genocidio (art. II, párr. c); la Convención contra el *apartheid*<sup>257</sup>; la Proclamación de Teherán de 1968; la Declaración referente a la instauración de un nuevo orden económico internacional (AG 3201 S VI); el Programa de acción para la instauración de un nuevo orden económico internacional (AG 3202 S VI); la Declaración sobre el progreso y el desarrollo en el dominio social (AG 2542 XXIV); los Principios de derecho internacional sobre las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas (AG 2625 XXV); la Carta de los deberes y derechos económicos de los Estados (AG 3281 XXIX); la Declaración sobre el desarrollo y la cooperación económica internacional (AG 3362 S VII); la Declaración de Filadelfia de 1944, incorporada a la Constitución de la OIT; los Convenios internacionales del trabajo, entre ellos el 87 (libertad sindical y protección del derecho de sindicación); 98 (derecho de sindicación y de negociación colectiva); 100 (igualdad de remuneración); 105 (abolición del trabajo forzoso); 111 (discriminación); 131 (salario mínimo); 45, 89 y 103 (trabajo de mujeres); 1, 30, 43, 47 de 1935 sobre 40 horas (jornada máxima de trabajo); 49, 153 y Recomendación 116 (reducción de la duración del trabajo); sobre seguridad e higiene en el trabajo (Convenios con disposiciones generales números 31, 97, 155, y 161, y varios convenios y recomendaciones sobre riesgos específicos o ramas de actividad); tiempo libre (recomendación 21 de 1924 sobre la utilización del tiempo libre de los trabajadores, que en 1987 el Consejo de Administración de la OIT incluyó en su clasificación de los instrumentos que convenía promover con carácter prioritario); seguridad social (convenios con normas generales 102, 118 y 157, y numerosos convenios con normas específicas); los convenios y las recomendaciones relativos al derecho al trabajo: convenios 122 de 1964 sobre política del empleo, y 158 de 1982 sobre terminación de la relación de trabajo, y recomendaciones 122 sobre política de empleo y 169 de 1984 con disposiciones complementarias sobre el mismo tema, etc.; la Declaración de principios tripartita sobre las sociedades multinacionales y la política social, aprobada por el Consejo de Administración de la OIT en 1977 y modificada en noviembre de 2000; la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986

<sup>257</sup> Sobre la aplicabilidad de los derechos económicos de las Convenciones sobre la discriminación racial, sobre la discriminación contra la mujer, contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, contra el genocidio y contra el *apartheid*, véase el informe del Relator Especial sobre el derecho a una alimentación adecuada, señor Ziegler, en particular el párrafo 46, presentado en 2001 a la Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, E/CN.4/2001/53. Véanse también los informes del señor Ziegler de 2002, E/CN.4/2002/58, y de 2005, E/CN.4/2005/47.

(AG 41/128), y los instrumentos regionales, en especial, la Carta Social Europea, la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (arts. 20, 21 y 22); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Capítulo III, Derechos económicos, sociales y culturales); el Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Cartagena de Indias, diciembre de 1985), y el Protocolo adicional a la Carta de la OEA en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador, 1988, vigente desde fines de 1999), entre otros.

En el Capítulo V nos hemos referido a varios convenios y a la jurisprudencia internacional sobre la protección del medioambiente. Cabe mencionar también la Declaración y el programa de acción de Viena, la Declaración de El Cairo de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Declaración de Copenhague de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, entre otros.

En los últimos años se han aprobado convenios internacionales contra la corrupción (una práctica habitual de las sociedades transnacionales): la Convención Interamericana de 1996; la Convención de la OCDE de 1997, vigente desde 1999; la Convención penal europea sobre la corrupción, aprobada por el Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, abierta a la firma de los Estados en la misma fecha y en vigor desde el 1 de julio de 2002 (esta última en: *Serie de tratados europeos* 173, [www.coe.int](http://www.coe.int)), y la Convención civil europea contra la corrupción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2003.

La Convención penal europea sobre la corrupción de 1999 es, de los cuatro instrumentos citados, el más completo, pues describe con cierta minuciosidad los diferentes casos de corrupción:

- a) corrupción activa y pasiva de funcionarios públicos nacionales;
- b) corrupción de miembros de asambleas públicas nacionales;
- c) corrupción de funcionarios públicos extranjeros y de miembros de asambleas públicas extranjeras;
- d) corrupción activa y pasiva en el sector privado;
- e) corrupción de funcionarios internacionales y de miembros de asambleas parlamentarias internacionales;
- f) corrupción de jueces y funcionarios de cortes internacionales;
- g) tráfico de influencia, y
- h) blanqueo del producto de los delitos de corrupción.

Otro aspecto muy importante de la Convención penal europea sobre la corrupción es que en su artículo 18 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha responsabilidad no figura en la Convención Interamericana, en tanto que la Convención de la OCDE deja a la decisión de los Estados la posibilidad de optar entre la responsabilidad penal, civil o

administrativa. El mismo artículo 18 establece la responsabilidad penal de las personas físicas que tienen la representación de las personas jurídicas y la de los instigadores y cómplices.

La Convención europea puede ser una fuente de inspiración para iniciativas y acciones, en los planos nacional, regional e internacional.

La Convención de la OCDE no es directamente aplicable en los Estados signatarios, y requiere una legislación interna de aplicación. No incluye a las filiales instaladas en países no miembros de empresas que tienen su sede principal en los Estados miembros, es decir, se acepta la ficción jurídica de la autonomía de la filial, sin "levantar el velo" de la realidad económica de que dichas filiales forman un todo con la sociedad matriz. Eso permite continuar empleando prácticas de corrupción a través de las filiales instaladas en países no miembros. Este sistema lo usan habitualmente las sociedades transnacionales estadounidenses para eludir la legislación de Estados Unidos contra la corrupción y, por cierto, lo utilizan también las sociedades transnacionales basadas en otros países.

Sobre la base de la noción de interdependencia, indivisibilidad y "permeabilidad" de las normas aplicables en materia de derechos humanos, son también aplicables, además de las normas específicas, las diferentes normas internacionales y nacionales relativas a los derechos fundamentales de la persona humana. Como dice el profesor Fierens: "...porque simplemente los derechos humanos no son más divisibles que el ser humano mismo"<sup>258</sup>.

Así lo entendió la Asamblea General de la ONU, cuando se pensaba elaborar un sólo Pacto Internacional que abarcara los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, y que adoptó en su quinto período de sesiones en 1950 una resolución donde se decía: "el goce de las libertades civiles y políticas, así como el de los derechos económicos, sociales y culturales son interdependientes" porque "en el caso de que el ser humano se encuentre privado de los derechos económicos, sociales y culturales no representa la persona humana que la Declaración Universal considera como el ideal del hombre libre" (Doc. A.2929, punto 21, Capítulo I). La Declaración Universal de Derechos Humanos, por otra parte, abarca ambas categorías de derechos.

Este enfoque fue incorporado más tarde a la Proclamación de Teherán de 1968 (art. 13), y a sucesivos instrumentos y declaraciones.

<sup>258</sup> Jacques Fierens, *La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels*. Contribución al coloquio "Instituciones financieras internacionales: la excepción a los derechos humanos", organizado por el Centro de Derecho Internacional de la Universidad de Bruselas, diciembre, 1998, en *Revue Belge de Droit International*, 1991-1. Publicado en separata por la Coordination des ONG pour la Dignité Humaine y el Centro de Derecho Internacional de la Universidad de Bruselas.

La violación de ciertos derechos económicos, sociales y culturales puede significar la violación del derecho fundamental e inalienable a la dignidad inherente a la persona humana, del derecho a la vida o la violación del derecho a no sufrir tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

El derecho a la dignidad inherente a la persona humana está reconocido en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, consagrado explícitamente en los preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en varios otros instrumentos internacionales, y en el ordenamiento constitucional de muchos Estados<sup>259</sup>.

La Corte Suprema de Argentina dijo en una sentencia del 24 de octubre de 2000 que la falta de acceso a tratamientos médicos y a medicamentos indispensables puede implicar una violación del derecho a la vida<sup>260</sup>. Pero el derecho a la vida no es el mero derecho biológico a existir sino el derecho a vivir dignamente, que es propio de la persona humana. De modo que la falta de alimentos suficientes, de una vivienda adecuada, del acceso a la educación, a la seguridad social, etc., también constituyen violaciones del derecho a la dignidad inherente a la persona humana.

La violación de esos derechos económicos, sociales y culturales fundamentales también puede constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", y el mismo enunciado figura en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los tratos inhumanos o degradantes no están definidos en la Declaración ni en el Pacto ni en la Convención contra la tortura. Pero puede ser una referencia la definición de tortura del artículo 1º de esta última, según la cual la tortura consiste en infligir intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de:

- 1) obtener de ella o de un tercero información o una confesión;
- 2) castigarla por un acto que haya cometido;
- 3) intimidarla o coaccionarla;
- 4) o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que son tratamientos degradantes los destinados a crear en quien los sufre sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad con el fin de humillarlo,

<sup>259</sup> Véase, por ejemplo, Miguel A. Alegre Martínez, *La dignidad de la persona como fundamento del ordenamiento constitucional español*, Universidad de León, España, 1996.

<sup>260</sup> Revista jurídica *El Derecho*, Buenos Aires, 24/11/2000.

envilecerlo y, eventualmente, a quebrar su resistencia física o moral (Irlanda c Reino Unido, 18 de enero de 1978).

La reducción a la pobreza y más aún, a la extrema pobreza, puede constituir entonces un tratamiento inhumano y degradante basado en la discriminación social, afectándose así la dignidad personal de quien lo sufre, provocándole sentimientos de temor, angustia e inferioridad.

Por otra parte, la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desarrollado progresivamente una jurisprudencia en la que se han puesto de relieve los aspectos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos. Esta cuestión ha sido estudiada por el profesor Frédéric Sudre<sup>261</sup>.

Cabe destacar el caso Airey c. Irlanda (9/10/79, Serie A núm. 32), donde el Tribunal Europeo dijo: "El Tribunal no ignora que el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales depende mucho de la situación de los Estados y especialmente de sus finanzas. Por otro lado, la Convención debe leerse a la luz de las condiciones de vida actuales". Y más adelante dice el Tribunal: "Lo mismo que la Comisión, el Tribunal no considera que deba dejar de lado una u otra interpretación por el simple motivo que al adoptarla se correría el riesgo de invadir la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales; ninguna mampara impermeable separa esa esfera de derechos del campo de la Convención".

Sin embargo, la Comisión Europea de Derechos Humanos rechazó en 1990, por falta de fundamento, la queja interpuesta contra Bélgica por una señora que, falta de recursos y con una pequeña hija, tenía que vivir en condiciones sumamente precarias, sin calefacción ni agua caliente (caso Van Volsem c. Bélgica). La queja se había fundado en que la denunciante sufría un tratamiento inhumano y degradante.

El profesor Frédéric Sudre criticó severamente esta decisión en un artículo titulado: "La première décision 'quart monde' de la Commission européenne des droits de l'homme: une 'bavure' dans une jurisprudence dynamique"<sup>262</sup>.

Los debates y las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituyen una referencia de primera

<sup>261</sup> Frédéric Sudre, La "permeabilité" de la Convention européenne des droits de l'homme aux droits sociaux, en *Pouvoir et liberté. Etudes offertes à Jacques Mourgeon*, Bruylant, Bruselas, 1998. Véase también de Frédéric Sudre, *Misère et Convention Européenne des droits de l'homme*, en *Cahiers de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme (IDEDH)*, núm. 3, 1994, pp. 113-124, Facultad de Derecho de la Universidad de Montpellier, y La notion de "peines et traitements inhumains ou dégradants" dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme, en *Revue Générale de Droit Internationale Public*, núm. 4, Octobre-Décembre, Pedone, Paris, 1984. Existe en separata.

<sup>262</sup> *Revue Universelle des Droits de l'Homme*, Estrasburgo, 1990, p. 349.



importancia en cuanto a la exigibilidad de estos derechos consagrados en el respectivo Pacto Internacional. Las observaciones generales más recientes son las número 9 (aplicación interna del Pacto, 1998); 10 (función de las instituciones nacionales, 1998); 11 (derecho a una vivienda adecuada); 12 (derecho a una alimentación suficiente, 1999); 13 (derecho a la educación, 1999), 14 (el disfrute del más alto nivel posible de salud, 2000), 15 (el derecho al agua, 26 de noviembre de 2002, en la que el Comité dice que "el derecho al agua es indispensable para una vida digna. Es una condición necesaria para lograr la efectividad de todos los demás derechos"). En 2005 el Comité aprobó tres observaciones generales: en agosto la núm. 16 sobre la igualdad del hombre y de la mujer en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y en noviembre la núm. 17 sobre los derechos de autor y la núm. 18 sobre el derecho al trabajo.

En 1989 el Comité comenzó a debatir acerca de los derechos contenidos en el artículo 11 del Pacto, ocupándose en esa oportunidad del derecho a una alimentación adecuada<sup>263</sup>. Entre otras cosas, algunos miembros dijeron que los individuos, como sujetos de derecho internacional, estaban facultados para exigir la observancia de las obligaciones del Pacto (párr. 319 del Informe del Comité); que la denegación de la necesidad humana de alimentos constituía una violación de un derecho humano, y que tenía que haber un derecho consuetudinario a interponer una acción contra el Estado cuando hubiese una privación sistemática del acceso a los alimentos (párr. 321); que el excedente de recursos mundiales de alimentos era patrimonio común de los hambrientos y los pobres, y que sería una denegación de justicia rehusarles el acceso a esos recursos (párr. 322). El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) dijo que el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre era un derecho fundamental establecido en el párrafo 2 del artículo 11 del Pacto, el que estaba claramente relacionado con el derecho a la vida<sup>264</sup>. En la Observación General No. 12 sobre el derecho a una alimentación ade-

<sup>263</sup> Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe del tercer período de sesiones, Capítulo IV, E/C.12/1989/5. El derecho a una alimentación suficiente fue objeto de la Observación General núm. 12 del Comité del Pacto, aprobada en 1999. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe del 21 y 22 períodos de sesiones, Anexo V, E/C.12/1999/11.

<sup>264</sup> En noviembre de 2004 el Consejo de la FAO aprobó las "directrices voluntarias" para poner en práctica el derecho a una alimentación adecuada. Giuliano Pucci, un asesor jurídico de la FAO, ha comentado demagógicamente estas directrices diciendo que son un instrumento práctico que "permitirá a los pobres y los hambrientos reclamar sus derechos", lo cual es inexacto. En efecto, si se reconoce que la alimentación es un derecho, las normas que lo consagran tienen que ser de cumplimiento obligatorio y no voluntarias. Con directrices voluntarias se queda en el terreno de los buenos deseos, de principios morales, no de obligaciones, que son el elemento distintivo de las normas jurídicas, en [www.fao.org/newsroom/en/news/2004/51653](http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/51653). Véase las directrices voluntarias en Naciones Unidas, E/CN.4/2005/131 de 28 de febrero de 2005.



cuada, se dice: "el derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Este derecho se aplica a todas las personas"<sup>265</sup>.

En la Observación General No. 3 (1990), el Comité se pronunció acerca de la naturaleza de las obligaciones de los Estados partes que derivan del artículo 2, párrafo 1 del Pacto<sup>266</sup>. Entre otras cosas se dijo que la adopción de medidas legislativas no agota de manera alguna las obligaciones de los Estados partes (párr. 4), pues hay que dar a la expresión "por todos los medios apropiados", todo el sentido que ella tiene; que entre las medidas apropiadas deberían preverse recursos judiciales para hacer valer derechos consagrados en el Pacto que son de aplicación inmediata (arts. 3, 7.a.i, 8, 10.3, 13.2.a, 13.3, 13.4 y 15.3) (párr. 5). Se dijo también que el hecho de que los Estados tengan una obligación de resultado ("adoptar medidas... para lograr progresivamente... la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos") no quiere decir que los Estados no tengan obligaciones inmediatas en el sentido de actuar con rapidez y eficacia para alcanzar los objetivos enunciados en el Pacto, y que toda medida deliberadamente regresiva debe ser examinada con el mayor cuidado.

Para que un Estado pueda invocar la falta de recursos cuando no cumple las obligaciones fundamentales mínimas, debe demostrar que no se ha omitido esfuerzo alguno para utilizar todos los recursos que están a su disposición con miras a cumplir, como primera prioridad, esas obligaciones mínimas (párrafos 4, 5, 9, 10 y 11 de la Observación General No. 3).

En la Observación General No. 9 (1998), el Comité se pronunció acerca de la aplicación del Pacto en el ámbito nacional<sup>267</sup> precisando los alcances de la Observación No. 3 y dijo, entre otras cosas, que a los derechos económicos sociales y culturales es aplicable el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (recurso efectivo), y que si bien el Pacto no contiene ninguna disposición similar al párrafo 3 b) del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (recurso jurisdiccional) los "medios apropiados" de que habla el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, *pueden resultar*

<sup>265</sup> Véase también el informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos señor Jean Ziegler sobre el derecho a la alimentación, Naciones Unidas, E/CN.4/2001/53 de 7 de febrero de 2001, quien establece la relación entre los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho a una alimentación adecuada. En su informe de 2005 (E/CN.4/2005/47) se detuvo sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados, con relación del derecho a la alimentación, de respetar, de proteger y de promover, y recomendó que los gobiernos deberían abstenerse de aplicar políticas o programas que puedan tener efectos negativos sobre el derecho a la alimentación de personas que viven fuera de su territorio.

<sup>266</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe del quinto periodo de sesiones, Anexo III, E/C.12/1990/B.

<sup>267</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe del 18 y 19 periodos de sesiones, Anexo IV, E/C.12/1998/26.

*inoperantes si no están completados por recursos jurisdiccionales* (párrafo 3 de la Observación General No. 9), (Énfasis agregado)

## RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES Y DE SUS DIRIGENTES<sup>268</sup>

¿Qué es mayor delito: asaltar un Banco o fundar un Banco?

Bertold Brecht, *La ópera de dos centavos*

Cheriff Bassiouni dice que hay cinco etapas sucesivas en la evolución de los derechos humanos: 1) enunciativa (la emergencia de ciertos valores comunes percibidos internacionalmente); 2) declarativa (la declaración en un documento o instrumento internacional de ciertos intereses o derechos humanos identificados como tales); 3) prescriptiva (la articulación de dichos derechos en instrumentos internacionales (generales o específicos) o en convenciones vinculantes; 4) de aplicación (búsqueda o desarrollo de formas de aplicación), y 5) de criminalización (desarrollo de prescripciones penales internacionales destinadas a la protección de dichos derechos contra su eventual violación)<sup>269</sup>.

En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, las normas existentes se han revelado insuficientes para garantizar su goce. Hay pues que seguir avanzando en la etapa de aplicación (aprobación de un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, códigos de conducta obligatorios, etc.) y entrar en la etapa de la criminalización.

La teoría penal deberá determinar en qué casos las diferentes conductas prohibidas en la esfera que nos ocupa constituyen delitos de lesión o delitos de peligro, cuándo hay culpa y cuándo hay dolo. Como su nombre lo indica, los delitos de lesión requieren que se produzca un daño en el bien jurídico protegido. En cambio, en los delitos de peligro basta el riesgo de lesión. "Por

<sup>268</sup> Sobre este tema puede consultarse Bindu P. Sahni, *Transnational Corporate Liability: Liability for Human Injury*, Cameron May (ed.), *International Law Publishers*, London, 2006. Se trata de un enfoque jurídico muy completo, donde se analiza la legislación y la jurisprudencia en distintos países y temas tales como la responsabilidad civil y penal de las sociedades transnacionales, su responsabilidad ante las jurisdicciones nacionales, los códigos de conducta internacionales, la responsabilidad criminal transnacional, el "forum non conveniens", la "personalidad corporativa", la aplicación del derecho internacional público a los conflictos privados, la aplicación del derecho constitucional a la vida a las violaciones de los derechos humanos, la responsabilidad de las STN por las violaciones de los derechos humanos en el marco de la *Alien Tort Claims Act*, etc. La autora dice que la esfera de influencia de las STN está en constante expansión, ocupando un amplio terreno, desde el comercio hasta los campos de batalla, y marchando sobre la delgada línea que separa el interés corporativo del interés público. Las STN y sus subsidiarias ocasionan daños a los seres humanos y al medioambiente, pero a pesar de su poderío no deben estar por encima de la ley.

<sup>269</sup> Cheriff Bassiouni, *International Criminal Law and Human Rights*, Transnational Publishers, New York, vol. I, pp. 16 y 17.

peligro debe entenderse un anormal estado antijurídico en el que, para un juicio conforme a la experiencia, la producción del daño aparece como probable, según las concretas circunstancias existentes y la posibilidad del mismo resulta obvia<sup>270</sup>. Por ejemplo, la experiencia reiterada indica que las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional provocan el empeoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, es decir, la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales, que son bienes jurídicos protegidos por normas nacionales e internacionales.

Existen también en este ámbito los llamados delitos de peligro abstracto “cuyo merecimiento de pena viene dado ya por la peligrosidad general de una acción para determinados bienes jurídicos”<sup>271</sup>. Podría ser la instalación de una industria (o el depósito de sustancias contaminantes) sin que se adopten las medidas apropiadas para evitar efectos contaminantes en la naturaleza y en la población circundante. El delito quedaría configurado por el sólo hecho de no adoptar las medidas apropiadas, sin que sea necesario que se produzca efectivamente el daño. En todo caso, tales conductas implicarán siempre, por lo menos, la “producción de un estado de cosas capaz de desencadenar otro curso causal de hechos considerados directamente dañinos”<sup>272</sup>, y quienes produzcan ese “estado de cosas”, aunque no deseen el resultado dañoso y esperen infundadamente que no se producirá, habrán previsto dicho resultado, incurriendo así en culpa penal. O lo que es más probable, habrá prevalecido en la conducta de los autores la motivación egoísta, resultándoles indiferente el resultado dañoso previsible, ingresando así en el ámbito del dolo penal.

La finalidad de incriminar tales conductas violatorias de los derechos económicos, sociales y culturales es, además de sancionar al infractor, prevenir, por un lado, su reiteración (prevención general) y, por el otro, como ya decía Romagnosi en 1857 en su *Genesi del diritto penale*, evitar “el efecto destructivo del cuerpo social que tendría la impunidad”.

López-Rey y Arrojo dice:

Mientras que al delincuente contra la propiedad suele considerársele un marginado y como un problema individual frente al orden social, el delincuente económico, por el contrario, ni es marginado ni se enfrenta individualmente con el sistema, al que, por otra parte, pertenece, pues en efecto, los delincuentes pertenecientes a grupos socioeconómicos superiores no son ni mucho menos marginados sino aceptados o tolerados<sup>273</sup>.

<sup>270</sup> Hans Heinrich Jeschek, *Tratado de Derecho Penal, parte general*, 4 edición. Traducción de José Luis Manzanares Samaniego, Comares, Granada, España, 1993, p. 238.

<sup>271</sup> Idem.

<sup>272</sup> David Baigún, *Los delitos de peligro y la prueba del dolo*, Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 20.

<sup>273</sup> López-Rey y Arrojo, *Criminalidad y abuso de poder*, Tecnos, Madrid, 1983.

De esta manera, la estadística criminal da una imagen totalmente distorsionada de la realidad, pues en ella aparecen los pequeños delincuentes que llenan las prisiones pero omite a los grandes delincuentes que continúan al frente de grandes sociedades y consorcios financieros, u ocupando importantes cargos públicos.

Alessandro Baratta ha escrito:

Como se ha visto, esto no quiere de ninguna manera decir que las conductas transgresoras se concentran efectivamente en la clase proletaria y en los delitos contra la propiedad. Incluso la criminología liberal demuestra, por el contrario, con las investigaciones acerca de la cifra negra sobre la criminalidad de cuello blanco y sobre la criminalidad política, que el comportamiento "criminal" existe en todas las clases sociales, que la nocividad social de las formas de criminalidad propias de la clase dominante y ampliamente inmune, es mucho más grave que la de toda la criminalidad efectivamente perseguida. Por otra parte, el sistema de inmunidades y de criminalización selectiva corresponde al estado de las relaciones de poder entre las clases, de manera de ofrecer por un lado un salvoconducto más o menos amplio a las prácticas ilegales de los grupos dominantes cuando atacan los intereses y los derechos de las clases subalternas o de las naciones más débiles y, por el otro... con un estrechamiento más o menos riguroso de la esfera de acción política de los movimientos de emancipación social<sup>274</sup>.

Se debe, entonces, por un lado, establecer un nexo indisoluble entre el desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y la violación de los derechos fundamentales civiles y políticos (la tantas veces invocada "indivisibilidad") y, por el otro, ampliar la esfera de la criminalidad económica, según la conciben, con diferentes enfoques, los especialistas en derecho penal económico (preservación del orden económico, preservación del orden económico social, protección de intereses supraindividuales o individuales, etc.)<sup>275</sup>.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dijo, entre otras cosas, ante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993):

<sup>274</sup> Alessandro Baratta, *Criminologie critique et critique du droit pénal, introduction à la sociologie juridique-pénale*, Cahier núm. 14, École de Criminologie de l'Université de Montréal, 1983, pp. 207 y 208. Edición en español: *Criminología crítica y crítica del derecho penal*, Edt. Siglo XXI, México, 1986.

<sup>275</sup> Véase Alejandro Teitelbaum, *Prevención y sanción de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho al desarrollo: el problema de la impunidad* (documento de trabajo), Capítulo 2, en *Prevención y sanción de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho al desarrollo: el problema de la impunidad*. Actas de los seminarios organizados en Ginebra en la sede de las Naciones Unidas en noviembre de 1996, y en Madrid, en la Universidad Carlos III, en abril de 1997. Publicación de la Asociación Americana de Juristas y del Centre Européen-Tiers Monde, Ginebra, 1998.

La triste realidad, en la que es preciso situar ese reto, es que los gobiernos y la comunidad internacional entera siguen tolerando con excesiva frecuencia grados de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que, si se aplicaran a los derechos civiles y políticos, provocarían expresiones de horror y ultraje y harían que se hicieran llamamientos concertados para que se tomaran inmediatamente medidas correctivas. En efecto, pese a toda la retórica, las violaciones de los derechos civiles y políticos se siguen tratando como si fueran mucho más graves y evidentemente más intolerables que las denegaciones masivas y directas de los derechos económicos y sociales<sup>276</sup>.

Cabría agregar que la discriminación en desventaja de los derechos económicos, sociales y culturales es el resultado de una escisión artificial entre ambas categorías de derechos, que no sólo son interdependientes, como se suele decir, sino inescindibles<sup>277</sup>.

Hay que comenzar, entonces, a despertar la “alarma social” frente a la criminalidad consistente en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, dado que buena parte de la opinión pública está condicionada de manera tal que reacciona contra el que roba, comete una agresión o un homicidio, pero considera que está en el “orden normal de las cosas” o que “corresponde a las leyes del mercado”, el saqueo sistemático de naciones enteras, y la condena de millones de seres humanos al hambre, a la enfermedad y a la muerte.

En el derecho interno, además de las normas que protegen y garantizan el goce de los derechos humanos, suelen existir normas que sancionan delitos económicos que comportan, directa o indirectamente, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, como la malversación de los caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, las infracciones al régimen cambiario, etc.

En cuanto a la responsabilidad penal de las personas de derecho privado que violan derechos fundamentales consagrados en normas internacionales, se plantea la cuestión de si entidades de derecho privado pueden ser sujetos de obligaciones internacionales, si pueden cometer delitos internacionales y, en consecuencia, ser objeto de sanciones internacionales.

Se puede responder afirmativamente diciendo que en la actualidad se admite que los individuos (las personas privadas en general) son sujetos de derecho internacional, en el sentido limitado que se ha indicado en el Capítulo I.

<sup>276</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe sobre el Séptimo periodo de sesiones, p. 86, párr. 5, E/C.12/1992/2.

<sup>277</sup> Véase el apartado 1 de este Capítulo.

Más específicamente, en la materia que nos ocupa, cuando las actividades de las personas (físicas y jurídicas) de derecho privado son internacionales, pueden cometer delitos internacionales (delito transnacional, es decir, a través de las fronteras). Incluso cuando dichas actividades se desarrollan en un ámbito nacional sin trascender las fronteras, pueden dar lugar a la comisión de crímenes internacionales (delito de derecho internacional o crimen internacional). En efecto, para ser internacional, un delito requiere tener un elemento transnacional o internacional.

Un ejemplo de delito transnacional es el cometido en un país que produce sus efectos dañosos en otro, como la falsificación de moneda extranjera o la concertación entre un banco transnacional con sede en un país y una persona privada residente en otro país para cometer una maniobra financiera ilícita.

El elemento internacional se configura cuando la conducta delictiva afecta los intereses de la seguridad colectiva de la comunidad mundial (por ejemplo, guerra de agresión), o viola bienes jurídicos reconocidos como fundamentales por la comunidad internacional, como la vida, la integridad física, el derecho a la no discriminación, a la salud, etc. (crímenes contra la humanidad, genocidio, *apartheid*, tortura, etc.).

En las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales están generalmente presentes los dos elementos: el transnacional y el internacional y, en todo caso, por la calidad de los bienes jurídicos que afectan dichas violaciones (vida, integridad y dignidad humanas, etc.), y por su carácter masivo, el elemento internacional está invariablemente presente.

El derecho internacional vigente considera ilícitas e incrimina en tratados y convenios diversas actividades realizadas por entidades o personas privadas (por ejemplo tráfico de drogas), y no hay razón objetiva alguna para excluir de tales incriminaciones las violaciones graves y masivas de los derechos económicos, sociales y culturales.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas está ampliamente admitida en el derecho moderno e incorporada a la legislación penal de muchos países. Esta responsabilidad penal escapa al enfoque tradicional del derecho penal, fundado en la idea de la culpa, que sostiene que solo los seres humanos, dotados de inteligencia y voluntad, pueden delinquir, y que "*societas delinquere non potest*".

Los especialistas de derecho penal debaten el encuadre teórico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ante la existencia de lo que ya hace años se denomina el "corporate crime", que es la fuente de un ingente daño macrosocial<sup>278</sup>. Pues como dice Jeschek "el conocimiento del

<sup>278</sup> David Baigún, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ensayo de un nuevo modelo teórico)*, Depalma, Buenos Aires, junio, 2000.



efecto limitado de la política criminal en relación con el potencial total de las fuerzas sociales que generan la criminalidad no desvincula a la ciencia de reflexionar sobre el mejoramiento de la cuestión criminal"<sup>279</sup>.

Sutherland, en su ya citado *White collar crime*, detectó una serie de corporaciones "persistentemente criminales". El profesor González Berendique, que lo cita, continúa diciendo: "Tal persistente conducta delictiva hace pensar que los cambios de directores, en la sucesión temporal, tuvieron escasa influencia en una línea directriz de persecución de ganancias por cualquier medio"<sup>280</sup>.

Las sanciones penales contra las personas jurídicas pueden ser la multa, la difusión pública de la decisión condenatoria, la confiscación del instrumento del delito o de su producto, y la disolución (véase, por ejemplo, el Código Penal francés reformado en 1992, arts. 131 37 y 131 39). La condena puede incluir (debe incluir) la obligación de reparar el daño causado.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas integrantes del órgano competente que, con su voto afirmativo o por omisión, contribuyeron a la adopción de la decisión o de las decisiones inculminadas. En el documento de trabajo del Sexto Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Caracas, 1980) dedicado al tema Delito y abuso de poder, se decía que las reuniones preparatorias habían recomendado el establecimiento del principio de la responsabilidad penal de la empresa, sin que ello excluyera la responsabilidad particular de sus funcionarios. Y en el 7 Congreso (Milán, 1985), en los Principios rectores en materia de prevención del delito y justicia penal en el contexto del desarrollo de un nuevo orden económico internacional se exhortaba a los Estados a tener debidamente en cuenta la necesidad de que respondan penalmente no sólo quienes actúan en nombre de una institución, sociedad anónima o empresa, o quienes desempeñan funciones directivas o ejecutivas, sino también la institución, sociedad anónima o empresa. La ley brasileña 9605 del 12 de febrero de 1998 sobre medioambiente dice: "La responsabilidad de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas, autoras, coautoras o partícipes del mismo hecho". Ya se ha señalado más arriba (apartado 1 de este Capítulo) que la Convención penal europea sobre la corrupción de 1999 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Merecen un comentario particular las legislaciones nacionales que reprimen los trusts o monopolios, por su estrecha vinculación con el tema que nos ocupa.

<sup>279</sup> Hans-Heinrich Jeschek, *La crisis de la política criminal, Doctrina Penal*, Buenos Aires, 1980, p. 51.

<sup>280</sup> Marco A. González Berendique, *Criminalidad económica. El delito como negocio*, Editorial Jurídica Ediar Conosur, Chile, sin fecha, pp. 132-133.

Una antigua ley argentina contra los monopolios sancionada en 1923 con el número 11210, decía en su artículo 2 que se consideran

actos de monopolio o tendientes a él y punibles por la ley, los que sin importar un progreso técnico ni un progreso económico aumentan arbitrariamente las propias ganancias de quien o quienes los ejecuten, sin proporción con el capital efectivamente empleado y los que dificulten a otras personas vivientes o jurídicas la libre concurrencia en la producción y en el comercio interno o en el comercio exterior.

Interesa destacar esta parte de la ley porque contiene un elemento constitutivo del tipo delictivo que debería integrar la definición del delito de violación de los derechos económicos, sociales y culturales: el de beneficios desproporcionados con grave perjuicio de terceros.

Aunque el bien jurídico protegido en las leyes antitrust es la libre competencia, el sujeto pasivo es el consumidor, la población, que puede llegar a sufrir graves perjuicios como consecuencia de los precios impuestos por los monopolios. Como dice Jiménez de Asúa, "...el público, el sujeto que consume... es quien inspira a la ley y anima su espíritu y voluntad"<sup>281</sup>.

Comentando la *Sherman Antitrust Act* de 1890, la Corte Suprema de Estados Unidos decía en 1958 que la libre competencia tiene por consecuencia "la mejor distribución de los recursos económicos, los precios más bajos, la mejor calidad y un mayor progreso material..." (*Northern Pacific Ry Co. v. United States*, 356 U.S. 1, 1958)<sup>282</sup>.

Por su parte, la *Restrictive Trade Practices Act* inglesa de 1956, en su artículo 21, establece la presunción, que admite prueba en contrario, de que la entente monopolítica es contraria al interés público<sup>283</sup>.

Estas orientaciones antimonopólicas son un arma de doble filo, pues las invocan, en nombre de la libre concurrencia, quienes se proponen suprimir el monopolio estatal sobre los servicios públicos, para hacer entrar a éstos en la lógica del mercado y de la renta, en detrimento de los sectores económicamente más vulnerables de la población. Por otro lado, la "libre competencia" existe sólo en el discurso de las elites dirigentes, con el que pretenden ocultar la realidad de un sistema dominado totalmente por los grandes monopolios y oligopolios.

Además, hay actividades que realizan grandes sociedades transnacionales en el dominio privado que son formalmente legales, pero que se pueden

<sup>281</sup> Luis Jiménez de Asúa, El valor forense de la tipicidad y la interpretación de la ley penal 11210, en *El Criminalista*, tomo II, TEA, Buenos Aires, 1950, pp. 33 y ss.

<sup>282</sup> Robert Jones, Droit antitrust américain et droit européen de la concurrence: étude comparative, en *Revue du Marché Commun*, núm. 181, enero de 1975, pp. 20 y ss.

<sup>283</sup> Charles Carabier, *Trusts, cartels et ententes*, 2 edición, Paris, 1967, p. 82.

desarrollar en una zona gris donde es difícil distinguir si se trata de la utilización legítima de una estrategia en el mercado o del abuso del poder económico para controlar los precios, monopolizar el acceso a las materias primas, establecer precios abusivos de monopolio u óligopolio de ciertos productos, como hacen las transnacionales farmacéuticas con las patentes sobre los medicamentos, etc.<sup>284</sup>

Las actividades fronterizas entre la legalidad y la ilegalidad pueden tener resultados claramente violatorios de derechos humanos fundamentales y, en ese caso, deberían estar sujetas a sanción.

Generalmente, las que aparecen como opciones de política económica adoptadas libremente por ciertos gobiernos, además de corresponder al interés exclusivo de las elites económicas, son el fruto de la presión y de la corrupción utilizadas por entidades económicas y financieras internacionales, y por sociedades transnacionales, y suelen configurar conductas delictivas tipificadas en la legislación interna, que casi siempre resultan perjudiciales para la gran mayoría de la población constituyendo así violaciones caracterizadas de sus derechos económicos, sociales y culturales.

En efecto, se podrían dar múltiples ejemplos de casos en que las políticas económicas ultraliberales, cuya puesta en práctica parece ser el fruto de profundas convicciones, no son otra cosa que el medio de obtener enormes ganancias de manera ilícita, recibiendo sobornos o participaciones en negocios, y de hacer beneficiar de dichas políticas a los grupos económicos que rodean al poder político, todo ello en perjuicio del país y contra los derechos fundamentales de la población<sup>285</sup>. Las privatizaciones y desregulaciones, muchas veces se llevan a cabo en tales condiciones.

Lo mismo ocurre con las operaciones que dieron origen a la actual desmesurada deuda externa de los países del Tercer Mundo. Muchas de dichas operaciones contienen cláusulas ilícitas, vicios del consentimiento, intereses usurarios, comisiones y otros gastos desproporcionados.

Algunas operaciones fueron simplemente simuladas. En ellas aparecían como deudores empresas privadas o individuos de ciertos países del Tercer Mundo, y como acreedores grandes bancos de los países desarrollados, es decir, que se asociaron para delinquir personas privadas del Tercer Mundo y grandes bancos transnacionales. Más tarde, esas deudas fueron "estatizadas" (en los países del Tercer Mundo se privatizan las empresas y los recursos nacionales, y se "estatizan" las deudas de los particulares), y ahora

<sup>284</sup> Véase, al respecto, Klaus Tiedemann, *Poder económico y delito*, Ariel, Barcelona, 1985, pp. 59 y 60.

<sup>285</sup> Eva Joly, *Notre affaire à tous*, Les Arènes, Paris, 2000.

los pueblos están pagando deudas contraídas por particulares incluso, entre ellas, deudas simuladas<sup>286</sup>.

La obligación del Estado de castigar a los autores de delitos económicos previstos en el derecho nacional pertenece a la jurisdicción interna. Pero cuando el perjuicio económico provocado por dichos delitos es de tal magnitud que tiene graves repercusiones sobre el nivel de vida de la población y, sobre todo, si son las mismas autoridades del Estado las que con sus decisiones violan los derechos económicos, sociales y culturales de la población, deben entrar en juego las normas internacionales que protegen los derechos humanos fundamentales.

Dada esa situación, y en caso de inexistencia o agotamiento de los recursos internos o de abandono por parte del Estado del ejercicio de sus facultades punitivas, debe abrirse la instancia internacional para examinar lo que pueden constituir violaciones de los derechos humanos consagradas en los instrumentos internacionales, es decir, un crimen internacional o crimen de derecho internacional. Y con más razón cuando el resultado dañoso se produce en un Estado como resultado de decisiones adoptadas en el territorio de otro Estado, como ocurre en muchas ocasiones en el caso de las sociedades transnacionales.

Estamos, pues, frente a una serie de conductas, algunas definidas como delitos y otras no, que convergen a un resultado (deseado o no por los autores, pero previsible), de lesión o violación de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos por normas internacionales obligatorias, pero que se han revelado impotentes para prevenir e impedir tales violaciones.

Es menester encarar entonces la sanción penal de las violaciones que pueden constituir delitos, para asegurar la protección de esos derechos humanos fundamentales.

Hay que comenzar, pues, por definir o tipificar como delitos internacionales dichas conductas transgresoras. Si bien en el derecho internacional las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales no están definidas como delitos, el derecho penal internacional tiene un desarrollo considerable en lo que se refiere a la violación de los derechos civiles y políticos. Cherif Bassiouni enumera 22 categorías de crímenes

<sup>286</sup> Eric Calcagno, *Los Bancos transnacionales y el endeudamiento externo en la Argentina*, Cuadernos de la Cepal, núm. 56, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1987; Gonzalo Biggs, *La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos*, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, Buenos Aires, 1987; Eric Toussaint, *La Finance contre les Peuples. La Bourse ou la Vie*, 3 edición actualizada, noviembre, 2002 (CADTM); Alejandro Teitelbaum, documento presentado al Seminario Internacional sobre la deuda y las instituciones financieras internacionales frente al derecho internacional, organizado por el Comité por la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM), Bruselas, 10 y 11 de diciembre de 2001; Alejandro Teitelbaum, "Responsabilidad de las organizaciones financieras internacionales", ponencia presentada al V Seminario Internacional sobre el Derecho y la Deuda, organizado por el CADTM, Bruselas, octubre, 2005.

internacionales, definidos en el derecho internacional consuetudinario y en el derecho internacional convencional (322 instrumentos internacionales, en total, desde 1815 hasta 1984), algunos de ellos relacionados con actividades económicas que pueden dar por resultado la violación de derechos humanos<sup>287</sup>.

La preocupación por reparar la injusticia que significa la desigual distribución de las riquezas hasta provocar situaciones de hambre y miseria, y por sancionar a los responsables, existe desde la más remota antigüedad. En el año 386 antes de Cristo, los comerciantes de trigo de Atenas que habían comprado a los importadores una cantidad superior a la autorizada, con el fin de acaparar granos, fueron sometidos a proceso. Lisias, alegando ante el tribunal, pidió para ellos la pena de muerte, diciendo: "¿Cuándo obtienen más beneficios? Cuando el anuncio de un desastre les permite vender caro... Ellos se apoderan del trigo en los momentos en que hace más falta y se niegan a venderlo a fin de que no discutamos el precio..."<sup>288</sup>.

Más modernamente estas cuestiones siguieron preocupando a los especialistas: en el Primer Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Delito, celebrado en Londres en 1872, figuró el tema "medios de reprimir a los capitalistas delincuentes" (sic).

Los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas destinados a la elaboración de un Proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, son una importante referencia para avanzar en la tipificación de los crímenes internacionales consistentes en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por ejemplo, el artículo 18 (texto de 1991) sobre la dominación colonial y otras formas de dominación extranjera, y los comentarios al mismo, formulados por los miembros de la Comisión en el 41 período de sesiones (1989). El texto del proyecto de artículo decía:

El que en calidad de dirigente o de organizador establezca o mantenga por la fuerza, u ordene que se establezca o mantenga por la fuerza, una dominación colonial o cualquier otra forma de dominación extranjera en violación del derecho a la libre determinación de los pueblos tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas será condenado, después de ser reconocido culpable, [a...] <sup>289</sup>.

En uno de los comentarios formulados durante las sesiones se señaló que la segunda parte del artículo, que se refiere a "cualquier otra forma

<sup>287</sup> Cheriff Bassiouni, *International Crimes*, Introduction, en *International Criminal Law*, ob. cit., vol. 1, p. 135.

<sup>288</sup> Lisias, *Orazioni, Frammenti*, XIX (Contro i mercanti di grano), Biblioteca Universale Rizzoli, Bergamo, Italia, 1995, p. 225.

<sup>289</sup> Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 43 período de sesiones. Documentos oficiales de la Asamblea General, Suplemento núm. 10, A/46/10, p. 265.



de dominación extranjera” está inspirada directamente en el párrafo 1 de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, del 14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El proyecto de artículo —continuaba el comentario— se refiere a toda ocupación o anexión extranjera y a cualquier privación del derecho de los pueblos a elegir libremente su sistema político, económico o social. El proyecto de artículo, se dijo en otro comentario, es más breve que el texto correspondiente de la resolución 1514 de la Asamblea General, pero tiene la ventaja de abarcar todos los tipos de dominación extranjera. En sus comentarios, algunos miembros de la Comisión de Derecho Internacional estimaron que en la dominación extranjera quedaba incluido el neocolonialismo, la explotación de los recursos naturales y de la riqueza de los pueblos, en violación de la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, del 14 de diciembre de 1962, acerca de la “soberanía permanente sobre los recursos naturales”<sup>290</sup>.

Como puede apreciarse, el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional incluía entre los crímenes contra la paz y la seguridad internacionales, actividades y políticas económicas que son práctica corriente de las grandes sociedades transnacionales y del grupo de países más industrializados.

Esto último quizás explique por qué en el Tratado de Roma de 1998, que aprobó el Estatuto para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, bajo la presión de las grandes potencias se ignoraron totalmente estos antecedentes excluyéndose del Estatuto las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, los crímenes ecológicos, y también como sujetos imputables a las personas jurídicas.

Sin embargo, siguiendo el criterio de la indisociabilidad de ambas categorías de derechos: civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales (véase apartado 1 de este Capítulo), no hay que excluir la posibilidad de invocar el artículo 7 (crímenes contra la humanidad) de dicho Estatuto, como sugiere Andrew Clapham, para intentar llevar ante la Corte Penal Internacional a las sociedades internacionales y a sus dirigentes<sup>291</sup>.

Aunque también es cierto que las posibilidades de actuación de los particulares ante la Corte Penal Internacional son prácticamente nulas. En efecto, los particulares sólo pueden poner los hechos delictivos en conocimiento del fiscal, quien tendrá el exclusivo poder de decisión en cuanto a

<sup>290</sup> Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 41 período de sesiones. Documentos Oficiales de la Asamblea General, Suplemento E10, A/44/10, pp. 188 y 189.

<sup>291</sup> Véase el planteamiento de Clapham, al final del apartado 3.1 de este Capítulo, y la nota 288, sobre la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional a las sociedades transnacionales como asociaciones criminales.



promover o no una acción (arts. 15; 54, inc. 3, apart. b, y 53, inc. 1, apart. c<sup>292</sup> del Estatuto de la Corte Penal Internacional).

Cabe agregar que las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, además de crímenes contra la humanidad,<sup>3</sup> pueden configurar también el crimen de genocidio.

En el punto 6 de la sección IV de las Conclusiones del seminario celebrado en Celigny, Suiza (véase nota 26), se puede leer:

Es posible invocar ante los tribunales como derecho vigente el artículo 7 (crímenes contra la humanidad) del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma 1998) contra los dirigentes de las sociedades transnacionales, en particular su inciso 1 apartado f): (tortura [que incluye los "otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", según la respectiva Convención]); inciso 1 apartado k): "Otros actos inhumanos... que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física" e inciso 2 apartado b): [exterminación] "infligir intencionalmente condiciones de vida, inter alia, la privación del acceso a los alimentos y a las medicinas...".

También puede invocarse el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: "...sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial".

<sup>292</sup> El apartado 1 c) del artículo 53, es quizás la disposición más flagrante del Estatuto de la Corte Penal Internacional en cuanto al ejercicio arbitrario de la facultad del fiscal de iniciar una investigación e implica una contradicción manifiesta entre los objetivos proclamados en el Estatuto y su contenido real. Dicho apartado dice: "...Al decidir si se ha de iniciar una investigación, el fiscal tendrá en cuenta si... c) existen razones para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia". Y el apartado c) del párrafo 2 del mismo artículo dice: "El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen". De donde resulta que, según este inciso, un crimen puede ser grave y estar en juego los legítimos intereses de las víctimas y, sin embargo, su investigación no redundar en interés de la justicia. Si la justicia a que se refiere este inciso no es, como la definen algunos juristas y filósofos del derecho, la aplicación correcta de la norma, en este caso del Estatuto, que proclama en su preámbulo el objetivo de poner fin a la impunidad de los autores de crímenes graves ¿cuál es el sentido de la palabra justicia en este inciso, en cuyo interés el fiscal está autorizado a suspender la aplicación del mismo Estatuto y a no cumplir con los fines proclamados en él? Castigar al autor de un crimen y reconocer el derecho de la víctima a la reparación es coherente y compatible con la idea de justicia de los juristas y filósofos de todos los tiempos (no dañar a los demás, dar a cada uno lo suyo, actuar conforme a derecho, etc.), aunque dicha idea varíe y se preste a diferentes interpretaciones. De modo que el difuso "interés de la justicia", que en el inciso que comentamos autoriza a dejar impunes crímenes graves, se puede emparentar con el "espíritu del pueblo" del derecho penal nacionalsocialista alemán, es decir, con la aplicación arbitraria de la ley penal según la voluntad de quienes detentan el poder: las grandes potencias.

Ya la fiscal del Tribunal para Yugoslavia estableció un precedente al decidir no abrir una investigación, como le fue solicitado en varias denuncias presentadas por grupos de juristas, sobre los crímenes cometidos por la OTAN en la guerra contra Yugoslavia.

Estas normas internacionales podrían invocarse como derecho vigente ante los tribunales nacionales.

Algunos especialistas en derecho penal internacional dicen que las normas internacionales establecen "normas de comportamiento" que describen el acto prohibido pero no fijan la pena, en tanto que la norma de represión, que incrimina el comportamiento delictivo y establece la sanción, corresponde al derecho nacional<sup>293</sup>.

Este enfoque debe ser matizado, pues no parece ser neta la diferencia entre la descripción del acto prohibido en la norma internacional y la calificación del comportamiento delictivo en la legislación interna. Además, si la norma internacional donde figura el acto prohibido está incorporada al derecho interno, y éste no tiene prevista una pena para dicho acto, esa circunstancia no puede eximir al juzgador nacional de aplicar una pena, pues si no lo hace estaría incurriendo en denegación de justicia. El juez o tribunal nacional tendrá un amplio margen de apreciación para la determinación de la pena, en función de la gravedad del delito, dentro de los límites de las clases y los montos de penas establecidos en la legislación penal interna.

El principio *nulla poena sine lege* parece estar a salvo en ese caso a la luz del derecho penal internacional actual, que deja una amplia latitud a los jueces en cuanto al monto de la pena. El Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma establece (art. 77) que la pena consistirá en la reclusión por "un número determinado de años que no exceda de 30" o la "reclusión a perpetuidad", y el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia (art. 24) sólo dice que la pena se limitará a la de prisión, tomando como referencia las penas de prisión aplicadas por los tribunales yugoslavos.

En la actualidad hay referencias extremadamente útiles para desarrollar la temática de los delitos internacionales consistentes en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la existencia de una normatividad tendiente a la sanción penal de los daños al medioambiente. Hay una serie de elementos comunes o similares entre las actividades y políticas violatorias de los derechos económicos, sociales y culturales, y los delitos contra el medioambiente (que constituyen una violación del derecho humano a un medioambiente sano). En estos últimos delitos se trata también casi siempre de actividades económicas (industria, transporte, explotación de recursos naturales) cuyo resultado dañoso es producto de la negligencia culpable del sujeto activo, que opta por no tomar las medidas destinadas a proteger al ecosistema a fin de no disminuir sus márgenes de beneficio. Las normas penales que incriminan los daños al medioambiente están básicamente destinadas a proteger el equilibrio ecológico, es

<sup>293</sup> André Huet y Renée Koering-Joulin, *Droit pénal international*, Presses Universitaires de France, 1993, párrs. 58 y ss.

decir, los elementos de la naturaleza que se relacionan directamente con la sobrevivencia y el bienestar del ser humano, y a preservar el ecosistema para las generaciones futuras, aunque el bien jurídico protegido puede ser en algunos casos la naturaleza en sí misma, por ejemplo, protección de especies en vías de desaparición. Pero, en general, el bien jurídico protegido en los delitos ecológicos es la sobrevivencia y el bienestar del ser humano, como en el caso de las actividades económicas violatorias de los derechos económicos, sociales y culturales.

Los sujetos activos en este tipo de delitos pueden ser individuos, personas jurídicas o los Estados.

La finalidad de la pena en los delitos contra el medioambiente es disuadir conductas particularmente dañosas para la sociedad. La Convención Internacional para la prevención de la contaminación proveniente de navios, vigente desde 1983, establece que las penas que establezcan los Estados partes deberán ser suficientemente severas como para desalentar las violaciones a la Convención. La severidad de las penas tiende, por ejemplo, a evitar que a las empresas les resulte menos gravoso pagar una multa que hacer los gastos necesarios para evitar efectos contaminantes. Estas penas pueden incluir la prisión para los infractores individuales y para los representantes de las empresas infractoras<sup>294</sup>.

En 1977, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó la resolución (77) 28 sobre la contribución de la legislación penal a la protección del medioambiente. Entre sus recomendaciones a los Estados miembros es interesante destacar: a) reexamen de los principios de responsabilidad penal con miras, en particular, a la posible introducción en ciertos casos de la responsabilidad de las personas jurídicas, públicas o privadas; b) examen de la oportunidad de incriminar actos y omisiones que por culpa o negligencia exponen la vida o la salud de los seres humanos o bienes de un valor sustancial, a un peligro potencial; c) formas de conferir a las personas o grupos el derecho de participar en procedimientos penales en defensa de los intereses de la comunidad; d) excluir la amnistía en los casos de delitos graves contra el medioambiente.

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas había incluido en 1989 los atentados contra el medio humano en el artículo 14 de su Proyecto de Código de crímenes contra la humanidad y, en el artículo 19 d de su proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, aprobado en primera lectura en 1996, la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares<sup>295</sup>.

<sup>294</sup> Stephen McCaffrey, *Crimes Against the Environment*, in *International Criminal Law*, Cherif Bassiouni (ed.), vol. 1, pp. 541 a 561.

<sup>295</sup> Sobre el artículo 14 del Proyecto de Código de Crímenes véase, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 41 período de sesiones, documentos oficiales de

Es particularmente interesante en materia de acciones penales donde se abarcan como una unidad las violaciones de los derechos civiles y políticos, y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, la querrela penal iniciada en Argentina en 1999 contra varios ex dictadores del Cono Sur de América Latina implicados en la coordinación represiva llamada "Plan Cóndor". El 11 de abril del 2001, el juez de la causa decidió tomar declaración indagatoria al ex dictador argentino Videla, al ex dictador paraguayo Stroessner y a Contreras, ex jefe de la DINA chilena, a cuyo fin pidió la detención preventiva y la extradición de los dos últimos (Videla está en arresto domiciliario en otra causa). En su resolución el juez dijo:

En tal sentido, fue expresado por la querrela que ese delito habría constituido y lo seguiría haciendo, el eje y el símbolo del complejo de ilícitos que fueran descritos en la presentación mentada que encabeza estos obrados; como ser: la asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior, para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato del Estado respectivo; la presunta asociación ilícita sería la denominada Operación Cóndor... Y por último, se hizo mención en el escrito de querrela inicial, en este orden de ideas, a la existencia de una conspiración contra el derecho de autodeterminación de cada uno de los pueblos de los Estados parte, privando a éstos de sus riquezas naturales, desmantelando sus estructuras productivas y obligándolos a un endeudamiento que se paga con la exclusión social, nueva forma de desaparición del mundo del trabajo, la salud y la cultura (énfasis agregado)<sup>(294)</sup>.

El juez de la causa se declaró competente invocando el artículo IV de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que permite al tribunal atribuirse competencia cuando la desaparición forzada o alguno de los hechos constitutivos se cometieron en el ámbito de su jurisdicción, o cuando el imputado o la víctima sean nacionales del Estado del tribunal. La denuncia se basó en una ley argentina denominada de subversión económica.

Pero a mediados de 2002 Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional exigieron y obtuvieron del gobierno argentino la derogación de dicha ley como condición previa para otorgar ayuda financiera al país, en situación de crisis profunda precisamente a raíz de las actividades de las elites eco-

la Asamblea General, Suplemento núm. 10, A/44/10, 1989, pp. 169 y 170, y sobre el artículo 19 d' de la Responsabilidad de los Estados véase el Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48 período de sesiones, documentos oficiales de la Asamblea General, Suplemento núm. 10, A/51/10, 1996, pp. 140 y 141. En 2001, en su 53 período de sesiones, la Comisión de Derecho Internacional aprobó definitivamente el proyecto sobre responsabilidad de los Estados y lo envió a la Asamblea General.

<sup>294</sup> Causa núm. 13-445/1999, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal núm. 7 de la ciudad de Buenos Aires.

nómicas y políticas nacionales, y de las elites económicas transnacionales (amparadas primero por las dictaduras militares y luego por los sucesivos gobiernos civiles) que se denuncian en el juicio citado y en otros iniciados más recientemente, sobre la base de la mencionada ley. Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional quisieron garantizar la impunidad de los grandes delincuentes económicos. La presión ejercida por la institución financiera internacional para que se derogara esa ley llevó a un grupo de abogados argentinos a denunciar ante los Tribunales al representante del FMI, Ajoop Singh, por extorsión agravada.

## LAS JURISDICCIONES COMPETENTES

Dada la ausencia de instancias internacionales que hagan directamente justiciables las actividades de las personas jurídicas privadas, las violaciones cometidas por aquéllas sólo pueden ser objeto en el plano internacional, a través de la responsabilidad subsidiaria de los Estados, de la actividad jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –previo paso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia<sup>287</sup>, esta última sólo accesible a los Estados, y de los tribunales arbitrales.

En 1998, la Organización de la Unidad Africana aprobó un Protocolo de creación de una Corte africana de derechos humanos y de los pueblos. Protocolo que entró en vigor en 2003. Pero en julio 2004 la Asamblea de la Unión Africana decidió que la Corte Africana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Justicia se integren en un solo tribunal, lo que no parece ser apropiado, dada la especificidad de las funciones propias de un tribunal que se ocupa de derechos humanos.

Las personas privadas, físicas y jurídicas, no pueden ser directamente denunciadas ante dichos tribunales. Y ante el Tribunal Penal Internacional creado en Roma en 1998 sólo pueden ser acusadas las personas físicas por violaciones de derechos humanos fundamentales pero que no incluyen las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por otra parte, las víctimas o sus representantes, o las organizaciones no gubernamentales, pueden formular denuncias ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ante los Comités de las principales convenciones internacionales, a fin de que dichos Comités hagan

<sup>287</sup> La Corte Internacional de Justicia creó en 1993 una Sala ambiental. Ha dicho Lauterpacht que el principio *sic utere tuo ut alienum non laedas* (usa tus bienes de manera que no causes daños a los bienes ajenos). "no es menos aplicable a las relaciones entre los Estados que a las relaciones entre individuos. ... es uno de esos principios generales del derecho ... que la Corte Internacional de Justicia tiene que aplicar en virtud del artículo 38 de su Estatuto". Véase *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, 1994, vol. II, 2a. parte, Capítulo V.



recomendaciones a los Estados denunciados. Existen además procedimientos establecidos en protocolos facultativos o en disposiciones facultativas incluidas en la mayoría de los instrumentos internacionales mencionados, que permiten denunciar a los Estados y pedir a los respectivos Comités resoluciones condenatorias. Pero este procedimiento sólo rige para los Estados que han aceptado someterse al mismo. A estos procedimientos se los llama "cuasijurisdiccionales" o "cuasicontenciosos", pues carecen de la fuerza imperativa de una resolución judicial.

Este procedimiento formal de denuncias no existe por ahora para las violaciones de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aunque tales violaciones se pueden poner informalmente en conocimiento de los miembros del Comité del Pacto. El Comité elaboró un proyecto de protocolo facultativo que presentó a la Comisión de Derechos Humanos en 1997. Existe un Grupo de Trabajo de la Comisión encargado de estudiar las opciones para la elaboración de un proyecto de Protocolo, entre las cuales se halla el proyecto del Comité, que varios Estados consideraron una buena base de discusión. El Grupo, en su reunión de enero de 2005, encomendó a su presidenta que presentara en la reunión de 2006 un documento con elementos para la elaboración de un proyecto de protocolo. No se retuvo la propuesta de algunos Estados de pasar directamente a la redacción de un proyecto. La extrema lentitud del procedimiento se explica por la reticencia de algunos Estados a adoptar un protocolo, y la oposición abierta de Estados Unidos.

A fines de 2006, el Consejo de Derechos Humanos que remplazó a la Comisión de Derechos Humanos no había resuelto aun qué mandatos de la disuelta Comisión va asumir. Pero, por el momento, están previstas reuniones en 2007 del Grupo de Trabajo que se ocupa de un proyecto de protocolo facultativo.

La Convención sobre los Derechos del Niño tampoco dispone de un procedimiento de denuncias, ni existen proyectos al respecto.

Según el procedimiento previsto para la Carta Social Europea (protocolo adicional de 1995), también pueden formular denuncias las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos, pero las recomendaciones definitivas que formule el Comité Europeo de Derechos Sociales deben pasar por el filtro político del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Excede los límites de este trabajo examinar las formas en que se puede promover la actividad jurisdiccional o cuasijurisdiccional en cada una de las distintas instancias internacionales y regionales, frente a actividades violatorias de los derechos humanos<sup>298</sup>.

<sup>298</sup> Véase sobre este tema, Carlos Villán Durán, *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Trotta, Madrid, 2002.



Sólo agregaremos brevemente que en la Organización Internacional del Trabajo la aplicación de los convenios y las recomendaciones de la OIT es objeto de una verificación y control sistemáticos mediante diversos organismos. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, es un órgano técnico constituido por 20 juristas que examina el cumplimiento por parte de los Estados de los convenios y las recomendaciones, y formula observaciones y comentarios que transmite a los gobiernos y a la Conferencia Internacional del Trabajo, en un informe público. La Conferencia constituye una Comisión tripartita que examina los casos de incumplimiento y transmite sus observaciones y recomendaciones a los gobiernos. Existen en la OIT otros mecanismos especializados de control, como el Comité de Libertad Sindical y el Comité de Discriminación. Por su parte, las organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores y de empleadores pueden presentar denuncias (las organizaciones nacionales respecto a situaciones en su propio país), que pueden dar lugar a que el Consejo de Administración de la OIT decida la constitución de una comisión investigadora, cuyas conclusiones se dan a conocer en un informe público.

El Consejo Ejecutivo de la Unesco ha elaborado procedimientos que permiten examinar comunicaciones de particulares, grupos y organizaciones no gubernamentales en las que se alegue la violación de derechos humanos en el campo de la educación, la ciencia, la cultura y los medios de comunicación (Decisión 104 EX/3.3 de 1978). Las comunicaciones deben dirigirse al Director General de la Unesco, y pueden consistir en “casos” individuales y específicos o en “asuntos” relativos a violaciones masivas, sistemáticas o flagrantes de los derechos humanos en el dominio de la Unesco. El Comité de Convenciones y Recomendaciones del Consejo Ejecutivo se pronuncia sobre la admisibilidad de las comunicaciones. Existen diez condiciones de admisibilidad, que figuran en el artículo 14 n) de la Decisión 104. El autor de la comunicación debe demostrar que se han reunido las diez condiciones. Los “casos” son tratados en principio en reunión privada, y los “asuntos” en reunión pública del Consejo Ejecutivo.

## Los recursos ante tribunales judiciales

En el ámbito nacional, la actividad jurisdiccional puede y debe ejercerse plenamente con relación a los particulares, incluidas las sociedades transnacionales, aplicando el derecho nacional y las normas internacionales vigentes en el derecho interno.

Los tribunales nacionales constituyen un recurso de primera importancia frente a las actividades ilícitas de las sociedades transnacionales.

Los tribunales nacionales competentes para este tipo de demandas pueden ser el del lugar donde se produjo el daño, o el de la sede principal de la sociedad que provocó el daño, sin excluirse otras posibilidades, por ejemplo,

el del domicilio de las víctimas, si es distinto del lugar donde se produjo el daño<sup>299</sup>. Cuál es la jurisdicción o las jurisdicciones competentes es un tema complejo, con vertientes jurídicas, económicas y políticas.

Se han intentado juicios, con suerte variada, contra empresas transnacionales en distintos países.

Por ejemplo, en Brasil contra Monsanto, por la utilización de soja transgénica violando el principio de precaución; ante tribunales de París por delitos financieros contra dirigentes de Eurotunnel (700.000 pequeños y medianos inversores estafados), y contra dirigentes de ELF (volatilización de enormes sumas de dinero, corrupción, financiamiento ilegal de partidos políticos), etc.

A principios de 2002 el Tribunal Superior de Río Negro, Argentina, condenó a la Banca Nazionale del Lavoro a restituir los fondos retenidos a los depositantes (el "corralito"), condena que hizo extensiva al grupo económico Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa, debiendo entenderse por "grupo" a la casa matriz y sus filiales. Es decir, que la obligación de devolver los depósitos ilegalmente retenidos no alcanza sólo a la filial argentina, sino también a la casa matriz extranjera y a todas sus empresas subsidiarias, filiales bancarias u otras.

Pero la jurisdicción estadounidense parece ser la preferida para este tipo de demandas. Esto se debe a distintas razones, entre ellas que las reglas son amplias en materia probatoria, que se pueden dictar sentencias en rebeldía y, sobre todo, a que existen varias leyes que autorizan a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos fuera de dicho país a iniciar procesos ante sus tribunales, la más utilizada de ellas es la *Alien Torts Claims Act* (ATCA).

a) En los juicios por daños y perjuicios contra la Union Carbide por la catástrofe de Bhopal, los tribunales estadounidenses (decisión de primera instancia del juez Keenan del Distrito Sur de Nueva York del 12 de mayo de 1986, confirmada en apelación) optaron por aplicar el *forum non conveniens* (derecho del tribunal a rehusar su jurisdicción), criterio sostenido por la demandada y rechazado por los demandantes. Estos últimos alegaron, entre otras cosas, el riesgo del chantaje que podían ejercer las empresas sobre los países pobres deseosos de acoger las inversiones extranjeras, y la necesidad de que se reconociera la responsabilidad de la sociedad matriz, con sede en Estados Unidos. El juez Keenan, por su parte, estimó que mantener la competencia del tribunal estadounidense, "... sería otro ejemplo más de

<sup>299</sup> Véase *Responsabilidad Internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional*, en Naciones Unidas, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, 2ª parte, Capítulo V, párr. 373, 1994, donde se hace mención a las diversas jurisdicciones que pueden ser competentes, en [www.un.org/law/ilc](http://www.un.org/law/ilc)

imperialismo, otra situación donde un soberano establecido infringiría sus reglas, estándares y valores sobre una nación en desarrollo" (¿convicción o hipocresía?). El proceso iniciado en la India contra Union Carbide terminó en 1989 con una transacción en la cual la demandada se comprometió al pago de una indemnización global a las víctimas de 470 millones de dólares, considerada ínfima, teniendo en cuenta que los afectados fueron centenares de miles de personas.

Como señala Binda P. Sahni en el capítulo 2 de su libro *Transnational Corporate Liability: Liability for Human Injury*<sup>300</sup>, el *forum non conveniens*, es un principio discrecional del *common law* que se utiliza frecuentemente para eludir o disminuir la responsabilidad de la casa matriz cuando ésta es objeto de una denuncia ante los tribunales de su domicilio principal a causa de actividades ilegítimas realizadas por una filial en el ámbito de otra jurisdicción nacional.

b) En noviembre de 1999 se inició ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una acción penal contra la Union Carbide y su presidente Warren Anderson, en el marco de la *Aliens Tort Claims Act*, por haber actuado con manifiesta negligencia culpable impregnada de discriminación racial al instalar en la India una industria con normas de seguridad muy inferiores a las existentes en Estados Unidos, y ser previsible el desastre que produjo la muerte de millares de personas (Sajida Bano et al v. Union Carbide Corporation)<sup>301</sup>. En agosto del 2000 el juez Keenan rechazó la demanda fundándose en que los acuerdos de 1989 cubrían todos los reclamos. En noviembre de 2001 el Tribunal de Apelación del Segundo distrito confirmó en parte la sentencia del juez Keenan, pero le reenvió la causa con relación a algunos de los reclamos de los actores. En 2003 el juez Keenan rechazó la demanda fundándose en la prescripción de las acciones. El Tribunal de Apelación confirmó en parte la sentencia pero indicó al juez que considerara los reclamos por daño a la propiedad y por la descontaminación del sitio a cargo de la Union Carbide, si el gobierno de la India no tenía objeción. En junio de 2004, la India envió un memorándum al juez Keenan, manifestando no tener objeción a que la Union Carbide procediera, a su cargo, a la descontaminación<sup>302</sup>.

<sup>300</sup> Binda P. Sahni, *Transnational Corporate Liability: Liability for Human Injury*, Cameron May (ed.), International Law Publishers, London, 2006 (véase nota 246).

<sup>301</sup> Véase Francisco Javier Zamora Cabot, Accidentes en masa y "forum non conveniens": el caso Bhopal, en *La responsabilidad internacional. Aspectos de derecho internacional público y derecho internacional privado*. XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 1989, Carlos Jiménez Piernas (ed.), Alicante, 1990. Véase también Ward Morehouse, *The Bhopal tragedy. Did Union Carbide Corporation commit crimes against humanity?*, en *Empresas transnacionales y derechos humanos*, Asociación Americana de Juristas, Centre Europe-Tiers Monde y Fundació Ficat Barcelona, Ginebra, julio, 2000, en [www.cetim.ch/dos/stn.htm](http://www.cetim.ch/dos/stn.htm).

<sup>302</sup> Fuentes diversas, en particular S. Muralidhar, *Dateline Bhopal*, en núm. 544, December, 2004, *Elusive Justice*, a symposium on the Bhopal gas disaster after twenty years, en [www.india-seminar.com/2004/544.htm](http://www.india-seminar.com/2004/544.htm).

c) En el apartado 2, c) del Capítulo III hemos mencionado la denuncia presentada el 14 de marzo de 2002 ante la Corte del Distrito Federal de Alabama (Estados Unidos) contra la sociedad transnacional Drummond Company Inc., Drummond Ltd., y contra su dueño el estadounidense Garry Drummond, por su complicidad en el asesinato de líderes sindicales colombianos.

d) En el apartado 2, e) del mismo Capítulo aludimos al juicio ante el Distrito 212 de la Corte del Condado de Galveston, Texas, contra los fabricantes y utilizadores de un pesticida en las bananeras de Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

e) En ese mismo apartado 2, e) citamos la causa iniciada en 1997, en el marco de la *Aliens Tort Claims Act* contra Unocal y Total por violaciones de los derechos humanos durante la construcción del oleoducto de Yadana, en Myanmar, en la que el juez Richard Páez dijo que las sociedades transnacionales y sus dirigentes pueden ser tenidos por responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos en países extranjeros, y que los tribunales estadounidenses tienen competencia para juzgar dichas violaciones. La transnacional francesa Total quedó excluida de la causa pero no la empresa estadounidense Unocal. La empresa Total sostuvo la incompetencia de jurisdicción *ratione personae* de los tribunales estadounidenses, y la Corte de Apelación del distrito de California aceptó dicha defensa, rechazando los argumentos de los denunciantes acerca de la presencia de subsidiarias de Total en Estados Unidos y de los vínculos con la empresa estadounidense Unocal en sus actividades ilícitas en Myanmar. La Corte de Apelación, en su veredicto, excluyó la aplicación de la ATCA en su interpretación amplia (véanse, más adelante, los apartados g y h), al contrario de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el caso contra la Royal Dutch/Shell.

En diciembre de 2004 se llegó a un acuerdo extrajudicial en esa causa por el cual Unocal se comprometió a compensar a los demandantes por los daños sufridos<sup>303</sup>.

El anuncio de Unocal y Earth Rights International (ERI) sugiere que éste será el segundo caso en el que se alcance un acuerdo extrajudicial, que además podría crear un precedente para demandas contra otras grandes firmas petroleras, entre ellas una de ciudadanos indonesios de la provincia occidental de Aceh contra ExxonMobil, y otra contra Shell presentada por ciudadanos de la región nigeriana del delta del río Niger<sup>304</sup>.

<sup>303</sup> Véase Ludovic Hennebel - CRIDHO, *L'affaire Total-UNOCAL en Birmanie jugée en Europe et aux États-Unis*, Working Paper, 2006/09, Université Catholique de Louvain, Faculté de Droit, Centre de Philosophie du Droit. Cellule de recherche interdisciplinaire en droits de l'homme, en <http://cridho.cpdf.ucl.ac.be/Working%20papers/CRIDHO.WP.2006.09.pdf>. Es un estudio preliminarizado, de 32 páginas, de este caso y sus antecedentes, en el que también se hace mención a otros juicios contra empresas transnacionales y a la aplicación de la ATCA en otros casos.

<sup>304</sup> Fuentes: Interpress Service 5/01/05, y Center for Constitutional Rights, julio, 2003.

En razón de que la transnacional francesa Total quedó excluida de la causa ante los tribunales estadounidenses porque prosperó su defensa de incompetencia de jurisdicción, en agosto de 2002 se inició en Francia una causa contra el entonces presidente director general de Total, Thierry Desmarest, por los mismos hechos ocurridos en Myanmar, bajo la acusación de haber sometido a trabajos forzados al personal empleado en la construcción del gasoducto. Como el trabajo forzado no está incriminado en el Código Penal francés, los demandantes intentaron encuadrar los hechos en el delito de secuestro. El procurador de la República sostuvo que no había lugar a un procedimiento penal, fundándose en la inexistencia del delito de trabajo forzado, y el Tribunal sostuvo que era aplicable la figura de secuestro.

En noviembre de 2005 se llegó a un acuerdo entre las partes, por el cual Total se comprometió a indemnizar a los ocho demandantes con una suma de 10.000 euros a cada uno, y éstos a cambio desistieron de la demanda. En el acuerdo constó que Total no reconocía su culpa ni su reponsabilidad. La causa penal siguió su curso y se terminó en junio de 2006 con un sobreseimiento, en el que la jueza dice que "la realidad de los hechos denunciados no puede ponerse en duda" pero, continúa, *el trabajo forzado, a pesar de los compromisos internacionales de Francia, no está incriminado en el derecho francés y no puede ser asimilado al secuestro*<sup>300</sup>.

g) Ante los Tribunales de Nueva York se tramitan juicios contra la Royal Dutch/Shell y contra Brian Anderson, ex gerente general de Shell Nigeria, subsidiaria de Royal Dutch/Shell. Se los acusa por el asesinato de Ken Saro-Wiwa, John Kpuinen, Saturday Doobee, Felix Nuate, Daniel Gbokoo, del doctor Barinem Kiobel y de otros tres dirigentes ; por la detención arbitraria y tortura de Owens Wiwa y Michael Vizer, y por los ataques en Karalolo Kogbara y Uebari N-nah, cuando se realizaban protestas pacíficas en contra de las actividades de Shell.

Las demandas se basan en la *Alien Tort Claims Act*, en la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (*Torture Victim Protection Act*) y en la *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act* (RICO).

La demanda original fue presentada en 1996 y reformada en abril de 1997.

Shell está acusada de tortura, detenciones arbitrarias, extorsión, ejecuciones extrajudiciales, trato cruel, inhumano y degradante.

Los actores alegaron que el gobierno militar de Nigeria incurrió en varias violaciones de los derechos humanos, incluyendo tortura y ejecuciones sumarias de miembros del Mosop, y afirman que la Royal Dutch/ Shell estuvo involucrada en tales actos.

<sup>300</sup> Véase Hennebel, *op. cit.*

Shell, aseguran los actores, compró municiones, helicópteros y botes para llevar a cabo la operación militar Operation Restore Order in Ogoniland ("Restaurar el Orden en la Tierra Ogoni").

La demandada pidió que se rechazara la acción sosteniendo que los tribunales estadounidenses eran incompetentes y que la jurisdicción competente era, en todo caso, la de los Países Bajos o de Gran Bretaña. Sostuvo que la *Alien Tort Claims Act* no se aplicaba en el caso de ser una corporación la demandada.

El 25 de septiembre de 1998, el juez Kimba Wood dictaminó que la jurisdicción de los tribunales estadounidenses de Nueva York era apropiada pero que más lo era la de los tribunales de Gran Bretaña, por lo que decidió aceptar la defensa de *forum non conveniens*.

Sin embargo, el 15 de septiembre de 2000, la Corte de Apelaciones dictaminó que los tribunales de Nueva York eran competentes en el caso, pese a que los delitos imputados se cometieron en otra jurisdicción —los denunciantes no son residentes en Estados Unidos, y la empresa Shell tiene su sede principal en el Reino Unido—. Esta es una aplicación amplia del principio de jurisdicción universal, basada en la ya mencionada *Alien Tort Claims Act*.

La demandada acudió a la Corte Suprema para que revisara la decisión de la Corte de Apelaciones, pero en marzo de 2001 la Corte Suprema denegó la petición, con lo que quedó en firme la decisión de la Corte de Apelaciones favorable a la competencia de los tribunales estadounidenses.

h) Los familiares de Ken Saro-Wiwa iniciaron una querrela contra Shell y contra Brian Anderson, ex gerente general de Shell Nigeria, subsidiaria de Royal Dutch/Shell. Los querellantes acusaron a la empresa transnacional de haber ayudado al régimen nigeriano de Sani Abacha a fabricar pruebas para un simulacro de juicio que llevó al patíbulo al líder ogoni y a sus compañeros. Los demandados pidieron que se rechazara la acción.

El 28 de febrero de 2002, el juez Kimba Wood denegó todas las peticiones de que se desecharan las demandas alegando que las actividades de Royal Dutch/Shell y de Brian Anderson constituían una real participación en los crímenes mencionados en la demanda. El juez dijo que los hechos, tal como fueron presentados por los querellantes, podían constituir crímenes contra la humanidad, según la definición que figura en el Tratado de Roma de 1998 que aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

En septiembre de 2003 se modificaron las demandas para incluir nuevos actores y después las causas entraron en la etapa de los alegatos.

También se abrió la posibilidad de que Brian Anderson fuera querrellado por violación de la *Torture Victim Protection Act* (Ley para la Protección



de Víctimas de Tortura), la cual permitiría a las víctimas demandar a los imputados ante las cortes federales<sup>306</sup>.

La *Alien Tort Claims Act* es una ley aprobada en Estados Unidos en 1789 cuya finalidad primera fue perseguir la piratería en alta mar. Ella permite a los extranjeros demandar a personas o compañías estadounidenses y no estadounidenses que estén en territorio de Estados Unidos, por abusos "cometidos en violación de la ley de las naciones o de un tratado" firmado por Washington, aunque dichos abusos hayan ocurrido fuera del país.

Durante muchos años no se utilizó, y el primer caso notorio fue *Filártiga v. Peña Irala*, en 1980, a raíz de una demanda presentada por el padre de un joven paraguayo secuestrado y asesinado en su país por un policía que después de los hechos fue a residir a Estados Unidos. En ese juicio, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decidió, con la opinión favorable del procurador, que la ATCA era aplicable en los casos de violaciones graves de la ley internacional humanitaria, con el argumento de que "a los efectos de la responsabilidad civil, el torturador se ha convertido, como antes el pirata y el traficante de esclavos, en enemigo de toda la humanidad".

Luego se invocó la ATCA para presentar demandas en Estados Unidos contra dictadores y militares acusados de violar los derechos humanos en distintos países.

En casi todos los casos se otorgaron indemnizaciones, que pocas veces se hicieron efectivas porque los condenados se fueron de Estados Unidos.

Las primeras demandas contra individuos, en los años 1980-1990, fundadas en la ATCA, no dieron lugar a mayores controversias, pero las posteriores acciones judiciales contra corporaciones dieron lugar a una fuerte contraofensiva del sector privado, apoyada por el actual gobierno de Estados Unidos.

Como parte de la ofensiva contra la ATCA, el fiscal general John Ashcroft se presentó en mayo de 2003 como *amicus curie* ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en la causa contra Unocal, pidiendo que anulara la vigencia de dicha ley.

Ashcroft arguyó que la ATCA no podía ser aplicada para demandas civiles, y que la "ley de las naciones" a la que se refiere no incluye el derecho internacional humanitario ni ningún tratado firmado por Estados Unidos después de 1789. También destacó que el uso contemporáneo de la ATCA puede tener "graves consecuencias para nuestra actual guerra

<sup>306</sup> Fuentes: Center for Constitutional Rights, cuyo equipo legal patrocina a los actores, junto con EarthRights International. Véase también [www.derechos.org/nizkor/econ/shell28feb02](http://www.derechos.org/nizkor/econ/shell28feb02) y [www.earthrights.org/shell/appeal](http://www.earthrights.org/shell/appeal). UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs News on Nigeria, en [http://www.irinnews.org/frontpage.asp?SelectRegion=West\\_Africa&SelectCountry=Nigeria](http://www.irinnews.org/frontpage.asp?SelectRegion=West_Africa&SelectCountry=Nigeria)

contra el terrorismo", mediante demandas "contra nuestros aliados en esa guerra", interfiriendo así con importantes intereses de la política exterior estadounidense.

Al mismo tiempo, las asociaciones de empresas transnacionales, como el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) y la Cámara de Comercio Estadounidense, también presentaron sus informes ante los tribunales y lanzaron una campaña de relaciones públicas contra la ATCA.

Hasta ahora, la única sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que ésta se pronunció sobre los alcances de la ACTA es la de diciembre de 2004 en el caso *Sosa v. Álvarez Machain*, y tuvo gran trascendencia, pues en el curso del proceso intervinieron y se pronunciaron empresas, varios gobiernos, organizaciones no gubernamentales, y dio incluso lugar a una interpelación en el Consejo Federal Suizo<sup>307</sup>.

En 1985, un agente de la Drug Enforcement Agency (DEA) fue asesinado en México por miembros de un cartel de la droga. La DEA llegó a la conclusión de que en el hecho había participado el médico mexicano Humberto Álvarez Machain. Entonces encargó a un grupo de mexicanos, entre ellos Sosa, que lo secuestraran y lo llevaron a Estados Unidos para someterlo a juicio. Sometido a juicio en este país, la defensa de Álvarez Machain arguyó que el juicio era ilegal porque el acusado había sido llevado a Estados Unidos de manera ilícita. La cuestión llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, la que el 15 de junio de 1992 (caso *U.S.v. Álvarez Machain*), dictó sentencia en la que afirmó el derecho de los funcionarios estadounidenses a secuestrar personas en otros Estados soberanos para llevarlos a Estados Unidos a fin de someterlos a los tribunales de ese país. El juez Rehnquist de la Corte sostuvo la extraordinaria "doctrina" de que tales secuestros son legítimos porque el tratado de extradición entre México y los Estados Unidos no los prohíbe.

Vuelta la causa contra Álvarez Machain al Tribunal de distrito, ésta finalmente absolvió al médico mexicano por falta de pruebas.

Éste inició entonces una causa contra sus secuestradores, entre ellos Sosa, y contra el gobierno de Estados Unidos por el secuestro y los consiguientes daños sufridos, invocando las disposiciones de la ATCA, pues el delito contra él se había producido fuera de Estados Unidos pero, señaló, había sido planeado y decidido en dicho país.

<sup>307</sup> La interpelación fue depositada por la consejera nacional Pia Hollenstein en el Consejo Nacional el 18 de marzo de 2004 a causa de que la Dirección de Derecho Internacional Público del Departamento Federal de Asuntos Extranjeros de Suiza firmó, junto con autoridades de Gran Bretaña y Australia, un "amicus curie" dirigido a la Corte Suprema de Estados Unidos en el marco de la causa "Álvarez Machain", abogando por la aplicación restrictiva de la ATCA. Entre otras cosas, en la interpelación se decía que el "amicus curie" correspondía a las intenciones del gobierno de Bush y a los intereses de grupos económicos de Estados Unidos, contrariamente a muchas organizaciones internacionales y justas que se ocupan del tema de la responsabilidad de las empresas frente a la sociedad. Véase la interpelación en [http://search.parlament.ch/1/cv-geschaefte?gesch\\_id=20043145](http://search.parlament.ch/1/cv-geschaefte?gesch_id=20043145).

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito rechazó el alegato de los acusados, según el cual la ATCA sólo otorga autoridad jurisdiccional, y consideró que también confiere derechos jurídicos sustantivos (Tribunal de Apelaciones del 9 Distrito, 107F.3d 696, 1996 US App). El Tribunal declaró responsable a la DEA por el secuestro en el extranjero y ordenó la prosecución de la causa contra José Francisco Sosa.

Los demandados, es decir, los secuestradores de Álvarez Machain y el gobierno de Estados Unidos apelaron ante la Corte Suprema, la que dictó sentencia en 2004.

En ese fallo la Corte Suprema respondió mayoritariamente por la negativa a las siguientes dos cuestiones:

1) ¿Pueden los particulares en el marco del ATS (*Alien Tort Statute*) [ATCA] entablar juicios contra ciudadanos extranjeros por crímenes cometidos en el extranjero en violación de la "ley de las naciones" o tratados suscritos por Estados Unidos?

2) ¿Puede una persona promover juicio en el marco de la ACTA por un secuestro planificado en Estados Unidos pero llevado a cabo en el extranjero?

Esta sentencia de 2004 de la Corte Suprema es coherente con la sentencia de 1992 que afirmó el derecho de los funcionarios estadounidenses a secuestrar personas en otros Estados soberanos para llevarlos a Estados Unidos. La primera consagró el derecho a secuestrar y la segunda la impunidad de los secuestradores, siguiendo así la línea de la administración estadounidense y los deseos de las grandes empresas, temerosas de que un fallo de la Corte validara la ATCA.

A pesar de ello, los representantes de algunas ONG celebraron el fallo diciendo, uno de ellos, que la Corte Suprema había reafirmado que "las cortes de Estados Unidos permanecerán abiertas para quienes sufran tortura y otros terribles abusos que violan la ley internacional", y otro destacó que "la Corte había reconocido el derecho a presentar, al amparo de la ATCA, demandas por violaciones de normas internacionales que sean específicas, universales y obligatorias".

Es cierto que la Corte no satisfizo el deseo de la Administración estadounidense y de las grandes empresas de enterrar definitivamente la ATCA pero, además de rechazar de manera arbitraria el recurso de Álvarez Machain, sólo dejó entreabierta una pequeña y muy restrictiva posibilidad para la aplicación de la ley.

Consideramos entonces que si bien hay algunas buenas razones para intentar procesos contra las sociedades transnacionales ante tribunales estadounidenses, los resultados de tales procesos son bastante azarosos.

Y no hay que olvidar que existen otros tribunales de justicia en el mundo además de los estadounidenses, ante los que también se pueden intentar

procesos contra las sociedades transnacionales, y no son pocos los que están en curso, ya sea invocando la competencia del tribunal donde se produjo el daño, el de la nacionalidad de las víctimas y aun la jurisdicción universal, donde ésta se aplica<sup>308</sup>.

La aplicación del principio de la *jurisdicción universal* permite atribuir competencia en estos casos a cualquier jurisdicción nacional.

Son conocidos algunos casos de aplicación de la jurisdicción universal en España, en los juicios contra Pinochet y contra otros militares de dictaduras latinoamericanas, hasta ahora limitados a casos donde hubo víctimas de nacionalidad española. Pero en octubre de 2005, en un recurso interpuesto por Rigoberta Menchú, el Tribunal Constitucional de España resolvió que los tribunales españoles tienen legitimidad para investigar los delitos de genocidio, torturas, asesinatos y detención ilegal cometidos en Guatemala entre los años 1978 y 1986, y anuló la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de no asumir la competencia para investigar estos hechos, y la del Tribunal Supremo de limitar la investigación a las víctimas españolas. El Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación de la norma procesal española en la materia que permite atribuir a los tribunales de España una jurisdicción universal amplia en una serie de delitos especialmente graves.

De manera general, uno de los fundamentos de la derogación del principio de territorialidad de aplicación de la ley penal, en otros términos, la aceptación en algunos casos de la jurisdicción universal, así sea limitada, es el reconocimiento del concepto de delitos internacionales o delitos contra el derecho de gentes, entre ellos la violación de derechos humanos fundamentales.

Ya a mediados del siglo pasado se comenzaron a celebrar tratados y convenios internacionales para prevenir y sancionar los delitos internacionales, entre ellos contra la trata de esclavos, la trata de mujeres y niños, el tráfico de opio y otros estupefacientes, la piratería, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial se extendió la noción de delitos internacionales a los crímenes de guerra, a los crímenes contra la paz y a los crímenes de lesa humanidad. Como resultado de ello, varios instrumentos internacionales contienen lo que podríamos denominar gérmenes de jurisdicción universal: la Convención contra el Genocidio (art. VI); la Convención contra la Tortura (arts. 5, 6 y 7) y la Convención contra el *apartheid* (art. V). También la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura contiene una disposición semejante (art. 12).

<sup>308</sup> La red Oilwatch ha publicado en su boletín *Resistencia*, núm. 57, una lista y un resumen de los juicios en curso en diversas partes del mundo contra empresas petroleras. Véase [http://www.oilwatch.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=158&Itemid=43&lang=](http://www.oilwatch.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=43&lang=)

Estas excepciones al principio de territorialidad de aplicación de la ley penal, cada vez más numerosas, como parte de una tendencia hacia la protección internacional de los derechos humanos a través de asegurar el castigo de quienes violan los mismos, cualquiera sea el territorio donde se encuentren, se reflejan en numerosas legislaciones nacionales. El principio de jurisdicción universal, con amplitud diversa, figura en distintas legislaciones nacionales y surge de la interpretación de otras donde no está enunciado expresamente<sup>309</sup>.

Bélgica era el país más avanzado en dicha región, pues como parte de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales I y II de 1977, dictó en 1993 una ley de aplicación de dichos convenios y protocolos, atribuyendo jurisdicción a sus tribunales para juzgar las infracciones, con independencia del lugar donde fueren cometidas, de la nacionalidad de los autores y de las víctimas. Una ley de 1999 extendió dicha jurisdicción universal al genocidio y a los crímenes contra la humanidad<sup>310</sup>.

Este principio se encuentra también esbozado en la legislación latinoamericana. Por ejemplo, el artículo 118 de la Constitución argentina se refiere a los delitos contra el derecho de gentes cometidos fuera de los límites de la nación. Los artículos 9 y 10 del Código Penal uruguayo, el artículo 6 del Código Penal chileno, el artículo 5 del Código Penal de Brasil, el artículo 4 del Código Penal de Venezuela, el artículo 7 del Código Penal de Costa Rica, el artículo 35 de la Constitución de Colombia de 1991, y el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal del mismo país, aprobado el 30 de noviembre de 1991, establecen diversas variantes de excepciones al principio de territorialidad de aplicación de la ley penal.

El artículo 1 del Código Penal de Perú, sancionado en 1991, dice: "La ley penal peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones contenidas en el derecho internacional".

Los artículos 2, 3 y 4 del Código Penal mexicano establecen varias excepciones al principio de la territorialidad, entre ellas la que se basa en la nacionalidad del autor o de la víctima.

<sup>309</sup> Una información amplia sobre la aplicación legislativa y jurisprudencial de la jurisdicción universal en varios países de Europa occidental puede encontrarse en [www.redress.org/annex](http://www.redress.org/annex).

<sup>310</sup> Refiriéndonos a Bélgica decimos que era el país más avanzado de la región en la materia, porque como resultado de la presión de Estados Unidos -que lo amenazaba con boicotear el puerto de Amberes y hacer retirar la sede de la OTAN de territorio belga-, el 23 de abril de 2003 el anterior gobierno de Bélgica reformó la ley de competencia universal de 1993-1999, reduciendo considerablemente sus alcances, y el gobierno del primer ministro Verhofstadt, que asumió a mediados de 2003, procedió a su derogación el 2 de agosto de 2003. Existe ahora una fuerte ofensiva contra la jurisdicción universal encabezada por Estados Unidos que ya ha firmado convenios bilaterales con unos 50 países para asegurar la inmunidad de sus ciudadanos frente a la Corte Penal Internacional y a otras jurisdicciones nacionales fuera de Estados Unidos.



Andrew Clapham, en un documentado trabajo<sup>311</sup>, sostiene que se podría acusar a las sociedades transnacionales ante la Corte Penal Internacional, pese a que no prosperó en Roma la propuesta francesa apoyada por otros países y por una sola ONG, la Fundación Lelio Basso, de conferir jurisdicción a la Corte sobre las personas jurídicas. Clapham se basa en los antecedentes de la Ley 10 de diciembre de 1945 del Consejo Aliado de Control de Alemania (que autorizaba a enjuiciar a las asociaciones que el mismo Tribunal declarase criminales), y en lo establecido en el artículo 25 (Responsabilidad penal individual, inciso 3, apartado *d* del Estatuto de la Corte Penal Internacional), que se refiere a quien "contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común".

Dicho de manera muy sucinta, Clapham sostiene que las sociedades transnacionales podrían ser enjuiciadas ante la Corte Penal Internacional como asociaciones criminales.

Pero cabe señalar que en Nüremberg jamás fueron declaradas asociaciones criminales las grandes empresas alemanas que cometieron crímenes de guerra, aunque sí fueron enjuiciados algunos de sus dirigentes. Ese fue el caso de I. G. Farben (US Military Tribunal; Nüremberg, 14 agosto 1947, 29 de julio de 1949) como lo señala el mismo Clapham.

Y tampoco es casual que la propuesta francesa no haya tenido el apoyo de las grandes ONG, muy activas en la Conferencia de Roma, y que finalmente no haya prosperado: no había que irritar a Estados Unidos tratando de encuadrar a las personas jurídicas —entre ellas a las sociedades transnacionales— en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero el planteo de Clapham merece ser estudiado cuidadosamente.

Parece haber un interés particular en algunos medios por estudiar la cuestión de la complicidad de las empresas transnacionales Y al parecer sólo la complicidad<sup>312</sup>.

La complicidad es una de las formas de participación criminal, pero no la única, definida en la doctrina y en la legislación desde hace bastante tiempo.

<sup>311</sup> Andrew Clapham, *The Question of Jurisdiction Under International Criminal Law Over Legal Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court*, en *Liability of Multinational Corporations Under International Law*, M. Kämminga y S. Zia-Zarifi (eds.), Kluwer Law International, La Haya, 2001.

<sup>312</sup> En mayo de 2006 la Comisión Internacional de Juristas anunció la creación de un panel internacional de "eminentes juristas" con el objetivo de estudiar cuando las empresas pueden y deben ser consideradas responsables en tanto cómplices en crímenes internacionales. Comunicado de la CIJ: "Immediate Release: Expert Legal Panel begins work on Corporate Accountability for International Crimes. On 9 May 2006 the International Commission of Jurists (ICJ) launched its Expert Legal Panel on Corporate Complicity, in International Crimes. The Panel, comprised of eight eminent lawyers from across the globe, will define and clarify when corporations can, and should be, held accountable for their involvement in international crimes such as torture, war crimes, crimes against humanity and genocide" (énfasis agregado).



Además, no queda claro por qué se manifiesta tanto interés en particular por la complicidad y no por otras formas de participación criminal, como por ejemplo la autoría y coautoría, la instigación, la participación necesaria, el encubrimiento, etc.

¿O es que se piensa que las empresas no pueden ser autores o instigadores de crímenes o delitos, y que a lo sumo pueden ser cómplices de los mismos? ¿O se intenta limitar la responsabilidad penal de las empresas a la sola complicidad, y crear así una suerte de fuero empresarial privilegiado en materia penal?

Dicho enfoque se opone al principio ampliamente admitido en la doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la de las personas que las representan (doble imputación), que incluye todas las formas de participación criminal y no sólo la complicidad.

Como se puede apreciar, si bien existen recursos judiciales contra las actividades violatorias de los derechos humanos por parte de las sociedades transnacionales, como tales recursos cuestionan de manera indirecta las raíces y la naturaleza misma del sistema económico dominante<sup>313</sup>, las reacciones de éste van desde el rechazo total por parte de los directamente implicados y de los gobiernos que los respaldan, hasta las propuestas formuladas por distintas personas y organizaciones de establecer formas limitadas de control y de responsabilidad de las sociedades transnacionales que corresponden a la estrategia “gatopardista” de cambiar algo para que todo siga igual.

## LA CUESTIÓN DE LA JERARQUÍA DE LAS NORMAS

Al abordar la cuestión del encuadre jurídico de las sociedades transnacionales se pone de manifiesto la diversidad, heterogeneidad, fragmentación y a veces contradicción de las normas vigentes de derecho internacional en diferentes esferas (por ejemplo, entre las normas de derecho comercial y las de derechos humanos), lo cual para algunos internacionalistas pone en peligro la fiabilidad y credibilidad del derecho internacional y plantea la necesidad de establecer cierta coherencia entre las normas con miras al objetivo, aún lejano, de codificar el derecho internacional<sup>314</sup>.

<sup>313</sup> Las violaciones de los derechos humanos son inherentes a las actividades de las sociedades transnacionales, cuyo objetivo principal es obtener, por cualquier medio, el máximo beneficio.

<sup>314</sup> Véase Gerhard Hafner (miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas), *Los riesgos que plantea la fragmentación del derecho internacional*, en Plan de estudio de los temas que se recomienda inscribir en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión: Naciones Unidas, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 52 periodos de sesiones. Asamblea General, suplemento núm. 10, A/55/10, 2000. En su 54 periodo de sesiones, en 2002, la Comisión de

Hay tres formas de encarar el problema de la coherencia de las normas:

a) una que llamaríamos formal, distinguiendo entre norma específica y norma general, entre norma anterior y norma posterior, etc.;

b) otra que consistiría en lograr la coherencia haciendo converger a tres protagonistas: el poder público, el poder económico (sector privado) y la "sociedad civil". La idea de reunir a los "actores sociales" (muy poderosos, relativamente poderosos y sin poder alguno) como el poder económico, el poder político y la "sociedad civil", es una manera de renunciar al principio de la democracia representativa y participativa como espacio de diálogo y de confrontación de intereses divergentes y aún contradictorios, y de resolución de los conflictos. Y es también una manera de favorecer la consolidación de la hegemonía del poder económico. Sobre que es sociedad civil véase el apartado 2 del Capítulo IV.

Esta idea, bastante difundida, de los "actores sociales", tiene predicamento en algunos medios académicos. Después del coloquio de Friburgo que se menciona en el apartado 3 del Capítulo VI (véase nota 253), se publicaron unas "Conclusiones preliminares", sobre las cuales hicimos llegar observaciones al director del Instituto universitario, en las cuales, entre otras cosas, decíamos:

...en todo el documento se habla de "actores civiles" (más poderosos, menos poderosos y sin poder alguno) y se olvida a los seres humanos, que "nacen libres e iguales en dignidad y derechos" (art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), quienes, como ciudadanos, deben hacer política, es decir ocuparse de las cosas de la "polis" en interés del conjunto de la comunidad, en un espíritu de solidaridad, por encima de los intereses particulares de los "actores civiles". (Libertad, igualdad, política y solidaridad, son nociones olvidadas en las "Conclusiones...").

c) la tercera forma de abordar la coherencia es establecerla sobre la base de una jerarquía de las normas, partiendo del principio de que los derechos del ser humano están en la cúspide de la pirámide normativa, como lo expresó claramente la opinión pública mundial al condenar la acción judicial de 39 transnacionales farmacéuticas contra África del Sur. Se popularizó la consigna "Por la primacía del derecho a la vida sobre las ganancias exorbitantes de las transnacionales farmacéuticas".

---

Derecho internacional incluyó el tema en su programa de trabajo y estableció un Grupo de Estudio. En el informe de 2005 de la CDI se dice que el Grupo de Estudio consideró que sus "trabajos debían incluir análisis críticos de la experiencia de la fragmentación en distintos órganos e instituciones internacionales, y debían producir un resultado que contribuyera a aportar soluciones a los jueces y funcionarios de la Administración que se enfrentaban a cuestiones como las obligaciones incompatibles o parcialmente coincidentes emanadas de fuentes jurídicas diferentes. Ello requeriría una descripción de los problemas reales en su contexto social". Véase [www.un.org/law/ilc](http://www.un.org/law/ilc)

La presión de la opinión pública internacional fue tan grande, y la iniciativa de las 39 sociedades transnacionales fue tan torpe al invocar sus derechos patrimoniales sobre los medicamentos contra el sida en un continente como África, donde más de treinta millones de personas están infectadas y ya han muerto más de tres millones a causa de esa enfermedad, que las empresas desistieron del juicio.

Quizás el desistimiento de las empresas transnacionales tuvo también por finalidad, además de acallar la protesta pública internacional en ese caso particular, tratar de evitar que sectores cada vez más amplios de la opinión pública se planteen la cuestión de la primacía de los derechos humanos y del interés general sobre el interés privado.

Es el caso, por ejemplo, directamente relacionado con ese litigio, del lugar que ocupa el derecho de propiedad intelectual frente a los derechos humanos y al interés general. Véase en el Capítulo IV, el literal a) del apartado 3.

## PERFECCIONAR LAS NORMAS EXISTENTES Y ESTABLECER OTRAS NUEVAS

Finalmente, para dotar a las sociedades transnacionales de un marco jurídico específico a sus particulares características y actividades (véase el apartado 4 del capítulo VI), debería abordarse la cuestión de completar las normas nacionales e internacionales:

a) Rescatando la noción de servicio público, especialmente en materia de salud, alimentación (incluida el agua potable)<sup>315</sup>, educación, vivienda, comunicación e información en todas sus formas y soportes, y previniendo y prohibiendo la formación de oligopolios y monopolios privados en esas esferas.

b) reforzando los mecanismos de aplicación de los instrumentos específicos referidos a las sociedades transnacionales, como la Declaración de Principios Tripartita sobre las Empresas Transnacionales, y la Política Social aprobada por el Consejo de Administración de la OIT en 1977 (que en su enmienda de noviembre de 2000 se refiere a 30 Convenciones y 35

<sup>315</sup> Varios instrumentos internacionales –y también leyes nacionales– están reconociendo el derecho al agua potable de todas las personas: el Protocolo sobre el agua y la salud, aprobado en Londres en 1999; de la Convención de 1992 sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales; la Declaración de Madera, de 17 de abril de 1999, sobre la gestión sostenible de los recursos hídricos; el decreto de 20 de diciembre de 1996 de la comunidad flamenca, entre otros. Véase el documento de Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/2000/16 del 19 de julio de 2000, y la Observación General núm. 15, "El derecho al agua", del 26 de noviembre de 2002 del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Véase también el Informe sobre el derecho a disponer de agua potable del relator especial señor Guisse, de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, Documento E/CN.4/Sub.2/2002/10 de 25 de junio 2002.

Recomendaciones de la OIT), y las Directrices de la OCDE (texto revisado en junio de 2000), aunque esta última sólo formula recomendaciones a las empresas.

c) Estableciendo códigos de conducta obligatorios para las sociedades transnacionales, como lo han reclamado en la Declaración y Programa de Acción del Foro del Milenio (Naciones Unidas, Nueva York, 26 de mayo del 2000, punto 2 de la Sección A de la Declaración) más de 1000 organizaciones no gubernamentales de 100 países. Dichos códigos de conducta deberían incluir la cuestión de la transferencia de tecnología.

d) Asimilando la violación de los derechos económicos, sociales y culturales a una violación, además de a la norma específica correspondiente, de los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, la falta de alojamiento es una violación del derecho a la vida privada, además de ser una violación de otros derechos fundamentales, y no adoptar medidas contra la extrema pobreza, o adoptar medidas que la generan, constituye un tratamiento inhumano o degradante, equivalente a la tortura; la privación de acceso a una alimentación adecuada o a los medicamentos esenciales comporta una violación de los derechos a la salud y a la vida, etc.

e) Extendiendo la tendencia actual a responsabilizar internacionalmente a las personas físicas (Estatuto de la Corte Penal Internacional y Tribunales "ad hoc" para Ruanda y para la ex Yugoslavia) a la responsabilidad internacional directa de las personas jurídicas privadas.

f) Los Estados que aún no lo han hecho, deberían incorporar a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Debería universalizarse también el principio de la doble imputación, es decir, que las sociedades transnacionales son penalmente responsables por los crímenes y delitos que cometen, lo mismo que los dirigentes que aprueban, de conformidad con los estatutos de la sociedad y con su voto afirmativo o por omisión, las decisiones incriminadas.

El artículo 18 de la Convención Penal Europea sobre la corrupción (1999), que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el principio de la doble imputación, puede ser un modelo para seguir.

Las normas aplicables, tanto a las sociedades transnacionales como a los individuos, ya sea en calidad de autores, cómplices, instigadores, partícipes necesarios, etc., deberían ser las previstas en las legislaciones nacionales y en los instrumentos internacionales que describen o tipifican comportamientos violatorios de los derechos humanos.

Finalmente, debería estudiarse la posibilidad de crear un tribunal internacional para las sociedades transnacionales, inspirado en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, establecido en la Convención sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, diciembre de 1982).

## UNA CUESTIÓN JURÍDICA ESENCIAL: LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS STN CON SUS FILIALES DE HECHO O DE DERECHO, Y CON SUS PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS Y LICENCIATARIOS<sup>316</sup>

Las sociedades transnacionales pueden escapar en buena medida a toda la batería de normas jurídicas existentes y por crear, expuestas más arriba, si no se aplica de manera amplia el principio de la responsabilidad solidaria de las STN con sus filiales de hecho o de derecho, y con sus proveedores, subcontratistas y licenciarios.

El principio de responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales es una cuestión esencial, teniendo en cuenta la práctica habitual —cada vez más extendida— de las STN de “externalizar los costos” y los riesgos, y las consiguientes responsabilidades —que asumen exclusivamente o casi exclusivamente los proveedores, los subcontratistas, los licenciarios y las filiales—, al mismo tiempo que las primeras obtienen ganancias exorbitantes.

Lo que se llama púdicamente “externalización de los costos” consiste en que las sociedades transnacionales se benefician de manera desproporcionada pagando precios ínfimos a sus proveedores y subcontratistas por sus productos o servicios, pero no asumen responsabilidad alguna por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo del personal de esos proveedores y subcontratistas.

La externalización de los riesgos consiste, por ejemplo, en que cuando se derrama el petróleo de un buque tanque y se produce una catástrofe ecológica, las sociedades transnacionales propietarias del petróleo no asumen responsabilidad alguna y el único responsable visible es el armador que prestó el servicio de transporte.

Otra forma de externalizar los riesgos que practican las sociedades transnacionales es negándose a reconocer su responsabilidad ante los trabajadores de sus filiales cuando éstas quedan insolventes y dejan en la calle a su personal.

En las actividades financieras la externalización ha adquirido enormes dimensiones, por razones de costos y para transferir la responsabilidad jurídica. Este último aspecto parece preocupar al Banque des règlements internationaux (BRI) y al Comité de Basilea, que coordinan los esfuerzos de reglamentación internacional de las actividades financieras, y han establecido un panel de discusión (Outsourcing in Financial Services, agosto de 2004, BRI). Según un estudio realizado por la consultora Deloitte por encargo de la reserva Federal de Estados Unidos (FED), en cinco años po-

<sup>316</sup> Véase en el Capítulo I la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y de la Corte Suprema Argentina, notas 12, 13 y 14.

drían externalizarse (*offshore outsourcing*) 356 mil millones de dólares de la actividad de los servicios financieros (banco, seguros e inversiones).

La externalización en esta esfera consiste en subcontratar funciones con operadores técnicos que no están sometidos a control alguno. El Comité de Basilea ha propuesto nueve puntos tendientes a impedir que los grupos financieros eludan sus responsabilidades<sup>317</sup>.

El principio de responsabilidad solidaria se aplica específicamente al derecho del trabajo cuando existe una relación entre empresas, una como empresa matriz y la otra como filial, o una como empresa contratante y la otra como proveedora, subcontratista o licenciataria. Véase por ejemplo el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo de Argentina, los artículos 42 y 43 del Estatuto de los trabajadores de España, y los artículos 177 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela y 21 de su Reglamento<sup>318</sup>.

<sup>317</sup> Diario *Le Figaro Économie*, 9/9/2004, p. XI.

<sup>318</sup> Artículo 30 de la ley argentina de contrato de trabajo (texto reformado conforme Ley 25013): "Quiénes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera que sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social..."

...El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la Seguridad Social..."

Artículos 42 y 43 del Estatuto de los trabajadores de España.

Artículo 42. Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras o servicios.

1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de responsabilidad el empresario solicitante.

2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante el año siguiente a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el periodo de vigencia de la contrata con el límite de lo que correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puestos de trabajo."

Artículo 43. Cesión de trabajadores.

1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. Los empresarios, cedente y cesionario, que infranjan lo señalado en el apartado anterior responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

3. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que



Esta responsabilidad de las sociedades transnacionales deriva del principio de responsabilidad colectiva o responsabilidad solidaria, incluso por omisión, de todos aquellos que participan de una manera u otra (acción colectiva) en la provocación de un daño, y hace nacer entre ellos una obligación solidaria. Su fundamento es que todo daño debe dar a la víctima derecho a la reparación que ésta puede reclamar a todos los responsables conjuntamente, o a uno o algunos de ellos y, si éstos son insolventes, al responsable solvente. Esta responsabilidad no se funda en la culpa sino en una obligación objetiva de garantía<sup>119</sup>.

En materia penal se aplica un principio similar de responsabilidad solidaria a las distintas formas de participación criminal (autores, coautores, cómplices, instigadores, etc.).

## A MANERA DE CONCLUSIÓN

Con este trabajo hemos querido dar una visión somera de algunos de los principales aspectos del sistema actual de dominación, explotación y alienación a escala planetaria, y mostrar la paradoja de una sociedad contemporánea en la que los progresos científicos y tecnológicos son deslumbrantes, pero donde las necesidades mínimas de buena parte de la población mundial permanecen insatisfechas, e inalcanzables sus legítimas aspiraciones materiales y espirituales, mientras una ínfima minoría ha confiscado el poder y acumula riquezas hasta la obscenidad.

---

preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal.

El artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela dice: la determinación definitiva de los beneficios de una empresa se hará atendiendo al concepto de unidad económica de la misma, aun en los casos en que ésta aparezca dividida en diferentes explotaciones o con personerías jurídicas distintas u organizada en diferentes departamentos, agencias o sucursales, para los cuales se lleve contabilidad separada. Y el artículo 21 de su Reglamento: Grupos de empresas. Los patrones que integran un grupo de empresas serán solidariamente responsables entre sí respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores. Parágrafo primero: Se considerará que existe un grupo de empresas cuando éstas se encontraren sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que hubieren a su cargo la explotación de las mismas. Parágrafo segundo: se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de un grupo de empresas cuando: a) existiere relación de dominio accionario de unas personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren comunes; b) las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieren conformados, en proporción significativa, por las mismas personas; c) utilizaren una idéntica denominación, marca o emblema; o d) desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su integración.

<sup>119</sup> Véase Roberto Manuel López Cabana, La responsabilidad colectiva en el derecho civil argentino y en el derecho latinoamericano, en *Dalmacio Vélez Sarsfield y el derecho latinoamericano*. Actas del Congreso Internacional celebrado en Roma, 17-19 de marzo de 1986. Publicación del Departamento di Storia e Teoria del Diritto della II Università di Roma. Cedam, Padua, 1991. Roberto Manuel López Cabana y N. L. Lloveras, La responsabilidad colectiva, *El Derecho*, tomo 48, revista jurídica argentina, p. 799.

El estado actual de desarrollo de las fuerzas productivas podría permitir estar vislumbrando el umbral de la sociedad que previó Marx hace un siglo y medio: el ser humano liberado de la necesidad, de los trabajos físicos y del trabajo alienado, y disponiendo de más tiempo libre para dedicarlo a su realización personal<sup>320</sup>.

Pero la tendencia actual es totalmente opuesta, y las elites político-económicas, con su cortejo de economistas, "políticos" y otros especialistas<sup>321</sup>, presentan como inevitables políticas sociales injustas, económicamente irracionales y ecológicamente letales.

Con el pretexto de combatir la crisis y la desocupación, y de "salvar" la seguridad social, en lugar de disminuir el tiempo de trabajo y de aumentar los salarios y las pensiones en función del aumento de la productividad, se congelan o disminuyen los salarios, se aumenta la jornada de trabajo, se introduce la "flexibilidad laboral" que se quiere hacer aceptar con el neologismo de la "flexiseguridad"; se aumenta la edad de la jubilación y se reducen las pensiones y jubilaciones. Y mientras se gasta cada vez más en armamentos y se reducen o se limitan los impuestos a las grandes ganancias (cuya magnitud astronómica a nivel de la elite más rica escapa al entendimiento común) se dice que no hay recursos para la salud pública, la vivienda popular decente y la educación<sup>322</sup>.

Hemos dedicado un largo espacio a la exposición de las normas jurídicas existentes que consagran derechos humanos fundamentales, y a los procedimientos posibles para hacerlas valer, y también a los mecanismos jurídicos civiles y penales que podrían poner algún límite a los abusos del sistema. No porque pensemos que el derecho es la herramienta del cambio social, pero sí porque creemos que puede ser una herramienta de dicho cambio, sobre todo en el sentido de que, bien utilizada, puede ayudar a generar en la gente la conciencia de sus derechos.

Si bien la formulación del derecho es la obra del Estado como representante de las clases dominantes, el derecho vigente no es un simple producto

<sup>320</sup> Véase Karl Marx, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse)* [Contradicción entre la base de la producción burguesa (medida del valor) y su propio desarrollo Máquina, etc.], 12 edición, Siglo XXI, tomo 2, 1989, pp. 227 y ss.

<sup>321</sup> "Ha sido suficientemente señalada la tendencia de la economía y de otras ciencias sociales a adaptarse a las necesidades y a la mentalidad de los miembros ricos de la comunidad", John K. Galbraith, *Voyage dans le temps économique*, Editions du Seuil, Paris, 1995, pp. 114 y 115.

<sup>322</sup> "Estoy convencido que algunas de las cosas que se requieren urgentemente en el terreno práctico, tales como el control central de las inversiones y una distribución distinta de la renta, de manera tal de proporcionar un poder adquisitivo que garantice una salida al enorme producto potencial que permite la técnica moderna; tenderán también a producir un mejor tipo de sociedad... la técnica productiva ha alcanzado un tal nivel de perfección que ha hecho evidentes los defectos de la organización económica que siempre ha existido". John Maynard Keynes, *El dilema del socialismo moderno* (Society for Socialist Inquiry), 13 de diciembre de 1931, en *L'assurita dei sacrifici*, Manifestolibri, Roma, 1995.

de la voluntad de dichas clases, sino que refleja —dicho esquemáticamente— la relación de fuerzas entre las clases sociales en un momento histórico dado. Cuando la relación de fuerzas es más favorable para los grupos subordinados, se sancionan normas de signo positivo: la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos Civiles y Políticos, y otros documentos internacionales relativos al nuevo orden económico mundial producidos en el momento de auge de los países del Tercer Mundo, la legislación laboral (que no es una simple concesión de las clases dominantes) en los periodos de mayor fuerza cuantitativa y cualitativa en la organización de los trabajadores, entre otros.

Cuando la relación de fuerzas es más desfavorable, como es el caso hoy en día, se produce una regresión en las normas, tanto penales, como civiles, laborales, etc. Pero aun en estas circunstancias, la invocación de ciertas normas jurídicas, y en particular punitivas para sancionar a los miembros de las elites económicas que violan derechos fundamentales de los seres humanos, tiene un valor educativo e ideológico ("despertar la alarma social", dice Baratta) para señalar a las cabezas visibles de un sistema social injusto.

Sin embargo, "Despertar la alarma social" es necesario pero no suficiente. De lo que se trata es de que la gente conozca lo mejor posible en todos sus aspectos el sistema de poder vigente y su intrínseca injusticia, inhumanidad e irracionalidad, y de que cada individuo tome conciencia del lugar que ocupa en el mismo, lugar que para la inmensa mayoría de los seres humanos es el de víctima, aunque forme parte de las clases alienadas del consumismo.

Y que comprenda que la solución no es individual, defendiendo su "estatus" de consumidor<sup>323</sup> o tratando de alcanzarlo (el espejismo de la "movilidad social"), sino que es colectiva, y que consiste en transformar radicalmente el sistema.

<sup>323</sup> ... "Como esos bueyes gordos, ciegos, tranquilos, sordos, que pastan bajo el sol meneando el rabo". Nicolás Guillén, *El son entero. Elegía a un soldado vivo*. En *Antología mayor*, segunda edición, editorial Huracán, La Habana, 1969.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alegre Martínez, Miguel A., *La dignidad de la persona como fundamento del ordenamiento constitucional español*, Universidad de León, España, 1996.
- Baigún, David, *Los delitos de peligro y la prueba del dolo*, Depalma, Buenos Aires, 1967.
- , *La responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ensayo de un nuevo modelo teórico)*, Depalma, Buenos Aires, 2000.
- Balanya, Belén, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adan Ma'anit y Erik Wesselius, *Europe Inc. Liaisons dangereuses entre institutions et milieux d'affaires*.

- européens*, Agone Editeur, Marseille, 2 trimestre de 2000. Edición original en inglés: *Europe Inc. Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power*, Pluto Press and CEO, 1999.
- Baratta, Alessandro, *Criminologie critique et critique du droit pénal, introduction à la sociologie juridico-pénale*, Cahier núm. 14, Ecole de Criminologie de l'Université de Montréal, 1983, pp. 207 y 208. Edición en español: *Criminología crítica y crítica del derecho penal*, Siglo XXI, México, 1986.
- Barraclough, Solon y Krishna Guimire, The social dynamics of deforestation in developing countries: Principal Issues and Research Priorities, Discussion paper núm. 16, Unrisd, 1990.
- Bassiouni, Cheriff, *International Criminal Law and Human Rights*, Transnational Publishers, New York, 1996.
- Basso, Pietro, *Temps modernes, horaires antiques. La durée du travail au tournant des millénaires*, Editions Page deux, Lausanne, 2005.
- Bertrand, Agnès, Comment peut-on breveter la vie?, en *Symposium GATT/WTO*, 17-18 de noviembre de 1995, Cetim.
- Biggs, Gonzalo, *La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos*, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, Buenos Aires, 1987.
- Calcagno, Eric, *Los Bancos transnacionales y el endeudamiento externo en la Argentina*, Cuadernos de la Cepal, núm. 56, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1987.
- Carlson, Beverley, *Job losses, multinationals and globalization: the anatomy of disempowerment* (Destrucción de empleos, multinacionales y globalización: la anatomía de la pérdida del poder), serie *Desarrollo Productivo*, núm. 132, Cepal.
- Clapham, Andrew, The Question of Jurisdiction Under International Criminal Law Over Legal Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court, en *Liability of Multinational Corporations Under International Law*, M. Kamminga y S. Zia-Zarifi (eds.), Kluwer Law International, La Haya, 2001.
- Coriat, Benjamin, *L'atelier et le robot*, Christian Bourgeois (ed.), Francia, 1990.
- Chesnais, François, *Tobin or not Tobin*, L'Esprit Frappeur, Paris, 1998.
- , Le capital rentier aux commandes, en *Les Temps Modernes*, núm. 607, Paris, 2000.
- , *La mondialisation du capital*, Syros, Paris, 1994.
- , *La mondialisation financière*, François Chesnais (ed.), Syros, Paris, 1996.
- Childers, Erskine, *United Nations Reform: Relevance of the Southern Perspective*. Publicado por International NGO Network on Global Governance and Democratization of International Relations, Ginebra, 1994.
- Dell, Sydney, *Relations between the United Nations and the Bretton Woods institutions, Uppsala Roundtable on future role of the United Nations*, documento preparado para North South Roundtable, Uppsala, Suecia, 6 a 8 de septiembre de 1989.
- De Selys, Gérard, *Privé de public. A qui profitent les privatisations?*, Ediciones EPO, Bruselas, 1995.

- Diller, J., Responsabilité social et mondialisation: qu'attendre des codes de conduite, des labels sociaux et des pratiques d'investissement?, *Revue Internationale du Travail*, vol. 138, núm. 2, BIT, Ginebra, 1999.
- Doherty, Ann, Les transnacionales et leurs groupes de lobbying, en *Empresas transnacionales y derechos humanos*, AAJ, CETIM y FICAT, Ginebra, 2000.
- Drouin, Michel, *Le système financier international*, Armand Colin, Paris, 2001.
- Dumberry, Patrick, L'entreprise, sujet de droit international? Retour sur la question à la lumière des développements récents du droit international des investissements, *Revue Générale de Droit Internationale Public*, núm. 1, enero-marzo, Editions Pedone, Paris, 2004.
- Eaton, John, *Economía Política*, Amorrotu, Argentina 1971, reimpresión 2004.
- Fierens, Jacques, *La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels*. Contribución al coloquio Instituciones financieras internacionales: la excepción a los derechos humanos, organizado por el Centro de Derecho Internacional de la Universidad de Bruselas, diciembre 1998, en *Revue Belge de Droit International*, 1991-1. Publicado en separata por la Coordination des ONG pour la dignité humaine y el Centro de Derecho Internacional de la Universidad de Bruselas.
- Flórez, Margarita, Héctor Moncayo y Libardo Herreño (eds.), Juicio al libre comercio. Aspectos jurídicos de los TLC, *El Otro Derecho*, núm. 33, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Bogotá, 2005.
- Forton, Jac, *L'impunité au Chili*, Editions du Cetim, Ginebra, 1993.
- Galbraith, John K., *Voyage dans le temps économique*, Editions du Seuil, Paris, 1995.
- Giffard, Anthony, Un pont a travers le Sud: le Systeme Pilote d'Information Technique (SPIT), *Revue Tiers Monde*, Institut d'Etude du Développement Économique et Social, Université de Paris I, tomo XXXV, núm. 138, abril-junio, 1994.
- Gómez del Prado, José L., Algunas tendencias emergentes en torno a las actividades de un nuevo agente no estatal: las compañías privadas militares y de seguridad, en *El Consejo de Derechos Humanos: Oportunidades y Desafíos*, Jessica Almquist y Felipe Gómez Isa (eds.), Cuaderno Deusto de Derechos Humanos, núm. 40, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, 2006.
- Gómez Isa, Felipe, Las empresas transnacionales y sus obligaciones en materia de derechos humanos, *Aportes Andinos*, núm. 12, Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, en <http://www.uash.edu.ec/padh>
- González Berendique, Marco A., *Criminalidad económica. El delito como negocio*, Editorial Jurídica Ediar Conesur, Chile, sin fecha.
- Halimi, Serge y Dominique Vidal, *L'Opinion, ça se travaille... (les médias, l'OTAN et la guerre du Kosovo)*, Agone Editeur, Marseille, 2000.
- Hennebel, Ludovic - CRIDHO, Working Paper 09, L'affaire Total-UNOCAL en Birmanie jugé en Europe et aux Etats-Unis, Université Catholique de Louvain, Faculté de Droit, Centre de philosophie du droit. Cellule de recherche interdisciplinaire en droits de l'homme, 2006.
- Herrera, Amílcar, *Un monde pour tous. Le modèle mondial Latino Américain*, Presses Universitaires de France, 1977.



- Hitchens, Christopher, *Les crimes de Monsieur Kissinger*, ediciones Saint Simon, 2001. En inglés: en la revista *Harper's Magazine*, marzo, 2001, y en libro: *The trial of Henri Kissinger*, Verso, 2001.
- Huet, André y Renée Koering-Joulin, *Droit pénal international*, Presses Universitaires de France, 1993.
- Jacquet, Pierre, Patrick Messerlin y Laurence Tubiana, *Le cycle du millénaire, Rapport pour le Conseil d'analyse économique (Premier Ministre)*, La Documentation Française, Paris, 4 trimestre, 1999.
- Jennar, Raoul Marc, URFIG - [www.urfig.org](http://www.urfig.org) : *L'OMC: de Doha a Hong-Kong via Genève*.
- Jeschek, Hans Heinrich, *Tratado de Derecho Penal, parte general*, 4 edición (traducción de José Luis Manzanares Samaniego), Editorial Comares, Granada, España, 1993.
- , La crisis de la política criminal, *Doctrina Penal*, Buenos Aires, 1980.
- Jiménez de Asúa, Luis, *El Criminalista*, Editorial TEA, Buenos Aires, 1950.
- Jiménez Piernas, Carlos (ed.), XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 1989, *La Responsabilidad Internacional. Aspectos de derecho internacional público y derecho internacional privado*, Alicante 1990.
- Joly, Eva, *Notre affaire à tous*, Les Arènes, Paris, 2000.
- , *Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre?*, Les Arènes, Paris, 2003.
- Justice, Dwight W., Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, El concepto de responsabilidad social de las empresas: desafíos y oportunidades para los sindicatos, en Oficina Internacional del Trabajo, *La responsabilidad social de las empresas: mitos y realidades*, Manuales de Educación Obrera, núm. 130, 2003/1. Keynes, John Maynard, *El dilema del socialismo moderno (Society for Socialist Inquiry)*, 13 de diciembre de 1931, en *L'assurdité dei sacrifici*, Manifestolibri, Roma, 1995.
- Korten, David C., L'échec des institutions de Bretton Woods, en *Le procès de la mondialisation*, Edward Goldsmith y Jerry Mander (dirs.), Fayard, Paris, 2001.
- Labarde, Philippe y Bernard Maris, *La bourse ou la vie, la grand manipulation des petits actionnaires*, Albin Michel, Paris, 2000.
- Larroutourou, Pierre, *Pour la semaine de quatre jours. Sortir du piège des 35 heures*, La Découverte/Poche, Paris, 1999.
- Las actividades de las sociedades transnacionales y la necesidad de su encuadramiento jurídico. Seminario internacional e interdisciplinario celebrado en Celigny, Suiza, el 4 y 5 de mayo de 2001, Asociación Americana de Juristas y el Centro Europa-Tercer Mundo, Ginebra junio de 2001.
- Lascoumes, Pierre, Régulations professionnelles au-delà ou en-deçà du droit? Chartes éthiques et codes de bonne conduite, en *Noir, gris, blanc, les contrastes de la criminalité économique*, Les Cahiers de la sécurité intérieure núm. 36, deuxième trimestre, 1999, Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, La Documentation Française, Paris, 1999.
- Latouche, Serge, La mondialisation démystifiée, en *Le procès de la mondialisation*, Edward Goldsmith y Jerry Mandler (dirs.), Fayard, Paris, 2001.
- Lenin, Vladimir I., *El imperialismo, fase superior del capitalismo* (1916). Primera edición, Editorial Polémica, Buenos Aires, 1975.

- López Cabana, Roberto Manuel, La responsabilidad colectiva en el derecho civil argentino y en el derecho latinoamericano, en *Dalmacio Vélez Sársfield y el derecho latinoamericano*, Actas del Congreso Internacional celebrado en Roma, 17-19 de marzo de 1986. Publicación del Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto della II Università di Roma, Cedam, Padua, 1991.
- López-Rey y Arrojo, *Criminalidad y abuso de poder*, Tecnos, Madrid, 1983.
- Marx, Karl, *El Capital* (1867), tomo I, Siglo XXI Editores, México D.F., 1998.
- , *Manuscritos Económico-Filosóficos* (1844), Grijalbo, México, 1971.
- , *Precio, salario y ganancia* (1865).
- , *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse)* (1857-59).
- McCaffrey, Stephen, Crimes Against the Environment, *International Criminal Law*, Cheriff Bassiouni (ed.), New York.
- Méda, Dominique, *Le travail, une valeur en voie de disparition*, Albin Michel, Paris, 1995.
- Messerlin, Patrick, *La nouvelle Organisation Mondiale du Commerce*, Dunod, Paris, 1995.
- Michalet, C. A., Delapierre, Madeuf y Ominami, *Nationalisations et Internationalisation*, La Découverte/Maspero, Paris, 1983.
- Mignot Lefebvre, Yvonne, Technologies de communication et d'information, une nouvelle donne internationale, *Revue Tiers Monde*, Institut d'Etude du Développement Economique et Social, Université de Paris I, tome XXXV, núm. 138, avril juin, 1994.
- Moore, Michael, *Dégaissez-moi ça! Petite balade dans le cauchemar américain*, La Découverte, Paris, 2000.
- O'Connor, Harvey, *El imperio del petróleo*, América Nueva, México, 1956.
- Palloix, Christian, *L'économie mondiale capitaliste et les firmes multinationales*, François Maspero (ed.), Paris, 1975.
- Papaioannou, Kostas, *Hegel et Marx: l'interminable débat*, Allia, Francia, 1999.
- Pesenti, Antonio, *Lecciones de economía política*, Ediciones de Cultura Popular, La Habana, 1972.
- Queloz, Nicolas, A-t-on encore des raisons de distinguer criminalités économique et organisée?, en *Noir, gris, blanc, Les cahiers de la sécurité intérieure*, núm. 36, Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, La Documentation Française, Paris, 1999.
- Rainelli, Michel, *L'Organisation mondiale du commerce*, La Découverte, Paris, 2000.
- Ribeiro, Silvia, Campesinos, biodiversidad y nuevas formas de privatización, América Latina en Movimiento, núm. 384, 2004.
- Richter, Judith y Jörg Schaaber, *Checklist for "Dialogues" with Industry*, International Baby Food Action Network y Geneva Infant Feeding Association (IBFAN-GIFA), Ginebra, 2002.
- Rigaux, François, Les sociétés transnacionales, en *Droit International, bilan et perspectives*, Mohammed Bedjaoui (rédacteur général), Pedone-Unesco, 1991.
- Rifkin, Jeremy, *Le siècle biotech, le commerce des gènes dans le meilleur des mondes*, La Découverte, 1998. Edición en inglés: *The Biotech Century*, Putnam's Sons, New York, 1998.

- Sahni, Binda P., *Transnational Corporate Liability: Liability for Human Injury*, Cameron May, International Law Publishers, London, 2006.
- Séralini, Gilles-Éric, *Ces OGM qui changent le monde*, Champs Flammarion, Paris, 2004.
- Soros, G., *La crise du capitalisme mondial, l'intégrisme des marchés*, Plon, Paris, 1998.
- Sudre, Frédéric, La notion de "peines et traitements inhumains ou dégradants" dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme, *Revue Générale de Droit Internationale Public*, núm. 4, Octubre-Diciembre, Pedone, Paris, 1984. Existe en separata.
- , La première décision "quart monde" de la Commission européenne des droits de l'homme: une "bavure" dans une jurisprudence dynamique, *Revue Universelle des Droits de l'Homme*, Estrasburgo, 1990.
- , *Misère et Convention Européenne des droits de l'homme*, Cahiers de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme (IDEDH), núm. 3, 1994. Facultad de Derecho de la Universidad de Montpellier.
- , La "permeabilidad" de la Convención europea des droits de l'homme aux droits sociaux, en *Pouvoir et liberté. Etudes offertes à Jacques Mourgeon*, Bruylant, Bruselas, 1998.
- Sweezy, Paul, *Teoría del desarrollo capitalista*, Fondo de Cultura Económica, México, 1945.
- Teitelbaum, Alejandro, Prevención y sanción de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho al desarrollo: el problema de la impunidad (documento de trabajo), Capítulo 2, en *Prevención y sanción de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho al desarrollo: el problema de la impunidad*. Actas de los seminarios organizados en Ginebra en la sede de las Naciones Unidas en noviembre de 1996 y en Madrid, en la Universidad Carlos III, en abril de 1997. Publicación de la Asociación Americana de Juristas y del Centre Europe-Tiers Monde, Ginebra, 1998.
- , *Etat et société civile en Société civile et autorités publiques face à l'indivisibilité des droits de l'homme*, 11ème. Colloque interdisciplinaire sur l'objectivité des droits de l'homme, 12-14 novembre 1998. Documents de séance. Instituto Interdisciplinario de ética y de derechos humanos. Universidad de Friburgo, Suiza, 1998.
- , *La crisis actual del derecho al desarrollo*, Cuaderno núm. 11 del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, España, 2000.
- , *La deuda y las instituciones financieras internacionales frente al derecho internacional*, documento presentado al Seminario Internacional organizado por el Comité por la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM), Bruselas, 10 y 11 de diciembre de 2001.
- , *Responsabilidad de las organizaciones financieras internacionales*, ponencia presentada al V Seminario internacional sobre el derecho y la deuda, organizado por el CADTM, Bruselas, octubre de 2005.
- , Los tratados bilaterales de libre comercio. El ALCA está entre nosotros, en *Juicio al libre comercio. Aspectos jurídicos de los TLC. El Otro Derecho*, núm. 33, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Margarita Flórez, Héctor Moncayo y Libardo Herreño (eds.), Bogotá, 2005.

- Tiedemann, Klaus, *Poder económico y delito*, Ariel, Barcelona, 1985.
- Toussaint, Eric, *La Bourse ou la Vie. La Finance contre les Peuples*. Tercera edición actualizada, 2002 (CADTM).
- Utting, Peter, *The Social Origins and Impact of Deforestation in Central America*, Unrisd, Discussion paper núm. 24, 1991.
- , *The Greening of Business in Developing Countries*, Peter Utting (ed.), edición conjunta UNRISD y Zed Books, 2002.
- , *Business Responsibility for Sustainable Development*, OPG 2, UNRISD, Geneva, 2000.
- Verna, G. y Jacques Bertrand, *Éthique de la production en sous-traitance: le cas de l'industrie du vêtement*, en 10ème. Colloque interdisciplinaire sur l'objectivité des droits de l'homme, 9-11 janvier 1997, Documents de séance. Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme, Université de Fribourg, Suisse.
- Vernon, Raymond, *Sovereignty at Bay, The Multinational Spread of U.S. Enterprises*, Basic Books, New York, 1971.
- Villán Durán, Carlos, *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Trotta, Madrid, 2002.
- Wacquant, Loïc, *Les prisons de la misère*, Raisons d'Agir, Paris, 1999.
- Zamora Cabot, Francisco Javier, Accidentes en masa y "forum non conveniens": el caso Bhopal, en *La responsabilidad internacional. Aspectos de derecho internacional público y derecho internacional privado*. XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 1989. Carlos Jiménez Piernas (ed.), Alicante, 1990.

## **ANEXO**

### **Acusación contra la Transnacional Dyncorp**

# **TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS**

## **CAPÍTULO COLOMBIA**

### **AUDIENCIA BIODIVERSIDAD**

**Cacarica febrero de 2007**

### **ACUSACIÓN CONTRA LA TRANSNACIONAL DYNCORP**

**Elaborada por: Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"**

#### **Contenido**

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
2. DYNCORP EN EL MUNDO
  - 2.1 Nicaragua
  - 2.2 Bosnia
  - 2.3 Haití
  - 2.4 Irak
  - 2.5 Afganistán
3. DYNCORP EN COLOMBIA
4. HECHOS QUE INVOLUCRAN A DYNCORP EN LA COMISIÓN DE DELITOS EN COLOMBIA
5. RESPONSABILIDAD DE LA DYNCORP EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
  - 5.1 Por su actividad mercenaria:
    - 5.1.1 Mercenarismo como crimen premeditado
    - 5.1.2 Mercenarismo es un crimen cometido por sujetos calificados con ánimo de lucro
    - 5.1.3 Mercenarismo como mecanismo de violación de derechos humanos que garantiza que los estados se desatiendan de sus obligaciones internacionales en materia de ddhh.
    - 5.1.4 Mercenarismo es una pieza fundamental para consolidar un poder en contravía del respeto por los derechos humanos y del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.
  - 5.2 Por su responsabilidad en la afectación de comunidades expuestas a la aspersión aérea con químicos
    - 5.2.1 Violación al derecho a la alimentación y al trabajo
    - 5.2.2 Violación a los derechos a la salud y a la vida
    - 5.2.3 Violación al derecho a un ambiente sano
6. FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN



## 1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Dyncorp es una Compañía Privada de Seguridad creada 1946 por un grupo de pilotos estadounidenses, bajo el nombre de "California Easter Airways Inc dedicada al transporte de cargas. A partir de 1987 lleva su actual nombre<sup>1</sup>.

Los datos principales de la empresa disponibles en internet son los siguientes:

### DynCorp International Inc<sup>2</sup>



<b>Type</b>	Public (NYSE: DCP)
<b>Founded</b>	1946
<b>Headquarters</b>	Falls Church, Virginia, United States
<b>Key people</b>	Robert B. McKeon, ChairmanHerbert J. (Herb) Lanese, President, CEO and DirectorJay K. Gorman, EVP and COORobert B. Rosenkranz, President, International Technical ServicesNatale S. DiGesualdo, President, Field Technical Services
<b>Industry</b>	private military contractor, aircraft maintenance
<b>Products</b>	Drug eradication, law enforcement training, logistics, security services; maintenance for aircraft, support equipment, and weapons systems.
<b>Revenue</b>	\$1,967.0 Million USD (2006)
<b>Net income</b>	\$7.2 Million USD (2006)
<b>Employees</b>	14,400 (2006)
<b>Slogan</b>	<i>We are innovation in action</i>
<b>Website</b>	<a href="http://www.dyn-intl.com">www.dyn-intl.com</a>

Según información disponible en Internet, se afirma que en el 2003, Dyncorp fue adquirida por la californiana Computer Sciences Corporation, especializada en tecnologías de la información, muy bien posicionada frente al Pentágono<sup>3</sup>.

También se registra que en 2005 Dyncorp International fue comprada por Veritas Capital Found LP, cuyo presidente es Robert B. McKeon, ubicado en 590 Madison Avenue, 41st Floor New York, NY 10021 Telephone: (212) 688-0020<sup>4</sup>. Algunos afirman

<sup>1</sup> Ejércitos privados: ¿Globalización del mercenario? Por Gorge Montecinos. Centro de Estudios Estratégicos - Universidad Arcis año 4 - número 8 - 2 semestre 2004

<sup>2</sup> Disponible en la página [http://en.wikipedia.org/wiki/dyncorp\\_international](http://en.wikipedia.org/wiki/dyncorp_international)

<sup>3</sup> En: El ejército secreto de mercenarios privados. Por Manlio Dinucci y John A. Marisco. Fecha: diciembre 25, 2006. Disponible en la página <http://www.radiolaprimera.com/articulos/954>

<sup>4</sup> Disponible en la página [www.secinfo.com/d14d5a.v3cgu.htm](http://www.secinfo.com/d14d5a.v3cgu.htm)

que esta empresa tiene su casa matriz en Reston, Virginia, y su Base de Operaciones en Cocoa Beach, Florida<sup>5</sup>.

En internet aparecen varias franquicias de esta empresa, valga decir: DynCorp International Inc, DynCorp International LLC, DynCorp Aerospace Operations LLC, DynCorp International of Nigeria LLC y DynCorp International Services LLC, todas ellas registradas en Estados Unidos<sup>6</sup>, en todo caso, un dato común resaltado en la información disponible, es que uno de sus directivos es el ex director de la CIA James Woolsey.

Según información de su página electrónica oficial<sup>7</sup> DynCorp Internacional es una empresa dedicada al manejo de proyectos y servicios profesionales multifacéticos principalmente en dos áreas: siendo proveedor de apoyo a instituciones gubernamentales civiles y militares y, manteniendo un importante negocio comercial en aviación, desarrollo de infraestructura, seguridad, y logística, que incluye proyectos para construir y manejar instalaciones aéreas regionales de las Fuerzas Armadas de EEUU en todas partes del mundo y también para gobiernos extranjeros que utilizan aviones de EEUU.

Como parte de su desarrollo corporativo, esta empresa amplió sus actividades al manejo de proyectos en seguridad. "Hasta la fecha, hemos reclutado, entrenado, y desplegado más de 5,000 guardianes de paz y entrenadores de policía para el Departamento de Estado a 11 países, incluyendo a Haití, Bosnia, Afganistán, e Irak. (...) Proveemos apoyo importante para proteger diplomáticos estadounidenses y instalaciones diplomáticas, así como a líderes aliados en países de alto riesgo. (...) Proveemos servicios para erradicar cultivos narcóticos ilícitos y para apoyar esfuerzos de incautar drogas en Suramérica y Afganistán. (...) Estamos involucrados en el retiro y destrucción de minas antipersonales y armas livianas en Afganistán. (...) Operamos en todos los continentes, salvo Antártida. (...) Actualmente contamos con más de 14,000 empleados en más que 30 países<sup>8</sup>.

Al reseñar su evolución corporativa, refieren cinco momentos. El primero de ellos, 1951 cuando su actividad se limitaba al mantenimiento de aeronaves. El segundo, 1994 cuando el Departamento de Estado de EEUU les propuso entrenar y desplegar a 120 civiles guardianes de la paz en el marco del compromiso de ese país en las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Haití, actividad que continúan realizando, ya que desde ese año han "reclutado, entrenado, y desplegado más de 5,000 oficiales para desempeñar funciones policíacas civiles o entrenar policía civil para el Departamento de Estado".

<sup>5</sup> LOS FERROS DE LA GUERRA. Estados Unidos encarga a empresas de mercenarios las operaciones sucias en América Latina. En: Rebelión. Disponible en la página: [http://209.85.165.104/search?q=cache:omsafvwmj:www.lajiribilla.co.cu/2002/n60\\_junio/elgranizo.html+dynacorp+es+c%3a%1ndalo+contras&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=10&lr=lang\\_es](http://209.85.165.104/search?q=cache:omsafvwmj:www.lajiribilla.co.cu/2002/n60_junio/elgranizo.html+dynacorp+es+c%3a%1ndalo+contras&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=10&lr=lang_es)

<sup>6</sup> Disponible en [www.secinfo.com/5/search.asp?Find=dynacorp](http://www.secinfo.com/5/search.asp?Find=dynacorp)

<sup>7</sup> En la dirección electrónica <http://www.dyn-intl.com/>

<sup>8</sup> Ibidem

mento de Estado en Haití, Albania, Bosnia, Eslovenia, Kosovo, Timor Oriental, Liberia, Macedonia, Serbia, Palestina, Afganistán, y Irak<sup>90</sup>.

El tercero en 2000, con la creación de un sistema de información empresarial denominado *DynInsight*, que ofrece a sus usuarios acceso a información en tiempo casi real.

El cuarto, en 2005 al ofrecer servicios mixtos referidos a última tecnología y personal altamente capacitado en controles perimetrales, protección y otros, que al combinarse mejoran la oferta de la industria de la seguridad.

Finalmente, en 2006 utilizaron tecnología aérea para el control de incendios forestales en los Estados Unidos.

Como se ve, su actividad es tan variada como su tamaño lo permite, teniendo en cuenta que tiene casi quince mil empleados, con presencia en todos los continentes y con un movimiento anual de dos mil millones de dólares.

En Colombia Dyncorp aparece registrada bajo el nombre Dyncorp Aerospace Operation (UK) LTD., con certificado de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio bajo el Número de Identificación Tributaria (NIT) 830078749-4 y matrícula 01050209, con domicilio en el Reino Unido y como sucursal aparece la ciudad de Bogotá, en la dirección Av. 82 No. 10 – 62 Piso 5.

## 2. DYNCORP EN EL MUNDO

Cuando Veritas Capital Found terminaba las gestiones de compra de la Dyncorp emitió un comunicado de prensa en el que describió las actividades de la empresa así:

*“Actualmente, DynCorp International proporciona servicios a través de dos divisiones operativas: Servicios de Entrenamiento en el Terreno (SET) y Servicios Técnicos Internacionales (STI). SET proporciona servicios de aviación y apoyo ingeniero y logístico, desde mantenimiento de flotas hasta modificaciones y revisiones de sistemas de armamento, aviones, y equipo de apoyo para el Departamento de Defensa. Los Equipos Contratados en el Terreno (ECT) de esta división despliegan equipos de personal a clientes para complementar la mano de obra de un cliente. SET también proporciona servicios domésticos de aviación a los propietarios y operadores de grandes flotas de aviones, incluyendo la Base Andrews de la fuerza aérea, Fort Hood, y Fort Columbus en EEUU<sup>91</sup>”.*

Conforme a lo anterior, se tiene que Dyncorp opera prestando servicios mercenarios en materia de seguridad para el país que así lo requiera, siendo su especialidad la del mantenimiento, pilotaje de aeronaves y capacitación de personal militar.

Los ingresos de Dyncorp provienen mayoritariamente de la contratación de sus servicios con agencias de seguridad de los Estados Unidos, entre las que se cuenta el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, la DEA y el FBI, el Departamento de prisiones y el Ejército estadounidense<sup>92</sup>. Otras agencias asesoradas son

<sup>90</sup> Ibidem

<sup>91</sup> Disponible en [www.veritascapital.com/news/press\\_releases/2004/12.13.04.html](http://www.veritascapital.com/news/press_releases/2004/12.13.04.html)

<sup>92</sup> Jorge Montecinos. Ob cit. Disponible en la página [www.cce-chile.org/publicaciones/revista/rev08/rev08-3.pdf](http://www.cce-chile.org/publicaciones/revista/rev08/rev08-3.pdf)

la Administración Federal de Aviación, la Comisión de Seguridades y Cambio, y los Centros para Control de Enfermedades<sup>12</sup>. *"Bajo su responsabilidad está el mantenimiento de 80% de las naves de la NASA y 60% del parque de helicópteros del ejército estadounidense"*<sup>13</sup>.

Según información disponible, Dyncorp actualmente tiene contratos para asesorar a los gobiernos iraquí y haitiano en el entrenamiento de sus fuerzas policiales, agencias judiciales, e instituciones carcelarias; miembros de esta corporación se encargan de la seguridad privada del presidente afgano Hamid Karzai, constituyen además la mayor parte de la policía en Bosnia y se encargan de vigilancia en puestos fronterizos entre Estados Unidos y México<sup>14</sup>.

Su presencia en los países objeto de atención militar de los Estados Unidos (sea esta de baja intensidad o en escenarios abiertamente intervenidos por este país) ha tenido un récord importante de escándalos que los vinculan directamente con la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos.

Algunos de los hechos más importantes ocurrieron en los años ochenta en Nicaragua y los involucra en el escándalo Irán – Contras; en la década de los noventa en Haití, Dyncorp habría sido una pieza fundamental para la intervención realizada por los Estados Unidos en ese país; en Bosnia, miembros de la Dyncorp realizaron tráfico sexual de menores sin que por su carácter de inmunidad hayan sido juzgados ante alguna corte en el mundo.

Para efecto de ilustración se reseñan esos episodios conservando el texto de las fuentes encontradas.

## 2.1 Nicaragua, años ochenta

Una subcontratista de Dyncorp se involucró en el conflicto interno nicaragüense: *"La empresa Eagle Aviation Services and Technology, Inc. -EAST-, subcontratada por la DynCorp, ayudó al teniente coronel Oliver North, durante el escándalo Irán – Contras de los años ochenta, a transportar armas y municiones para los insurgentes nicaragüenses en su lucha contra el gobierno sandinista"*<sup>15</sup>.

Según información más detallada<sup>16</sup> *"en la 'poca de los 80's, EAST y su fundador Richard Gadd, ayudaron a North, entonces oficial del Consejo de Seguridad Nacional, a suministrar armas y municiones clandestinamente a la Contra nicaragüense"*

<sup>12</sup> Según información disponible en <http://www.corpwatch.org/article.php?id=7867>.

<sup>13</sup> Contratados por Estados Unidos. Mercenarios en Colombia: una guerra ajena. Por Sandra Bibiana Flórez. Disponible en la página <http://www.rebelion.org/dohh/colombia120901.htm>.

<sup>14</sup> Según información disponible en <http://www.corpwatch.org/article.php?list-type&type=18>.

<sup>15</sup> La tercerización de los conflictos. Por el Prof. Dr. Adalberto C. Agosino. Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales. Disponible en la página: <http://www1.hond.gov.ar/dependencias/ieeri/ennee/vii/tercerizacion.htm>.

<sup>16</sup> Fuente: Associated Press. Por Ken Guggenheim – 05 jun 01. Traducción al español realizada por el Equipo Nizkor el 01 jul 01. Tomado de: LA ESTADOUNIDENSE EAGLE AVIATION SERVICES AND TECHNOLOGY INC ESTUVO IMPLICADA EN EL ABASTECIMIENTO DE ARMAS Y DROGAS. Disponible en la página <http://www.informativos.net/noticia.aspx?noticia=32492>.

*al mismo tiempo que el Congreso había prohibido al Gobierno el suministro de armas letales.*

*North también preparó todo para que otras compañías de Gadd consiguieran la adjudicación de contratos del Departamento de Estado para el envío de ayuda humanitaria lícita. Eso dio lugar a lo que el asesor independiente sobre el Irán-Contra, Lawrence Walsh, etiquetara de "una rara ocasión en la que un programa del Gobierno estadounidense involuntariamente proporciona cobertura a una operación privada encubierta".*

*La revelación de la operación de armas para la Contra, que había sido parcialmente financiada con la venta de armas a Irán, llevó a la convicción de que estaban involucrados altos funcionarios de la administración Reagan. Gadd testificó en el caso Irán-Contra acogiéndose a la cláusula de inmunidad frente a cualquier tipo de enjuiciamiento y ni él ni EAST fueron acusados de ilegalidades.*

*(...) En su testimonio sobre el escándalo Irán-Contra, Gadd dijo que EAST fue una de las muchas compañías que él formó después de que se retirara en 1982 como teniente coronel de la Fuerza Aérea, donde se especializó en operaciones encubiertas.*

*En los años 80, los rebeldes de la contra trataron de derrocar al gobierno nicaragüense sandinista de izquierdas. La administración Reagan apoyó a la Contra, percibiendo a los Sandinistas como una amenaza marxista para Centroamérica. Los demócratas, que controlaban el Congreso, creyeron que los Estados Unidos debían mantenerse fuera del conflicto y no permitir que los funcionarios de los Estados Unidos proveyeran ayuda letal.*

*North acudió al General (RE) Richard Secord para tender un puente privado de armas a la contra. Secord contrató a Gadd en 1985 para que se encargara de la supervisión de la entrega de las armas. A través de EAST, Gadd ayudó en la adquisición de aviones para llevar armas y municiones de Portugal a Centroamérica, y arrojarlas desde el aire directamente a los contras. EAST también construyó una pista en Costa Rica cerca de la frontera nicaragüense. EAST recibió US \$ 550.000 por su trabajo encubierto, según el reporte final de Walsh<sup>11</sup>.*

## 2.2 Bosnia - 1993

En los Balcanes, DynCorp fue encargada de la capacitación de la fuerza policial en Bosnia. Al mismo tiempo, se descubrió a varios de los empleados de esta transnacional realizando actos de corrupción, pero más grave aún, traficando con fines sexuales a niñas procedentes de Rusia y Rumania a propósito de las denuncias de uno de sus empleados, Ben Johnston.

"En 1990, empleados de DynCorp en Bosnia fueron acusados de comprar y traficar niñas, para utilizarlas como esclavas sexuales. Según el acta del juicio llevado a cabo en Texas en referencia al hombre del que había sido mecánico aeronáutico de DynCorp, se afirma:

<sup>11</sup> Ibidem.

"a finales de 1999 Johnston supo que los empleados y los supervisores de DynCorp estaban mostrando un comportamiento perverso, ilegal e inhumano [y] estaban comprando armas ilegales, mujeres, pasaportes falsos y [participando en] otros actos inmorales. Johnston fue testigo de cómo sus compañeros de trabajo y sus supervisores literalmente compraban y vendían mujeres para su disfrute personal, y los empleados alardeaban de la edad y los talentos de las esclavas que habían comprado".

Según revela la periodista de investigación Kelly Patricia O'Meara, en vez de agradecer y recompensar el esfuerzo de Johnston para poner fin a este comportamiento, DynCorp le despidió, obligándole a ser custodiado para su propia protección por parte de la División del Ejército para Investigaciones Criminales (Army Criminal Investigation Division -CID) de EEUU hasta que los investigadores pudieran sacarle a salvo de Kosovo y devolverle a EEUU.

(...) Johnston marcó los límites cuando se negó a comprar niñas y mujeres como esclavas sexuales.

"Había oído hablar de prostitución desde el primer momento, pero pasó algún tiempo hasta que comprendí que estaban comprando a esas niñas. Les dije que no estaba bien y que era lo mismo que la esclavitud, que no se pueden comprar mujeres. Pero compraron los pasaportes de las mujeres y [entonces] se convertían en sus propietarios y se las vendían entre ellos."

"Ninguna de las niñas -afirma Johnston-, era de Bosnia. Procedían de Rusia, Rumania y otros lugares, y eran importadas por DynCorp y por la mafia de Serbia. Ellos decían cosas como: "tengo que ir a Serbia este fin de semana a recoger a tres niñas". Hablaban de ello y fanfarroneaban sobre cuánto les pagaban (normalmente entre 600 y 800 dólares). Según declaraciones juradas ala CID de Kevin Werner, empleado de DynCorp:

"durante mis últimos seis meses he conocido a un hombre al que llamábamos 'Debeli', que es la palabra Bosnia para gordo. El es el operador de un club nocturno llamado Harley's en el que hay prostitución. Las mujeres son vendidas por horas, por noches o permanentemente". Werner admitió haber comprado a una mujer para sacarla de la prostitución y nombró a otros empleados de DynCorp que también habían pagado para comprar a otras mujeres.

Según el informe de la investigación, bajo el Párrafo 5 del Acuerdo de la OTAN entre la República de Bosnia-Herzegovina y Croacia sobre el estatus de la OTAN y de su personal, los contratistas "no eran inmunes a ser juzgados localmente si los actos cometidos estaban más allá de sus tareas oficiales".

La periodista Kelly Patricia O'Meara afirma que es increíble que el caso del CID se cerrara en junio de 2000 y volviera a las autoridades de Bosnia. DynCorp dice que llevó a cabo su propia investigación y que Hirtz y Werner fueron despedidos por DynCorp y devueltos a los EEUU pero que no fueron procesados.

\* (...) Christine Dolan, fundadora de la Campaña Humanitaria Internacional Contra la Explotación de Niños/as, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, declaró a Insight: "Lo que me sorprende es que DynCorp ha podido mantener su contrato. EEUU dice que quiere erradicar el tráfico de personas, ha creado una oficina



en el Departamento de Estado con este propósito y, aún así, las autoridades que hacen los contratos desde el Gobierno o desde el Estado no han entrado a hacer una investigación sobre este asunto<sup>18</sup>.

También se tiene noticia de que hubo otras denuncias, que de la misma manera quedaron en la impunidad. *"Kathryn Bolkovac, una observadora de la fuerza policiaca de la ONU, presentó una demanda en Gran Bretaña en 2001 en contra de DynCorp por haberla echado después de que ella denunció que entrenadores de policía de DynCorp estaban pagando por prostitutas y participando en el tráfico de mujeres. Al final muchos empleados de DynCorp tenían que renunciar bajo sospecha de actividad ilegal, pero no pudieron adelantar procesos penales, puesto que gozan de inmunidad en Bosnia"*<sup>19</sup>.

### 2.3 Haití - 1994

Estados Unidos jugó un papel protagónico en los hechos ocurridos en Haití hacia 1994, después del primer golpe en contra de Presidente Aristide y las empresas transnacionales de seguridad, entre ellas DynCorp, obtuvieron su tajada, capacitando a la futura fuerza policial que garantizaría el orden en ese país, diseñado desde Washington<sup>20</sup>.

*"Después de tres años de régimen militar, EU intervino en 1994, enviando a Haití 20 mil soldados de ocupación y "mantenedores de la paz". Esta intervención militar no pretendía restaurar la democracia, sino al contrario: se realizó para prevenir una insurrección popular contra la junta militar y sus cohortes neoliberales. En otras palabras, buscaba asegurar la continuidad política.*

*(...) las tropas estadounidenses permanecieron hasta 1999. Las fuerzas armadas haitianas fueron desbandadas y el Departamento de Estado contrató a la compañía de mercenarios DynCorp para que prestara "asesoría técnica" en la reestructuración de la policía nacional haitiana.*

*DynCorp siempre había funcionado como fachada de las operaciones encubiertas del Pentágono y la CIA. Bajo asesoría de esa empresa, ex tonton macoutes y ex oficiales del ejército participantes en el golpe de Estado de 1991 fueron incorporados a la policía"*<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Estados Unidos encarga a empresas de mercenarios las operaciones sucias en América Latina. Por Pascual Serrano. Resumen Latinoamericano, 5 de julio 2002. Centre de investigación sobre Globalización (CIG), [globalresearch.ca](http://globalresearch.ca), 9 de julio 2002. Disponible en la página electrónica: <http://www.globalresearch.ca/articles/ser207a.html>

<sup>19</sup> Disponible en la página electrónica: <http://www.corpwatch.org/article.php?id=type&type=18>

<sup>20</sup> "En ese contexto, conviene tomar en cuenta la opinión de un observador insuspechado, Jeffrey Sachs, un profesor de las universidades de Columbia y Harvard, que militó en las filas del pensamiento único de signo neoliberal y hoy asesora al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan. Según Sachs, el "caos" en Haití fue creado por Washington "de manera deliberada, cínica y resuelta" (Jeffrey Sachs). En: Las mentiras de Washington", Reforma, México, 27 de febrero del 2004. Citado por Carlos Fazio, "regresan los tonton macoutes de la mano de Washington". Disponible en la página electrónica: <http://www.uom.edu.mx/trabajadores/41fazio.htm>

<sup>21</sup> Golpe de Estado con patrocinio de EU. La desestabilización de Haití. Por Michel Chossudovsky. Disponible en la página electrónica: <http://www.jornada.unam.mx/2004/03/06/per.haiti.html>

Este caso es demostrativo de la característica mercenaria de la Dynacorp, que cumple sus labores de "capacitación" con total indiferencia de los escenarios políticos, humanitarios ni éticos.

## 2.4 Irak

En la actualidad, la segunda fuerza de ocupación en Irak está representada por miembros de empresas transnacionales de seguridad de índole mercenaria<sup>22</sup>. *"Las principales compañías de mercenarios norteamericanos que actúan en Irak son Black Water Co, DynCorp, CACI International (con casa matriz en Virginia) y Titan S.A. (con casa matriz en California). Está demostrado que mercenarios contratados por las dos últimas tomaron parte en los hechos de torturas a prisioneros de guerra iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, pero sus actuaciones fueron archivadas por no estar sujetos a la justicia militar"*<sup>23</sup>.

Dynacorp habría recibido contratos por un valor de US 750 millones, para entrenar a la policía iraquí, tal y como ya lo había hecho en Bosnia y Haití. La información disponible resalta que la policía iraquí, entrenada por empresas privadas de seguridad como DynCorp, se han convertido en pieza clave de la guerra sucia que se vive en la actualidad, en vez de ser el cimiento de la democracia tal y como había sido proclamado por autoridades estadounidenses. De hecho, Investigadores federales de EEUU están examinando denuncias de fraude cometido por parte de empleados de DynCorp, incluyendo la venta de municiones destinado para la policía iraquí<sup>24</sup>.

Recientemente Stuart Bowen, el inspector general especial para la reconstrucción iraquí, de los Estados Unidos señalaba que la intervención en Irak había costado más de 300 mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses, y varios de estos millones, se habrían diluido en actividades fraudulentas y corruptas. *"Según el informe,*

<sup>22</sup> "En el marco de la tercerización de los servicios en las unidades militares en operaciones exteriores, se firmaron más de 3.000 contratos entre los sucesivos gobiernos y las SMP, en el periodo 1994-2004, por un monto superior a los 300.000 millones de dólares. Las firmas involucradas fueron Dynacorp ([www.dynacorp.com](http://www.dynacorp.com)), Military Professional Resources Inc. (MPRI - [www.mpri.com](http://www.mpri.com)) y Kellogg Brown and Root (KBR). El ingreso de esas firmas implicó un aumento progresivo de personal privado que trabaja junto a las fuerzas armadas estadounidenses (logística, mantenimiento, ingeniería, ingeniería de los sistemas de armas) en el campo de batalla. Durante la primera Guerra del Golfo, en 1991, la proporción era de 1 actor privado por cada 100 soldados; mientras que en 2003 pasó a ser de 1 por cada 10 soldados". Hacia el mercenariado empresarial. Empresas militares privadas en el caos iraquí. Por Sami Makki\* *El Diplo / Rebelión.org*, 11 de noviembre de 2004. Traducción: Carlos Alberto Zito CSCAweb ([www.nodo50.org/cscaweb](http://www.nodo50.org/cscaweb)), 12 de noviembre de 2004. Disponible en la página: [http://www.nodo50.org/cscaweb/agenda2004/iraqi/makki\\_12.11.04.html](http://www.nodo50.org/cscaweb/agenda2004/iraqi/makki_12.11.04.html)

<sup>23</sup> PRINCIPALES VIOLACIONES DE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DURANTE SU INVASIÓN A IRAK. Por Lic. Guillermo Benítez Valdés. Profesor instructor departamento de derecho. Universidad de Holguín. Disponible en la página electrónica: <http://www.traducidos.com/documentos/violacionesddhheeueneraq.doc>

<sup>24</sup> Según información disponible en <http://www.corpwatch.org/article.php?id=13600>

<sup>25</sup> En: millones de dólares despilfarrados en Irak, dice informe. Disponible en la página <http://www.milenio.com/index.php/2007/01/31/36733/>

*el Departamento de Estado pagó 43.8 millones de dólares al contratista DynCorp International para un campamento de entrenamiento policial frente al Palacio Adnan, de Bagdad, que ha estado vacío desde hace meses*<sup>25</sup>.

Al mismo tiempo, se destaca la inmunidad que tienen dichos contratistas frente a autoridades de los países en los que operan, como en Irak. “Brig. Gen. Karl Horst, subcomandante de la III División de la Infantería encargado con la seguridad de en Bagdad, declaró: “Estos tipos corren sueltos en este país y hacen cosas estúpidas. Nadie tiene autoridad sobre ellos, así que no se puede disciplinarlos cuando aumentan el uso de fuerza. Disparan a personas, y otro tiene que manejar las consecuencias. Eso pasa en todas partes.”<sup>26</sup>

## 2.5 Afganistán

En Afganistán, DynCorp se encarga de entrenamiento del ejército de ese país y tiene un contrato para la protección privada del presidente Hamid Krzai.

*“DynCorp recibe la mayor parte de los 1.1 mil millones de dólares para entrenar la policía iraquí en Afganistán. Según Gregory Lagana, vocero para DynCorp, en los años 2004, 2005, y 2006, DynCorp recibió un total de 1.6 mil millones de dólares para su trabajo de entrenamiento y seguridad en Irak y Afganistán, que implicaba 30% de los ingresos de la empresa durante este tiempo. Desplegó 377 asesores de policía en Afganistán y casi la mitad del total de asesores desplegados de EEUU en Irak.*

*Ali Jalali, ministro del interior de 2002 a 2005 en Afganistán, denunció que los asesores que llegaron al país no tenían el perfil necesario, que no eran idóneos para el trabajo*<sup>27</sup>.

En este país se es relevante un episodio en el cual miembros de DynCorp atacaron a un funcionario del gabinete de ese país: “Crispin Thorold, un corresponsal de BBC vio a uno de eso contratistas dar una bofetada en la cara al ministro afgano de transporte”<sup>28</sup>.

Su poder llega a tal nivel que pueden darse el lujo de atacar a funcionarios públicos de los países donde opera, en total impunidad.

## 3. DYNACORP EN COLOMBIA

Según la información disponible en la web la DynCorp “se presentó en Colombia como una Sociedad Británica, con sede en Aldershot Hampshire. En los contratos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América aparece como una

<sup>25</sup> Según se desprende de información disponible en <http://www.corpwatch.org/article.php?id=12751>

<sup>27</sup> Según se desprende de información disponible en <http://www.corpwatch.org/article.php?id=14256>

<sup>28</sup> Según información disponible en la página <http://news.bbc.co.uk/1/hi/fr/12/bi/south-asia/3743188.stm>

*empresa estadounidense que tiene su Casa Matriz en Reston, Virginia y su Base de Operaciones en Cocoa Beach, Florida*<sup>29</sup>.

Según la información disponible en la Cámara de Comercio de Colombia Dynacorp Aerospace Operation (UK) LTD., tiene como domicilio el Reino Unido y como sucursal la ciudad de Bogotá. Según el registro esta empresa tiene como objeto social:

*"Tenga como objeto social suministrar servicios de apoyo para programas bilaterales contra los narcóticos entre el gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República de Colombia y, en desarrollo de este propósito, la sucursal adquiera, posea, grave y enajene cualquier clase de bienes muebles o inmuebles, gire, acepte, negocie, desciente, etc., toda suerte de instrumentos negociables y otros documentos civiles y comerciales que sean necesarios o apropiados para el logro de sus objetivos, adquiera una participación sea o no como accionista o fundador, en otras compañías, tome dinero en préstamo, con o sin garantías reales o personales y en general, adelante toda suerte de actos o contratos directamente relacionados con el objeto social principal de esta compañía en Colombia*<sup>30</sup>.

Aunque en Colombia actúan otras empresas transnacionales de seguridad bajo es quemas de operación mercenarios, tales como ARINC, Grupo Rendon, ACS Defense, Lockheed- Martin, Northrop Grumman Corp., ManTech, TRW, Matcom, ALION y California Microwave Systems<sup>31</sup>, sin duda alguna, Dynacorp es de las más representativas y con mayor antigüedad en Colombia, es de las mejores libradas en la venta de sus servicios para el Plan Colombia, y es la que al mismo tiempo ha estado más comprometida en la comisión de delitos en este país y con las violaciones a derechos humanos generadas a propósito de la actividad de aspersión aérea que realizan.

Según información del Ministerio de Defensa de Colombia

*"el personal militar y contratistas de los Estados Unidos de América que se encuentran en Colombia desempeñan labores de apoyo a los diferentes programas que se vienen implementando entre ambos Gobierno en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo,*

*El apoyo de este personal se traduce en entrenamiento, equipamiento de las unidades tácticas y en el diseño de obras de infraestructura de apoyo a las actividades antimarcóticas de la fuerza pública.*

*Así mismo, en la capacitación e instrucción para el personal de la Fuerza Pública en materia de Derechos Humanos y DIH, como también en el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar.*

<sup>29</sup> Dynacorp. Disponible en [www.terrorfileonline.org/es/index.php/dynacorp](http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/dynacorp). Se hace la misma referencia "en Colombia Dynacorp está reconocida como una sociedad británica, con sede en Aldershot Hampshire." En: Estados Unidos encarga a empresas de mercenarios las operaciones sucias en América Latina. Por Pascual Serrano. Resumen Latinoamericano, 5 de julio 2002. Centre de Investigación sobre Globalización (CIG). [globalresearch.ca](http://globalresearch.ca), 9 de julio 2002

<sup>30</sup> Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio Dynacorp Aerospace Operation (UK) Ltd., Matricula D1050209, Número de Identificación Tributaria (NIT) 830078749-4

<sup>31</sup> Guerra privada en Colombia. Por Hernando Calvo Ospina. Le Monde Diplomatique. Disponible en la página: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=7764>

*Igualmente, se recibe por parte de este personal apoyo para fortalecer y mejorar las capacidades del sistema logístico de la fuerza pública (SILOG), en el mantenimiento y alistamiento de las aeronaves destinadas a la lucha contra el narcotráfico y el mejoramiento de las unidades de Sanidad, en el teatro de operaciones a través del Grupo Aéreo Trauma y Rescate (GATRA)*<sup>32</sup>.

El 27 de octubre de 2000 Dyncorp fue registrada con representación legal de Robert B. Allenger, Jr., domiciliado en Texas en calidad de presidente de esta empresa. El 26 de noviembre de 2003 aparece como representante legal la colombiana Margarita Quijano Guerra. El 2 de noviembre de 2005 Ketih Allen es nombrado como Liquidador principal de Dyncorp Aerospace Operations UK LTD y otorga poder a ciudadanas colombianas para adelantar la terminación de “los contratos laborales de los empleados de la sucursal”. En esa fecha aparece el último registro donde nombra a Curtis Adams y Robert Knepper a fin de adelantar gestiones tributarias ante diferentes autoridades colombianas.

Se afirma Dyncorp hizo presencia en el país hacia 1993<sup>33</sup> o a 1994, como parte de los convenios binacionales cooperación firmados con los Estados Unidos.

Estos instrumentos se remontan al tratado multilateral “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”, adoptado en Río de Janeiro en 1947 en el marco de la Conferencia Interamericana para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, momento en el que se consideraba “*Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las Repúblicas Americanas se halla esencialmente ligada a sus ideales democráticos y a su voluntad de permanente cooperación para realizar los principios y propósitos de una política de paz*”<sup>34</sup>.

Posteriormente, en 1952 se suscribe en convenio bilateral de “Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”<sup>35</sup>, y allí se acuerdan en el artículo 5 las garantías de las misiones militares mutuas:

*“Cada uno de los dos Gobiernos, acepta recibir personal del otro Gobierno para el cumplimiento de las obligaciones de este Gobierno, relacionados con la ejecución de este acuerdo. A dicho personal se le concederán facilidades para observar el adelanto de la ayuda suministrada de conformidad con el presente Acuerdo. Ese personal que se compondrá de nacionales del otro país, inclusive el que se asigne de manera temporal, actuará en sus relaciones con el Gobierno del país a que haya sido asignado como parte de la Embajada y bajo al dirección y jurisdicción del Jefe de la Misión Diplomática del Gobierno del país que lo envía y se le otorgarán todas las prerrogativas e inmunidades que la costumbre internacional reconoce al personal del rango correspondiente de una Embajada. (...)”*

<sup>32</sup> Oficio No. 17737 del 24 de abril de 2006, suscrito por Jorge Mario Eastman Robledo, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Defensa.

<sup>33</sup> Los actores disimulados de la privatizada guerra de Colombia. Por Hernando Calvo Ospina. Le Monde Diplomatique. Noviembre 2004.

<sup>34</sup> Texto del tratado. Disponible en <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html>

<sup>35</sup> Acuerdo de asistencia militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. Bogotá abril 178 de 1952, suscrito por Gonzalo Restrepo Jaramillo y Capus M. Wraynick, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América.

En el marco de la política desplegada desde Estados Unidos contra el comunismo a nivel mundial, se suscribe en 1962 el "Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América", donde se repite la cláusula de inmunidad anterior.

*"Artículo 3. El Gobierno de Colombia recibirá una misión especial y su personal para desempeñar los deberes del Gobierno de los Estados Unidos de América conforme al presente Convenio y considerará a dicha misión especial y a su personal como parte de la Misión Diplomática del Gobierno de los Estados Unidos de América en Colombia, con el fin de concederles los privilegios e inmunidades que se conceden a esa misión y a su personal de igual rango"*<sup>36</sup>

En 1974, se suscribe el "Acuerdo entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una misión del Ejército, una misión naval y una misión aérea de las fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia", con el objeto de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea colombianas. En el artículo 12 de dicho acuerdo, se conviene:

*"Artículo 12. Los miembros de las misiones militares de Estados Unidos de América seguirán regidos, para efectos disciplinarios, por los reglamentos de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América"*<sup>37</sup>

Este acuerdo abre la posibilidad de que las Misiones Militares de Estados Unidos en Colombia estén integradas no exclusivamente por integrantes de las fuerzas militares de ese país, sino también por personal "no acreditado", esto es, que se autorice "la presencia en el país de otro personal complementario de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América, que sea estrictamente necesario para tender funciones propias de la administración de las Misiones Militares, en calidad de NO ACREDITADO"<sup>38</sup>

En septiembre de 2000, y considerando "que el Gobierno de Estados Unidos de América acepta suministrar asistencia financiera, material, económica, técnica y afín al Gobierno de la República de Colombia, diseñada para fortalecer la capacidad del Gobierno de Colombia en apoyar la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en la cual tanto Colombia como Estados Unidos son signatarias, la Estrategia Nacional del Plan Co-

<sup>36</sup> Texto del Convenio General para ayuda económica, técnica y afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Firmado en Bogotá el día 23 de julio de 1962 entre José Joaquín Caicedo Castilla y Fulton Freeman.

<sup>37</sup> Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una misión del ejército, Una misión naval y una misión aérea de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, suscrito por Indalecio Liévano Aguirre y Viron Meter Vaky el 7 de octubre de 1974 en Bogotá.

<sup>38</sup> Artículo 5 del acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una misión del ejército, una misión naval y una misión aérea de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, suscrito por Indalecio Liévano Aguirre y Viron Meter Vaky el 7 de octubre de 1974 en Bogotá. En el artículo 3 de este acuerdo se establece que el personal acreditado es un oficial de las fuerzas militares de los Estados Unidos en servicio activo, un jefe de misión militar con grado de Coronel y un Capitán de Navío.



lombia, y, el Plan Nacional de la República de Colombia para combatir las drogas.<sup>39</sup>, se suscribe el “Anexo al Acuerdo General sobre Asistencia Económica, Técnica y otra asistencia relacionada entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América”.

Este convenio garantiza la puesta en marcha del Plan Colombia. En 1998 el entonces presidente Andrés Pastrana, propuso como uno de los ejes de su programa de gobierno el “Plan Colombia, cambio para construir la paz”, enfocado en los temas de paz, narcotráfico y recuperación económica.

Estos se desarrollarían a través de los ejes fortalecimiento institucional, atención humanitaria de cara a la población desplazada forzosamente, proyectos productivos, entre otros, para población cultivadora de la hoja de coca, promoción de la sostenibilidad ambiental y, finalmente el desarrollo de una “infraestructura para la paz”, centrada en un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC.

Tan ambicioso proyecto sólo podía ser llevado a cabo bajo el postulado de la corresponsabilidad de la comunidad internacional para con Colombia principalmente en el tema de narcotráfico y tendría que ser subsidiado por recursos propios a través del presupuesto nacional y el endeudamiento interno y externo y, por recursos donados por la comunidad internacional según compromisos que adquirieran en las “mesas de donantes”.

Dos años después, esto es, en 2000, el Plan Colombia inició su marcha con un respaldo financiero internacional casi exclusivo de los Estados Unidos, pero el diseño original había adquirido nuevos matices. El desarrollo institucional, por ejemplo, se mediría por el nivel de fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales del país y por el grado de avance en la lucha contra el narcotráfico que tenía como principal objetivo el campesinado productor.

La aprobación de recursos para el Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos, tuvo un fuerte lobby de empresas que a la postre resultarían beneficiadas del él, al prestar sus servicios<sup>40</sup>, “entre aquellos con grandes intereses, además de los gobiernos de EE. UU. Y Colombia, están Helicópteros Bell Textron de Texas, que provee las aeronaves que movilizan tropas y recursos, y Helicópteros Sikorsky, que provee los Blackhawk utilizados para proteger a los avionetas de fumigación. También se cuentan Monsanto de Kansas, que provee el glifosato (Round-Up Ultra) utilizado, y DynCorp, de Reston,

<sup>39</sup> Texto del anexo al acuerdo general sobre asistencia económica, técnica y otra asistencia relacionada entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, firmado en Bogotá el 27 de septiembre de 2000 por Guillermo Fernández de Soto y Anne W. Patterson.

<sup>40</sup> Como ejemplo: “desde 1996, Occidental Petroleum, centrada en Los Angeles, ha tenido mucho interés e influencia en la creación e implementación de Plan Colombia. Occidental International Corporation, la firma lobby de Occidental que opera en Washington, ha gastado 8.6 millones de dólares para hacer lobby en el Congreso Norteamericano a favor de la ayuda militar a Colombia”. En el comienzo del fin de una estrategia coherente norteamericana contra las drogas. Por Paul Adams y Gina Peralta, Investigadores Asociados de COHA, julio de 2005. Disponible en <http://www.coha.org/2005/07/26/version-en-espanol-el-comienzo-del-fin-de-una-estrategia-coherente-norteamericana-contra-las-drogas/>

*Virginia, la compañía con más intereses allí. De todos, esta última es la principal empresa subcontratada por el Departament de Estado para Colombia, pues goza de un contrato por alrededor de \$600 millones de dólares para fumigaciones, mantenimiento de avionetas y helicópteros utilizados en las operaciones. Cada una de estas empresas emplea compañías especializadas en lobby de alto nivel en Washington.”*

El Anexo al Acuerdo General sobre Asistencia Económica, Técnica y otra asistencia relacionada firmado en el 2000, se aseguró de proteger los intereses de tales empresas al establecer que *“todos los bienes y servicios adquiridos con fondos del Gobierno de los Estados Unidos serán adquiridos bajo las regulaciones y políticas establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos para adquisiciones, y serán adquiridos en los Estados Unidos y despachados desde los Estados Unidos”*<sup>41</sup>.

En lo sucesivo, fueron firmados anexos y apéndices a tal anexo, en los cuáles se mantuvieron las cláusulas de inmunidad para los miembros de la misión estadounidense que participan del Plan Colombia. Los proyectos que contienen tales anexos se refieren precisamente a los programas que ofrece Dynacorp, son desarrollados operativamente *“por medio del Grupo Militar de los Estados Unidos (SUMLGP), específicamente la Misión de la Fuerza Aérea (AFMIS), con la asistencia de la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de la Embajada de los Estados Unidos (Partes Operativas del Gobierno de los Estados Unidos), y por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC, parte operativa del Ministerio de Defensa Nacional)”*<sup>42</sup> y controlados exclusivamente por la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de la embajada de Estados Unidos en Colombia, por ejemplo:

- Modernización de trece aeronaves A-37 de la Fuerza Aérea Colombiana<sup>43</sup>
- Mantener el sistema de mantenimiento de la de la flota de aeronaves A-37 de la Fuerza Aérea de Colombia con el objeto de mantener por lo menos un 75% de la disponibilidad operacional inmediata<sup>44</sup>
- Fortalecer y mejorar la capacidad de la Fuerza Aérea en el suministro de vigilancia aérea en apoyo a las operaciones antinarcóticos de la Fuerza Pública<sup>45</sup>.
- Llevar a cabo operaciones de interdicción / interceptación contra objetivos sospechosos aéreos; mejorar el control del espacio aéreo en Colombia<sup>46</sup>.

<sup>41</sup> Apartado g, 2 del anexo al acuerdo general sobre asistencia económica, técnica y otra asistencia relacionada entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, firmado en Bogotá el 27 de septiembre de 2000 por Guillermo Fernández de Soto y Anne W. Patterson.

<sup>42</sup> Cláusula presente en todos los anexos, apéndices y sub-apéndices.

<sup>43</sup> Apéndice 2 al anexo al acuerdo general sobre asistencia económica, técnica y afín suscrito el 21 de marzo de 2001 por Luis Fernando Ramírez y Anne W. Patterson.

<sup>44</sup> Sub – apéndice al apéndice 2 al anexo al acuerdo general sobre asistencia económica, técnica y afín suscrito el 21 de marzo de 2001 por Luis Fernando Ramírez y Anne W. Patterson.

<sup>45</sup> Apéndice 3 al anexo al acuerdo general sobre asistencia económica, técnica y afín suscrito el 14 de marzo de 2001 por Luis Fernando Ramírez y Anne W. Patterson.

<sup>46</sup> Sub – apéndice al apéndice 3 al anexo al acuerdo general sobre asistencia económica, técnica y afín suscrito el 14 de marzo de 2001 por Luis Fernando Ramírez y Anne W. Patterson.

- Modernización de las aeronaves de rastreo C-26 de la Fuerza Aérea Colombiana para fortalecer y mejorar la capacidad de la Fuerza Aérea colombiana para llevar a cabo operaciones de interdicción aérea e inteligencia en apoyo a las operaciones antinarcóticos de la Fuerza Pública de Colombia.

La Contraloría General de la Nación al realizar un informe sobre los principales resultados de los contratos suscritos por las entidades públicas del orden nacional con los más representativos organismos de cooperación internacional, durante el periodo 1998-2002, encontró que en el sector de Seguridad la cooperación internacional prácticamente se limita a lo acordado con el Gobierno de Estados Unidos:

*"desde el punto de vista de la cooperación, Colombia ha realizado convenios bajo el programa de asistencia en seguridad con el gobierno de los Estados Unidos de América, cuya ayuda bilateral se ha canalizado por los Departamentos de Defensa y de Estado. En tal sentido, no median agencias u organismos de cooperación internacional, por tratarse de un programa desarrollado directamente por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus propias agencias"*<sup>47</sup>

La Contraloría describe la metodología que tiene el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la negociación de servicios de defensa, hacia Colombia y otros países:

*"La asistencia en seguridad ofrecida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluye el programa Foreign Military Sales (FMS), a través del cual los gobiernos extranjeros adquieren y negocian artículos y servicios para la defensa. El programa consiste en vender el stock del Departamento de Defensa o gestionar la compra de bienes o servicios para la defensa. Los contratos establecidos bajo esta modalidad se cancelan con recursos del presupuesto nacional de Colombia, los cuales son manejados a través de cuentas holding account por el departamento de Defensa de Estados Unidos.*

*Todos los costos de los pagos de estas adquisiciones gubernamentales tienen que ser asociados con ventas y, en esencia, debe haberse suscrito un convenio entre gobiernos normalmente documentado en una carta de oferta y aceptación (LOA) entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno extranjero. Cada LOA es comúnmente referida como un caso especial y es asignada exclusivamente para identificarla según el propósito de las cuentas. Bajo este sistema, los servicios y los artículos militares, incluidos los entrenamientos o la capacitación, deben ser provistos de las existencias o de un nuevo proveedor. Por conveniencia del comprador FMS, el Departamento de Defensa mantiene una cuenta de ahorros al comprador donde deposita los dineros excedentes provenientes de ajustes en los diferentes casos. La cuenta holding account es una subcuenta de dinero no identificado a un caso FMS específico.*

*El cliente FMS puede pedir a el Departamento de Defensa retirar de la cuenta holding account y transferir a un caso específico para cubrir una necesidad inmediata. Los objetivos de estos convenios son, entre otros, adquirir bienes y servicios previamente acordados por los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América; proveer recurso humano capacitado para*

<sup>47</sup> Informe sobre convenios celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional 1998-2002. Disponible en la página de la Contraloría General de la República: [http://www.contraloriagen.gov.co:8081/internet/central\\_documento/archivos/160/convenios.pdf](http://www.contraloriagen.gov.co:8081/internet/central_documento/archivos/160/convenios.pdf)

*entrenar personal en el área técnica; prestar ayuda y apoyo para obtener autoeficiencia en operaciones y mantenimientos y reducir el costo de ciertos equipos y materiales*<sup>49</sup>”.

Bajo este modelo se negocian los acuerdos que benefician a empresas transnacionales de la seguridad como Dynacorp, cuando los programas se canalizan a través del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En lo referente al Plan Colombia intervienen principalmente ese organismo y el Departamento de Estado de ese país.

Ello implica que ningún organismo gubernamental colombiano puede ejercer control o veeduría sobre los programas binacionales que se valen de empresas transnacionales de seguridad mercenarias legalizadas a través de los convenios. Ni siquiera tienen información sobre el número de mercenarios presentes en el país.

En abril de 2006, el Ministerio de Defensa colombiano, responde al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” a la pregunta de ¿Cuántos contratistas han participado en programas del Plan Colombia en nuestro país desde el año 2000?

*“Este Ministerio no posee información acerca del número de contratistas (nacionales o extranjeros) que desde el 2000 han apoyado los diferentes programas que se vienen implementando con la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos en apoyo al Plan Colombia. Esta información es de manejo exclusivo de la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos de América en Colombia”*<sup>50</sup>

Con razón se afirma que Dynacorp

*“es una rueda suelta que ninguna entidad del Estado controla. Sus relaciones son directamente con la NAS, la oficina que canaliza los recursos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el país. No valieron ni siquiera los reparos que en su momento realizó el entonces director de la Policía general Rosso José Serrano, quien no estuvo de acuerdo con que una empresa particular, sin ningún control por parte de la Policía colombiana o de otra entidad oficial, llegara al país para trabajar de la mano de la Policía Antinarcóticos en la lucha contra el narcotráfico. Pero el Departamento de Estado condicionó la ayuda a la presencia de DynCorp en Colombia. Y para evitar cualquier contratiempo asignó a la NAS como la directa responsable del trabajo que iba a realizar DynCorp en Colombia.*

*(...)En efecto, a finales de 1993 fueron enviados los primeros hombres de DynCorp a Colombia. “Llegaron con sus propios aviones y pilotos. Y la Policía tuvo que prestar sus matriculas oficiales, que fueron pintadas en esos aviones”, señaló a SEMANA un alto oficial de la Policía que conoce desde su inicio la entrada de DynCorp a Colombia.*

*Ni siquiera la Aeronáutica Civil sabe de las actividades que realizan las aeronaves de DynCorp en Colombia. “Ninguna autoridad, llámese Aeronáutica, DIAN, Policía o Ejército, está autorizada para revisar las aeronaves de DynCorp que llegan a Colombia. La NAS es la que decide qué aviones ingresan al país y cuáles salen a las bases aéreas de Estados Unidos para su revisión. Nadie sabe*

<sup>49</sup> Ibidem.

<sup>50</sup> Oficio No. 17737 del 24 de abril de 2006, suscrito por Jorge Mario Eastman Robledo, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Defensa.

*que llevan esos aviones en su regreso a Estados Unidos porque son intocables", agregó la fuente consultada por SEMANA<sup>50</sup>.*

Algunas informaciones dan cuenta de que "a finales de marzo de 2001 había en Colombia un poco más de 100 hombres de esta empresa<sup>51</sup>". Como sea, al iniciar el Plan Colombia se afirmaba que el límite de contratistas era de 300, para el año 2002 este límite se aumentó en 100 más, llegando a ser legal en Colombia la presencia de por lo menos 400 mercenarios en el marco de los programas del Plan Colombia.

En cuanto a su lugar de operaciones, por fuentes gubernamentales, se tiene que operan en Fuerte Larandia, Fuerte Tolemaida, Décimo Octava Brigada del Ejército (BCG-30, BCG-24), Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército (AFE-AUR), Brigadas Móvil 1-2-3-4-6-7-8-9-10 y 12, el Cuerpo de Guarda Costas de la Armada Nacional, la Brigada Fluvial de Infantería de Marina, el Comando de Aviación Naval, el Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM-2), Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6), el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), donde quiera que haya Radars Terrestres de la Fuerza Aérea y el Centro de Comunicaciones, Comando y Control de la Fuerza Aérea<sup>52</sup>.

Otras unidades que serían objeto de la cooperación de Estados Unidos hacia Colombia registradas por el Center For International Policy, en materia de entrenamiento en 2004, son las siguientes:

- **Ejército:**

Academia Militar, Batallón de Contraguerrilla 32, Batallón de Comandos de Fuerzas Especiales, Batallón de helicópteros, Tolemaida, Batallón de Infantería Ayacucho, Batallón de Infantería García Rovira, Batallón de Infantería Raúl Reyes, Batallón de Ingenieros de Mantenimiento, Batallón Lanceros, Batallón de Servicios de Apoyo al Combate 1, Batallón de Servicios 8 Cacique Calarcá, Brigada 9 Neiva, Brigada 12, Florencia, Brigada 18 Arauca, Brigada Antinarcóticos (BACNA), Brigada de Aviación, Brigada de Fuerzas Especiales, Brigada Móvil 3, Comando de Operaciones Especiales (COESE), Comando de Operaciones Logísticas Bogotá, Escuela de artillería, Escuela de Guerra, Escuela de Fuerzas Especiales, Escuela de Ingeniería, Escuela de Logística, Escuela de Relaciones Cívico – Militares, Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), Fuerza de Tarea Conjunta Logística en San José del Guaviare, Grupo de Caballería Reveiz Pizarro, Oficina Central de Inteligencia Militar, Oficina Regional de Inteligencia 1, Sexta División.

- **Fuerza Aérea:**

CACOM -2 Apiay, CACOM 3 Barranquilla, CACOM 4 Melgar, CACOM 5 Rionegro, CATAM Bogotá, Comando de Mantenimiento Aéreo Madrid / Cundinamarca,

<sup>50</sup> Mercenarios. Los gringos que fumigan en el Plan Colombia son una banda de Rambo sin Dios ni ley que incluso se han visto involucrados en un escándalo de tráfico de heroína. Revista Semana edición: 1002 Fecha: 08/13/2001

<sup>51</sup> Ibidem

<sup>52</sup> Oficio No. 17737 del 24 de abril de 2006, suscrito por Jorge Mario Eastman Robledo, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Defensa

Comando de Transporte Aéreo Bogotá, Escuadrón C-130, Escuela de Aviación Cali, Escuela ESUFA, Madrid / Cundinamarca, GAORI Marandúa, GASUR Tres Esquinas, Grupo Aéreo del Caribe San Andrés, SATENA, Sección de Educación Aérea Bogotá.

• **Armada:**

Academia Naval, ARC Independiente, ARC Tayrona Cartagena, Comando de Aviación de la Armada Bogotá, Comandos Submarinos – Flota de Submarinos, Grupo Aeronaval del Caribe GANCA – Cartagena, Grupo Aeronaval del Pacífico GANPA – Bahía Málaga, Guardia Costera Cartagena, Guardia Costera – Leticia, Unidad Especial de Buceo, Infantería de Marina – Batallón de Fuerzas Especiales 1, Infantería de Marina – Batallón 2, Infantería de Marina – Batallón Contraguerrilla 1 Corozal, Infantería de Marina – Batallón de Rifles 8, Infantería de Marina – Batallón 9 Tumaquito, Infantería de Marina – Batallón Fluvial 10 – Guapi, Infantería de Marina – Batallón Fluvial 30, Infantería de Marina – Batallón Fluvial 40 – Puerto Carreño, Infantería de Marina – Batallón Fluvial 50 – Puerto Inárida, Infantería de Marina – Batallón Fluvial 60 – Puerto Leguizamó, Infantería de Marina – Brigada Fluvial, Infantería de Marina – Comandancia Bogotá, Infantería de Marina – Dirección Portuaria DIMAR – Cartagena, Infantería de Marina – Escuela de Combate Fluvial, Puerto Leguizamó, Infantería de Marina – Unidad de Antiterrorismo Urbano de Fuerzas Especiales.

• **Policia**

Carabineros, Distrito de Policía 3 Espinal – Tolima, Servicio Aéreo, Unidad Antinarcoóticos (DIRAN).

• **Otros:**

DAS y Ministerio de Defensa.

La “intocabilidad”, o inmunidad jurídico – diplomática de la Misión de Estados Unidos en Colombia acreditada, o no, fue recientemente ratificada de cara a la Corte Penal Internacional, y se extendió a cualquier ciudadano estadounidense en el país.

Efectivamente, en diciembre de 2003 se firmó el Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América *respecto a la entrega de personas de los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional*.

“(…) Tomando nota de que conforme al Acuerdo de 1962 las personas allí comprendidas, incluidos funcionarios de gobierno, empleados (incluyendo contratistas) y personal militar, actuales o antiguos, no están sujetas a la jurisdicción colombiana, de lo cual resulta que su entrega, por cualquier medio, a la Corte Penal Internacional, requiere del consentimiento expreso del Gobierno de los Estados Unidos de América;

Tomando nota de que conforme al derecho internacional, las personas de los Estados Unidos de América que gozan de inmunidad de la jurisdicción penal colombiana, incluyendo la inmunidad funcional, no están sujetas, dentro de los términos de dicha inmunidad, a la jurisdicción colombiana, de lo cual resulta que su entrega, por cualquier medio, a la Corte Penal Internacional, requiere del consentimiento expreso del Gobierno de los Estados Unidos de América



(...) 2. Una persona de los Estados Unidos de América, el Estado que Envía, no será, salvo el consentimiento expreso de los Estados Unidos de América

a) entregada ni trasladada de ninguna manera a la Corte Penal Internacional para ningún propósito ni

b) Entregada ni trasladada de ninguna manera a ninguna entidad o tercer país, ni expulsada a un tercer país, con el propósito de entregarla o trasladarla a la Corte Penal Internacional<sup>51</sup>.

Por virtud de este acuerdo, ningún ciudadano estadounidense, incluyendo por su puesto, a los empleados de Dyncorp será tocado por la CPI.

#### 4. HECHOS QUE INVOLUCRAN A DYNCORP EN LA COMISIÓN DE DELITOS EN COLOMBIA

La inmunidad convencional para la misión de Estados Unidos en Colombia, ha sido la oportunidad para que sean miembros de esta empresa, los autores de varios delitos en el país, principalmente relacionados con narcotráfico. Por ejemplo, en mayo de 2000, recién implementado el Plan Colombia, fueron detectadas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, unas botellas que contenían heroína y donde "la firma DynCorp aparecía como remitente del paquete que tenía como destino final la base aérea de Patrick en Florida"<sup>52</sup>.

El oficial de la policía colombiana, de rango de General que adelantó la investigación inicial por estos hechos, una vez la heroína fue detectada en el aeropuerto, fue removido inmediatamente de su cargo por disposición del encargado de la NAS de la embajada estadounidense en Bogotá<sup>53</sup>, lo que demuestra el inmenso poder que tiene esa oficina en injerencia frente a autoridades del gobierno colombiano.

El diario canadiense The Nation destapó este escándalo, y Janet Wineriter, la portavoz de Dyncorp, respondió que tal líquido no contenía heroína: *"eran simplemente muestras de aceite que deben enviar periódicamente los técnicos de Dyncorp, y que las pruebas habían sido hechas, aparentemente, con un equipo dañado que había producido una lectura incorrecta"*<sup>54</sup>.

Ante este hecho la congresista estadounidense Jan Schakowsky trató de introducir una enmienda que prohibiera el uso de los contratistas militares, afirmando que *"Los reportes de que empleados de Dyncorp están implicados en narcotráfico, precisamente*

<sup>51</sup> Texto del acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto a la entrega de personas de los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional. Suscrito el 17 de septiembre de 2003 por Carolina Barco Ministra de Relaciones Exteriores y Stephen Rademaker, Subsecretario de Estado.

<sup>52</sup> Ver anexo: Sandra Bibiana Flórez. Contratados por Estados Unidos. Mercenarios en Colombia: Una guerra ajena.

<sup>53</sup> Revista Semana. Ob cit.

<sup>54</sup> En este escándalo, Hallan heroína en paquete de la firma Dyncorp. Dyncorp, la firma contratada por el Gobierno de Estados Unidos para manejar buena parte de las operaciones de fumigación de cultivos ilícitos previstas en el Plan Colombia, está a las puertas de un escándalo mayúsculo. Por Sergio Gómez. El tiempo. Disponible en la página electrónica: <http://www.terra.com.co/actualidad/nacional/09-07-2001/nota34975.html>

*el delito que a ellos se les paga para evitar, solo fortalece mi convicción de que esta es la política errada*<sup>57</sup>.

Ese mismo año, Michael Demons, paramédico que hacía parte de un equipo de DynCorp que operaba en la base militar de Tres Esquinas,<sup>58</sup> en Caquetá, sur del país, falleció de un ataque cardíaco en un hospital de Florencia, capital de ese departamento *"las pruebas realizadas por los médicos forenses demostraron que la causa de la muerte del estadounidense había sido una sobredosis de cocaína"*<sup>59</sup>. Aunque se inició una investigación preliminar, lo cierto es que de los anaqueles de la Fiscalía, el expediente desapareció misteriosamente.

En 2002 Alexander Wakefield Ross Cáceres, de 25 años miembro de la DynCorp que operaba en una base antinarcóticos de Putumayo murió destrozado por la hélice de un avión OV -10 de aspersión aérea, la madre de este piloto, Elena Cáceres, aseguró que este fue asesinado *"Él no tenía nada que hacer cerca de los aviones, pues su oficio era técnico en computación geográfica y se la pasaba frente a aparatos muy distintos a las aeronaves; además en los papeles se dice que él murió en el hospital de Mocoa cuando en realidad el golpe produjo su muerte inmediata en la pista (...) "Eso no fue ningún accidente, como afirma DynCorp. Él sabía algo relacionado con drogas y los pilotos de esa empresa. Gente cercana a la compañía dice que en los últimos dos años hubo otras muertes misteriosas de extranjeros"*<sup>60</sup>.

Estos hechos que aún permanecen sin esclarecer, da cuenta de las irregularidades que rodean la actuación de los contratistas en Colombia, y de sus nexos con actividades de narcotráfico.

En octubre de 2004 se tuvo noticia de que contratistas que operaban en Tolemaida distribuyeron un video en el que se observaba como sometían a vejámenes sexuales a niñas menores de edad del pueblo de Melgar. Ese video fue comercializado incluso en las principales calles de Bogotá<sup>61</sup>. El Colectivo de abogados no ha tenido noticia de que se hubiera abierto investigación penal alguna por estos hechos que involucran menores de edad, pero según labores de seguimiento a este hecho a través de entrevistas a personas de esa población, realizadas por el Colectivo y otras organizaciones, se tuvo noticia de que una de las menores involucradas en los videos se suicidó tiempo después de la publicación de los videos.

En marzo de 2005, cinco militares estadounidenses del cuerpo de instructores antinarcóticos de las Fuerzas Armadas, fueron detenidos por transportar 16 kilos de cocaína en un avión militar norteamericano, desde la base de Apiay – Meta, hacia Texas, según lo informó el periódico el Tiempo, en una editorial que tituló los "narcosoldiers".

<sup>57</sup> Ibidem.

<sup>58</sup> Revista Semana ob. cit.

<sup>59</sup> Madre de técnico panameño contratista de Plan Colombia dice que su hijo fue asesinado. El tiempo. Bogotá, octubre 14 de 2003. Disponible en la página: [http://eltiempo.terra.com.co/judi/2003-10-15/articulo-web- nota\\_interior-1285676.html](http://eltiempo.terra.com.co/judi/2003-10-15/articulo-web- nota_interior-1285676.html)

<sup>60</sup> Marines de los Estados Unidos y contratistas veján a menores en Colombia. Iván Cepeda Castro. El Espectador. Enero 8 de 2004

Más adelante, según lo refirió el mismo diario, fue vinculado a la investigación un ex soldado colombiano, de apellido Jiménez quien trabajaba con una empresa contratista del Plan Colombia que operaba en las bases de Larandia y de la Armada en Tumaco – Nariño, y que “podría ser la pieza fundamental para destapar las conexiones de los militares estadounidenses que fueron detenidos”, ya que “fue uno de los primeros que contactó al contratista extranjero con los vendedores de droga para sacar el alcaloide camuflado entre las valijas de algunos militares”<sup>61a</sup>.

Aunque los implicados son soldados estadounidenses, lo cierto es que los enlaces mafiosos los realizó un miembro de una agencia contratista, y la que operaba en el lugar de los hechos era la Dyncorp.

En mayo del mismo año los ciudadanos estadounidenses Alan Norman Tanquary y José Hernández, quienes aseguraron ser miembros del Séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército de E.U. y que eran instructores de tiro en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército, en Tolemaida, donde se destaca una fuerte presencia de contratistas privados, fueron arrestados en flagrancia por traficar con más de 30.000 proyectiles para los grupos paramilitares, en Carmen de Apicalá, en la vía que comunica a los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

Ninguna autoridad colombiana o estadounidense aclaró el episodio ni los protagonistas de él, ni su estatus operacional frente a las actividades antinarcótics del Plan Colombia, por lo cual no se tiene conocimiento de si estos ciudadanos pertenecían realmente al Ejército de EEUU.

En todo caso, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que levantara la inmunidad de estos ciudadanos estadounidenses a fin de proseguir la con la investigación, lo que fue negado con base en las cláusulas de inmunidad de los convenios referidos atrás. Un comunicado realizado por la Fiscalía narra el episodio:

*“La Fiscalía General de la Nación se permite informar a la opinión pública, con respecto a la situación de los militares norteamericanos capturados, lo siguiente:*

*“En operativo realizado el martes 3 de mayo del presente año, aproximadamente a las ocho de la mañana y en jurisdicción del municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, fueron capturados los ciudadanos norteamericanos Jesús Hernández y Allan Norman Tanquary, con cuatro personas más de nacionalidad colombiana, como presuntos autores del delito de tráfico de municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas,*

*“La investigación fue asignada a un Fiscal Quinto Especializado de Ibagué, quien ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores adelantar los trámites diplomáticos necesarios para obtener de las autoridades de los Estados Unidos de América, el levantamiento de la inmunidad penal de que gozan los señores Jesús Hernández y Allan Norman Tanquary,*

<sup>61</sup> El Tiempo. Buscan a ex soldado por caso de militares estadounidenses con coca. Abril 21 de 2005. También el Tiempo, abril 1 de 2005 buscan conexiones de militares de Estados Unidos detenidos por transportar coca.

*-De acuerdo con certificación expedida por la División de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los ciudadanos norteamericanos están acreditados en Colombia como miembros de la Misión Militar de Estados Unidos en este país, desde el 24 de febrero de 2003 y por el lapso de doce (12) meses.*

*-Conforme con los artículos 29 a 36 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, incorporada a la legislación nacional mediante ley 6 de 1972, los ciudadanos extranjeros técnicos y administrativos de la misión diplomática gozan del privilegio de inmunidad de jurisdicción penal del Estado receptor, y no pueden ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.*

*En razón de lo expuesto, el Vicefiscal General de la Nación en cumplimiento de los convenios y tratados internacionales y sus compromisos con el Estado colombiano, como en eventos anteriores análogos a la situación referida, solicitó al fiscal del caso que los ciudadanos norteamericanos en referencia fueran entregados en custodia a las autoridades de la Embajada norteamericana con sede en esta ciudad, hecho que se cumplió en las primeras horas de la mañana del día de hoy.<sup>62</sup>*

Inmediatamente el Procurador General de la Nación escribió una carta pública dirigida al presidente de la república, en la que advierte la necesidad urgente de que los instrumentos que hacen posible la aplicación del Plan Colombia, y en él, la presencia de militares extranjeros y contratistas / mercenarios, surtan los trámites constitucionales de rigor:

*"Bogotá, D.C., mayo 20 de 2005*

*DP-0462*

*Doctor*

**ÁLVARO URIBE VÉLEZ**

*Presidente de la República de Colombia*

*La ciudad*

*Respetado señor Presidente:*

*En mi condición de Procurador General de la Nación y en ejercicio de mis funciones, en especial las que me ordenan vigilar el cumplimiento de la Constitución y ejercer la supervigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas (artículo 277, numerales 1 y 6 de la Constitución), en relación con el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre misiones militares estadounidenses en territorio colombiano, es mi deber solicitarle a usted como director supremo de las relaciones internacionales (artículo 189, numeral 2 de la Constitución), que el mismo se someta inmediatamente a la aprobación del Congreso de la República, quien ha de decidir si lo aprueba o improba, toda vez que el mencionado acuerdo viene produciendo efectos en el territorio colombiano sin surtir los trámites que para el efecto exigía la Constitución de 1886, en vigencia de la cual éste se suscribió, como los que impone la Constitución de 1991, para todo instrumento internacional.*

*En razón de la materia y por las implicaciones que tiene para el Estado Colombiano el mencionado acuerdo, el mismo no encaja en la excepción que creó la*

<sup>62</sup> Disponible en el sitio electrónico oficial de la fiscalía general de la nación: <http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/bol2005/mayo/bol110.htm>

*Ley 24 de 1959, que permite la suscripción de contratos y acuerdos con el fin específico de asegurar el aprovechamiento o la prestación de asistencia técnica o el suministro de elementos u otras facilidades requeridas para la formulación o ejecución de planes y programas de desarrollo económico, social, cultural, sanitario u otras materias conexas, los cuales según el artículo 2 de la ley en mención, sólo requerían para su validez, la aprobación del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo de Ministros, ley que por demás contraría la Constitución de 1991, específicamente los artículos 150, numeral 16 y 241, numeral 10.*

*Es necesario precisar que el mencionado acuerdo tampoco está cubierto ni por la Convención de Viena que regula las Relaciones Diplomáticas ni por la Convención de Viena que regula las Relaciones Consulares, instrumentos éstos que están vigentes en Colombia desde el año de 1972.*

*Finalmente, teniendo en cuenta que el acuerdo desconoce normas esenciales de nuestro ordenamiento interno, el mismo no puede seguir surtiendo efectos y está viciado de nulidad, tal como lo señala el Tratado de Viena sobre los Tratados, artículo 46, aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 32 de 1985. La aplicación del acuerdo, en esos términos, implica un desconocimiento de la Constitución que puede generar responsabilidades de tipo constitucional y disciplinario.*

*Atentamente,*

*EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN*

*Procurador General de la Nación<sup>63</sup>.*

Hasta donde se tiene conocimiento esta carta pública nunca fue respondida oficialmente, conservando la tradición de silencio que ha tenido el gobierno colombiano frente al tema, justificándolo las más de las veces, bajo el argumento de "seguridad nacional".

## 5. RESPONSABILIDAD DE LA DYNACORP EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos tiene el propósito analizar y juzgar la política de Empresas Transnacionales que se han beneficiado de Crímenes de Lesa Humanidad bajo la lógica de la acumulación, el control de zonas enteras y de su economía y del saqueo de los recursos naturales, precarizando la población y destruyendo el medio ambiente y la biodiversidad.

La Dynacorp es una transnacional que se lucra en todo el mundo en escenarios de conflictos armados internos, guerras e inestabilidad política con manifestaciones armadas, su lucro proviene precisamente de atizar conflictos, y volverlos funcionales a la prestación de sus servicios.

Los conflictos se traducen en el deterioro de las condiciones de vida de la población que los padece, en la pérdida de miles de vidas y con ellas el delicado tejido

<sup>63</sup> Disponible en la página electrónica oficial de la procuraduría general de la nación [www.procuraduria.gov.co/descargas/noticias/b154\\_carta\\_presidente.doc](http://www.procuraduria.gov.co/descargas/noticias/b154_carta_presidente.doc)

social al que pertenecen, en la destrucción de recursos humanos y naturales, en la pérdida de valores de la humanidad en términos culturales y ecológicos, en graves crisis humanitarias, en ignominiosas crisis alimentarias, en la pérdida de bienes de la población, en la vulneración de la dignidad humana, en destrucción y en dolor, mucho dolor.

Por tanto, acusamos a la Dynacorp de las siguientes violaciones a los derechos humanos contra comunidades colombianas y también ecuatorianas que sufren los impactos de su actividad empresarial, todas ellas, graves afrentas contra la humanidad:

### 5.1 Por su actividad mercenaria:

Actualmente existe una discusión sobre las características del mercenarismo y la definición misma de *mercenario*, en tanto, la definición clásica que aporta el DIH no permite clasificar como tales a miles de miembros de Empresas Transnacionales de Seguridad que actúan bajo idénticos métodos y recursos.

Sin embargo, Enrique Bernal Ballesteros, Relator Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios, del sistema de las Naciones Unidas, comprendió la evolución de las formas y mecanismos adoptados por estas empresas y zanjó la discusión oportunamente:

*"En conflictos recientes que se desarrollan en África, Asia y América Latina, se ha detectado el recurso al reclutamiento y la contratación de mercenarios por su experiencia militar y eficiencia para el combate. En muchas ocasiones, no podrían recibir la calificación de mercenarios si se aplicase en forma acumulativa y concomitante los requisitos establecidos por el artículo 47 del Protocolo Adicional I de 1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949. El Relator Especial considera que son mercenarios, aunque las definiciones legales existentes adolezcan de vacíos y deficiencias jurídicas que dejan fuera situaciones y actividades que son mercenarias (...)*

*La tesis sostenida por esta Relatoría, compartida en sus líneas esenciales por la primera reunión de expertos, es que una de las nuevas formas de mercenarismo es la que se produce a través de compañías privadas de seguridad que contratan servicios militares empleando para ello a mercenarios. Esta modalidad no está contemplada en los dispositivos legales internacionales, lo que ha facilitado la rápida expansión de esta modalidad.*"<sup>645</sup>

Con base en lo anterior y en la puntual descripción realizada atrás sobre la actuación de la Dynacorp alrededor del mundo y en Colombia, destacamos que esta Empresa Transnacional de Seguridad, es en realidad una agencia transnacional mercenaria, y que como tal, es responsable del crimen que es en sí mismo, esta condición. Para ello, nos valemos de los razonamientos realizados por el Relator:

<sup>645</sup> Párrafos 63 y 72 del informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial a la comisión de derechos humanos. Quincuagésimo sexto período de sesiones tema 130 del programa provisional. Derecho de los pueblos a la libre determinación. 27 De julio de 2001.



### 5.1.1 Mercenarismo como crimen premeditado:

*"En general, la actividad mercenaria no es espontánea. Se suele producir como resultado de una asociación para delinquir. Suele estar también conectada a otras actividades ilícitas, tales como los tráfico de personas, de drogas y de armas"<sup>65</sup>.*

Esta circunstancia coincide con la tipificación colombiana del delito *Concierto para Delinquir* que supone que *"varias personas se concierten con el fin de cometer delitos"* (Art. 340 CP), este delito tiene como causal de agravación si se configura para efecto de cometer, entre otros, los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Paul Lombardi, director de DynCorp insiste en que esta empresa no tiene influencia sobre la política; que sólo satisface a sus clientes. *"El Departamento de Estado dice: Estas son las misiones que queremos que vuelen. Nos dice dónde, cuándo, y cómo – nosotros no decidimos."*... *"No decidimos si es una buena cosa. Colin Powell y el presidente dicen lo que quieren. El presidente de Colombia dice lo que quiere. La pregunta es: ¿quién lo va a realizar?"<sup>66</sup>*

Tal despreocupación por los alcances de las políticas de quienes los contratan y que ellos ejecutan, y que pueden llegar a ser constitutivas de graves delitos y violaciones a derechos humanos, no les exime de la responsabilidad que tienen. Los conciertos para delinquir cobran sentido por lo que se quiere conseguir a través de tales confederaciones criminales.

Empresas como la Dyncorp se crean con fines lucrativos a través de la realización de actividades siniestras que involucren la satisfacción de los derechos humanos de comunidades enteras. Cualquier violación a derechos que ocurra como consecuencia de su actividad, no puede considerarse como *márgenes de error*, o como conductas *culposas*, por el contrario, la condición de mercenario constituye un elemento agravante al momento de evaluar una conducta determinada.

### 5.1.2 Mercenarismo es un crimen cometido por sujetos calificados con ánimo de lucro

*"Las nuevas modalidades empleadas por los mercenarios suelen escapar a las prohibiciones, muy pocas en todo caso, que la legislación de los Estados y la ley internacional contienen para las actividades mercenarias. Se trata sin embargo de hechos que causan graves lesiones a las personas y pueblos que los sufren, pues los males ocasionados no sólo constituyen violaciones a los derechos humanos, sino que*

<sup>65</sup> Párrafo 69 del informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial a la comisión de derechos humanos. Quincuagésimo-sexto periodo de sesiones tema 130 del programa provisional. Derecho de los pueblos a la libre determinación. 27 De julio de 2001.

<sup>66</sup> Según información disponible en <http://www.corpwatch.org/article.php?id=7867>

*quienes los causan son profesionales especialmente contratados para garantizar la eficiencia en el acto de hacer daño*<sup>67m</sup>.

Los miembros de la Dyncorp son personal altamente capacitado para cumplir la labor en Colombia que les fue encomendada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que bien resume Rand Beers *"(1) erradicación de cultivos de drogas ilícitas, (2) entrenamiento del ejército y de personal del país, (3) interdicción de laboratorios que procesen la droga y transporten narcóticos"*<sup>68m</sup>.

Los miembros de la Dyncorp, son elegidos en razón a sus destrezas en el campo de operaciones, y su retribución salarial corresponde a su experiencia en la escenarios varios de combate. *"El carácter o la condición de haber sido militar, antiguo combatiente y la experiencia en el uso de armas sofisticadas son ingredientes que caracterizan al mercenario; sobre todo a los que son contratados para que participen en actividades de combate y entrenen a quienes formarán batallones, columnas o unidades"*<sup>69m</sup>.

Antiguos integrantes de fuerzas policiales o militares, trabajando para agencias como la Dyncorp se despojan no solamente de su uniforme sino de los juramentos y honores que en su condición de garantes de la seguridad en estados naciones hicieron, de cara a la salvaguarda de los intereses de la comunidad para la que servían. Una vez entrados en la lógica mercenaria, estos sujetos se despojan de cualquier responsabilidad o lealtad social y se convierten en victimarios de cualquier comunidad en el mundo.

El despojo ético, se compensa con la pretensión de lucro. *"Una publicidad en Internet de la empresa DynCorp International, escogida por el Departamento de Estado norteamericano para entrenar policías iraquíes, ofrece puestos para consejeros de seguridad con un salario anual de 153.600 dólares. Los candidatos deben tener una experiencia de cinco años"*<sup>70m</sup>.

Es entonces cuando el lucro se convierte en el motor de la industria mercenaria, es decir, la industria de la guerra y el conflicto. Para el caso colombiano *"(...) cada piloto gana entre 7.000 y 10.000 dólares mensuales, todos vinculados con contratos*

<sup>67</sup> Párrafo 52 del informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial, Sr. Enrique Bernales Ballesteros, Comisión de Derechos Humanos 58o período de sesiones 10 de enero de 2002. E/cn.4/2002/20

<sup>68</sup> Declaración de Rand Beers, Asistente de la Secretaría de Estado en la Oficina Internacional de Narcóticos y diligencia para el cumplimiento de la ley, en relación con el impacto potencial del litigio Arias, sobre seguridad nacional e intereses de política exterior de los usa. Disponible en la página electrónica: [www.accionecologica.org](http://www.accionecologica.org)

<sup>69</sup> Informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial, Sr. Enrique Bernales Ballesteros. 54º período de sesiones. E/cn.4/1998/31. 27 De enero de 1998.

<sup>70</sup> Un nuevo negocio tras la caída de Saddam Hussein. En Irak los mercenarios hacen fortunas como guardias privados. Combatieron en Irlanda, África o Latinoamérica. Ganan US\$ 10.000 al mes. El Clarín. Enero de 2001. Disponible en la página electrónica: <http://www.clarin.com/dia/2004/01/06/1-01801.htm>

*independientes. DynCorp también ha llevado a sus filas pilotos colombianos. El sueldo de éstos es de 6.000 dólares al mes*<sup>71</sup>.

Esta conducta, en el ordenamiento penal colombiano, se constituye en causal de agravación en el delito de homicidio (Art. 104-4 CP), pues la pena se agrava si el homicidio se cometiere “por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil”.

Dañar por dinero o enseñar a dañar por dinero, en esto radica la perversidad de la práctica mercenaria.

### **5.1.3 Mercenarismo como mecanismo de violación de derechos humanos que garantiza que los Estados se desatiendan de sus obligaciones internacionales en materia de DDHH.**

El Relator Especial pudo comprobar la íntima conexión entre la actividad mercenaria y la violación a los derechos humanos “*Sea actuando en forma individual, o al servicio de modernas empresas multipropósito de seguridad, el mercenario suele aparecer como violador de los derechos humanos. En ocasiones, actúa como el agente profesional de operaciones terroristas; participa en tráfico ilícitos; comete acciones de sabotaje, entre otras acciones. Es funcional a todo tipo de operación encubierta; barato, si se le compara con lo que cuesta movilizar ejércitos para las operaciones que se le encarga, y está a disposición de gobiernos; empresas transnacionales, organizaciones, sectas y grupos, simplemente por una paga. Se le contrata porque no tiene escrúpulos en ignorar las normas del derecho internacional humanitario e incluso en cometer graves crímenes y violaciones de derechos humanos*”<sup>72</sup>.

Al ser empresas privadas blindadas por instrumentos jurídicos de inmunidad en los países en los que operan, con una publicidad reservada de las actividades que realizan a propósito de cláusulas de “seguridad nacional”, y desprendidas de cualquier tipo de conexión con las autoridades del país en el que operan, se convierten en un mecanismo que al mismo tiempo desecha la responsabilidad de los Estados en materia de Derechos Humanos frente a sus propios ciudadanos.

Cuando el Relator especial propuso una nueva definición de mercenario, fue explícito al afirmar que la vinculación entre dichas empresas y gobiernos no legitimaba per se, la actividad mercenaria: “*El que sea un gobierno quien contrata mercenarios o empresas que a su vez reclutan mercenarios, para su propia defensa y acción política dentro de su país o para fortalecer posiciones en conflictos armados, no modifica la naturaleza del acto ni su ilegitimidad. La tesis que debe recogerse para la elaboración de la nueva definición jurídica de mercenario es que el Estado no está autorizado para contratar y emplear mercenarios. El derecho internacional y el constitucional de cada*

<sup>71</sup> Revista Semana. Ob cit.

<sup>72</sup> Párrafo 30 del informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial, Sr. Enrique Bernales Ballesteros. 60.º Período de sesiones, Comisión de derechos humanos. E/cn.4/2004/15. 24 De diciembre de 2003.

*Estado refiere los conceptos de seguridad, orden y defensa a los aparatos militares y policiales regulares en virtud del concepto de soberanía".*

Es decir, que la pretendida legalidad que les otorgan los gobiernos a tales empresas, a través de instrumentos jurídicos de carácter diplomático, está viciada por la naturaleza misma de la actividad mercenaria. Los Estados son responsables de cualquier violación cometidas por estos agentes, y están en la obligación de garantizar la efectividad de los derechos de sus víctimas, en términos de verdad, justicia y reparación integral.

En tal sentido, aunque la presencia de la Dynacorp esté legalizada a través de instrumentos jurídicos binacionales, y sea aceptada por autoridades del gobierno colombiano y protegida por la sección de narcóticos de la embajada de Estados Unidos en Colombia, esto no le cambia el carácter criminal bajo el cual debe ser examinada, ni desconecta al Estado Colombiano de cumplir con su obligación de protección de los derechos humanos, que implica el deber de prevenir violaciones, tal y como lo ha sentado la jurisprudencia del sistema interamericano.

*"El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales"*<sup>73</sup>.

#### **5.1.4 Mercenarismo es una pieza fundamental para consolidar un poder en contravía del respeto por los derechos humanos y del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.**

La presencia de la industria mercenaria coincide con escenarios de inestabilidad política, conflicto interno con manifestaciones armadas, o guerras. En tales escenarios, a su vez, casi como regla general, existen recursos naturales estratégicos, recaen sobre ellos intereses de diversas industrias, y se registra presencia de pueblos y comunidades que tienen una especial relación con la tierra, sea porque son pueblos indígenas, afrodescendientes o raizales, o son pueblos campesinos organizados en la defensa de ese territorio.

La forma tradicional de terrorismo de estado para apropiarse de tales territorios o volverlos atractivos a la inversión extranjera es a través de la militarización, la paramilitarización y finalmente la mercenarización de las operaciones de control.

El mercenarismo, se vuelve funcional a los intereses de ciertos sectores, industrias o países, es decir, que la mercenarización de las relaciones castrenses no es un fin sino un medio para llegar a otros fines, protegiendo ciertos intereses, y favoreciendo a ciertos beneficiarios.

*"En el análisis de las actividades mercenarias, la responsabilidad no se agota en la comisión del hecho delictivo ni en la identificación e individualización del agente,*

<sup>73</sup> Párrafo 175 del caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

*La constatación es que el mercenario es tan sólo el último eslabón de una cadena, en la que su contratación y la comisión del acto delictivo subsecuente no es más que la ejecución de un acto deliberado, planeado, organizado, financiado y supervisado por otros, que pueden ser grupos privados, organizaciones políticas de oposición, sectores que predicen intolerancia nacional, étnica o religiosa, organizaciones clandestinas y también gobiernos que, a través de operaciones encubiertas, deciden una acción ilícita en perjuicio de un Estado o contra la vida, la libertad, la integridad física y la seguridad de personas, implicando en la acción a mercenarios. Por consiguiente, la responsabilidad alcanza a todos los que participaron en el hecho delictivo, ejecutado en su fase final por el agente mercenario*<sup>74</sup>.

Dyncorp es la punta de lanza en la conservación de intereses de los Estados Unidos en la región andina, tal y como lo confesara su defensa, en un litigio que se está desarrollando en su contra, actualmente en ese país, por las afectaciones que las fumigaciones han causado a la comunidad ecuatoriana de la frontera:

*"1 (...) las operaciones de fumigación para la erradicación de drogas son un elemento clave de la política de los USA, tanto en Colombia, como en la región andina. Esta política es el producto de un complicado balance de la seguridad nacional y de los objetivos de la política exterior de los USA, y ha sido aprobada en altas esferas del gobierno, recibiendo una atención directa del Presidente, del Secretario de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros, siendo, además, avalada por el Congreso. (Declaración de Rand Beers).*

*2. Cualquier suspensión en la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia socavaría la seguridad nacional por privar a los USA de un arma clave: en su arsenal para contener el flujo de narcóticos ilícitos en este país y dejar que las organizaciones terroristas de Colombia sigan logrando enormes ganancias del tráfico de drogas, con miras a los intereses de los USA y a la vida norteamericana*<sup>75</sup>.

La presencia de Dyncorp en Colombia ha sido dispuesta por los Estados Unidos a fin de proteger sus intereses estratégicos, y ha sido justificada en razones de seguridad nacional de ese país y de lucha transnacional contra el terrorismo. La metodología

<sup>74</sup> Párrafo 117. Informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial, r. Enrique Bernales Ballesteros, comisión de derechos humanos, 50º período de sesiones, 12 De enero de 1994, E/CN.4/1994/23. En informe posterior, el relator advertía: "la persistencia, la amplitud y variedad de las modalidades con que operan los mercenarios y las redes de auspicio y organizaciones ocultas tras estas actividades indican que los estados, particularmente los más pequeños y débiles, los menos desarrollados, los archipelágicos, los que disponen de ricos recursos naturales pero tienen una organización política frágil y aquellos que confrontan insurrecciones armadas y conflictos internos, no están adecuadamente protegidos contra el mercenarismo y sus diversas formas. Los instrumentos jurídicos internacionales que califican negativamente las actividades mercenarias son imperfectos e incompletos". En: informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial de la comisión de derechos humanos. Quincuagésimo octavo período de sesiones. Tema 118 de la lista preliminar. 2 De julio de 2003.

<sup>75</sup> Exposición de Dyncorp International con los argumentos y las autoridades consultadas que apoyan el pedimento para rechazar, de conformidad con FRCP 12(b) o 56 -normas legales-, la moción de juicio sumario. Disponible en la página electrónica: [www.accionecologica.org](http://www.accionecologica.org)

empleada para esto, es la de la reserva y la inmunidad, y así es como se han vulnerado los principios de soberanía y autodeterminación del Estado colombiano.

Al aceptar tales condiciones, el gobierno de Colombia menoscaba la integridad nacional, que es una conducta tipificada en el ordenamiento penal interno (art. 455 CP) consistente en realizar *“actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado Soberano, o a fraccionar la unidad nacional”*.

El bien jurídico que se pretende proteger allí, es el de la soberanía y es preciso recordar que aunque este es un concepto en evolución, parte de la necesidad de mantener un orden internacional equilibrado y justo, donde se respetan los intereses nacionales y se atiende en todo caso, al deber de protección de los derechos de los ciudadanos. La Corte Constitucional colombiana, lo ha entendido así:

*“El preámbulo de la Constitución Política expresa un principio de internacionalización de la vida del país, cuyo punto de partida muestra especial preferencia por el impulso integrador de la comunidad latinoamericana. Perspectiva dentro de la cual la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, confluyen como elementos fundamentales de sus relaciones exteriores en el orden mundial (art. 9 C.P.).*

*Dadas las necesidades, exigencias y oportunidades que plantea el concierto de las naciones, le corresponde al Estado asumir una posición activa frente a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.*

*Esto es, en el entendido de que Colombia como Nación es un sujeto de derecho en el conjunto ecuménico de países, que tiene ciertas necesidades que sólo puede resolver con el concurso de otros Estados o entidades de derecho internacional, le corresponde promover de manera individual o colectiva las mencionadas relaciones internacionales, sin perder de vista que en los tratados o convenios que celebre deben quedar debidamente protegidos sus derechos en cuanto Nación, al igual que los de sus habitantes. A lo cual han de concurrir cláusulas contractuales presididas por un sentido de justicia vinculado a la construcción de un progresivo equilibrio internacional, a una relación costo – beneficio que le depare balances favorables a los intereses nacionales y a la creciente cualificación de la presencia nacional dentro de las diversas esferas de acción que comprende el acontecer internacional (art. 226 C.P.)”<sup>76</sup>*

Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad colombiana se ha pronunciado en contra de la presencia mercenaria en Colombia, por el contrario la justifican alegando que *“la presencia militar norteamericana en el territorio nacional, no implica que ésta sea de carácter bélico, pues existen actos propios de fraternidad y cortesía internacional, cuya aceptación o no depende de la celebración de acuerdos bilaterales”<sup>77</sup>*,

<sup>76</sup> Corte constitucional. Sentencia c-249/04. Magistrado ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. Bogotá, d. C., Dieciséis (16) de marzo de dos mil cuatro (2004).

<sup>77</sup> Texto de las consideraciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el fallo de junio 13 de 2006 que archiva investigación penal en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de prevaricato por acción, menoscabo a la integridad nacional y traición a la patria.



sin embargo, tales acuerdos nunca han surtido en Colombia revisión por parte de los poderes judicial y legislativo, tal y como ordena el trámite constitucional vigente.

## 5.2 Por su responsabilidad en la afectación de comunidades expuestas a la aspersión aérea con químicos

*“Durante la administración del Presidente Jimmy Carter (1976-1980), la interdicción y la erradicación eran las dos piezas claves de la política internacional antinarcóticos de Estados Unidos. El freno al contrabando de drogas tenía la dimensión de problema fronterizo: evitar su ingreso a territorio estadounidense y comprometer a los países productores y a aquellos utilizados como punto de tránsito en la tarea de mejorar los sistemas de control y represión de la salida de narcóticos. Desde los setenta, el esfuerzo por erradicar manualmente las plantaciones de marihuana ya no era percibido en Washington como suficiente y positivo. La Casa Blanca y el Congreso comenzaron a coincidir en la necesidad de utilizar herbicidas para terminar con los cultivos tanto de marihuana (en particular en Colombia) como de opio (en particular en Turquía)”<sup>38</sup>.*

Desde la década de los setenta, Estados Unidos viene presionando a Colombia en el control químico aéreo de los cultivos de plantas usados para industrias ilícitas, y este no ha resistido a tal presión. Es así como Colombia empezó a fumigar cultivos de marihuana desde 1978 y es, en la actualidad, el único país del mundo que utiliza el control químico de plantaciones de coca y amapola.

Los argumentos para implementar dicha política se refieren principalmente a la efectividad del método (mediante manipulación de cifras de reducción de hectáreas cultivadas), economía del método (pues el apoyo a economías de sustitución pareciera demasiado costoso para ser asumido por los Estados implicados), seguridad del método (mediante la negación de los impactos que podría tener en materia de salud y medio ambiente) y necesidad política del método (ya que las fumigaciones son presentadas como el mejor dispositivo para afectar fuentes de los ingresos de los tres grupos terroristas así clasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos: FARC, ELN y AUC- paramilitares).

Las aspersiones requieren de una infraestructura que Colombia no tenía al finalizar la década de los noventa. Por ello, se hizo necesario el Plan Colombia y en él, la formulación del componente militar diseñado por los Estados Unidos.

Para las fumigaciones aéreas se requiere no sólo de avionetas, de pilotos y de químicos, sino también de helicópteros artillados y su artillería, plataformas para esas aeronaves, sistemas de información y radares para guiar los operativos, un sistema de mantenimiento eficaz de todos estos equipos y, una calificación de personal con destrezas no sólo en materia de pilotaje de las aeronaves, sino en materia de respuesta armada a posibles ataques desde tierra.

<sup>38</sup> Estados Unidos y los cultivos ilícitos en Colombia: Los trágicos equívocos de una fumigación fútil. Por Juan Gabriel Tokatlian

Los miembros de la Dynacorp tienen esas destrezas y las aprovechan para realizar maniobras de combate que por razones políticas no pueden realizar miembros de la Misión Militar de Estados Unidos. Entonces, del trabajo "sucio", encargan a la contratista:

"De acuerdo con el contrato que firmó DynCorp con el Departamento de Estado, 12 de los pilotos del programa de fumigación aérea, quienes vuelan los aviones OV-10, son contratistas civiles estadounidenses de DynCorp. Los pilotos de los otros aviones de fumigación (tipo T-65 monomotor) van acompañados tanto de helicópteros-escolta, que llevan a bordo una tripulación mixta de miembros de DynCorp y personal de la Policía Nacional, como de helicópteros de búsqueda y rescate, los cuales también llevan tripulaciones mixtas. (...)

*Según el contrato, en una misión típica los contratistas de DynCorp van en estos helicópteros acompañando las operaciones de fumigación en calidad de pilotos y médicos, no de artilleros. Estos contratistas dan apoyo a las operaciones antinarcóticas y no cumplen ningún papel contrainsurgente. Sin embargo, a diferencia de los 200 asesores militares de Estados Unidos en el país, según el contrato, los hombres de DynCorp no tienen órdenes de evitar combates.*

*Así ha quedado demostrado en varias oportunidades. El 21 de febrero pasado los guerrilleros de las Farc derribaron un helicóptero de la Policía colombiana durante una misión de fumigación en el Caquetá. Con el fin de rescatar al piloto de la Policía, Giancarlo Cotrino, y a los miembros de su tripulación, DynCorp ordenó que los asistiera su personal capacitado en tareas de combate. Se conformó entonces una fuerza especial de búsqueda, conocida como SAR, que se desplazó en un helicóptero y aterrizó en un campo sembrado de coca para evacuar a la tripulación. Los miembros del equipo estaban armados con rifles M-16 y permanecieron en tierra el tiempo suficiente para desmontar las ametralladoras y los radios del helicóptero Huey II e impedir que cayeran en manos de los guerrilleros.*

*Se estima que los equipos SAR, una especie de Fuerza Delta privada, han participado en unas 15 misiones de rescate en los últimos seis años en el país. Son expertos en combate. La mayoría de ellos son pilotos de guerra. Participaron en Vietnam, Golfo Pérsico, en El Salvador y Guatemala", señaló un oficial de Antinarcóticos.<sup>79</sup>*

El gobierno de Colombia permite y favorece que sujetos no dependientes de sus jurisdicciones militar, penal y administrativa participen en enfrentamientos armados no solamente con delinquentes narcotraficantes sino con integrantes de grupos insurgentes de oposición.

Aquí se recuerda lo concluido por el señor Bernal Ballesteros "el mercenario pasa a ser un elemento funcional al crimen, contratado por agentes inescrupulosos que hacen del crimen y del delito un medio para conseguir sus objetivos y combatir a quienes se les oponen<sup>80</sup>". Dynacorp, entonces, participa de esta lógica, y blinda

<sup>79</sup> Revista Semana. Ob. cit.

<sup>80</sup> Párrafo 56. Informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el relator especial, R. Enrique Bernal Ballesteros.

sus acciones bajo la inmunidad diplomática derivada de los convenios binacionales examinados atrás.

La intervención directa en el conflicto armado, político y social interno por parte de la Dyncorp ocurre, sin embargo, como consecuencia de su principal actividad, cual es la de fumigar de manera aérea bastos territorios de la geografía nacional.

Según cifras oficiales<sup>81</sup> entre los años 1999 a 2006, que corresponden al periodo de aplicación del Plan Colombia, se fumigaron con químicos 910.049 hectáreas en Colombia, es decir, casi un millón de hectáreas fueron fumigadas.

Según información oficial<sup>82</sup>, en el año 2000 fueron fumigados 11 departamentos, el año siguiente lo fueron 9; en 2002 fumigaron ocho, en 2003 fumigaron doce, en 2004 fumigaron 16, y en 2005 fueron fumigados 20, de los 36 que tiene Colombia. Año por año, los municipios fumigados son los que se señalan a continuación.

**Año 2000**, fueron fumigados los municipios del Cauca: El Tambo, Argelia, Balboa, Piamonte, Tumaco, Roberto Payán, San José, Barbacoas y Leyva; de departamento de Antioquia, los municipios de Tarazá y Puerto Valdivia; del Municipio de Caquetá lo fueron Albania, Cartagena del Chairá, Curillo, Tres Esquinas, Las Brisas, Milán, Montañita, Paujil, Puerto Rico, Solano, Solita y Valparaíso; del departamento de Norte de Santander el municipio de Tibú; del departamento de Cundinamarca fueron fumigados los municipios de Sucre, Florian, Yacopí y Otanche; del departamento del Meta, lo fueron Puerto Rico, Puerto Elvira y Mapiripán; del Municipio de Guaviare los municipios de San José, Retorno, Calamar y Miraflores, finalmente, en el Putumayo fueron fumigados los municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Villa Garzón, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez. Es decir, que en el primer año del Plan Colombia, fueron fumigados 43 municipios.

**Año 2001**, fueron fumigados los municipios del Departamento de Bolívar: Cantagallo, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití; del departamento de Nariño: Tumaco, Payán, Llorente y Barbacoas; del departamento de Caquetá lo fueron Milán Solita, Valparaíso, Solano, Curillo, Paujil, Albania, San José de Fragua, Puerto Rico y Cartagena del Chairá; del departamento del Putumayo fueron fumigados los municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, la Dorada y La Hormiga; del departamento del Cauca fueron fumigados los municipios de Argelia y Balboa; del departamento de Norte de Santander fueron fumigados Tibú, Sardinata y El Tarra; del Meta fueron fumigados Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán; del departamento de Vichada fueron fumigados Cumaribo, Guarima y Puerto Príncipe y del departamento del Guaviare, lo fueron San José, Retorno, Calamar y Miraflores. Es decir 40 municipios asperjados en 2001.

**Año 2002**, fueron fumigados los municipios de Nariño: Tumaco, Barbacoas, Magui (Payán), Bellavista, Llorente y Roberto Payán; en el Caquetá, fueron fumigados

<sup>81</sup> Logros de la consolidación de la política de defensa y seguridad democrática. Enero de 2007. Ministerio de Defensa Nacional. Disponible en la página oficial: [www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co)

<sup>82</sup> Oficio 357 del 22 de marzo de 2006, suscrito por Henry Gamboa Castañeda, jefe área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos.

San José de Fragua, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Montañita, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso; en el departamento del Putumayo fueron fumigados Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuéz, Villagarzón y Puerto Leguizamo; en el departamento de Antioquia fueron fumigados Tarazá y el Bagre; en el departamento de Córdoba fumigaron Montelibano y Puerto Libertador; en Norte de Santander fue fumigado el municipio de Tibú; en Meta fumigaron Puerto Rico, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Mapiripán y en Guaviare fumigaron los municipios de San José, Retorno y Calamar, para un total de 35 municipios fumigados este año.

**Año 2003**, fueron fumigados 54 municipios, así: en Cauca: Argelia, El Bordo, Mercaderes, La Vega y Balboa; en Nariño fumigaron Tumaco, San Antonio, Roberto Payán, Magui (payán), Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro y Olaya Herrera; en Putumayo fumigaron Orito, Valle del Guamuéz, San Miguel, Villagarzón, Puerto Guzmán y Puerto Asís; en Meta fumigaron Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Puerto Lleras y Mesetas; en Caquetá fumigaron Cartagena del Chairá, Curillo, San Vicente del Caguán, Solano y Valparaíso, en Santander fumigaron Cimitarra, en Norte de Santander fumigaron Tibú, Sardinata, El Tarra y Teorema; en Bolívar fumigaron Cantagallo, San Pablo, Simiti y Santa Rosa del Sur; en Antioquia, fumigaron Argelia, Anorí, Cáceres, Yondó, Zaragoza, Tarazá y El Bagre; en Córdoba fumigaron Puerto Libertador; en Guaviare fumigaron El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare y Calamar; y se iniciaron las fumigaciones en el departamento de Arauca fumigando Fortul, Arauquita y Puerto Rendón.

**Año 2004**, fueron fumigados 75 municipios, a saber, en Vichada, Cumaribo; en Santander los municipios de Sucre, Betulia y Bolívar, en Nariño, fueron fumigados Tumaco, Barbacoas, Magui, El Rosario, El Charco, Ipiales y Roberto Payán; en Cauca, San Sebastián, Mercaderes, Balboa, Piamonte y Santa Rosa; en Arauca, Fortul, Saravena, Arauquita y Fortul; en Magdalena, fue fumigado el municipio de Santa María; en Bolívar fumigaron Simiti, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Morales, en Vaupés fumigaron el municipio de Cururú; en el Meta, fumigaron Puerto Rico, Puerto Concordia, Puerto Gaitán y Mapiripán; en Caquetá fumigaron los municipios de Florencia, Puerto Rico, Albania, San José de Fragua, Curilo, Milán, San Vicente del Caguán, Solano, Belén de los Andaquies, Paujil, Cartagena del Chairá, Solita, Valparaíso, Doncella y Montañita; en el departamento de Guajira, fumigaron el municipio de Dibulla; en Norte de Santander fumigaron Tibú, Sardinata, Teorema, El Tarra y San Calixto; en el departamento de Caldas fumigaron el municipio de Samaná; en el municipio de Antioquia fumigaron Valdivia, Henchí, Segovia, Anorí, Tarazá, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Sonsón y Puerto Trinfo; en Guaviare fumigaron Miraflores, San José, Retorno y Calamar; y en Putumayo, fumigaron Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Villagarzón, San Miguel y Mocoa.

\* En 2005 fueron fumigados 110 municipios en todo el país: en Antioquia fumigaron los municipios de Anorí, San Francisco, San Luis, Segovia, Cáceres, Sonsón, Montecristo, Valdivia, Puerto Nare, El Bagre, Henchí, Cuacacia, Taraza, Ituango, Zaragoza, Yondo; en el Departamento de Nariño los municipios fumigados fueron: Tumaco, Magui (Payán),

Roberto Payan, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, El Charco, Barbacoas, La Tola, El Rosario y Leiva; en Cauca los fumigados fueron: Sotara, Balboa, El Tambo, Bolívar, Patia, Mercaderes, Argelia, Piamonte; en Boyacá los municipios afectados fueron Muzú, Puerto Boyacá y Pauna; en el Guaviare los municipios fumigados fueron: Miraflores, San José, Retorno y Calamar; en el Departamento del Meta los municipios afectados fueron: Fuente de Oro, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, San Carlos Guaroa, Puerto Lleras y Vista Hermosa; en el Caquetá, los municipios de Albania, Curillo, Milan, Montañita, San Vicente del Caguan, Solano, Cartagena del Chaira, Solita, Puerto Rico, Valparaiso, Florencia y Doncella; en el Putumayo los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Asis, Mocoa, San Miguel, Valle del Guamuez, Villagarzón y Puerto Leguizamón; en el Departamento de Arauca los municipios fumigados fueron: Fortul, Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Tame; en Norte de Santander los fumigados fueron: Tibú, Sardinata, El Tarra, Hacari, El Zulia y San Calixto; En Cundinamarca el municipio de Caparrapi, en el Chocó el municipio de Sipí; en la Guajira los municipios de la Dibulla y Riolacha, en el Valle el municipio de Bolívar, en Vaupés el municipio de Carurú, en el Magdalena los municipios de Ciénaga y Santa Marta, en Córdoba los municipios de Ayapel, Montelibano, Tierralta y Puerto Libertador; en Caldas los municipios de Samaná, Norcacia y la Victoria; en Santander los municipios fumigados fueron Cimitarra, Sucre, Barrancabermeja, El Peñon, Bolívar y Landáuzuri; y en Bolívar los municipios afectados fueron Alborno el Rosario, Cantagallo, San Pablo, Simiti, Santa Rosa del Sur, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, Arenal, Barranco de Loba y San Martín de Loba.

En 2005 el programa de fumigación cubrió bastas zonas del país, según lo graficó<sup>83</sup> la Oficina contra las Drogas y el Delito en Colombia en su informe anual de 2006: ver Mapa 1.

Igualmente fueron fumigadas varias zonas de influencia de Parques Nacionales Naturales (entendidas como aquellas externas a los Parques Nacionales pero que dependen de sus objetivos de conservación, entre las cuáles se comprende cuencas hidrográficas, humedales, bosques y ríos, entre otros ecosistemas), con lo que se configuró un ecocidio de tremendas proporciones.

Las zonas de influencia fumigadas fueron las del parque Nacional Muchinque en la cuenca del Río Mechengue, corregimiento de Playa Rica; la del Parque Nacional Nevado del Hila, municipio de Iquira, Veredas Alpe, Santa Rosa, San Francisco y Tierra Adentro; la del Parque Nacional Puracé por el sector de Valencia; la del Parque Nacional Paramillo, corregimiento de San José, sector de Río Sucio, corregimiento de Uré, Sector Alto Río Uré, Tierradentro y Serranía San Jerónimo; la del Parque Nacional La Macarena; la de la Reserva Natural Nukak, la del Parque Nacional La Paya, la del Parque Nacional Tatamá, en el municipio de Santuario; y, la del Parque Nacional Catatumbo – Bari<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> Colombia, Monitoreo de los cultivos de coca. Junio de 2006. Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas en Colombia. Disponible en la página oficial: <http://www.unodc.org/pdf/colombia/simci/censo%20cultivos%20colombia%202006.pdf>

<sup>84</sup> Tal y como consta en oficio 6160 del 27 de noviembre de 2003 suscrito por Juan Carlos Riascos de la Peña, Director de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

**Mapa 1.**

Aspersión aérea y cultivos de coca en Colombia, 2005





En el segundo semestre de 2006, en sólo cuatro días fueron fumigadas 1456 hectáreas en el corazón del Parque Nacional Natural de la Macarena<sup>85</sup>, y al final se cumplió con la meta de fumigación de 1.688 hectáreas.

Producto de estas fumigaciones fueron afectadas miles de personas, tal y como lo demuestra el número de quejas presentadas desde 2001 a la fecha, en todo el territorio nacional, a saber<sup>86</sup>:

En el departamento de Antioquia, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios de Anorí, Cáceres, Caracolí, Caucaia, Cocorna, El Bagre, Henchí, Peque, Puerto Nare (la magdalena), San Francisco, Segovia, Tarazá, Uramita, Valdivia, Yondó (casabe) y Zaragoza.

En el departamento de Arauca, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

En el departamento de Bolívar, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Cantagallo, Morales, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití.

En el departamento de Caldas, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios de Norcasia y Samaná.

En el departamento de Caquetá, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncella, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso.

En el departamento del Cauca, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Balboa, Bolívar, el Tambo, La Sierra, Mercaderes, Patia (El Bordo), Piamonte, San Sebastián y Sucre.

En el departamento del Cesar, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Agustín Codazzi, La Paz, Manaure, San Diego y Valledupar.

En el departamento de Córdoba, sufrió afectaciones la comunidad de Puerto Libertador.

En el departamento de Guaviare, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare.

En el departamento del Huila, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Algeciras, Campo Alegre, Colombia, Iquira y Neiva.

En el departamento de la Guajira, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Dibulla y Brumita.

En el departamento de Magdalena, sufrió afectaciones la comunidad del distrito de Santa Marta.

En el departamento del Meta, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios La Uribe, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa.

<sup>85</sup> El Tiempo, agosto 7 de 2006. Impactan dos aviones que fumigan restos de coca en la Macarena.

<sup>86</sup> Tal y como consta en oficio 1569 del 21 de septiembre de 2006 suscrito por Henri Gamboa Castañeda, jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía Antinarcóticos.

En el departamento de Nariño, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Barbacoas, Buesaco, El Charco, El Rosario, El Tablón, La Cruz, La Florida, La Unión, Leiva, Magui (Payán), Olaya Herrera, San Juan de Pasto, Policarpa, Roberto Payán, Samaniego, San Pablo, Santa Barbara, Tumaco y Túquerres.

En el departamento de Norte de Santander, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios El Tarra, Hacarí, Sardinata y Tibú.

En el departamento de Putumayo, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez (La Hormiga) y Villagarzón.

En el departamento de Santander, sufrieron afectaciones comunidades de Barrancabermeja y de los municipios de Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Peñón, Landazuri, Puerto Wilches y Sucre.

En el departamento de Tolima, sufrieron afectaciones comunidades de los municipios Anzoátegui, Chaparral, Ibagué, Planadas, Rioblanco, San Antonio y Santa Isabel.

En el departamento del Valle, sufrió afectación la comunidad del municipio de Bolívar.

En el departamento de Vichada, sufrió afectación la comunidad del municipio de Cumaribo.

Más de cien municipios de veinte de los treinta y dos departamentos que tiene Colombia fueron fumigados y sus comunidades afectadas. Sin embargo, esta es una cifra que se aleja bastante de la realidad, en tanto, no todas las personas expuestas a las fumigaciones han podido presentar sus quejas, muchas ellas se desalentaron de acceder a escenarios de administrativos de reclamo, por su ineficacia.

Según cifras oficiales<sup>87</sup>, de las 6429 quejas que fueron tramitadas por las autoridades antinarcóticas sólo 33 de los quejosos fueron compensados por los daños causados, es decir el 0.5%. Esto influyó en el desestímulo de los afectados para acudir a tal procedimiento<sup>88</sup>.

Estas quejas se tramitan por afectación a cultivos lícitos; sin embargo, el universo del tipo de afectaciones es mayor, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha podido

<sup>87</sup> Ibidem

<sup>88</sup> El número de quejas presentadas se aumenta si se contabilizan aquellas presentadas ante otras instancias como la Defensoría del Pueblo. Según Augusto Lluengas por lo menos 8955 quejas interpuestas se habrían interpuesto por presuntos daños causados por las fumigaciones aéreas de coca con herbicidas durante el periodo 1997 – 2004. Esta cifra puede acercarse más a la realidad teniendo en cuenta que para sólo dos municipios de un departamento en el periodo 2001- 2002, la Defensoría recibió 318 quejas “sólo en los municipios de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, la Defensoría del Pueblo ha conocido 318 quejas por la afectación de 6.076 familias y 5.034,25 Has. La mayoría provienen de firmantes de pactos y se refieren a los daños causados en predios donde se supone ya se había erradicado el 100% de la coca o, al menos, el 70% y donde se encontraban cultivos de yuca, plátano, maíz, árboles frutales y pastos” resolución defensorial 026 de octubre de 2002.

constatarlo: “en la lucha contra dichas sustancias se ha privilegiado la política criminal en desmedro de la protección de otros derechos amparados constitucionalmente, entre ellos: (a) el principio de diferenciación positiva a través del cual el Estado debe brindar protección especial a la población más vulnerables (menores de edad, personas en situación de desplazamiento, miembros de los grupos étnicos y población rural), (b) los derechos a la salud, a la alimentación y a la seguridad alimentaria, y a la salubridad pública y, por ende, a la vida y a la vida digna, (c) el derecho a no ser desplazado y a ser atendido por el Estado en caso de migraciones forzadas, y (d) la protección y conservación del medio ambiente, de los recursos naturales y de las áreas protegidas por razones étnicas, ecológicas y culturales, dentro del principio de desarrollo sostenible y el reconocimiento a la multiculturalidad colombiana”<sup>89</sup>.

### 5.2.1 Violación al derecho a la alimentación y al trabajo

Según estudios de especialistas colombianos “El glifosato, por ser herbicida de amplio espectro, tiene efectos tóxicos sobre la mayoría de especies de plantas, y puede ser un riesgo para especies en peligro de extinción si se aplica en áreas donde ellas viven. De acuerdo con información de la EPA, reportada por PAN Asia y el Pacífico, más de 74 especies amenazadas en Estados Unidos pueden estar en riesgo por el uso del glifosato. La misma fuente añade que dosis subletales de glifosato pueden incrementar la susceptibilidad de algunas plantas (p.e. manzana, cebada, soya, tomate) a enfermedades causadas por hongos.

Glifosato puede inhibir hongos benéficos que ayudan a las plantas a absorber nutrientes y agua. Por ejemplo, en un estudio inhibió la formación de nódulos fijadores de nitrógeno en trébol durante 120 días después del tratamiento. En dosis subletales puede interferir con algunos procesos metabólicos en plantas: en frijol puede ser inhibida la absorción de potasio y sodio y en espárragos y lino puede reducirse la producción de lignina”<sup>90</sup>.

La mayoría de los afectados por fumigaciones denuncian que éstas afectan gravemente sus cultivos de pancoger, en un primer momento marchitando los cultivos y posteriormente, con una baja en la productividad de las cosechas.

*“cuando pasaron las avionetas pensé que no nos habían fumigado porque cogieron la zona del río abajo regando el veneno, aunque con mi familia notábamos que había un mal olor. Al otro día me fui a ver los cultivos y lo primero que vi fue el maíz marchito, ahí mismo está la caña, el plátano, la yuca, todo está muy cerca, pero sólo hasta el tercer día las hojas empezaron a caerse de las plantas y a secarse, por ejemplo, aunque al principio parecía que al plátano no le había pasado nada, las hojas se empezaron a poner secas, los cogollos se pusieron*

<sup>89</sup> Principales pronunciamientos judiciales en Colombia respecto a la erradicación de cultivos de uso ilícito. Conversatorio Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario. Septiembre 5 de 2003. Disponible en la página: <http://www.colombianainternacional.org/doc%20pdf/di-drogas%20dof%20principales%20pronunciamientos.pdf>.

<sup>90</sup> Efectos de las fumigaciones. Por Elsa Nivia Rapalmar, Colombia. Disponible en el sitio oficial <http://usembassy.state.gov/colombia/wwwslat1.shtml>.

*amarillos y los plátanos nacieron dañados. A pesar de que han pasado tantos días, el veneno sigue causando daños en las cosechas*<sup>81</sup>

Esta situación impacta gravemente el derecho a la alimentación y consecuentemente el derecho al trabajo, dado que los más de los afectados son campesinos que sobreviven por virtud de sus actividades agrícolas para el auto consumo.

### 5.2.2 Violación a los derechos a la salud y a la vida

*“Un análisis necesario de la bibliografía científica y de información actualizada permite identificar los riesgos al ambiente y a la salud, tanto de los componentes del Roundup como del efecto sinérgico de la mezcla utilizada en las fumigaciones aéreas.*

*Cuando el glifosato cae a tierra el principal metabolito de degradación es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), el cual es también tóxico. El glifosato puede contener cantidades traza de N-nitroso glifosato o este compuesto puede formarse en el ambiente al combinarse con nitrato (presente en saliva humana o fertilizantes). La mayoría de compuestos N-nitroso son cancerígenos. El formaldehído, otro carcinógeno conocido, es también un producto de descomposición del glifosato. El glifosato se transforma en AMPA, de este pasa a Metilamina y de aquí a Formaldehído. (Cox, 1995; Dinham, 1999; Williams et. al., 2000)*

*El surfactante POEA contenido en la formulación causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos. POEA está contaminado con 1-4 dioxano, el cual ha causado cáncer en animales y daño a hígado y riñones en humanos.*

*Del Casmoflux nada se sabe, sólo que con su adición al Roundup éste producto en Colombia subió de categoría toxicológica IV a la categoría III (moderadamente tóxico), pero sin hacer ningún tipo de estudio que compruebe esa categorización[21]. Se conoce que disminuye el tamaño de las gotas de glifosato y aumenta la adherencia del mismo a la superficie donde cae, lo que permite una mayor absorción a nivel digestivo, respiratorio, cutáneo y de la cutícula de las plantas, aumentando la deriva por permitir un mayor tiempo de suspensión en el aire(...)*

El Roundup está asociado con un creciente riesgo de abortos y nacimientos prematuros. En un estudio entre 1984 y 1990, el registro de causas de enfermedad por plaguicida más común entre los jardineros correspondió al glifosato. En otro estudio ocupó el tercer lugar entre las causas de enfermedad por plaguicidas más comúnmente registradas entre los trabajadores agrícolas de California.

*Brian Tokar recoge que algunos de los síntomas de envenenamiento agudo como consecuencia de la ingestión de Roundup en humanos incluyen calambres gastrointestinales, vómito, hinchazón- tumefacción- de pulmones, neumonía, turbación del*

<sup>81</sup> Testimonio de un campesino víctima de las fumigaciones en escrito de acción de tutela contra el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Nacional, resuelta en última instancia por la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, sección primera, en fallo del 14 de abril de 2005, radicado T8001-2331-000-2004-00613-01

*conocimiento, y destrucción de glóbulos rojos. Se ha reportado la irritación de ojos y piel en los trabajadores que mezclan, cargan y aplican el glifosato*<sup>92</sup>.

Las comunidades expuestas a las fumigaciones han alegado fuertes impactos agudos en su salud, relacionados con enfermedades dérmicas, digestivas y respiratorias, principalmente. Más grave aún, han denunciado muertes provocadas por la exposición a las fumigaciones.

Los casos más notados que se conocieron en Colombia son los de la muerte de veintiún niños indígenas en la región del Alto Naya en el Municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, en 1994; la muerte de tres indígenas Nukak – Makú en el departamento del Guaviare en 1998; las graves afecciones respiratorias y dérmicas en niños de la comunidad de Aponte y Tablón de Gómez en Nariño en 2001; las diversas afectaciones sufridas por las comunidades de San Miguel, Orito y Vallé del Guamuez en Putumayo en 2001; la muerte de un campesino en San Pablo Bolívar en 2003; y la muerte de los niños indígenas del pueblo Eperara Siapidaara, Evelio Chirimía, Yeison Chiripúa y María Sandra Mesa por efecto de las fumigaciones realizadas en las comunidades de San José de Robles, Tórtola y Casa Grande en las riveras de los ríos Satinga, Sanquianga, Tapaje, Sequihonda La Tola e Iscuandé en 2005.

En la mayoría de los casos anteriores, intervino la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, apoyando estudios para verificar la conexidad entre las fumigaciones y las muertes y afecciones, siendo una característica notable en todos ellos, que se atribuyeran las muertes a condiciones de vida insalubres o a epidemias fugaces.

### 5.2.3 Violación al derecho a un ambiente sano

*“En general el ataque con herbicidas tiene serio impacto no solamente sobre los componentes autotróficos de un ecosistema (primer eslabón de cualquier cadena alimenticia), sino también sobre los heterotróficos, por alteraciones del alimento y el hábitat. Por consiguiente, a la destrucción de plantas le sigue una inevitable reducción de poblaciones de herbívoros, mamíferos, aves, insectos polinizadores y otros, lo cual afectará también a carnívoros y depredadores en la cadena. Además de su efecto debilitador sobre la vida silvestre por la destrucción de su alimento o sitios de abrigo, los herbicidas también pueden ser directamente tóxicos a animales expuestos*<sup>93</sup>.

Los ecosistemas expuestos a las fumigaciones son ecosistemas puestos en grave situación de vulnerabilidad al ser contaminados por acción de los químicos de las asperiones aéreas. Esto constituye un ecocidio de inestimables proporciones, que agrava a las poblaciones que habitan en las zonas asperjadas. Por ello, la vulneración al medio ambiente, constituye en últimas, una violación a un derecho fundamental.

<sup>92</sup> Informe de investigación. Daños genéticos en la frontera de Ecuador por las fumigaciones del Plan Colombia, Noviembre 2003. Para Dr. Claudio Mueckay, Defensoría del Pueblo de Ecuador. Elaborado por Adolfo Maldonado.

<sup>93</sup> Ecosistemas colombianos en peligro por cultivos de uso ilícito y estrategias de erradicación. Por Elsa Nivia. Artículo publicado en el boletín de Ecofondo ¡La gestión ambiental comunitaria avanza! Nº 25-19-25. Bogotá, Colombia, abril-mayo 2004.

*“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”<sup>94</sup>*

#### **5.2.4 Testimonios de grupos de comunidades afectadas por las fumigaciones realizadas en Colombia**

##### **5.2.4.1 Testimonios de comunidades Colombianas**

Se anexan al presente documento y son el resultado de la Preaudiencia sobre fumigaciones realizada en Medellín el 22 de febrero de 2007.

##### **5.2.4.2 Testimonios de organizaciones Ecuatorianas**

Se anexan al presente documento y son el resultado de la Preaudiencia sobre fumigaciones realizada en Medellín el 22 de febrero de 2007.

### **6. FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN**

6.1 La empresa Dynacorp ha incurrido en múltiples conductas tipificadas en el **ordenamiento penal colombiano** como delitos:

- 6.1.1 Homicidio en persona protegida (Art. 135 CP) de algunas personas expuestas a la aspersión, sobre todo niños y niñas de comunidades indígenas. Este delito se ve agravado por las causales de promesa remuneratoria y ánimo de lucro y de aprovechamiento de situación de indefensión de las víctimas.
- 6.1.2 Lesiones en personas protegidas (Art. 136 CP) causadas a miles de personas expuestas que han visto afectada su salud.
- 6.1.3 Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (Art. 142), dado que en desarrollo de conflicto armado, ha utilizado medios o métodos de guerra prohibidos, destinados a causar sufrimiento y pérdidas innecesarias o males superfluos.
- 6.1.4 Actos de terrorismo (Art. 144), en tanto que en desarrollo del conflicto armado ha realizado ataques excesivos contra la población civil.
- 6.1.5 Destrucción del medio ambiente (Art. 164), dado que en desarrollo del conflicto armado ha empleado métodos concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente.
- 6.1.6 Desplazamiento Forzado (Art. 180), porque la población privada de alimento y sometida a la enfermedad por efecto de las fumigaciones ha tenido que abandonar sus territorios.

<sup>94</sup> Corte constitucional. Sentencia no. T-092/93. Magistrado ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez. Bogotá, D.C. 19 De febrero de 1993.



- 6.1.7 Violación de la libertad de trabajo (Art. 198) dado que mediante violencia ha perturbado e impedido el libre ejercicio del derecho al trabajo.
- 6.1.8 Daños en los recursos naturales (Art. 331) porque en contravía de la normatividad ambiental interna y principios internacionales ambientales vigentes ha dañado los recursos naturales
- 6.1.9 Contaminación ambiental (Art. 332) por que ha contaminado el aire, el suelo y las aguas poniendo en peligro la salud humana y los recursos faunísticos, forestales, florísticos e hidrobiológicos.
- 6.1.10 Concierto para delinquir (art. 340) en su actividad mercenaria, agravado por el hecho de que su motivación radica en la provocación de desplazamientos forzados, tráfico de drogas y dar armas a grupos paramilitares.
- 6.1.11 Terrorismo (art. 343) ya que durante muchos años ha mantenido en estado de zozobra y terror a la población expuesta a su actividad mercenaria y antinarcóticos.
- 6.1.12 Contaminación de aguas (art. 371) por contaminar el agua destinada al consumo humano de las poblaciones expuestas a las fumigaciones.
- 6.1.13 Menoscabo de la integridad nacional (art. 455) ya que al facilitar intereses de otros países ha sometido a Colombia en parte al dominio extranjero.
- 6.2 Dyncorp beneficia de la violación de los **derechos fundamentales** de la población colombiana generada por la perversa política de lucha contra las drogas en Colombia
  - 6.2.1 Derecho a la vida, art. 11
  - 6.2.2 Derecho a no ser sometidos a tratos crueles, art. 12
  - 6.2.3 Derecho a la paz, art. 22
  - 6.2.4 Derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación equilibrada y la recreación de los niños y las niñas, art. 44
  - 6.2.5 Derecho a la salud y al saneamiento ambiental, art. 49
  - 6.2.6 Derecho al trabajo, art. 53
  - 6.2.7 Derecho al medio ambiente sano, art. 79
  - 6.2.8 Prohibición de uso de armas químicas, Art. 81
- 6.3 Dyncorp ha cometido graves infracciones al **Derecho Internacional Humanitario**.
  - 6.3.1 Infracción al principio de distinción entre combatientes y no combatientes. Pretendiendo atacar las finanzas de la guerrilla colombiana ha atacado directamente a la población civil.
  - 6.3.2 Principio de proporcionalidad, dado que para someter a su enemigo ha sobrepasado los métodos indispensables para ello, llegando a afectar a población civil con elementos químicos peligrosos.
  - 6.3.3 Principio de limitación en los medios de combate, como corolario de lo anterior.

- 6.4 La Dynacorp ejecuta una política deliberada de violación de los **derechos humanos**, formulada y controlada por el gobierno de los Estados Unidos y aceptada por el gobierno de Colombia
  - 6.4.1 Derecho a la vida, Art. 4 Convención Americana
  - 6.4.2 Derecho a la integridad personal, art. 5 Convención Americana
  - 6.4.3 Derechos de los niños, art. 19 Convención Americana
  - 6.4.4 Derecho a la propiedad privada, art. 21 Convención Americana